

Crisis del Estado y disputa en y por la sociedad civil en América Latina

Análisis de situaciones:
Brasil, México, Guatemala, Bolivia

Lucio Fernando Oliver Costilla
(Coordinador)



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO



LA BIBLIOTECA

Crisis del Estado y disputa en y por la sociedad civil en América Latina

**Análisis de situaciones:
Brasil, México, Guatemala, Bolivia**

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Rector

Leonardo Lomelí Vanegas

Secretaria General

Patricia Dolores Dávila Aranda

Secretario Administrativo

Tomás Humberto Rubio Pérez

Abogado General

Hugo Alejandro Concha Cantú

Directora General de Publicaciones y Fomento Editorial

Socorro Venegas Pérez

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Directora

Carola García Calderón

Secretaria General

Patricia Guadalupe Martínez Torreblanca

Secretario Administrativo

Jesús Baca Martínez

Jefa del Departamento de Publicaciones

Elvira Teresa Blanco Moreno



FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES



Crisis del Estado y disputa en y por la sociedad civil en América Latina

Análisis de situaciones:
Brasil, México, Guatemala, Bolivia

Lucio Fernando Oliver Costilla

(Coordinador)



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO



LA BIBLIOTECA

México, 2023

Esta investigación, arbitrada a “doble ciego” por especialistas en la materia, se privilegia con el aval de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.

Este libro fue financiado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), de la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante el proyecto “Las sociedades civiles en la crisis estatal de América Latina. Perspectivas teóricas y estudios concretos”, coordinado por el Dr. Lucio Fernando Oliver Costilla, como parte del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) IN307719.

Crisis del Estado y disputa en y por la sociedad civil en América Latina

Análisis de situaciones: Brasil, México, Guatemala, Bolivia

Lucio Fernando Oliver Costilla
(Coordinador)

Primera edición: 9 de diciembre de 2023.

D.R. © 2023 Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510,
México, CDMX.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n
Ciudad Universitaria, C.P. 04510, México, CDMX.

D.R. © Grupo Editorial Biblioteca, S.A. de C.V.
Manantiales 29 - 4, Colonia Chapultepec, Cuernavaca,
Morelos, C.P. 62450, Tel. 55-3233-6910.
email: contacto@labiblioteca.com.mx

Oficina del Abogado General
Dirección General de Asuntos Jurídicos
ISBN: 978-607-30-8522-9

Diseño de portada: Renata Oliver Barragán
Corrección de estilo y cuidado de la edición: Érika Maya Vargas
Diseño y formación: Fernando Bouzas Suárez y Mariana Gurrola
Agradecimiento a: Denih Monsiváis, Natalia López Frias, Verónica TENERIA, Pilar Godínez y Héctor Martínez por su colaboración en la revisión del texto.

Esta edición y sus características son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Hecho en México

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	7
Lucio Fernando Oliver Costilla	
CRITERIOS METODOLÓGICOS Y EJES ANALÍTICOS.	13
Lucio Fernando Oliver Costilla, Alba María Pinho de Carvalho, Joana Aparecida Coutinho, Denih Monsiváis Martínez, Laura Palma, Francesca Savoia	
BRASIL CONTEMPORÁNEO: CRISIS ORGÁNICA DEL ESTADO	33
Leila María Passos de Souza Bezerra, Alba María Pinho de Carvalho, Eliana Costa Guerra, Guillermo Alfredo Johnson, Elda María Maciel Freire, Carlos Américo Leite Moreira, Silvana Pinho de Souza, Márcio de Souza Porto	
PROBLEMÁTICAS METODOLÓGICAS: LA EXTREMA DERECHA Y EL MOVIMIENTO INDÍGENA Y CAMPESINO EN BRASIL	85
Joana Aparecida Coutinho, Lia Pinheiro Barbosa	
MÉXICO: CRISIS Y LÍMITES DE LA RENOVACIÓN POLÍTICA	99
Lucio Fernando Oliver Costilla, Denih Monsiváis Martínez, Pilar Godínez Mejía, Antonio Eduardo Miranda Rodríguez, Márgara Millán Moncayo	
GUATEMALA: RELACIONES SOCIOHISTÓRICAS Y TENSIONES	133
EN LA SOCIEDAD CIVIL Mariana López de la Vega, Patrick Josef Illmer, Verónica Yaneli Teneria Mendieta	
BOLIVIA: CAUSAS DE LA CRISIS Y DE LA POLARIZACIÓN POLÍTICA	159
Huáscar Salazar Lohman	

PRESENTACIÓN

LUCIO FERNANDO OLIVER COSTILLA

Este es el primer volumen del libro *Crisis del Estado y disputa en y por la sociedad civil en América Latina. Análisis de situaciones*. Aquí se incluyen las elaboraciones teórico-metodológicas, los ejes de análisis y los indicadores que orientaron el proyecto de investigación PAPIIT IN307719¹, que ya antes publicó un primer libro de contenido teórico. En este segundo libro se continúa la elaboración teórica, pero se acentúa el seguimiento de la situación en los países latinoamericanos elegidos. Aquí en el primer volumen se incluyen los capítulos específicos sobre Brasil, México, Guatemala y Bolivia. En el segundo volumen se incluyen los de Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela.

La investigación, realizada en el proyecto, ratificó, amplió y enriqueció el conocimiento acumulado, abrió nuevas vetas en el campo académico de Estado y sociedad, y logró la conformación de una red latinoamericana de grupos de investigación sobre el tema.

Cabe decir que en América Latina siguen prevaleciendo los estudios sobre el Estado, y sus crisis, que se restringen a un análisis del funcionamiento de las instituciones, sistemas de poder y relaciones políticas en la sociedad política. En proyectos anteriores, nosotros hemos constituido grupos de investigación cuyo propósito ha sido analizar el Estado y sus instituciones como una relación de poder integral, articulado de muchas maneras con la sociedad civil y las comunidades –tanto a nivel nacional como internacional. Lo hicimos a partir del estudio de las mediaciones y la hegemonía dentro del Estado integral, las que aluden a una relación diferente a la del dominio y a la capacidad del poder político para imponer sus decisiones por medio de las formas institucionales y legales y sus aparatos de coerción, para plantear desde nuestra perspectiva de investigación la existencia de una relación orgánica de poder entre Estado y sociedad civil.

La hipótesis que guió nuestras investigaciones es la de que las crisis políticas nacionales en un mundo capitalista con relaciones globales son la manifestación de una no correspondencia entre las expectativas y apreciaciones de la sociedad civil con la sociedad política acerca de las causas y el curso de las políticas de los Estados en que aflora

¹ Proyecto auspiciado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico y por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a quien reconocemos y agradecemos sobremanera haber-nos posibilitado realizar un trabajo colectivo durante casi cuatro años, de 2019 a 2022.

la ineffectividad de las políticas jurídicas, económicas, sociales y públicas para atender los problemas de las sociedades y mantener interna e internacionalmente la interacción colaborativa con otros países, bajo la conducción de un Estado con autonomía relativa. En nuestra región latinoamericana, los conflictos en la sociedad política han resultado en resistencias democráticas, cambios de régimen y golpes de Estado. Las explosiones de inconformidad o las demandas de orden en la sociedad civil que acompañan dichos conflictos se explican de una manera más profunda cuando se analiza la dinámica y características del Estado a partir de esta visión integral más compleja.

Por lo anterior, en la investigación que desembocó en el presente libro nos propusimos estudiar teórica y empíricamente los referentes que actúan en los posicionamientos de la sociedad civil en la crisis del Estado en América Latina.

Ello abrió nuevas luces sobre tres aspectos: la importancia actual del concepto de *crisis orgánica del Estado*, referido a que la mayoría de los proyectos enarbolados por las fuerzas histórico-políticas, tanto del capitalismo transnacionalizado contemporáneo como de los Estados-naciones clásicos, no están consiguiendo dar salida programática y política adecuada a las reivindicaciones de la sociedad en su conjunto, lo que se puede caracterizar como un equilibrio catastrófico y un distanciamiento persistente entre sociedad civil y Estado. De ahí la importancia del debate acerca de los proyectos nacionales en juego, sobre el papel de las mediaciones estatales y sobre la crisis de hegemonía.

Un segundo aspecto está referido a la noción de sociedad civil y su complejidad, independientemente de las distintas perspectivas teórico-ideológicas. Conviene resaltar, sin embargo, que, en las corrientes histórico-críticas que compartimos, dicha noción alude tanto a la diversidad de individuos conectados por su interdependencia en el trabajo y el mercado, como a los nexos de voluntad que estos establecen al recoger perspectivas ético-políticas previas y al ejercer derechos y libertades para organizarse y actuar en los asuntos de la propia sociedad y del Estado. En la sociedad civil (para nosotros en este concepto, y solo en su sentido general, están incluidas también las comunidades, sin que ignoremos sus particularidades y excepciones) no todos son iguales ni piensan y actúan de la misma manera; se juega de manera compleja *la influencia* de las diversas concepciones ideológico-políticas e históricas de ratificación o cuestionamiento del orden establecido, y se logra *la adhesión social profunda o la crítica social* a los mencionados proyectos nacionales-internacionales, esto es, se generan elementos fundamentales del conformismo social pasivo y activo –hoy en crisis profunda– con el poder.

Por lo antes dicho, y ese es el tercer aspecto que guió la investigación, la sociedad civil es un ámbito de lucha por unificar, organizar concepciones y voluntades y proyectarlas local, regional, nacional e internacionalmente. Esto significa que la disputa de proyectos, concepciones y fuerzas histórico-políticas se produce no solo *en* la sociedad civil en tanto diversidad, sino también en la lucha *por* unificarla y dirigirla, en términos de crear el mencionado conformismo social a partir de lograr una voluntad colectiva nacional popular unificada. De ahí la importancia de trabajar las nociones de historia, cultura y Estado integrales, bloque histórico, bloque de poder, asociadas a las de mediaciones estatales y a la hegemonía, para conocer y entender el papel, respecto del poder político, de las concepciones del mundo y los posicionamientos ético-políticos de los organizadores y dirigentes intermedios de la sociedad, esto es, de las distintas actividades productivas,

comerciales, de servicios, asociados a la dinámica social y a las estructuras burocráticas locales, hoy determinados por las nuevas formas de capitalismo digital transnacionalizado. Y ello incluye a los dirigentes de las instituciones religiosas, militares, educativas, de comunicación y de socialización de las organizaciones y movimientos sociales vinculados a la producción y los servicios.

El estudio crítico de la sociedad civil (así como de las comunidades, lo reitero) y de lo que acontece en su interior a nivel económico-social y político-ideológico es un ámbito relativamente desconocido para los estudios políticos y sociales de la academia latinoamericana. Y precisamente es ahí donde nuestro proyecto abrió una nueva línea de investigación respecto del Estado integral: la disputa relacionada no solo con la política, sino con las ideologías y la cultura que se juegan en la sociedad civil y en las comunidades como política.

Para avanzar sobre ello, se realizó un esfuerzo por integrar grupos de investigación de académicas y académicos de universidades en nueve países. De tal manera que, desde México y la UNAM, se trabajó para la integración, coordinación y dirección de los grupos de estudio, con pleno respeto a sus procesos de organización y su autonomía de investigación y de elaboración de resultados. Este, consideramos, es un logro sustantivo del proyecto y muestra un nivel alto de consolidación de las relaciones intelectuales críticas en la academia latinoamericana, que le permitirá seguir trabajando colectivamente en futuros proyectos.

La investigación conjunta propició una mayor densidad teórica y metodológica sobre los temas del proyecto. Nuevas lecturas de autoras y autores contemporáneos y de intelectuales clásicos, sobre todo latinoamericanos y europeos, clarificaron los enfoques y las nociones utilizadas acerca del Estado integral, la hegemonía ideológico-política, las crisis de carácter orgánico y los fenómenos políticos; aunado a ello, la investigación se adentró en la caracterización de los momentos constitutivos y ciclos de Estados en los distintos países, la relación de los proyectos nacionales y plurinacionales con el bloque histórico de las sociedades, las formas mediadoras institucionales y políticas, y se debatió sobre *hegemonía, revolución pasiva, transformismo y conformación de fuerzas histórico políticas* al calor de las transformaciones inducidas por la globalización y las múltiples resistencias nacionales. Especial atención se puso en la manera en que las diversas concepciones de las sociedades civiles se manifiestan como adhesión a los distintos proyectos nacionales-internacionales. En el intercambio entre los grupos de investigación, la noción de sociedad civil se amplió al estudio y especificación de las formas comunitarias que son particularmente relevantes y actuantes en buena parte de los países estudiados (México, Guatemala, Colombia, Bolivia, Chile y Brasil).

Como todo nuevo terreno de conocimiento, todo ello nos llevó a crear un mayor debate interno en los grupos del proyecto y, a que, por medio de los dos seminarios internacionales mensuales durante cuatro años seguidos, se redefinieran nuestros criterios teórico-metodológicos, se retomaran y acuñaran nuevos conceptos, se precisaran indicadores para orientar el estudio concreto, y se avanzara en el estudio de la crisis orgánica del Estado, la disputa por los proyectos nacionales y en y por la sociedad civil en los países estudiados.

Junto a ello, consideramos que uno de los aportes adicionales de la investigación fue iniciar la discusión y elaboración de un conjunto de criterios teórico-metodológicos, los cuales se subdividieron en ejes e indicadores que guiaron los análisis en cada país sobre las crisis estatales, la disputa en y por las sociedades civiles, las sociedades políticas y los proyectos políticos nacionales e históricos. Estos criterios, además, forman parte de un capítulo metodológico en el que trabajó intensamente un colectivo conformado por académicas y académicos de Brasil, México, Argentina e Italia.

Apoyos teóricos y analíticos fueron de suma importancia: textos sobre la crisis, de Gramsci, Zavaleta y el pensamiento crítico mundial, regional y local. La crisis política de la democracia liberal está desembocando cada vez más en una crisis de hegemonía y de autoridad. Cuando eso se produce, se revela que es una forma patética de relación economía, política y cultura: Gramsci, en su momento y circunstancias, lo planteó como un problema de la relación histórico-política entre una estructura y una forma política e ideológica dinamizadas por el movimiento de una relación de fuerzas históricas en lucha y contradicción, a la vez que interdependientes. En la crisis, las fuerzas luchan por mantener el orden o superarlo, pero no siempre tienen la capacidad acumulada para lograrlo, como percibió René Zavaleta en sus obras, pues no es algo solo interno a las fuerzas, sino de su capacidad para entender la situación de la sociedad, las relaciones mundiales, los problemas históricos, las aspiraciones de las masas y las políticas de los grupos dominantes. Señaló acertadamente que cuando la crisis se hace nacional general, se vuelve un método de conocimiento, una escuela de lucha y un periodo de aceleramiento político. Es cuando los “Cuatro conceptos de la Democracia”, que este autor estudió, entran en interacción (Zavaleta, 2009).

La investigación dejó claro que la noción del Estado integral acuñada por Gramsci en sus *Cuadernos de la cárcel* hace una gran contribución al análisis al unir dos planos hasta ahora trabajados por separado: la sociedad política o Estado, en sentido estricto, y la sociedad o sociedad civil y comunitaria. Pero una vez dilucidado eso, ¿cómo hacer el estudio de ambos y su interdependencia, interacción, correspondencia, disociación o distancia? Eso nos llevó a la problemática de la cultura como política, de la relación clases-políticos-intelectuales, a la apropiación político-ideológica de las problemáticas sociales y proyectos nacionales, vinculadas con la cuestión de la compleja articulación entre la economía mundial y la política nacional, a la cultura como política y como conocimiento-acción.

En ese camino nos vimos ante la necesidad de pensar de otra manera la cuestión del orden, de la lucha de clases, la transformación social, las reformas y la revolución, los movimientos sociales, la lucha política y el Estado. Ahí aparece el asunto de que las oligarquías dirigentes, cuando ven mermada su hegemonía y cambian de referentes nacionales a transnacionales, tienden siempre a actuar por su camino conocido: reimponer el dominio para continuar con las formas de acumulación y su supremacía política, es cuando las fuerzas militares y los bastiones de la ideología tradicional actúan como vehículos explícitos o implícitos de esa imposición del orden, junto a la operatividad de múltiples fenómenos y actores normalmente no considerados por la ciencia política, pero que actúan en las resistencias y luchas sociales: el sentido común de las masas, la religión, los intelectuales del orden, los medios de comunicación, el poder judicial, los grupos de

interés, los aparatos de organización y propaganda empresarial, las agencias de las potencias globales, los grupos militares y paramilitares. Cuando resulta imposible impedir el desencadenamiento de la crisis debido a la resistencia y lucha de masas, los actores de las clases dominantes plantean la represión o, en casos de mayor lucidez, proponen una revolución pasiva para mantener su poder, continuar con la distancia entre dirigentes y dirigidos y excluir a las masas de la participación y dirección de los cambios. Ahí es que las clases, los movimientos sociales y los grupos dirigentes populares se ven ante su verdad y ante la cuestión de su autonomía o subalternidad, de la posibilidad o dificultad para cambiar inmediatamente la cultura y el sentido común de las masas, esto es, aparece la importancia y trascendencia de estimular una reforma intelectual, moral y política para llevar adelante las transformaciones y, en caso de que las grandes masas carezcan de una acumulación histórico-política suficiente y adecuado para llevar a cabo un programa propio con autodeterminación política (lo cual solo se demuestra en la lucha política), trabajar en la crisis por la creación histórica de una nueva voluntad colectiva nacional popular con nuevas coordenadas internas y externas al Estado-nación.

Las sociedades latinoamericanas atraviesan hoy por una crisis del Estado en la que los programas y políticas de *todas* las clases dirigentes *no* constituyen una salida política estable de mediano plazo. Son las masas populares las que se ven ante la necesidad de cambiar sus acciones y concepciones para encontrar una salida política-histórica avanzada en relación con las contradicciones y problemas de la sociedad, ahora globalizada aun cuando de forma oligárquica.

Nuestra concepción difiere esencialmente de la de *crisis de estatalidad*, que hubo elaborado el PNUD de la ONU en 2004, a través del Proyecto sobre el Desarrollo de la Democracia en América Latina (PRODDAL) bajo la dirección de Dante Caputo, excanciller argentino en tiempos de la presidencia de Alfonsín, (PNUD, 2004), misma que centra su apreciación en la falta de efectividad de los mecanismos políticos, jurídicos y administrativos del Estado para instituir la democracia, cuidar la política ciudadana y partidista, y generar políticas distributivas para enfrentar la desigualdad y el deterioro social. Sus propuestas se abocan a promover la cultura política-democrática ciudadana, la rendición de cuentas, las negociaciones entre élites y establecer un pacto global entre países ricos y países pobres, como política de crear un supuesto círculo virtuoso dinamizado por los sectores progresistas de los Estados, sin atender a una apreciación crítica histórica del cuadro de problemas de la vida social y de las fuerzas nacionales e internacionales en lucha; dicha concepción es totalmente ajena a las nociones críticas de Gramsci y Zavaleta que privilegian la crítica social, el análisis de la relación de fuerzas, la lucha y confrontación por la hegemonía histórico-política de los grupos sociales y la actividad política-autónoma autodeterminada de la sociedad civil y las masas populares para recuperar y transformar radicalmente el Estado actual, creando otro poder social efectivo en términos ideológico-políticos y político-económicos.

La presente investigación colectiva y paralela de nueve grupos de trabajo se realizó desde 2019, durante la pandemia, y hasta 2022. Muchos referentes políticos específicos del Estado integral en las sociedades estudiadas tienen raíces previas y se proyectan después de esas fechas, por lo cual no siempre se incluyen datos de forma empírica en los diversos capítulos como elementos puntuales del análisis. Nuestro obje-

PRESENTACIÓN

tivo principal no fue construir una base de datos del período mencionado, ni elaborar un análisis comparativo entre los países estudiados, sino que, a partir de hechos observables y una teorización crítica, procuramos elaborar tendencias que tienen su origen mucho antes del inicio de la investigación y se prolongan hasta el presente, debido a que son resultado de la combinación de fenómenos estructurales, de procesos y de confrontaciones políticas e ideológicas y no se pueden encajonar en fechas definidas, sino que, en tanto tendencias, seguirán alumbrando los hechos y situaciones de los países durante muchos años después.

REFERENCIAS

- PNUD (2004). *La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos*. Buenos Aires: Alfaguara.
- ZAVALETA Mercado, René (2009). “Cuatro conceptos de la democracia” en *La autodeterminación de las masas*. Bogotá. Siglo del Hombre Editores, CLACSO.

CRITERIOS METODOLÓGICOS Y EJES ANALÍTICOS

LUCIO FERNANDO OLIVER COSTILLA, ALBA MARÍA PINHO DE CARVALHO,
JOANA APARECIDA COUTINHO, DENIH MONSIVÁIS MARTÍNEZ, LAURA PALMA,
FRANCESCA SAVOIA

INTRODUCCIÓN: LOS CRITERIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

A partir de las lecturas y discusiones del seminario del proyecto que sustentó la investigación de este libro, se establecieron los siguientes criterios teórico-metodológicos orientadores para todos los grupos de trabajo. Ellos derivan del intercambio y debate sobre las contribuciones del pensamiento crítico universal y latinoamericano al estudio del Estado integral contemporáneo en las que tienen un papel destacado los *Cuadernos de la Cárcel* de Antonio Gramsci (1999), y las obras de René Zavaleta (2009).

Una primera consideración general de la investigación fue que los ejes analíticos aquí expuestos y sus respectivos indicadores de búsqueda de información y datos sobre la crisis del Estado en América Latina, la confrontación entre los diversos proyectos nacionales y la disputa en y por las sociedades civiles, están vinculados a situaciones históricas y a la lucha de fuerzas determinadas. De ahí la necesidad de estudiarlos en su fondo histórico y en su particularidad concreta, no en abstracto; conlleva, por tanto, relacionarlos también con un determinado movimiento nacional y mundial del capitalismo y una acumulación política e intelectual dada de las fuerzas como de la sociedad en su conjunto.

Con relación al pensamiento crítico utilizado, cabe señalar que *los conceptos de Gramsci* se refirieron a su tiempo y a los acontecimientos de realidades históricas concretas del mundo, de Europa y, sobre todo, de Italia (partidos, Estado de compromiso, relaciones de fuerzas, masas populares, cuestiones meridional, vaticana, fascismo, etc.); sus categorías, empero, tienen amplias posibilidades analíticas para aproximaciones asociativas o iluminadoras respecto a otras realidades históricas específicas. Ello significa sin embargo que toda teoría requiere *de traducción, tiene un perfil gnoseológico* y no es explicativa por sí misma (Gramsci, 1999, C. 1 § 151; Frosini, 2019).

Las consideraciones generales que queremos compartir con los lectores de esta obra son las siguientes:

1. En la investigación de cada eje analítico, las categorías utilizadas se relacionan con las especificidades de cada formación social. Para ello se hace imprescindible considerar algunos riesgos que comprometen el análisis de situaciones concretas:
 - 1º Riesgo: *evitar el método de la analogía histórica como forma de interpretación*, es decir, no resulta adecuado como forma interpretativa el establecer comparaciones entre países, *cuando se desconocen especificidades históricas*;
 - 2º Riesgo: Utilizar esquemas de análisis abstractos, *incurriendo en enfoques que desconozcan la historicidad de cada formación social*;
2. Los *conceptos y categorías de Antonio Gramsci y René Zavaleta* incluidos, analizados y aplicados en el proyecto *se encuentran en construcción, en movimiento*. Por ello, demandan ampliaciones conceptuales y categorías intermedias a partir de las especificidades de las formaciones sociales latinoamericanas en estudio, ubicadas en un espacio y un tiempo histórico determinado;
3. En situaciones históricas concretas, dentro de cada eje, se trabajó *la relación dialéctica entre lo general y lo particular, en el contexto de las configuraciones del capitalismo contemporáneo*. En este sentido, fue fundamental pensar en la dinámica de cada país y sus crisis, siempre en el ámbito del capitalismo mundial y en el escenario geopolítico de la región de América Latina.
4. Al trabajar los tres ejes incluidos, enunciados abajo en este mismo capítulo, se consideró el hecho de que hoy, como ya enunciamos arriba, *la situación de América Latina pasa por una crisis del Estado* (con elementos sustentantes de crisis económica estructural. Y es importante comprender la naturaleza de dicha crisis, *distinguir entre crisis estructural, la crisis política, la crisis de hegemonía (orgánica) y la crisis coyuntural, así como establecer el nexo entre unas y otras*.

Una diferencia que valorar respecto a los diferentes países y casos es que la crisis orgánica tiene contradicciones fundantes que la condicionan y generan y están ubicadas en a) la estructura económica, que refiere al proceso actual de acumulación y reproducción del capital, y b) la relación conflictiva entre sociedad política/sociedad civil, mismas que se encuentran en la base de la crisis y que estimulan la actividad independiente de las masas (económicas/ideológicas/políticas). La crisis coyuntural alude a variaciones de la relación entre las fuerzas sin que eso conlleve una modificación inmediata en el movimiento de las estructuras económicas, políticas o ideológicas y en su relación histórico-política (Gramsci, 1999, C. 15, § 5, C. 13, § 17).

5. Se buscó comprender las situaciones como expresiones específicas de las relaciones de fuerzas en los tres niveles: económico, político e ideológico (Gramsci, 1999, C. 13, § 2, 17).

Al respecto, se caracterizó la especificidad de cada formación estatal con el objetivo de ubicar la crisis del Estado y la dinámica de la sociedad civil en referencia a los momentos constitutivos previos y a los ciclos estatales de cada país. Se trató de identificar el tipo de relación específica entre la economía, la política y la ideología; los puntos de inflexión en el proceso de relaciones de fuerza que dan lugar a las distintas fases de cada ciclo estatal (Zavaleta, 2009).

En el estudio se hizo necesario conocer el grado de sustentación económica, de integración, fragmentación o unitariedad, de autonomía relativa y/o subordinación de cada Estado, las particularidades de su democracia, los procesos de ajuste e inserción que se definieron bajo su inserción en la mundialización, la presencia de elementos de cultura social y política de las masas populares y de las elites, las características de la industrialización dependiente, la persistencia o no de formas autocráticas de dirección y el tipo de inserción subalterna en la globalización neoliberal, todo ello para profundizar en la relación entre sociedad política y sociedad civil.

6. Se consideró importante tomar en cuenta, junto con los elementos estructurales, los aspectos geopolíticos y la forma en que se establece la relación entre lo internacional-capitalista y lo nacional-político en cada sociedad.

PRIMER EJE TEÓRICO METODOLÓGICO: LA CRISIS DEL ESTADO

En este primer eje recuperamos algunas concepciones y debates teóricos acerca de lo que se entiende por crisis del Estado, pero no desde el punto de vista sociológico ni solamente teórico, sino enfatizando la perspectiva histórico-política enraizada en la dinámica de confrontación de fuerzas en cada sociedad y país, bajo la actual transnacionalización del mundo. Se enumeran y desarrollan a continuación los elementos que se consideraron en el estudio.

La *crisis del Estado* es apreciada por Gramsci como manifestación política e ideológica de las contradicciones tanto del movimiento orgánico del capital como del Estado integral, en tanto inciden en una desarmonía aguda en la relación de interdependencia entre la sociedad política y la sociedad civil.

Este primer indicador está orientado a distinguir los elementos estructurales, orgánicos y coyunturales que llevan a la crisis del Estado, lo que lleva a procurar conocer las contradicciones determinantes en el movimiento orgánico del capitalismo (transnacionalizado) y su articulación con los procesos y relaciones político-ideológicas de fuerzas. La crisis está asociada a una lucha histórico-política que tiene como finalidad modificar la forma del Estado y permite dilucidar en qué medida se está cambiando la vieja forma social, se está generando una situación de parálisis económica y derrumbe y cambio de la cultura de la sociedad, lo que da lugar a un nuevo momento de declive y/o reacción de las fuerzas anteriormente dominantes, o a otro, de carácter constitutivo que pueda llevar a la implantación de un nuevo Estado, así como el grado en que se viene abajo o se reconstruye una autonomía relativa del Estado y qué tanto está en curso ya un proceso de gestación de una autonomía política de las masas.

Primer indicador: la distinción entre crisis orgánicas y crisis coyunturales

Gramsci destaca y puntúa elementos sobre la crisis, tomando como base histórica lo que le revelaba la crisis estructural del 1929 acerca de los problemas de expansión industrial y comercial monopólica de la estructura capitalista y que afectaban la acumulación de

capital, y su relación con los problemas de las formas del Estado liberal en Italia, en relación con la situación del dominio y la hegemonía parlamentaria de los liberales. Las pistas analíticas que sustentan la investigación se encuentran en los siguientes párrafos de los *Cuadernos de la Cárcel*: C. 8 § 216, C. 13, § 17 y 23, y C. 15, § 5.

Para Gramsci, los orígenes internos de la crisis estaban en la dinámica contradictoria de los modos de producción y, por lo tanto, en los cambios que se suscitan en la acumulación de capital y los planes económicos. Sobre esta línea, Gramsci abre otra vía de análisis sosteniendo que es fundamental considerar ante todo (por supuesto no únicamente) los elementos simples vinculados al análisis de las contradicciones fundamentales, que están en la base de la crisis, en el marco de la dinámica de la sociedad de cada época; a partir de ello, se puede comprender la crisis. Un ejemplo de ello que aparece en las notas de los años 1930, acerca de la crisis del 1929, es que la vida económica tiene como premisa necesaria tanto el cosmopolitismo de la economía como, por otra parte, el nacionalismo de la política, en tanto la vida estatal se desarrolla en su época todavía como un nacionalismo estatal. También reafirma que el desarrollo del capitalismo ha sido una crisis continua.

Con el objetivo de diferenciar y relacionar los elementos fundamentales de la crisis y sus manifestaciones, Gramsci propone, siempre dentro de la idea de que lo más difícil al analizar la crisis es *conocer y aprehender la relación entre el movimiento orgánico del capitalismo y las relaciones de fuerzas* (1999, C. 13, § 17), conocer la articulación de la economía con la dinámica de la estructura política y las relaciones políticas, así como las ideológicas.

Resulta inadecuado pensar la crisis de cualquier país considerando los procesos exclusivamente internos, siendo necesario ubicar el contexto internacional, es decir, las configuraciones económicas mundiales y geopolíticas. Es decisivo pensar las contradicciones centrales del capitalismo mundial que marcan una época y que están en la base del capitalismo contemporáneo en cada país, y vincular ese fenómeno con la relación estatal sociopolítica (Gramsci, 1999, C. 13, § 17). La indicación metodológica de Gramsci es identificar los elementos de las diversas contradicciones actuantes a la luz de la contradicción fundamental en sus condiciones históricas de inicios del siglo XX, de una economía que se internacionaliza y un Estado que permanece en la perspectiva proteccionista.

Pensar la crisis del Estado en una dimensión concreta. Para ello, una de las preguntas es ¿cuándo y cómo comenzó *el proceso de crisis* en determinada sociedad? Introduciendo una dimensión temporal, pensando la crisis como proceso no solo como acontecimiento de ruptura o un momento coyuntural estricto. Gramsci señala, como dijimos al inicio, que la crisis tiene componentes vinculados al movimiento orgánico del modo de producción y cambio capitalista, así como a problemas serios que dificultan la continuidad del predominio de una fuerza histórico-política dada. Un elemento que acompaña la crisis es la entrada de las masas a la política como detonador de aquella.

A estas alturas cabe preguntarnos: en América Latina ¿cómo se conforma la crisis del Estado en la región y en los diversos países? ¿cuándo *eclosiona* y en qué momento aparece claramente y cuándo se vuelve un fenómeno político por excelencia?

Gramsci en el C. 15, § 59 se pregunta sobre los cambios que se dan en las estructuras y que precipitan la crisis, pues en algunos casos *tienden a modificar la forma del Estado*.

Para problematizar el fenómeno, René Zavaleta se pregunta en sus escritos por la relación de dicho proceso de crisis con la posibilidad de quiebre societal que conduzca a un derrumbe de las ideologías societales y de lugar a *un momento constitutivo*, es decir, que exprese la tendencia a una nueva configuración del Estado (Zavaleta, 2009).

¿Cuál es el margen temporal? ¿Cómo lo podemos identificar? Si tomamos, por ejemplo, momentos constitutivos como los habidos en ciertas situaciones de los diversos países, que dan lugar a los ciclos del Estado y que tienen a dichos momentos como referencia, queda la duda de ¿hasta qué punto los momentos constitutivos son una reformulación de la relación ya mencionada economía-política? O ¿en qué sentido hay variables históricas, de acumulación de capital y de poder, que persisten en los casos nacionales? Los momentos constitutivos pueden desembocar en un Estado con características nuevas o no lograrlo, pues muchas veces persisten los viejos elementos de poder que dominan en la sociedad.

¿Cómo considerar las crisis orgánicas del capital y su forma económica, política e ideológica en América Latina? Es importante pensar las realidades latinoamericanas, con la particularidad de sus formaciones sociales de capitalismo dependiente, de Estados que no siempre se constituyen como Estados nacionales y hoy están en vías de transformarse en Estados transnacionalizados, etc. Un elemento de la crisis del Estado es la crisis política de la democracia representativa, que abre espacio al cuestionamiento y al rechazo de las masas, a la intervención de la extrema derecha o a formas de fascistización de la sociedad, y también a tendencias a nuevas iniciativas en términos de formas políticas de los movimientos de intervención popular: ¿cuál es la potencialidad de que ello genere nuevas posibilidades de democracia popular?

Vinculado a la crisis de la democracia está el tema de los grados de autonomía *relativa* del Estado ¿La interrogante es cómo podemos evaluar tal autonomía en este momento y en las diversas situaciones de los distintos países de América Latina?

Y junto a la cuestión de la autonomía relativa del Estado, está todo el problema de la autonomía política y autodeterminación de las clases, de los partidos institucionales y los movimientos sociales, de tal manera impregnar de fuerza autónoma “histórica” a las masas populares, y de cómo estas pueden alcanzar también una identidad propia y una autonomía de pensamiento. ¿cómo se producen los procesos de politización y de pensamiento crítico; hasta qué punto las crisis actuales están politizando?

Segundo indicador: acerca de la crisis orgánica del Estado

En primer lugar, están las tensiones desencadenantes de la crisis en relación con las relaciones de fuerzas, la entrada de las masas en la política y la capacidad de los partidos para ser expresión y a la vez reaccionar sobre las clases.

Este segundo indicador está vinculado al estudio de las tensiones relacionadas con el derrumbe de las instituciones e ideologías tradicionales a partir de la entrada de las masas en la política, el derrumbe y las variaciones en las relaciones de fuerzas, a identificar los elementos de supremacía, hegemonía y debilidad de cada una de estas y a valorar las causas del fracaso de la fuerza hasta entonces dominante y hegemónica. Particular atención exigen los componentes de las nuevas fuerzas progresistas y avanzadas que actúan

en la crisis a partir de la inclusión de las masas en la política, en especial la valoración de qué tanto existe una capacidad de universalización de sus intereses y de constituirse en nueva dirección intelectual y moral. Particular interés tiene la interrelación de instituciones, clases y partidos en esa dirección y la relación Estado-masas. Para ello hay que considerar:

- a. *Los cambios en las relaciones de fuerzas bajo la mundialización contemporánea.* Un elemento central de la reflexión de Gramsci en relación con este eje, al abordar al Estado y su crisis en diferentes cuadernos, está conformado por las tensiones que podrían llevar a una variación de las relaciones de fuerza, identificando, además de la fuerza concreta, aquella que viendo debilitarse su supremacía y dominio, en la política y la ideología (que es hegemónica), en el contexto de las fuerzas actuantes en determinada formación histórica, modifica las relaciones entre ellas y con las masas, así como qué tanto esa variación se materializa en el Estado, visto como Estado Integral, es decir, como interdependencia entre sociedad política y sociedad civil. La crisis del Estado conlleva una modificación y un cuestionamiento de la anterior normalidad en términos de la relación de dirección política cultural que articula sociedad política-sociedad civil (Gramsci, 1999, C. 1, § 44 y § 130; C. 13, § 17 y § 23).

Gramsci se pregunta cuáles son las clases y fuerzas concretas que lograron la supremacía, de qué tipo de supremacía se trata, cuál es su génesis histórica y su base estructural, y cómo actúan los componentes objetivos, políticos e ideológicos de la misma, en qué medida estos han logrado construir ideológica, política y económicamente el interés de un grupo social de unidad de clase a la vez que de *universalización de su proyecto y cómo se han constituido en interés general a partir de realmente constituirse en dirección política y cultural de la sociedad en su conjunto*, así como la relación que existe con la resistencia, subalternidad y/o cooptación de otros grupos sociales y fuerzas. El momento central en esto es el logro de la supremacía o el desencadenamiento de *la crisis de hegemonía* en un momento dado. Tanto bajo la hegemonía como en la crisis política de hegemonía se presenta el problema de establecer la relación de las fuerzas y las masas, las clases, los partidos, el Estado-gobierno, en lo que se constituye un gran bloque histórico de la sociedad. La crisis actual se ha hecho orgánica en la medida en que las fuerzas capitalistas internas se han transnacionalizado y se ha impuesto una globalización neoliberal que no da margen a que las soluciones políticas internas se establezcan solo dentro de las fronteras del Estado-nación, sino que se ha impuesto un proyecto mundial de una hegemonía mundial limitada que se basa en transformar a los pueblos naciones en consumidores ciudadanos sin el derecho a tener plenos derechos, pues los países actúan en un mundo de competencia mundial (Frosini, 2019).

- b. *La crisis de las ideologías.* El análisis se ubica en situaciones en que se derrumba el predominio de una determinada normalidad, lo que pone en entredicho la supremacía ideológico-política de las determinadas fuerzas históricas: la situación se transforma en una crisis política. Zavaleta enfatiza que un elemento muy importante es la experiencia de las masas en la crisis del Estado, su desarrollo y acumulación de conocimientos ideológico-políticos (escuela de lucha) y su avance político acelerado en la crisis (aceleramiento de la actividad política) (Zavaleta, 2009b).

- c. *La convergencia de diversas causas de la crisis y el fracaso histórico-político de la dirección política y cultura de la fuerza hasta entonces hegemónica*, así como la apertura de una nueva opción hegemónica a partir de la entrada de las masas en la política. Un momento importante en la configuración de la crisis del Estado es, como indica Gramsci, cuando una determinada fuerza fracasa en un emprendimiento a que convocó a la sociedad y no tuvo éxito (una guerra, una reforma, una política dada). El fracaso provoca distanciamiento de las grandes masas de una determinada fuerza dirigente y abre posibilidades para el ascenso de nuevas fuerzas (Gramsci, 1999, C. 13, § 27).

Gramsci da importancia decisiva a la situación en que las masas pasan de una situación pasiva, subordinada y subalterna, a una en que toman la iniciativa y plantean un conjunto de reivindicaciones que son muy radicales (las que, aun en cuanto reformas, tienen la dimensión interna de una revolución). Es un momento decisivo en la crisis del Estado (1999, C. 17, § 23).

- d. *Los partidos y su relación con la sociedad civil*, desde la perspectiva de Gramsci, los partidos expresan a las clases, pero no son la expresión mecánica y pasiva de las clases, empero, tienen la capacidad de reaccionar sobre estas y desarrollarlas.

En sus reflexiones, Gramsci insiste en la vinculación entre las clases y los partidos, afirmando que en los contextos democráticos las clases *tienden* a expresarse en los partidos, y estos elaboran las formas de gobierno y de Estado (1999, C. 6 § 136). Sin embargo, en Italia los partidos expresaban formas corporativas y clientelares propias ajenas a las clases. En otro sentido, Gramsci destaca que en un contexto dictatorial el fascismo busca integrar a las masas al Estado de forma dependiente y subordinada. Bajo el fascismo, el Estado-gobierno invierte contra la libertad y la autonomía que se expresa en la relación clase-partido, dado que requiere establecer un vínculo directo entre Estado-clases y Estado-partido (1999, C. 13, § 27). Pero también Gramsci menciona que la relación clases-partido-Estado es una relación histórica nacional determinada que se expresa como específica en una situación dada (1999, C. 13, § 23).

Tercer indicador: la crisis del Estado y la crisis de la democracia

Este indicador instituye la necesidad de establecer la relación entre la crisis del Estado, la disputa de fuerzas histórico-políticas y la crisis de la democracia liberal de manera concreta en tanto crisis de las formas delegativas de la representación y de las formas de partido existentes. Sin embargo, para Gramsci la cuestión central es qué tanto en la crisis las masas tienen una opción de elevación política en cuanto a politización y cómo se enfrentan a las limitaciones que les impone la contraposición entre sociedad política y sociedad civil y en la separación entre fuerzas y proyectos. Cuando se produce un equilibrio histórico de fuerzas, Gramsci alude al *empate catastrófico* como expresión específica de la crisis de hegemonía y de autoridad.

- a. ¿Cómo hablar de la relación entre la crisis del Estado y la crisis de la democracia de manera concreta?

Antes de los *Cuadernos*, cuando Gramsci analiza la crisis de los años veinte, habla de una crisis de la democracia, en términos *de una democracia rebasada*, de manera similar a como lo aprecia Zavaleta, (Zavaleta, 2009d), empero, lo que explica la crisis de la democracia no es un cuestionamiento de la democracia en abstracto, sino el cuestionamiento político social a una determinada forma del Estado democrático que entra en crisis con la irrupción de las masas. Cuando eso acontece, se entrevé una crisis de las viejas formas de representación, de los partidos de masas.

- b. Cultura y política: la relación entre proyectos político-culturales y fuerzas histórico-políticas. Resulta importante dilucidar y diferenciar las fuerzas que actúan en la crisis, en tanto fuerzas histórico-políticas que generan nuevas concepciones, proyectos y personalidades, pero es importante tener en cuenta que la conformación de las fuerzas puede ser insuficiente, tal como hasta ahora sucede con los proyectos fascistas en América Latina que si bien logran movilizar a masas, tienen una gran dificultad para elaborar propuestas políticas de masas que hagan avanzar a toda la sociedad e incluirlas institucional y orgánicamente en la política. Al respecto, es importante preguntarse: ¿cómo las masas aprenden a hacer política bajo los diversos Estados y los distintos ciclos del Estado?, ¿qué aprendizaje de masas se tienen bajo contextos autoritarios?
- c. En la crisis, el distanciamiento de la sociedad con respecto a las fuerzas dirigentes produce dos fenómenos importantes: uno es la separación entre los partidos y las clases. Los proyectos y las políticas existentes de los partidos dejan de ser dirección real de las masas en la política. Nuevas fuerzas entran en escena, algunas a través de la sociedad y otras del Estado, y convocan a otras políticas y proyectos nacional-populares.

El segundo fenómeno sucede cuando se crea una situación de equilibrio de fuerzas que tiende a prolongarse, lo que genera una dificultad para encontrar una salida dado que la gran mayoría de las veces las políticas de las fuerzas conservadoras distan de ser conductoras de una revolución pasiva y un cambio en la forma estatal, mientras que las fuerzas progresistas avanzadas, por su parte, tampoco logran una nueva universalización de las reivindicaciones de los trabajadores y sectores nacional-populares en acción ni un programa de transformaciones que lleve también a una nueva forma del Estado bajo las condiciones internacionales y nacionales existentes (Gramsci, 1999, C. 13, § 23).

Cuarto indicador: la disputa de fuerzas histórico-políticas en la división de poderes y en el Estado

Este indicador está encaminado a investigar el estado y funcionalidad de las mediaciones Estado/sociedad en las condiciones concretas. Normalmente, los parlamentos tienen cierta ligación con la sociedad civil –cambiante según el Estado y el ciclo estatal– y el gobierno expresa un poder que viabiliza mayormente una determinada dominación de clase. El poder judicial está entre ambos. Eso plantea que siempre hay una lucha ideológico-política actuando en la vida de la sociedad, particularmente en la diversidad de organizaciones y asociaciones de la sociedad civil. La unidad de la diversidad en una sola

organización política puede ser un avance en términos de programa y concepción política bajo condiciones de democracia.

- a. Gramsci aprecia al parlamento como un poder en la Italia de los años veinte más ligado a la sociedad civil. Respecto del poder judicial, a este lo ubica entre el parlamento y el gobierno, representando la continuidad de la ley escrita; en cuanto al poder Ejecutivo, lo considera como un abierto campo de disputa en el contexto de ser ámbito de dominio de determinadas clases.

En sus reflexiones históricas, el autor sardo señala que la Iglesia no siempre está fuera de la sociedad política: apunta situaciones en que se convierte en Estado, vista como sociedad política monopolizada por determinado grupo privilegiado. Esta vía abre la posibilidad de analizar la cambiante relación de la sociedad civil y el Estado en términos del papel y la influencia política de las iglesias protestantes fundamentalistas, neo-pentecostales, neo-evangelistas.

- b. Otro elemento central es el seguimiento de los intelectuales en la relación entre el Estado y la sociedad civil. El Estado en su sentido integral es la relación orgánica de poder de la sociedad y ello posibilita apreciar si existe algún grado de correspondencia entre el proyecto dirigente en el Estado y las determinaciones ideológico-políticas *hegemónicas* en la sociedad civil (en donde tiene un lugar primerísimo la intelectualidad). Conlleva evaluar tanto *las posiciones* de las diversas fuerzas en la política y en los movimientos sociales (influencia hegemónica política e ideológica) sea en las instituciones como en *las trincheras* de la sociedad civil (Gramsci, 1999, C. 11, § 12, C. 13, § 7). Para ello, los intelectuales de diversa naturaleza son un vehículo de peso de la constitución ideológica de esas trincheras.
- c. La organización de las sociedades nacionales. La discusión sobre la política totalitaria.

Cuando Gramsci plantea que en la sociedad moderna nadie está desorganizado y sin partido (1999, C. 6 § 136), expone una concepción ampliada de la organización y del partido, y no una concepción formal. Es importante considerar en la sociedad civil a la red de sociedades particulares que actúan en política con diferentes motivaciones, desde articulaciones juveniles hasta grupos voluntarios, pasando por preferencias culturales, marcadores identitarios, grupos articulados en forma de proyectos y actividades. La disputa de las clases y los partidos que constituyen las distintas fuerzas histórico-políticas es por influir en la organización y partidización de la sociedad.

Gramsci demarca que la multiplicidad de sociedades particulares, de redes, que existió en Italia en los años treinta, amplía la concepción de la *sociedad civil en el contexto de crisis del Estado*. *Bajo la política totalitaria todo se quiere subsumir en un solo partido* y eso en el caso del totalitarismo fascista lleva a una opresión sobre los derechos y libertades. Sin embargo, Gramsci señala que la unión política de la diversidad en un solo partido podría ser un avance en la sociedad en la medida en que se politice a la sociedad en democracia. El fascismo, por el contrario, se propone que la sociedad y su diversidad se subordine a un solo partido-Estado.

Quinto indicador: la crisis y las revoluciones pasivas. Los procesos y proyectos políticos de las clases tradicionales y las alternativas populares

La revolución pasiva, de ser una situación histórica específica de Italia, pasó a ser una opción de las fuerzas capitalistas y sus grupos dirigentes en todo el mundo, para introducir cambios modernizantes necesarios en las diversas sociedades, sin la incorporación de las masas populares a la política. Se trata de una revolución-restauración. Dicha revolución puede tener como elemento activo conductor al Estado en situaciones en las que a nivel local no hay politización de las masas. Los intelectuales juegan un papel central en la subordinación de la sociedad a la política de modernización pasiva.

- a. Las ideas de Croce sobre la libertad como espíritu de la historia según Gramsci son la encarnación de la revolución-restauración, de ahí que catalogue la lectura que Croce propone en los libros de historia de Italia y Europa como un tratado acerca de revoluciones pasivas, señala que Croce termina por concebir al fascismo como la forma de revolución pasiva del siglo XX, así como el liberalismo lo fue en el siglo XIX. Gramsci en otros cuadernos alude a que la revolución pasiva debe ser considerada dentro de la variación de fuerzas, así como dentro del contexto de la actividad de las fuerzas (1999, C. 8 § 225-227-29 y § 236, C 10 §122).
- b. La revolución pasiva también se produce cuando un Estado dado, en el contexto de las relaciones políticas y político-militares, asume la función de dominio y de dirección de las masas, subalternizándolas por la propia incapacidad de los grupos locales de dirección de y sobre las masas. Esta es una fecunda vía analítica para pensar nuestros Estados bajo las nuevas condiciones de un capitalismo mundial que, empero, no alcanza a enterearse que con las políticas internacionales de los grupos dirigentes capitalistas se pueda resolver hoy el problema de una transformación productiva general que provoque el crecimiento de la economía mundial.
- c. Los intelectuales en los procesos de hegemonía. Gramsci alude a la diferencia de posiciones e intervenciones de los intelectuales tradicionales y de los intelectuales orgánicos. Apunta dos elementos a la crítica de Croce: primero señala que Croce es la traducción italiana de los moderados, así demarca la perspectiva asumida por Croce de la teoría de la restauración-revolución, que en su interior está en la condición de una dialéctica domesticada, una dialéctica que presupone mecánicamente que la antítesis debe ser conservada por la tesis para no destruir el proceso lógico, en un segundo punto dirá que esa perspectiva de Croce de revolución-restauración niega una apertura avanzada y revolucionaria en Italia y coquetea con las bases del fascismo.

**SEGUNDO EJE TEÓRICO-METODOLÓGICO:
LA DISPUTA DE PROYECTOS POLÍTICOS-NACIONALES**

La conformación de proyectos políticos-nacionales

En la investigación se planteó considerar los diversos proyectos políticos, nacionales e identificar sus características y su trayectoria histórica.

¿Hay un proyecto político-nacional de las elites/clases dominantes en los nueve países estudiados? ¿Hay un proyecto nacional de los sectores progresistas? ¿Cuáles son sus límites y avances? ¿Los proyectos actuales presentan cambios en sus proyectos históricos? Además, es necesario pensar la relación entre lo nacional y lo internacional y cómo este último plano interviene en la conformación de los proyectos nacionales. Por otro lado, es necesario profundizar en cómo se construyeron los Estados nacionales, ¿cuáles son las clases que se involucraron en esa construcción? ¿cómo las clases subalternas y los intelectuales participaron en ella? ¿analizar cómo se han gestado y se ha continuado con los cesarismos? La cuestión nacional debe ser considerada desde las particularidades de cada país, sin perder la dimensión internacional.

¿Cuál es la relación actual entre lo nacional y lo internacional, en el momento del capitalismo transnacional? Al contemplar esta relación es necesario abordar la que existe entre la globalización excluyente y los Estados nacionales, además, conviene considerar cómo las burguesías internas suelen estar sujetas a una relación de subalternidad al capital transnacional que impacta en los proyectos políticos nacionales y las políticas económicas.

Gramsci en la *cuestión meridional* apunta claves importantes para la comprensión de la cuestión regional y nacional. Es importante observar que no se puede caracterizar el internacionalismo sin considerar la cuestión nacional.

Es necesario pensar las formaciones de los estados nacionales y su complejidad, así como el momento constitutivo del Estado moderno y la conservación de las viejas estructuras (Zavaleta, 2009e). Cabe tener en cuenta la relación del desarrollo nacional interno y la reproducción de las relaciones desiguales.

¿Cuáles son los proyectos nacionales de las elites-clases dominantes hoy? ¿Presentan cambios en sus proyectos históricos? Existe una disputa entre las fracciones de la clase dominante en el interior de los Estados nacionales, pero ¿cómo es la disputa interna entre las clases y intraclase? Por otro lado, ¿hay un proyecto nacional de los sectores progresistas? ¿Cuál es y cómo se presenta para el conjunto de la sociedad y para la dinámica mundial? ¿Cuál es la participación/intervención de los intelectuales en los proyectos tanto de la derecha como de la izquierda?

Gramsci nos presenta claves centrales para pensar el rol de los intelectuales en la formación del Estado y en la vida social-política, como la organización de la vida cultural, la concepción de intelectual orgánico y del intelectual tradicional (Gramsci, 1999, C. 8 § 188), que son importantes para comprender las diferentes concepciones del mundo. (Gramsci, 1999, C. 11 § 12).

Según Gramsci, la importancia de un pensamiento autónomo aparece cuando los dirigentes se plantean lo siguiente:

Habiendo demostrado que todos son filósofos, aunque sea a su manera, inconscientemente, porque incluso en la mínima manifestación de cualquier actividad intelectual, en el “lenguaje”, se halla contenida una determinada concepción del mundo, se pasa al segundo momento, al momento de la crítica y de la conciencia, o sea a la cuestión: ¿es preferible “pensar” sin tener conciencia crítica, en forma disgregada y ocasional? O sea, “participar” en una concepción del mundo “impuesta” mecánicamente por el ambiente externo, y por lo tanto por uno de tantos grupos sociales en los cuales cada cual se encuentra automáticamente incluido desde su

entrada en el mundo consciente [y que puede ser la propia aldea o la provincia] (Gramsci, 1999, C. 11 § 12).

Primer indicador: la incorporación de los elementos histórico-políticos en los proyectos nacionales

Al considerar la conformación de los proyectos se debe tener en cuenta que intervienen otros elementos que responden a las transformaciones del Estado capitalista, a la experiencia regional y las especificidades históricas de cada país.

Considerar también las características de los momentos constitutivos nacionales y su relación con las crisis tanto en las sociedades *abigarradas* como en las sociedades unitarias complejas de América Latina (Zavaleta, 2009).

Así mismo, otras claves de importancia son la relación nación-clase, la cuestión colonial, étnica y racial, la construcción de la ideología nacional y la politización de las masas. Se tuvo en cuenta, además, la cuestión de los nacionalismos reaccionarios como una problemática en América Latina y su relación con las dictaduras militares en la región.

Los conceptos de *momento constitutivo* y *sociedades abigarradas* que Zavaleta propone nos permiten un acercamiento a las especificidades históricas de América Latina, son de ayuda para pensar la construcción del Estado-nación y reflexionar en torno a la persistencia de dificultades para la construcción de un proyecto hegemónico de carácter popular y democrático participativo.

Por otro lado, ante la cuestión de pensar la ideología nacional, partimos de que la burguesía construyó una ideología reaccionaria y conservadora, con sus excepciones en algunos países. De ahí la interrogante de si es posible pensar el nacionalismo como un vehículo de concientización política de las masas. Aunado a ello, el libro *Raza, nación y clase*, de Balibar y Wallerstein (1991), al discutir las identidades ambiguas, hacen un análisis interesante, desde una perspectiva teórica-crítica, de cómo pensar los elementos como el racismo y el nacionalismo, la construcción del concepto de *pueblo*. Es necesario retornar a pensar el fascismo en este contexto (Gramsci, 1999, C. 1, § 43. C. 14, § 35; C. 15 § 59; C. 19: § 26; Zavaleta, 2009c; Florestan, 1971).

Segundo indicador: los Momentos constitutivos y la construcción de hegemonía

A partir de identificar los momentos constitutivos y su relación con la construcción y las problemáticas de la hegemonía, en la investigación se planteó estudiar la crisis de la misma en cada formación social. Evaluar cómo la crisis de hegemonía está relacionada con la crisis estructural del capital y cómo esta, a su vez, agudiza las problemáticas sobre el territorio y las repercusiones de los fenómenos como el extractivismo y la cuestión de la pérdida de la soberanía nacional, que suponen una relación problemática entre la configuración del espacio nacional y el mercado mundial.

Ante la crisis de la hegemonía, cabe preguntarse si los proyectos políticos nacionales enfrentan una crisis general de su conformación como resultado de la actividad social y política dentro de la democracia representativa, que incluso permite la ascensión extrema y paradójica de personajes que tienden hacia prácticas que evocan al fascismo. Esto desemboca en la cuestión de la crisis de la ideología dominante y también de los

subconjuntos de la ideología en la sociedad. En medio de la crisis ¿cómo se constituye el proyecto político de la derecha?

Se trata de analizar también las problemáticas de la hegemonía que surgen en Estados conformados por sociedades abigarradas y que tuvieron una construcción atravesada por la relación contradictoria entre espacio local, el nacional y mercado mundial (Zavaleta, 2009). Así mismo, se hizo necesario estudiar las crisis de hegemonía en cada uno de los países y considerar en qué medida la crisis orgánica y la crisis estructural del Estado capitalista se reflejan en la crisis de hegemonía en estas sociedades.

Sobre la cuestión de la hegemonía, se consideró que su crisis en ocasiones también se presenta como crisis de autoridad (Gramsci, 1999, C. 1, § 48 § 59, C. 19, § 24, C. 13, § 23). Ello en la medida en que la lucha por la hegemonía se despliega tanto en la sociedad política como, sobre todo, en la sociedad civil (Gramsci, C. 4, § 46). La relación “dominantes y dominados” se hace compleja en la medida en que según Gramsci “una clase desde antes de llegar al poder puede ser “dirigente” y aún no ser “dominante” (Gramsci, 1999, C. 1, § 44), lo cual es importante para comprender tanto la disputa intra-burguesa por la dirección política como la disputa histórica de clases. Gramsci trata del rol de los intelectuales también en la organización de la vida cultural y la lucha por una afirmación crítica en las concepciones y la acción de las masas; ello tiene que ver con la relación hegemonía y democracia y la problemática de construir una voluntad colectiva (Gramsci, 1999, C. 8 § 188, § 191, § 195; C. 12 § 1).

Es importante destacar la crisis de la democracia representativa como un fenómeno que revela los límites de la democracia capitalista y que resume la participación de las masas al momento del sufragio. Se planteó por consiguiente el destacar el papel de los partidos políticos en la lucha por la hegemonía y el nexo entre la lucha internacional y nacional.

Ciertamente el desarrollo va hacia el internacionalismo, pero el punto de partida es “nacional” y de este punto de partida es que hay que iniciar el movimiento. Pero la perspectiva es internacional y no puede ser de otra manera. Por lo tanto, hay que estudiar exactamente la combinación de fuerzas nacionales que la clase internacional deberá dirigir y desarrollar según las perspectivas y las directivas internacionales. La clase dirigente es tal solo si llega a interpretar exactamente esta combinación, de la que ella misma es componente y en cuanto tal precisamente puede dar al movimiento una cierta orientación y ciertas perspectivas (Gramsci, 1999, C. 14 § 68).

Tercer indicador: la sociedad política y la constitución compleja de las fuerzas histórico-políticas

Partiendo de la relación nacional-internacional y la cuestión geopolítica, la investigación se propuso pensar las disputas en el marco de las fuerzas internacionales. Identificar cuáles son sus repercusiones en los cambios y permanencias en la estructura política-nacional. Considerar cómo se conforman a partir de ello las instituciones y las mediaciones: la cuestión del parlamento y los partidos políticos, el poder judicial, el cuerpo armado del Estado, el papel del ejército y la Iglesia en estos momentos de crisis ¿Quiénes y cómo imponen la dirección política?

Pensar la crisis de la “seguridad” que se profundiza en el fenómeno de la crisis orgánica y estructural del capitalismo, tomando en cuenta que la respuesta de la derecha deriva en expresiones fascistoideas, de la mano con las fuerzas paramilitares. Por otro lado, ¿cuáles son las propuestas de la izquierda para esta situación?

En términos político-ideológicos es necesario abordar ¿cómo se configura hoy la lucha de clases que incluye la cuestión de la clase, etnia y género?, ¿cuál es el papel del feminismo popular en la creciente lucha de los movimientos de masas contra el patriarcado y el capitalismo en América Latina? Y, en específico, ¿cómo este interviene en la reconfiguración de la sociedad política y de conformación de los proyectos nacional-populares?

Para evaluar las respuestas a las interrogantes en la situación de cada caso, se consideró necesario abordar cómo se constituyen las fuerzas nacionales y proyectos de las clases dominantes teniendo en cuenta la configuración geopolítica y la intervención de las fuerzas políticas externas. Así mismo, se concluyó en la necesidad de analizar si esta podría ser fuente de cambios relevantes en la estructura política, las instituciones o las mediaciones.

Ante la crisis política, se consideró necesario reparar en la problemática de la seguridad y la manera en que la sociedad política aborda la cuestión, tomando en especial consideración el papel que juegan el ejército y los cuerpos armados del Estado.

Otro punto general del debate fue analizar cómo se configura la lucha de clases hoy, dado que las luchas contra las diversas formas de opresión y dominación son elementos constitutivos de la lucha de clases y apreciar que no se encuentran apartados de ella, ya que el capitalismo agudiza esos elementos como problemáticas conjuntas del racismo, el machismo, la xenofobia, la homofobia, etc. en los momentos de crisis. Gramsci permite ampliar esas cuestiones al incluir la cuestión de las clases subalternas y, sobre todo, su perspectiva conlleva incorporar la transformación de la cultura de las clases subalternas como un aspecto importante de la lucha ideológica y de la lucha por la hegemonía en la sociedad.

¿Cómo se desarrolla ese proceso en la América Latina contemporánea? La cuestión paradójica es que en la política tradicional e institucional esos elementos constitutivos de la lucha de clases son presentados (en general, por supuesto con sus excepciones) como fuera de esa relación. Por ejemplo, la lucha contra el racismo o el patriarcado suele ser disociada de la lucha por derechos económicos o anticapitalista, ante lo cual sería enriquecedor recuperar aspectos de la historia de la lucha afroamericana en Estados Unidos, como un ejemplo de la imbricación de las problemáticas (Davis, 2005).

Cuarto indicador: ¿Hay un proyecto de las clases subalternas?

En este rubro nos pareció importante identificar cómo se está dando la politización de los sectores populares y la participación de las masas en la política a nivel estatal en los nueve casos estudiados, ¿se están construyendo nuevas mediaciones ideológicas y políticas?

¿En qué medida los partidos políticos progresistas realmente están presentando un proyecto político alternativo vinculado a la participación efectiva de las clases subalternas? ¿Los movimientos de masas, actualmente, tienen potencialidad y la visión crítica del

mundo para minar el proyecto político neoliberal? ¿Cómo entender la forma en que sectores religiosos cristianos y católicos en América Latina que influyen se han convertido en un tipo de participación política que la derecha explota para sus intereses inmediatos? (por ejemplo, el neo-pentecostalismo en Brasil).

¿Tienen las clases subalternas un proyecto político que disputa la hegemonía en la sociedad? Es pertinente observar cómo se da el proceso de organización/desorganización en las clases subalternas, y más aún el papel de los intelectuales orgánicos en la formación cultural y política de estas.

El *Cuaderno 25* de Gramsci está dedicado justamente al problema metodológico de abordar el estudio de las clases subalternas:

Las clases subalternas, por definición, no están unificadas y no pueden unificarse mientras no puedan convertirse en “Estado”: su historia, por lo tanto, está entrelazada con la de la sociedad civil, es una función “disgregada” y discontinua de la historia de la sociedad civil y, por este medio, de la historia de los Estados o grupos de Estados. Por lo tanto, es preciso estudiar: la formación objetiva de los grupos sociales subalternos a través del desarrollo y las transformaciones que tienen lugar en el mundo de la producción económica, su difusión cuantitativa y su origen en grupos sociales preexistentes, de los que conservan durante cierto tiempo la mentalidad, la ideología y los fines; su adhesión activa o pasiva a las formaciones políticas dominantes, los intentos de influir en los programas de estas formaciones para imponer reivindicaciones propias y las consecuencias que tales intentos tienen en la determinación de procesos de descomposición y de renovación o de neoformación; el nacimiento de partidos nuevos de los grupos dominantes para mantener el consenso y el control de los grupos subalternos; las formaciones propias de los grupos subalternos para reivindicaciones de carácter restringido y parcial; las nuevas formaciones que afirman la autonomía de los grupos subalternos pero en los viejos cuadros; las formaciones que afirman la autonomía integral, etcétera (Gramsci, 1999, C. 25, § 5).

La vigencia de las anotaciones de Gramsci sobre los subalternos puede permitir la identificación de las disputas por la dirección de estas masas, en la sociedad civil y en la sociedad política. Así mismo, es el espacio donde encuentran asidero los análisis del sentido común y la cultura política.

TERCER EJE ANALÍTICO: LA DISPUTA EN Y POR LA SOCIEDAD CIVIL

Evaluación de la lucha social de clases en el contexto de los diversos países en la actualidad histórica

En este eje analítico se consideró recuperar en primer término la constitución y el peso político de las fuerzas vinculadas al capital y al trabajo, entendidas en un sentido amplio, sin dejar de considerar también la proyección de otras fuerzas históricas y políticas, tales como las clases medias y los intelectuales en un sentido amplio, que tienen influencia en

la vida social general, así como también en las masas precarizadas que se encuentran en situación relativamente marginal, pero que son también actores políticos.

Aquí se trata del análisis complejo de lo que se denomina *delimitar las relaciones de poder en el contexto amplio de las relaciones de fuerza*. Nos parece de suma importancia evaluar cómo se desarrolla la lucha de clases en la sociedad civil de cada país, en el contexto actual, buscando medir el peso de las fuerzas del capital y del trabajo en el rumbo de la vida nacional, así como su influencia en las concepciones y el comportamiento de las mayorías de la sociedad.

Por tanto, se hace necesario identificar qué grupos y segmentos constituyen las fuerzas económico-políticas del capital, considerando su desdoblamiento como elementos de las fracciones financiera, industrial, agroindustria y minería, comercial y de servicios. Con ello, buscamos delinear las posiciones de estos segmentos y las tensiones existentes entre ellos. Así mismo, convenimos necesario identificar la composición de las clases trabajadoras organizadas a nivel nacional, estatal y local, y las formas de articulación de los diferentes segmentos que la constituyen, en medio de las transformaciones en el mundo del trabajo.

Es importante evaluar la capacidad de los sujetos políticos considerando las formas tradicionales e innovadoras de organización, como asociaciones, sindicatos, federaciones, comunidades agrarias, centrales sindicales, clubes, iglesias, grupos y federaciones empresariales, organismos identitarios y conjuntos ciudadanos organizados de la sociedad civil, etcétera.

En esta valoración de las relaciones de poder, vinculada al análisis de las relaciones de fuerzas, fue necesario prestar especial atención a su influencia también en las masas marginales y precarizadas de la sociedad, enfatizando los diferentes segmentos que las componen y su nivel de conciencia, organización y movilización, con énfasis en las concepciones que orientan sus vidas e influyen en los movimientos sociales en que se organizan, demarcando móviles de su lucha. Es necesario valorar las nuevas formas de articulación con los medios, de asociación, organización o actividad, que están surgiendo, tanto en el ámbito de los grupos capitalistas, las clases medias, como de los trabajadores y, particularmente, en relación con las masas.

Primer indicador: conflictos de hegemonía en la sociedad civil entre las diferentes fuerzas (destacando “momentos de relativa normalidad hegemónica” y de “crisis hegemónica”)

En cuanto a las clases fundamental-constitutivas de la relación de capital –los segmentos de la burguesía y la clase trabajadora– se decidió considerar su capacidad de dirección política y cultural, dentro de los grupos y fracciones que constituyen estas clases y su capacidad de dominio y hegemonía en relación tanto con las masas en general como con las clases oponentes. En torno a la dirección política y cultural de cada clase o grupo social, la investigación se propuso conocer la cultura, la política y las líneas intelectuales y morales de estas fuerzas en la vida social, los medios de comunicación y la difusión de sus ideas y valores.

En los procesos de disputa hegemónica, en el momento histórico actual, se procedió a evaluar las formas de inserción y posicionamiento de las fuerzas histórico-políticas en la sociedad, dimensionando las expresiones de subalternidad y la capacidad de autodeterminación efectiva y/o potencial.

Gramsci enuncia algunos criterios metodológicos claves que aportan para nosotros valorar la disputa por la hegemonía en la sociedad: como dirección política, dirección intelectual y ética y dominación. Explica que la dirección intelectual y ética, actuando en el ejercicio que acompaña y enriquece la dirección política de una clase, se efectúa en relación con grupos y segmentos constituyentes de esa clase, mediante la formación de alianzas e influencia en toda la sociedad, pero también se realiza en la conformación de la voluntad colectiva crítica y de cambio de la sociedad. El dominio, por otro lado, se ejerce en relación con la clase opuesta, mediante subyugación, incluso con las fuerzas armadas. Y en ese plano, Gramsci insiste en considerar el peso de la capacidad de conducción y el liderazgo político como condición para conquistar la hegemonía. En esta perspectiva, sostiene, como ya mencionamos antes, que un grupo social puede y debe ser dirigente incluso antes de conquistar el poder del gobierno y que, luego, cuando este grupo ejerce el poder, haciéndose dominante, debe continuar siendo también dirigente (Gramsci, 1999, C. 1, § 44).

Se consideró importante el que las disputas hegemónicas, especialmente en la construcción de la dirección política y cultural, a partir de las luchas en el campo de los conceptos y valores, se dan también como dinámica de la sociedad política y la sociedad civil. Por ello, es necesario entender qué es y cómo opera la diversidad ideológica y política dentro de cada país, considerando sus regiones y ciudades más importantes.

Para valorar la disputa hegemónica en la sociedad civil se puede partir de evaluar la situación y el posicionamiento de las masas, buscando dimensionar procesos de autonomía y subalternidad a los grupos dominantes y de movilización y organización propia, en la perspectiva de su autodeterminación. Como observación, es importante señalar que, en momentos de normalidad hegemónica, prevalece la subalternidad de las masas y, en momentos de crisis hegemónica, en que se abre la disputa, aparece también la posibilidad de que las masas muden su situación y se planteen superar su situación subalterna por la vía de lo que Gramsci caracterizaba como buen sentido o como elevación ideológico-política o catarsis (Gramsci, 2000, C. 10, primera parte). En esos momentos, los sectores populares encarnan el ejercicio del derecho a otra dirección política, en el sentido de la autoconcepción del poder de las masas.

Segundo indicador: demarcación de momentos de carácter intensamente colectivo en la vida de la sociedad civil

Para Gramsci y para Zavaleta se trata de momentos históricos de articulación común del conjunto de la población, al enfrentar un asunto movilizador en los procesos de desarrollo de la vida nacional (Gramsci, 1999, C. 13, § 17; Zavaleta, 2009). Atender a lo que sucede en tales momentos conlleva identificar la naturaleza y la importancia “nacional-popular” de un proceso de articulación común, evaluando su potencial político y en la medida en que la potencialidad se transforma en un acto de colectividad. En la

construcción de estos momentos se procedió a evaluar específicamente las formas de inserción y participación, dimensionando la fuerza de esta participación.

Gramsci destaca que, en las distintas fases históricas de un país, estos momentos pueden haber sido de distinta naturaleza y con diferente importancia nacional-popular: invasiones, insurrecciones, guerras, levantamientos, revoluciones, rebeliones, plebiscitos, elecciones generales de particular trascendencia, etc. De hecho, la investigación se propuso conocer esos momentos a partir de tres preguntas:

1. ¿Cuál es *el potencial colectivo* que se produce en un momento de intensa participación y, en consecuencia, en qué medida este potencial se ha traducido en un fenómeno de acción de masas? (Zavaleta, 2009d);
2. ¿Cuál es *la intensidad de masa?*, es decir, la mayor o menor multitud de participantes y los segmentos de grupos sociales involucrados;
3. ¿Cuáles son *las mayores o menores repercusiones positivas e incluso activamente negativas* que tuvo el movimiento en los diferentes estratos de la población?

Es necesario tener presente cómo se produce la participación de las masas dentro de estos momentos de unión colectiva-social, caracterizando la naturaleza de su posicionamiento y la mayor o menor participación, demarcando las formas de expresión colectiva de estas masas y su grado de éxito o fracaso, así como su relación con los horizontes de una prolongada lucha de posiciones.

Tercer indicador: diferentes concepciones culturales de las fuerzas urbanas y rurales

Este indicador está propuesto para analizar cómo se cruzan las relaciones y tensiones en la distinción campo-ciudad, pero a partir de la evaluación de la hegemonía existente, el antagonismo político, las relaciones de dominio y de autonomía.

Resulta fundamental circunscribir la dimensión cultural política en la caracterización de lo urbano y lo rural en cada país en este momento histórico de la civilización capitalista. Demarcar las tendencias predominantes en las zonas urbanas y rurales, con especial atención a los cambios y redefiniciones. Es importante construir una perspectiva de las relaciones en el espacio urbano y rural, distinguiendo las divisiones territoriales y políticas de cada país. En este sentido, se hace necesario considerar las fuerzas motrices/ fuerzas centrales fundamentales en el campo y en la ciudad, teniendo en cuenta elementos estructurales a lo largo de la historia del país y de las dimensiones cíclicas de las crisis (Gramsci, 1999, C. 1, § 43, § 44).

Como referencia, sin pretender que en nuestra región suceda lo mismo, hay que tener en cuenta como ejemplo la demarcación gramsciana, en Italia, de cuatro fuerzas actuantes en distinto grado y lugar: la fuerza urbana en el norte, la fuerza meridional en el sur, la fuerza septentrional y las fuerzas de las islas de Sicilia y Cerdeña. Al evaluar la dinámica campo-ciudad en cada país, se puede partir de los programas políticos generales en disputa.

Cuarto indicador: la función y el papel de los intelectuales orgánicos dentro de la disputa hegemónica, considerando su vínculo con la sociedad civil en su conjunto

En esa dirección, se consideró importante examinar la estructura y el origen de las diversas capas intelectuales, siempre vinculadas de manera histórica a las diversas clases fundamentales, ejerciendo una función organizacional, política y pedagógica, en el ámbito de la producción, la cultura y la política administrativa. Se procedió a incluir en el análisis la producción teórica y de conocimiento concreto de intelectuales orgánicos en cada país, vinculados a las élites, a la burguesía o a la clase trabajadora o popular, destacando, también, el peso de los intelectuales tradicionales en las definiciones de vida social. Específicamente, es necesario configurar el papel de los intelectuales en el ejercicio de la mediación, en el marco de la disputa hegemónica, con un desempeño decisivo en el ámbito de la dirección político-cultural.

En sus análisis históricos de la actividad intelectual en Italia, Gramsci distingue entre intelectuales tradicionales e intelectuales orgánicos. Los intelectuales tradicionales son aquellos preexistentes que aparecen como representantes de una continuidad histórica de largo plazo, interrumpida apenas por cambios radicales en las formas sociales y políticas. Los intelectuales orgánicos, en cambio, son personajes vinculados a las clases fundamentales de un dado momento histórico, productivo y social, por ejemplo, el de la civilización capitalista, es decir, clases que encarnan una inmersión productiva, una ideología y una participación política y que están ubicadas especialmente en el capital y el trabajo: burguesía y clase trabajadora, por supuesto en sus relaciones con los demás grupos sociales y con la sociedad.

Luego, Gramsci apunta a una indicación central: cada grupo social, nacido en el terreno original de una función esencial en el mundo de la producción económica, crea, al mismo tiempo, orgánicamente, una o más capas de intelectuales *que le dan homogeneidad y conciencia de su propia función*, no solo en el campo económico, sino también en el social y político, lo que se traduce en otro criterio de investigación histórico-política: no hay una clase independiente de intelectuales, pero cada grupo social tiene su propia capa de intelectuales o tiende a formarla (Gramsci, 1999, C. 12, C. 19, C. 24).

Así, en la investigación fue importante tratar de identificar, en cada país, en la medida de lo posible, los mayores intelectuales orgánicos de la burguesía y de las clases populares, explicando los ejes históricos y culturales que estos intelectuales orgánicos utilizan para construir la hegemonía de un grupo social en las sociedades estudiadas.

REFERENCIAS

- BALIBAR, Étienne; Wallerstein, Immanuel (1991). *Raza, nación y clase*. España: IEPALA Editorial.
- DAVIS, Angela (2005). *Mujeres, raza y clase*. España: Akal
- FERNANDES, Florestan (1971). Notas sobre o Fascismo na América Latina. En *Poder e contrapoder na América Latina*. Río de Janeiro: Zahar.

- FROSINI, Fabio (2019). Gramsci in translation: egemonia e rivoluzione passive nell'Europa di Oggi, en *Revista Materialismo Stórico*. No. 1 (Vol. VI). Università di Urbino.
- GRAMSCI, Antonio (1999). *Cuadernos de la Cárcel*, Cinco Tomos, México: Era.
- ZAVALETA, René (2009). “El Estado en América Latina” en *La autodeterminación de las masas*, Bogotá: Ed. El siglo del hombre-CLACSO.
- ZAVALETA, René (2009a). “Las formaciones aparentes en Marx” (1978), en *La autodeterminación de las masas*, Bogotá: Ed. El siglo del hombre-CLACSO.
- ZAVALETA, René (2009b). “La revolución de 1952 y las tendencias sociológicas emergentes”, 1978 en *La autodeterminación de las masas*, Bogotá: Ed. El siglo del hombre-CLACSO.
- ZAVALETA, René (2009c). “Notas sobre fascismo, dictadura y coyuntura de disolución” en *La autodeterminación de las masas*, Bogotá: Ed. El siglo del hombre-CLACSO.
- ZAVALETA, René (2009d). “Cuatro conceptos de la democracia” en *La autodeterminación de las masas*, Bogotá: Ed. El siglo del hombre-CLACSO.
- ZAVALETA, René (2009e). “Notas sobre la cuestión nacional en América Latina” en *La autodeterminación de las masas*, Bogotá: Ed. El siglo del hombre-CLACSO.

BRASIL CONTEMPORÁNEO: CRISIS ORGÁNICA DEL ESTADO

LEILA MARÍA PASSOS DE SOUZA BEZERRA, ALBA MARÍA PINHO DE CARVALHO, ELIANA COSTA GUERRA, GUILLERMO ALFREDO JOHNSON, ELDA MARÍA MACIEL FREIRE, CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA, SILVANA PINHO DE SOUZA, MÁRCIO DE SOUZA PORTO*

A MANERA DE INTRODUCCIÓN: CAMINOS Y VEREDAS DE UNA INVESTIGACIÓN DE INSPIRACIÓN GRAMSCIANA

El desafío de analizar la justa relación entre economía y política para desentrañar la crisis orgánica del Estado y sus particularidades en la formación social brasileña contemporánea conllevó visitar vías analíticas gramscianas, circunscritas en los *Cuadernos de la Cárcel*, específicamente los cuadernos 1, 3, 6, 7, 12, 13 y 15.

Desde esta perspectiva, el principio Gramsciano fundacional de teoría/historia y teoría/política constituyó un referente básico. De hecho, las categorías de Antonio Gramsci son eminentemente situadas y fechadas, siempre referidas a realidades históricas de Europa y, sobre todo, de Italia, a partir de la discusión de las relaciones de fuerzas en el contexto de cada realidad concreta.

Así, al discutir la crisis orgánica del Estado, una indicación metodológica clave es considerar las configuraciones históricas del Estado brasileño evitando dos riesgos intrínsecos: utilizar el método de la analogía histórica como medio de interpretación, o sea, no se debe recurrir a las comparaciones entre Estados como herramienta interpretativa sin prestar atención a sus formaciones históricas (Cuaderno 3, § 18); utilizar esquemas de análisis abstractos, incurriendo en enfoques que desconsideran la concreción de cada Estado y su historicidad (Cuaderno 1, § 151).

Para ello, se siguió la propuesta metodológica del gramsciano brasileño Carlos Nelson Coutinho (1994), procediendo a la elevación de lo abstracto a lo concreto a partir de las exigencias de la dinámica de la historia. En este proceso de expansión conceptual, Coutinho esboza dos dimensiones esenciales en la perspectiva marxista del Estado:

Por un lado, una dimensión gnoseológica, referida al mayor o menor nivel de abstracción conceptual en el que se sitúa el investigador para analizar su objeto; por otro lado, una dimensión histórico-ontológica que se refiere al mayor o menor

* Agradecemos el apoyo para la elaboración de este escrito con opiniones, ideas y lecturas de los investigadores Luciana Moura Ribeiro, Natan dos Santos Rodrigues y José Jair Galvão da Silva.

grado de complejización (de materialización) de la propia realidad objetiva con la que se enfrenta el investigador (Coutinho, 1994, pp. 14-15).

Así, a lo largo del texto, se intenta dar cuenta no solo del “movimiento del pensamiento”, sino también de “la misma diacronía histórico-objetiva de la realidad” (Coutinho, 1994, p. 16). Para trabajar esta dimensión histórico-objetiva de lo real, la investigación que sustenta este análisis de la crisis orgánica del Estado brasileño buscó inicialmente retomar conceptos centrales del pensamiento de Antonio Gramsci, a partir de la lectura y discusión de capítulos específicos de los *Cuadernos de la Cárcel*, para construir caminos analíticos para la aprehensión crítica de la realidad brasileña contemporánea. Dando curso a los procesos investigativos, fueron realizadas síntesis de producción gramsciana, a partir de la lectura atenta de segmentos de los cuadernos referidos, procediendo con discusiones internas en el grupo Brasil y realizando presentaciones y discusiones con el colectivo de equipos que componen la red de investigación PAPIIT IN307719, bajo la responsabilidad de la UNAM, México. Una síntesis de las elaboraciones analíticas de la producción de Gramsci por parte del Grupo Brasil se encuentra en los capítulos del libro previo, *Problemas teóricos del Estado Integral en América Latina. Fuerzas en tensión y crisis*, publicado en 2021.¹

En julio de 2022, en el marco del Informe de Investigación PAPIIT, el grupo Brasil presentó un documento específico, fundamentando los avances de la investigación empírica sobre el caso brasileño, elaborado a partir del marco general de indicadores teórico-metodológicos. Este documento del Grupo PAPIIT Brasil constituyó una referencia básica para la elaboración de este capítulo, que analiza la contemporaneidad brasileña, centrándose específicamente en los últimos siete años de la historia sociopolítica reciente del país. En la construcción de este texto final, analistas brasileños del campo crítico trabajaron intensamente investigando el Brasil contemporáneo en sus diferentes dimensiones, contemplando la relación entre economía, política, cultura y sociedad. Adicionalmente, se contruyeron mediaciones analíticas a partir de vías abiertas por autores (as) que son referencia en el debate sobre el capitalismo y el colonialismo en el siglo XXI.

Como pauta, el análisis de la crisis orgánica del Estado brasileño se centró en su calidad de ser la expresión de una crisis de hegemonía en la que las fuerzas sociales –progresistas o conservadoras– no han mostrado del todo construir una dirección hegemónica que aglutine a la mayoría de la sociedad en torno a un proyecto de país. A lo largo de los análisis de diferentes momentos de la vida brasileña, se dio prioridad a la evaluación de las relaciones de fuerza, identificando las actantes, las relaciones entre ellas y cómo se expresan en el Estado, entendido aquí como Estado Integral.

Al final, en medio de la intensa dinámica de la crisis orgánica del Estado brasileño, circunscrita en torno a la crisis del Capital, se elaboró el presente texto, en un movimiento constante de lectura y análisis de los cambios en curso en el contexto socioeconómico y político-cultural, que nos ayudó a captar determinantes y condiciones históricas y aspectos fenoménicos y coyunturales.

¹ Recientemente se publicó una versión en portugués del libro (Coutinho y Oliver Costilla, 2023).

CRISIS ORGÁNICA DEL ESTADO: DEMARCACIÓN GRAMSCIANA UTILIZADA COMO BASE ANALÍTICA

La crisis orgánica del Estado, con sus particularidades de presentarse como crisis de hegemonía, de autoridad, de separación entre representantes y representados, se entiende aquí en el ámbito de las conceptualizaciones de Antonio Gramsci aludiendo asimismo a una crisis de todo el sistema capitalista que toca a sus estructuras económicas, sociales y culturales. Al reflexionar sobre la crisis orgánica, Semeraro (2016) refiere al análisis gramsciano, circunscrito en el Cuaderno 6, § 10. Señala el autor: “La crisis [...] es orgánica cuando lo ‘espiritual’ se aleja de lo ‘material’, o sea, la concepción del mundo (la superestructura) se desarrolla no según la estructura”.

Al desentrañar la complejidad de esta crisis, Semeraro (2016) llama la atención sobre la exigencia de una “[...] crítica valiente y rigurosa que siempre ha caracterizado a la tradición marxista” y sobre la indispensabilidad de una “[...] sincera autocrítica, dirigida no solo a reconocer los propios errores, sino principalmente a reactivar la fidelidad a la realidad y a la historia de las luchas populares (Semeraro, 2016, p. 4).

En el Cuaderno 13 de sus *Cuadernos de la Cárcel* (Gramsci, 1999), Antonio Gramsci profundiza la discusión sobre la Crisis Orgánica del Estado, configurándola como una crisis de hegemonía, dentro de la cual las fuerzas sociales, progresistas o conservadoras, son incapaces de asumir el rumbo de la sociedad. Así, esboza las relaciones entre las fuerzas sociales en el peculiar contexto de una crisis orgánica:

[Ciertas fuerzas] **se vuelven históricamente eficientes gracias a la debilidad constitutiva del adversario, no por una fuerza interior propia** y, por tanto, están ligadas a una determinada situación de equilibrio de las fuerzas en lucha, ambas incapaces, en su propio campo, de expresar una voluntad reconstructiva de ellos mismos (Gramsci, C. 13, § 37, en nuestra traducción se le ha añadido el énfasis).

Es, en efecto, una crisis de hegemonía que alcanza a las superestructuras y al Estado en su conjunto, más allá de la crisis económica, es decir, desde las condiciones objetivas en el campo de la economía, la crisis llega a la política y la cultura, la sociedad civil y sociedad política, restringiendo la actuación de las fuerzas sociales en conflicto. En el ámbito del C. 13, §23, Gramsci explica la naturaleza de esta crisis, asumiendo una separación entre representantes y representados, resultante de situaciones específicas:

En un determinado momento de su vida histórica, **los grupos sociales se separan de sus partidos tradicionales**, es decir, de los partidos tradicionales en esa forma organizativa particular, dejando de reconocer a ciertos hombres que los constituyen, representan y dirigen como expresión de su clase o fracción de clase. [...]. (Gramsci, C. 13, §23, en nuestra traducción se le ha añadido el énfasis).

Destaca la especificidad de esta crisis en cada país, manteniendo, sin embargo, una base común en cuanto a su contenido:

Dentro de cada país, **el proceso es diferente, aunque el contenido es el mismo**. Y el contenido es la crisis de hegemonía de la clase dominante, ya sea porque la clase dominante ha fracasado en alguna empresa política importante para la cual solicitó o forzó el consenso de las masas (como la guerra) o porque **grandes masas (especialmente de campesinos y de intelectuales de la pequeña burguesía) han**

pasado de inmediato de la pasividad política a una determinada actividad, planteando pretensiones que, en su conjunto no orgánico, constituyen una revolución. Entonces, se habla de una “crisis de autoridad” y esta es precisamente la crisis de hegemonía, o la crisis del Estado en su conjunto (Gramsci, C. 13, § 23, traducción nuestra con el énfasis añadido).

Al referirse a la “crisis orgánica”, Semeraro (2016) utiliza el Cuaderno 7 § 12, en el que Gramsci explica las motivaciones que la desencadenaron. Así, las crisis ocurren:

1) porque grandes masas, antes pasivas, comienzan a moverse, pero en un movimiento caótico y desordenado, sin dirección, es decir, sin una voluntad política colectiva precisa; 2) porque las clases medias [...] permanecen desempleadas, incluso después de haber completado un aprendizaje [...]; 3) porque las fuerzas antagónicas fueron incapaces de organizar este desorden a su favor.

Al avanzar en la configuración de esta crisis orgánica, Gramsci (C. 13, § 23) advierte:

Quando ocurren estas crisis, la situación inmediata se torna delicada y peligrosa, porque el campo queda abierto a soluciones contundentes y a **la actividad de poderes oscuros representados por hombres providenciales o carismáticos** (Gramsci, C. 13, § 23, en nuestra traducción se le ha añadido el énfasis).

Y luego vincula esta crisis a las relaciones de fuerza, llamando la atención sobre un elemento esencial:

La crisis [orgánica del Estado] crea situaciones inmediatas de peligro, porque **los diferentes estratos de la población no tienen la misma capacidad para orientarse rápidamente y reorganizarse al mismo ritmo**. La clase dominante tradicional, que cuenta con un gran equipo capacitado, transforma hombres y programas y reabsorbe el control que se les estaba escapando, con mayor rapidez que la que poseen las clases subalternas (Gramsci, C. 13, § 23, en nuestra traducción se le ha añadido el énfasis).

De hecho, en el contexto de las relaciones de fuerzas, las clases dominantes tienen condiciones materiales y financieras para movilizarse y reorganizarse. Y, en palabras de Gramsci:

Incluso se hacen sacrificios, exponiéndose a un futuro sombrío, con promesas demagógicas, pero retienen el poder, lo fortalecen temporalmente y lo utilizan para aniquilar al adversario y dispersar al equipo directivo de este, que no puede ser muy numeroso ni tener muchos adeptos (Gramsci, C. 13, § 23, traducción nuestra).

Al configurar la crisis de hegemonía como crisis de autoridad, Gramsci establece una asociación referencial con los partidos, concebidos como organizaciones en un sentido amplio, evaluando que, en el campo de las clases dominantes, en un contexto de crisis orgánica, como estrategia para enfrentar la crisis se da lugar a la fusión de todo un grupo social “bajo la bandera de un partido único que mejor los represente y sintetice las necesidades de toda una clase” (Gramsci, § 23. 13). Es una estrategia en el sentido de resolver “un problema existencial dominante y evitar un peligro mortal” (Gramsci, C. 13, § 23, traducción nuestra).

Para Gramsci, cuando la crisis no se resuelve con esta solución orgánica, se abre espacio para un “líder carismático”. Explica, entonces “[...] hay un equilibrio estático [...]; que ningún grupo, ni conservador ni progresista, tiene la fuerza necesaria para la victoria. Incluso un grupo conservador necesita un líder” (Gramsci, § 23. 13). Así, un grupo o líder carismático puede llegar al poder, abriendo la posibilidad del bonapartismo, el fascismo y sus valores sociales (Said, 2016).

Al examinar los procesos de crisis orgánica, Gramsci advierte no descuidar el lugar que le corresponde en esta al elemento burocrático, civil y militar. Específicamente, el análisis gramsciano se refiere a la importancia de los elementos militares y burocráticos, considerando incluso los estratos y contextos sociales de los que emergen. Luego hace una advertencia que abre un camino analítico decisivo:

[...] un movimiento político puede ser de carácter militar, aunque el ejército como tal no participe abiertamente en él; un gobierno puede ser de carácter militar, aunque el ejército como tal no participa en el gobierno. En determinadas situaciones puede ocurrir que convenga no “descubrir” el ejército, no hacerlo fuera de la constitucionalidad, no difundir la política entre los soldados, como se suele decir, para mantener la homogeneidad entre oficiales y soldados, en un campo de aparente neutralidad y superioridad sobre las fracciones de clase; sin embargo, es el ejército, es decir, el Estado Mayor y los oficiales, quienes determinan la nueva situación y quienes la dominan. Por otra parte, no es justo que el ejército, según las constituciones, nunca haga política; el ejército debe defender precisamente la constitución, es decir, la forma jurídica del Estado, con las instituciones conexas [...] (Gramsci, § 23. 13, traducción nuestra).

Gramsci destaca la importancia de un análisis adecuado de la influencia y el peso de los militares dentro del Estado, para comprender y configurar las formas políticas que asumen los gobiernos en situaciones de crisis orgánica. El autor afirma:

Esta serie de observaciones son indispensables para **analizar el aspecto más íntimo de una determinada forma política**, habitualmente denominada *cesarismo* y *bonapartismo*, a fin de distinguirla de otras formas en las que el elemento técnico militar, como tal, predomina en formas quizás aún más visibles y exclusivas (Gramsci, § 23. 13, énfasis añadido).

Frente a hechos más recientes, en el contexto brasileño los caminos analíticos de Antonio Gramsci cobran aún más sentido y relevancia para inspirar discusiones críticas sobre la crisis orgánica del Estado, prestando atención a la decisiva participación del elemento militar y la burocracia civil-estatal en las relaciones de fuerza. Sin embargo, dado que es fundamental tener en cuenta las particularidades de la formación histórica, se hizo un esfuerzo permanente para pensar la dinámica de la vida brasileña, a la luz de las inspiraciones de Gramsci.

CRISIS CONTEMPORÁNEA Y CRISIS ORGÁNICA DEL ESTADO: PARTICULARIDADES BRASILEÑAS

Un elemento esencial en las reflexiones de Gramsci y de diferentes *Cuadernos de la cárcel* en el sentido de pensar el Estado y su crisis es precisamente la valoración de las

relaciones de fuerza, identificando aquellas que actúan en una determinada formación histórica, las relaciones entre ellas y cómo se expresan en el Estado, entendido aquí como Estado integral en la relación entre sociedad política y sociedad civil. Este análisis de las relaciones de fuerzas es precisamente un elemento decisivo para comprender la crisis orgánica del Estado.

Específicamente, en el Cuaderno 13, § 17, titulado Análisis de las relaciones de fuerzas, Gramsci afirma textualmente: “Es el problema de las relaciones entre estructura y superestructura el que debe ser planteado y resuelto con precisión, para que pueda lograrse un análisis justo de *las fuerzas que actúan en la historia de un período determinado y determinar la relación entre ellas*.”

De estos apuntes gramscianos se puede deducir que es necesario tener una visión lúcida de la formación social, evaluar las fuerzas actuantes, su nivel de madurez y las relaciones entre ellas, considerando los planos económicos y el político-ideológico. En ese sentido, es fundamental sopesar, precisamente, cómo se mueven las fuerzas en la historia, en términos de la estructura y la superestructura, identificando las fortalezas y debilidades de las clases dominantes y sectores subalternos para asumir la dirección del Estado, en el ejercicio de hegemonía.

Así, a nuestro juicio, la crisis orgánica del Estado brasileño, evidenciada en la segunda década del siglo XXI, más precisamente, a partir de las Manifestaciones de 2013, culminando en el Golpe de Estado de 2016, está íntimamente ligada a la crisis contemporánea brasileña, que materializa, de manera peculiar, las relaciones entre economía y política y que, a su vez, se circunscribe en la geopolítica de la crisis estructural del capital, a nivel mundial. Por tanto, es necesario, como requisito analítico, discutir la crisis de la contemporaneidad brasileña, situando en ella las dimensiones de la crisis de hegemonía.

En rigor, la llamada *crisis brasileña contemporánea* materializa expresiones peculiares de la crisis estructural del capital, revelando nuevas configuraciones del sistema del capital, al enfrentar sus contradicciones, actualizándolas y generando nuevos dilemas en el proceso de acumulación, provocando la precariedad del trabajo y la profundización de la crisis ambiental y sus amenazas a la vida misma en el planeta (Harvey, 2016).

Para aprehender el proceso de la crisis brasileña, es necesario avanzar en el desvelamiento de su naturaleza, dentro de las nuevas dinámicas del capitalismo financierizado, a nivel mundial, en sus infructuosas búsquedas para enfrentar sus contradicciones contemporáneas. De hecho, en la inserción subordinada y dependiente de Brasil en el capitalismo globalizado, se crean procesos de superexplotación del trabajo para sostener los intercambios desiguales, mismos que Ruy Mauro Marini (1973) ya señaló en la década de 1970.

Por lo tanto, es necesario delinear las nuevas configuraciones del capitalismo en el siglo XXI, ubicadas en la base de su crisis contemporánea, para circunscribir las especificidades de esta crisis en el contexto brasileño y sus expresiones en la crisis orgánica del Estado. Este requisito analítico impone la demarcación de elementos de la geopolítica mundial.

La fragmentación política y económica del bloque comunista, en la última década del siglo XX, permitió apalancar las pautas neoliberales en todo el mundo, insertando intensamente a las corporaciones occidentales en regiones que antes escapaban a su control

(Johnson, 2022). Es la ofensiva de la burguesía internacional la que, de hecho, se revela, fortaleciéndose a lo largo de las siguientes décadas.

La segunda década del siglo XXI está marcada por una creciente disputa geopolítica mundial, con amenazas de unipolaridad, asumida por Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría, por el auge económico chino y el paulatino fortalecimiento militar y geopolítico de Rusia durante la última década (Macedo Cintra, Silva Filho, 2015). Tal disputa hegemónica se despliega en procesos que se manifiestan en la división del trabajo y la riqueza entre diferentes países (Mayer, 2018). El desplazamiento de la producción capitalista hacia Asia trae como consecuencia que América Latina reformule su rol eminentemente periférico (Harvey, 2018), en el marco de la reprimarización de la agenda exportadora, como productor de commodities minerales y metálicos.

En el ámbito de la disputa hegemónica, es posible afirmar que “las ideas liberales han avanzado significativamente en el sentido común, incluso fomentando el odio y el exterminio de los diferentes, cuestionando la legitimidad de las organizaciones y concepciones políticas que se basan en la colectividad” (Johnson, 2022, p. 1).

Innegablemente, en este nuevo escenario geopolítico de dominación del mercado, en medio de la inconmensurable expansión del neoliberalismo, las contradicciones del sistema del capital se agudizan, expresándose en una crisis contemporánea. En rigor, la actual crisis económica del sistema del capital es una crisis de sobreproducción y sobre acumulación, agravada por la caída de la tasa de ganancia. En la evaluación de François Chesnais (2017), esta crisis ya se gestaba desde la segunda mitad de la década de 1990, pero su profundización se postergó debido a la fuerte expansión del crédito y la plena incorporación de China a la economía globalizada. Además de la caída de la tasa de ganancia, Chesnais (2017) señala que la crisis resulta de un problema de realización.

En esta dinámica, las inversiones de las empresas no cayeron por la indisponibilidad de recursos en los mercados financieros, ni por el cambio en la participación de utilidades entre utilidades retenidas (y reinvertidas) y dividendos. De hecho, la caída de la inversión productiva se deriva de la caída de la tasa de ganancia y la retracción de las inversiones rentables. A medida que las inversiones productivas se vuelven cada vez menos atractivas, las empresas buscan, a través de sus departamentos financieros, formas alternativas de valorar sus ganancias en el mercado financiero (Williams, Kliman, 2014; Chesnais, 2017).

Por tanto, a medida que disminuye la cantidad de plusvalía, a pesar del aumento de la tasa de explotación, la financiarización se profundiza acumulativamente, con las innovaciones financieras y con el desarrollo del capital ficticio en sus formas contemporáneas. En este proceso, las políticas económicas apuntan, contradictoriamente, a garantizar la expansión del capital ficticio. Este hecho afecta sustancialmente la dinámica del capitalismo, manteniéndolo en una persistente senda de bajo crecimiento.

De esta manera, las finanzas constituyen una enorme máquina de captar y reciclar la plusvalía producida por la explotación del trabajo. Ante este escenario, Chesnais plantea la siguiente pregunta²: La crisis económica mundial de 2007-2008 podría verse simplemente como una gran crisis del capitalismo aún capaz de abrir una nueva y larga

² Esta pregunta la formula Chesnais en un artículo publicado en el sitio web *A l'encontre* (2017), titulado “Le capitalisme at-il rencontré des limites infranchissables?”.

fase de reproducción ampliada del capital, a escala mundial o, por el contrario, ¿sería el comienzo del momento histórico en el que el capitalismo encontraría límites sistémicos infranqueables? La tesis del autor sugiere, entonces, que la crisis actual combina la crisis climática con la crisis del capital. En otras palabras, la automatización y el medio ambiente constituyen barreras estructurales a la reproducción del capital.

Esta crisis afecta principalmente a las víctimas de las políticas de austeridad. ¿Cómo se observa esta dinámica? El agotamiento de las ganancias de productividad en el sector productivo también significa una pérdida de dinamismo para el capitalismo. Y mantener o aumentar la tasa de ganancia requiere una reducción cada vez mayor en el costo de la mano de obra. Esto significa no solo moderación salarial, sino también la retirada del estado de bienestar. Es decir, la salida de la crisis pasa necesariamente por un aumento de la regresión social (Husson, 2017).

Esta crisis estructural del Capital tiene peculiares repercusiones en las diversas formaciones sociales, con repercusiones en el Estado y la sociedad. Existen diferentes expresiones de esta crisis estructural en el contexto de los países avanzados y de los llamados *países periféricos*, dando lugar a configuraciones específicas de la crisis orgánica del Estado.

Vale la pena hacer algunos deslindes sobre las manifestaciones de la crisis en América Latina, en vista de las propias estrategias del capital frente a su crisis estructural. De hecho, a fines de la primera década del siglo XXI y en los umbrales de la segunda, la crisis estructural del capital se desplazó hacia los países dependientes, en particular hacia el continente latinoamericano (Harvey, 2016). Una de las manifestaciones de la expansión de esta crisis a América Latina es, precisamente, la caída de los precios de las materias primas y la retracción de la inversión internacional, pilares del patrón de acumulación entonces vigente. Tal desplazamiento de la crisis estructural provoca tensiones en los Estados nacionales, llevándolos a reconfigurar sus políticas. Es el caso peculiar de Brasil, experimentando las texturas contradictorias de la era del Partido de los Trabajadores (PT), sobre todo, profundizadas bajo el primer mandato de la presidente Dilma Rousseff (2011-2014).

Para configurar las expresiones de la crisis del capital en Brasil, para generar la crisis orgánica del Estado, es necesario hacer un retroceso histórico al proceso de ajuste brasileño al capitalismo financiarizado. En rigor, al adherirse de manera intensiva y subordinada a la Agenda de Washington, en el umbral de la década de 1990, en lo que se refiere a la apertura irrestricta de la economía, desregulaciones, privatizaciones, Brasil vivió un contexto de desindustrialización, desmantelamiento de su estructura industrial, constituida en el período nacional desarrollista. Tal desmantelamiento se da en medio de la entrada masiva de productos importados, especialmente de China, gracias a la reducción de las barreras aduaneras, con la amplia apertura de la economía nacional.

En Brasil, el aumento del poder de las finanzas resulta, en gran parte, de la crisis del modelo de industrialización, basado en el voluntarismo estatal. Las crisis sistemáticas ocurridas en el país, en la última década del siglo XX y la primera del XXI, tienen su origen ligado a la lógica misma del proceso de financiarización y revelan la recurrente inestabilidad en busca de los buenos desempeños obtenidos en términos de estabilidad

monetaria. Estas crisis expresan las contradicciones de una lógica liberal llevada al extremo.

A lo largo de la llamada *experiencia brasileña de inserción en los circuitos de la globalización con dominio financiero*, Brasil, en sus diferentes ciclos de ajuste³, desde mediados de la década de 1990, especialmente en la Era Fernando Henrique Cardoso (FHC) –en los dos períodos de su gobierno (1995–1998 y 1999–2002)– viene desarrollando un modelo denominado *rentista-neoextractivista*, resultado de la articulación del capital financiero con capital vinculado al neoextractivismo, más específicamente, al agronegocio y la minería (Carvalho, Milanez, *patrón exportador de especialización productiva* (Guerra, 2018). Según Osorio (2012), en América Latina, la constitución de dicho patrón está ligada a la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados y la precariedad general de las condiciones de trabajo. El mercado asalariado local no es un elemento dinamizador de este patrón de reproducción del capital, dado que gran parte de la producción se destina a los mercados externos. Sin embargo, en el caso brasileño se perciben rasgos diferentes del modelo general preconizado para América Latina. Así lo afirman Américo Moreira y Mathias Sebag (2014: 94–95) en sus análisis:

El doble proceso de reprimarización/desindustrialización en Brasil no está asociado a la falta de dinamismo del mercado interno de asalariados. De hecho, en los últimos años, varios factores han contribuido a la expansión de este segmento de la demanda interna [...]. En los períodos de gobiernos encabezados por el PT, se puede observar una política de valorización del salario mínimo, aumento del empleo y expansión del crédito a los individuos.

De hecho, considerando las especificidades brasileñas, el escenario de crisis ha afectado significativamente el patrón de ajuste brasileño, llegando a las bases del modelo rentista-neoextractivista, que expresa la lógica de la acumulación capitalista, en la condición de país dependiente y periférico. Así, en las últimas décadas, la consolidación de la economía en el capitalismo financiarizado en Brasil deriva del proceso de apertura comercial

³ En un proceso de estudios e investigaciones, a lo largo de la década de 2000, Alba Carvalho (Universidad Federal de Ceará) y Eliana Guerra (Universidad Federal de Rio Grande do Norte) buscaron penetrar sistemáticamente los caminos del Ajuste Brasileño al capitalismo financiarizado. Se trata de una investigación abierta y en curso en la que Carvalho y Guerra categorizan 7 (siete) ciclos de ajuste, en los últimos 31 (treinta y un) años de la historia económica y sociopolítica brasileña contemporánea: ciclo de adhesión al Consenso de Washington y apertura irrestricta de la economía (Gobierno de Collor de Mello –1990 a diciembre de 1992); ciclo de estabilización económica (Itamar Franco –diciembre de 1992 a 1994– y las dos administraciones de Fernando Henrique Cardoso –1995 a 2002); ciclo de consolidación de las políticas de ajuste y reconstrucción del mercado de consumo masivo interno (primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva –2003 a 2006– y la primera mitad de su segundo gobierno –2007 a 2008); ciclo de articulación de políticas de ajuste y neodesarrollismo (segunda mitad del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva –2008 a 2010– y primer gobierno de Dilma Rousseff –2011 a 2014); ciclo de intentos de recrudescer la ortodoxia rentista en un ajuste a la derecha (segundo gobierno de Dilma Rousseff –2015 a 2016– mandato interrumpido por juicio político); ciclo de profundización del Estado Ajustador y contrarreformas neoliberales (gobierno de Michel Temer – mayo 2016 a 2018), generando regresión social; ciclo de articulación del ultraliberalismo, militarismo y reaccionario político-cultural (gobierno de Jair Bolsonaro –2019 hasta hoy), configurando el llamado bolsonarismo. (Regresar a estos Ciclos de Ajuste de la experiencia brasileña: Carvalho; Milanez; Guerra, 2018; Carvalho, 2022).

y financiera, así como de políticas monetarias y fiscales ortodoxas, orientadas a la estabilidad de la economía, con control de la inflación. Adicionalmente, las reformas estructurales ocurridas en el sistema financiero han garantizado beneficios y concesiones fiscales al capital rentista, siendo igualmente decisivas en este movimiento de transformación de Brasil en una plataforma de valorización del capital financiero (Américo Moreira, Sherer, 2022; Paulani, 2012; Salama, 2011).

Así, en su inserción en el capitalismo financierizado, Brasil desarrolla una doble independencia: por un lado, se convierte en una plataforma de acumulación financiera, con pagos de intereses exorbitantes al capital especulativo, que en su curso en el contexto brasileño, nada suma a nuestra economía; y, por otro lado, el país vuelve a ser exportador de materias primas agrícolas y minerales, compradas, sobre todo, por China, emergiendo como centro del capitalismo (Paulani, 2012). Por lo tanto, cuestiones geopolíticas relacionadas con el desplazamiento de la crisis estructural del capital, llegando a China, están en la base de la crisis brasileña contemporánea.

En los primeros ciclos de ajuste (Carvalho, Guerra, 2015), la lógica de la política de estabilización, basada en un crecimiento sustancial de las tasas de interés reales, fue crucial para la apreciación de la moneda nacional. En la década de 1990, la combinación de altas tasas de interés y un tipo de cambio apreciado fue decisiva para la afirmación del modelo rentista-neoextractivista, ya que se consolidó un patrón exportador de especialización, basado en commodities metálicos y agrícolas. El proceso de regresión cualitativa de la inserción internacional de Brasil refleja la pérdida de competitividad de la industria brasileña, así como una transformación del comercio, hacia la reprimarización de las exportaciones. Esta dinámica comprometió el peso del sector industrial en el Producto Interno Bruto (PIB), dando lugar a un proceso de desindustrialización. Es más, también vale la pena señalar el papel decisivo de las empresas multinacionales en este proceso concomitante de desindustrialización y reprimarización que marcó el ajuste brasileño al capitalismo globalizado con dominio financiero. De hecho, las firmas extranjeras contribuyeron decisivamente a este proceso de creciente desvinculación de la acumulación productiva, en la medida en que sus opciones de gestión continuaron priorizando la supresión de actividades consideradas no competitivas, con ramas productivas inmersas en una lógica de producción mínima y aumento del coeficiente de importación (Américo Moreira; Tavares, 2013; Américo Moreira, 2022).

Es innegable que los diferentes ciclos de ajuste brasileños, en la implementación del modelo rentista-neoextractivista, presentan características e inflexiones propias, en consonancia con la dinámica macroeconómica internacional, revelando formas peculiares de dependencia. En particular, en los ciclos de ajuste en el ámbito de la Era PT (2003-2015), la implementación de ese Modelo, apoyado en el intento de “conciliar clases”, permitió una expansión del mercado interno brasileño nunca antes ocurrida, no incluso en el nacional-desarrollista. En ese escenario, cobran importancia las políticas de combate a la pobreza, con la ascensión social de segmentos de la clase trabajadora, a través del consumo, resultando en una reducción de los índices de pobreza y la salida de Brasil del Mapa del Hambre.

Al mismo tiempo, la existencia de una demanda interna creciente fue el gran activo de la economía brasileña en el contexto de la crisis financiera mundial, que se intensificó

a finales de 2008. Así, ante el escenario de lenta recuperación de los países avanzados, las economías emergentes como Brasil continuaron registrando un crecimiento por encima del promedio mundial. En efecto, el dinamismo del mercado interno se benefició, en gran parte, de las políticas expansivas en los ámbitos fiscal y monetario. En el caso brasileño, esto se evidenció tanto por la expansión y facilitación del crédito al consumo, como por la extensión de los plazos de financiamiento, en particular, para bienes de consumo duraderos, actuando como una especie de mecanismo “compensatorio” de las altas tasas de interés en el país.

Paradójicamente, en la Era del PT, el crecimiento económico parece intensificar el proceso de fragilidad financiera de la economía brasileña, acentuando sus desequilibrios macroeconómicos, a través de dos procesos. El primero está asociado a la continuación de la expansión de la deuda interna pública brasileña, debido al mantenimiento de las tasas de interés reales en niveles extremadamente altos. El segundo está relacionado con una mayor vulnerabilidad externa. La sobrevaluación de la moneda nacional, resultante, en parte, de las altas tasas de interés reales, ha generado una entrada externa de capitales especulativos, alimentando la oferta interna de dólares. En su momento, esta situación perjudicó el desempeño de las cuentas corrientes, ampliando, en algunos segmentos, el proceso de sustitución de la producción local por importaciones (Américo Moreira, Tavares, 2013).

En la primera mitad de la segunda década del siglo XXI, en un escenario internacional desfavorable, especialmente con cambios en la posición de China, se produjo una caída en los precios de las materias primas –uno de los pilares del modelo rentista-neoextractivista– que se tradujo en una pérdida de cuentas públicas de equilibrio, con una reducción del superávit primario. Esto comprometió la capacidad del Estado para otorgar incentivos fiscales al sector productivo y, al mismo tiempo, para mantener y ampliar las políticas de combate a la pobreza. Por lo tanto, uno de los factores determinantes de la crisis económica brasileña, agravada en 2015, está relacionado con la reversión del ciclo alto de los commodities metálicos y agrícolas. El modelo económico brasileño, fuertemente anclado en las ventas internacionales, sobre todo de sus productos de base agrícola y mineral, se había erigido en detrimento del fortalecimiento de la estructura industrial. Así, la caída del crecimiento chino y la caída de los precios de las materias primas afectaron sustancialmente las bases del modelo rentista-neoextractivista brasileño. En este contexto, ante el deterioro de los ingresos tributarios, la caída del gasto social es efectiva, poniendo en jaque el liberalismo social al estilo brasileño, asumido en los gobiernos del PT de Lula y Dilma.

En este sentido, es necesario establecer algunas demarcaciones históricas. Las llamadas *Jornadas de junio de 2013*⁴ expresaron un descontento difuso, multivocal y polisémico

⁴ Las llamadas *Jornadas de junio de 2013* comenzaron con una protesta organizada por el Movimento Passe Livre (MPL) contra el aumento de las tarifas de los autobuses en São Paulo, reuniendo a unas 5000 personas. Esta primera protesta, que tuvo lugar el 13 de junio, fue brutalmente reprimida por la Policía Militar, generando una ola de repudio en todo el país. Las manifestaciones, hasta entonces restringidas a unas pocas capitales, se extendieron a más de 40 ciudades. La amplia repercusión de las protestas provocó una inflexión decisiva en la forma en que los monopolios mediáticos y los políticos tradicionales retrataban las manifestaciones, produciendo una profunda disputa por la dirección política de las Jornadas. Junto a las demandas de educación, salud y transporte, se insertó de manera destacada una lucha abstracta contra la corrupción, criminalizando a los partidos y movimientos de izquierda.

con las políticas de ajuste brasileñas, el que podría ser inscrito en las huellas de los movimientos internacionales de “indignación”⁵ contrario a las políticas de globalización económica neoliberal con diferente(s) campo(s) político(s), repertorios de demandas y valores ideológicos de sus integrantes. Se constituye en una forma peculiar de movilizaciones y manifestaciones en las calles, en una especie de encarnación tardía de los movimientos globales e indignados, que marcaron los primeros años del siglo XXI (2010), en varios países de Oriente y Occidente, para adquirir contornos específicos en Brasil (especialmente a partir de 2013)⁶, con sus contrastes, diferencias y sus consecuencias en relación con la crisis de hegemonía que entonces atravesaba el país.

De hecho, el gobierno del PT de Dilma Rousseff y sus fuerzas de apoyo fueron incapaces de construir una respuesta política a la altura de tales manifestaciones. El Partido de la Socialdemocracia Brasileña, PSDB, visto entonces como el principal opositor del gobierno del PT, tampoco presentó propuestas adecuadas a estas crecientes protestas en la sociedad, al no apropiarse del difuso descontento que impregnaba la vida brasileña. Así, este vacío de liderazgo político e insatisfacción difusa había sido progresivamente apropiado por fuerzas (neo)conservadoras, ya visibles durante las administraciones de Lula y ampliadas a partir de 2013, para configurar la llamada “nueva derecha” brasileña: concomitantemente liberal y conservadora, defendiendo el libre mercado, el antiestatismo y el neoliberalismo (Gohn, 2019). En rigor, estalló una crisis de hegemonía en Brasil.

Innegablemente, el conjunto de estos fenómenos socioeconómicos y político-culturales revelan el proceso de agotamiento de la versión PT del modelo de ajuste rentista extractivista, debilitando el bloque de poder. Es una situación extrema, que contribuye a la erosión de las condiciones objetivas del pacto de clases, que caracterizó la Era del PT. En estos tiempos de crisis, para mantener sus niveles de ganancia y acumulación, las élites burguesas rompen el llamado *pacto de clases* con el gobierno del PT, articulando y desencadenando un golpe de Estado, con la deposición de la presidenta Dilma Rousseff, elegida democráticamente, sin las debidas razones legales, en una clara expresión del fenómeno de “judicialización de la política y politización de la justicia” (Galvão, 2020). En este escenario, se profundiza la crisis política, con repercusiones en la crisis orgánica del Estado.

Dentro de la sociedad, la llamada *Operación Lava Jato*⁷ exacerbó un proceso de erosión de las instituciones democráticas y de las fuerzas de izquierda, apoyadas en la tra-

⁵ Se trata del proceso de internacionalización de los movimientos y protestas de indignación frente a la crisis del capitalismo globalizado en 2008, con la fuerte reanudación de las manifestaciones en las calles, espacio público por excelencia de estas acciones contestatarias de los llamados indignados, con mayor énfasis en la “Primavera Árabe” (Medio Oriente), el movimiento *Occupy* (EE.UU.), “Je suis Charlie” (Francia, 2016), “Chalecos Amarillos” (Francia, 2018-2019), entre otras protestas globales, Véase Gohn (2019, 2022).

⁶ La caracterización de este ciclo de manifestaciones y protestas callejeras en Brasil a partir de 2013 será explicada en el siguiente punto de este artículo. Para una discusión más detallada, consulte Gohn (2019, 2022).

⁷ La Operación Lava Jato resultó de una investigación, iniciada en marzo de 2014, por el Ministerio Público Federal de Curitiba, para investigar denuncias de corrupción que involucran a cambistas, empresarios y políticos. El nombre “Lava Jato” se debió a que la investigación se originó por denuncias de

dicional “cruzada de enfrentamiento a la corrupción” en el aparato estatal. Los Media Mainstream interfirieron decisivamente en el proceso de deslegitimación de la política y, en particular, de las fuerzas de izquierda. Así, se afirma con fuerza la crisis brasileña contemporánea, expresando la crisis orgánica del Estado. En este escenario, las fuerzas tradicionales de izquierda y derecha, más específicamente, el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), son incapaces de articular una alternativa capaz de construir un proceso de hegemonía. Es la crisis de representación la que abre espacio para una articulación de la derecha, con énfasis en las fuerzas ultraconservadoras, presentes en la sociedad política y en la sociedad civil.

En el período 2013-2015, la crisis brasileña contemporánea se agudiza y se complejiza, alternando bajo crecimiento y recesión, con claras expresiones en la vida social: desempleo, trabajo precario, aumento de la pobreza y la miseria. El impacto de la crisis del capital, que repercutió en China, alcanzó los cimientos del modelo rentista-neoextractivista vigente en el país, creando condiciones objetivas para el surgimiento de la crisis contemporánea en el ámbito económico y político. De hecho, en medio de convulsiones en el plano económico, comprometiendo los intereses inmediatos del segmento financiero y del segmento vinculado al neoextractivismo, se desató una fuerte crisis política, socavando las bases de apoyo del gobierno del PT en el Congreso. Además, el antiPTismo, generalizado en la sociedad, especialmente en los procesos de la Operación Lava Jato, es un elemento decisivo en la crisis orgánica del Estado. De hecho, se trata de una crisis de hegemonía, constituyendo el terreno histórico para un nuevo tipo de golpe: el golpe de 2016, definido como golpe parlamentario-legal-mediático.

En nuestra opinión, a mediados de la segunda década del siglo XXI, la crisis brasileña contemporánea, como crisis económica y crisis política esencialmente entrelazadas, está en la base del fenómeno de la crisis orgánica del Estado, abriendo espacios para soluciones autoritarias, encarnadas en la sociedad. El denominado *Gobierno ilegítimo de Temer* y luego, en el gobierno de Bolsonaro, como un “gobierno civil” elegido democráticamente, que fue asumiendo un carácter militar, tienen rasgos que nos recuerdan las apreciaciones de Gramsci, en el Cuaderno 13 § 23.

corrupción realizadas en una gasolinera. El apoyo popular a la lucha contra la corrupción, emprendida por Lava Jato, convirtió en persecución lo que debería haber sido una investigación policial, marcada por la selectividad y el maniqueísmo contra la izquierda política, representada en el Partido de los Trabajadores y sus dirigentes. La operación demostró ser un instrumento eficaz para superponer el poder legal al poder político del Estado. Así, a través del activismo político judicial, la Operación Lava Jato criminalizó la política y los políticos, contribuyendo decisivamente a la implosión del pacto político-partidista construido en el proceso de redemocratización brasileña en la década de 1980 y confirmado por la Constitución Federal de 1988, abriendo un vacío en el sistema político que contribuyó en gran medida a la elección de Jair Messias Bolsonaro a la presidencia de la República, marcando la historia brasileña con su conservadurismo ultraderechista, su autoritarismo y con ataques permanentes a la democracia.

CRISIS ORGÁNICA DEL ESTADO BRASILEÑO: DISPUTAS EN / POR LA SOCIEDAD CIVIL

Comprender la crisis orgánica del Estado brasileño como crisis de hegemonía exige una evaluación de las relaciones de fuerzas, identificando las que actúan en la formación social brasileña, los lazos entre ellas y cómo la crisis se expresa en el Estado Integral. Nuestro enfoque analítico se centra en este fenómeno en la contemporaneidad brasileña, es decir, en los últimos 40 años, destacando la confluencia entre democratización y ajuste, a partir de la década de 1990.

En rigor, la crisis orgánica del Estado brasileño revela la debilidad de las fuerzas sociales para colocarse como conductoras de un proyecto de país, dentro de un equilibrio de fuerzas, en el que las masas dominantes y subalternas son incapaces de expresar una voluntad reconstructiva. Esta situación se da, con matices, en distintos momentos de la vida del país. De manera peculiar, esta crisis orgánica del Estado viene desplegándose en el ámbito de la crisis brasileña contemporánea, desde los primeros años de la segunda década del siglo XXI, agudizándose en el Brasil del Presente⁸, gestada en los últimos seis años (2016-2022).

La actual crisis orgánica del Estado tiene raíces históricas que, para ser desentrañadas, es necesario considerarlas en el largo, mediano y corto plazo. En el largo plazo, remiten a las particularidades de la formación social brasileña, en el marco del colonialismo y la colonialidad⁹, las relaciones de subordinación en el ámbito del capitalismo mercantil y la

⁸ Configuramos el período histórico de los últimos seis años (2016-2022) como el Brasil del Presente, tomando como hito histórico el Golpe de Estado de 2016, desencadenando reconfiguraciones en el Estado brasileño, materializadas en políticas ultraliberales, autoritarismo, desmantelamiento de la protección social, resurgimiento de la pobreza y miseria y ello bajo un ambiente político-cultural reaccionario.

⁹ Según Maldonado-Torres (2018), es fundamental considerar las distinciones entre *colonialismo*, *colonialismo moderno* y *colonialidad* para comprender mejor sus rasgos en la formación sociohistórica brasileña y en las prácticas sociales contemporáneas. En términos de colonialismo, el autor lo define como “la formación histórica de los territorios coloniales”, considerando el primer período histórico y empírico de la expansión económica mercantilista y los “descubrimientos del Nuevo Mundo”. Destacan las grandes navegaciones europeas del siglo XIV al XVI, con foco en los imperios occidentales de España y Portugal y el “descubrimiento” –léase invasión y saqueo– del “Nuevo Mundo” denominado “Américas” por los colonizadores europeos. Este proceso continuó con el ascenso de Inglaterra y Francia en términos geopolíticos, especialmente en el siglo XVIII con su proyecto de “civilización ilustrada”, expandiendo la colonización a Asia/África, así como a los EE.UU., configurando tiempos de conquistas/invasiones, expropiación de tierras y recursos/genocidios y epistemicidios (Santos, 2021) de territorios convertidos en colonias y pueblos/sus culturas supuestamente colonizados. Se consolidó la figura del “colonizado” como “condenado de la tierra”, en palabras de Franz Fanon (1968), a quien se le impuso un proyecto eurocéntrico de universalización y civilización. El colonialismo moderno corresponde así a las “formas específicas en que los imperios occidentales colonizaron la mayor parte del mundo desde el ‘descubrimiento’” (Maldonado-Torres, 2018, p. 35) y las formas relacionadas de esclavización/racismos resultantes de ellos. La colonialidad, en cambio, preocupa, subraya el autor, “una lógica global de deshumanización que es capaz de existir incluso en ausencia de colonias formales” (Maldonado-Torres, 2018, p. 36), también reconocida como “modernidad/colonialidad, una forma más compleja de abordar también la modernidad occidental” y evocar sus efectos materiales, epistémicos y simbólicos. Así, la lógica de la colonialidad se problematiza, en términos de Maldonado-Torres (2018), en tres componen-

inserción tardía en el capitalismo industrial. La formación social brasileña se caracteriza por problemas estructurales de dependencia, esclavitud¹⁰ y racismo¹¹, sobreexplotación

tes fundantes y relacionados de la modernidad/colonialidad, expresando las colonialidades del poder, el saber/epistemología y el ser. Para más detalles, ver Bernardino-Costa; Maldonado-Torres; Gosfoguel (2018), una forma más compleja de abordar también la modernidad occidental” y evocar sus efectos materiales, epistémicos y simbólicos.

¹⁰ En el ámbito de la interpretación crítica de Souza (2017, p. 9), “la experiencia de la esclavitud” en el país –ahora reconocida como esclavización de la población negra y de los pueblos originarios– se traduce en “semilla de toda sociabilidad brasileña”, para explicar su carácter desigual, jerárquico, excluyente y perverso en relación a la figura del “otro de lo social”. Sociabilidad sustentada en el aspecto fundante en la producción de racismo(s): “la separación ontológica entre seres humanos de primera y seres humanos de segunda. Vamos a utilizar el término racismo –dice el autor– no solo en el sentido más restringido de prejuicio fenotípico o racial. También lo usaremos para otras formas de jerarquizar individuos, clases y países siempre que se aplique el mismo procedimiento y la misma función de legitimar una distinción ontológica entre seres humanos. Después de todo, estas jerarquías existen para servir como un equivalente funcional del racismo fenotípico, realizando el mismo trabajo de legitimar pre-reflexivamente la supuesta superioridad innata de unos y la supuesta inferioridad innata de otros” (Souza, 2017, p. 9; 18; énfasis añadido). Cabe señalar que esta perspectiva del “racismo” encuentra sus raíces históricas en el colonialismo moderno impulsado al “Nuevo Mundo”, para incluir la experiencia brasileña, aunque no se agota ahí. En su crítica a las “interpretaciones dominantes” consagradas de la historia brasileña, Souza (2017) buscó, entre otros ejes de su análisis, deconstruir lo que llamó *culturalismo racista conservador* y su influencia en el presente.

¹¹ En este texto se adopta la perspectiva estructural del racismo, en los términos desarrollados por Almeida (2018), esto es, como parte de un orden social y/o componente orgánico de la estructura social, para ser desplegado en procesos políticos (en dimensiones institucionales e ideológicas) e históricas (relacionadas con las particularidades de cada formación social). Así, la dinámica estructural del racismo se involucra y se (re)produce en las relaciones políticas, económicas, jurídicas, sociales/familiares/cotidianas, asumiendo las particularidades de cada formación social. Dice el autor: “el racismo es una forma sistemática de discriminación que tiene como fundamento la raza, y que se manifiesta a través de prácticas conscientes o inconscientes que culminan en desventajas o privilegios para los individuos, según el grupo social al que pertenece” (Almeida, 2018, p. 25). Comprender el racismo estructural –proceso sistémico de discriminación racial– implica, por tanto, reconocer la *raza* como un concepto político, relacional e histórico, con miras a aprehender sus significados ligados a las circunstancias históricas de su uso. Desde esta perspectiva, cabe señalar el uso específico de la idea de raza ligada a la expansión económica del capitalismo mercantil y al “descubrimiento” del “Nuevo Mundo” –llamado *Américas*, a mediados del siglo XVI– y a lo largo de los siglos XVIII y XIX, cuando el Proyecto Liberal-Ilustrado de la modernidad/colonialismo y las tecnologías del colonialismo europeo se impulsaron y expandieron también a los territorios de África, Asia y Oceanía. El proyecto colonialista de universalización eurocéntrica implicó la clasificación de los seres humanos desde la perspectiva de la “civilización europea” frente a otros pueblos y culturas con sistemas culturales diferentes a los europeos/modernos, configurando dualidades entre “civilizados” (cogito ego moderno/razón universal) y “primitivos/salvajes” (la figura del deshumanizado y/o animalizado/bestializado del otro). En estos términos, la noción de *raza* fue (y sigue siendo) utilizada para operar clasificaciones entre los seres humanos, naturalizar desigualdades y justificar la violencia contra aquellos grupos designados como “inferiores y/o inhumanos”. Según Almeida (2018, p. 24): “por su conformación histórica, la raza opera a partir de dos registros básicos que se entrecruzan y complementan: 1) como característica biológica, en el que la identidad racial será atribuida por algún rasgo físico; 2) como característica étnico-cultural, en la que la identidad racial estará asociada al origen geográfico, la religión, la lengua, las costumbres”. Los modos de clasificación racial y las dinámicas estructurales del racismo están vinculados a las particularidades de

del trabajo, desigualdades sociorraciales y de género/patriarcado, violencias de todo tipo, negación de la ciudadanía a amplios sectores de la población, debilitamiento de la construcción del Estado y de la nación.

En el mediano plazo, tomando como referencia la década de 1930 del siglo XX, período considerado un hito en el desarrollo del capitalismo brasileño, las raíces de la crisis del Estado se encuentran en la construcción incompleta de la propia democracia liberal, atravesada por golpes e intentos de golpe de Estado (Pino, 2016)¹². La formación social brasileña ha sido permeada por revoluciones pasivas¹³, en términos gramscianos. De hecho, la democracia en Brasil está permeada por dictaduras y con una fuerte presencia de autoritarismo en las texturas sociopolíticas del Estado. Carlos Nelson Coutinho, en una producción de referencia sobre el Estado brasileño, publicada en 2008, lo configura así:

[...] Brasil se caracterizó hasta hace poco por la presencia de un Estado autoritario extremadamente fuerte, en oposición a una sociedad civil débil, primitiva, amorfa. Basándose en categorías weberianas, Raymundo Faoro mostró cómo este autoritarismo tiene su origen en la burocracia patrimonialista portuguesa, a través de la cual fuimos colonizados, pero cuyos rasgos más característicos permanecieron en el Brasil independiente (Faoro, 1976). Sin negar la importancia del análisis de Faoro, prefiero hacer uso de las categorías de Antonio Gramsci: a partir de la distinción entre Oriente y Occidente establecida por él, diría que Brasil fue, al menos hasta la década de 1930, una formación política social de ‘tipo oriental’, en que el Estado lo es todo y la sociedad civil es primitiva y gelatinosa (Recordemos que, para el pensador italiano, Occidente se caracteriza por una ‘relación equilibrada entre el Estado y la sociedad civil’) (Coutinho, 2008, p. 107).

cada formación social, exigiendo una mirada atenta a sus configuraciones en Brasil, donde predomina el “racismo de marca”, ya que se centra en la apariencia física de los afrodescendientes (fenotipo) acorde con la pertenencia a la clase expresiva en capacidad de consumo y circulación social (Almeida, 2018).

¹² La historia política de la República Brasileña está marcada por sucesivos golpes de Estado. De hecho, la República fue instituida por un golpe de estado que puso fin al régimen monárquico en Brasil, llevado a cabo por los militares, el 5 de noviembre de 1889. La llamada *República Vieja*, instituida por el golpe de 1889, es, ella misma, depuesta por otro golpe de estado en 1930, para llevar al poder a Getúlio Vargas. El mismo Vargas, en vísperas de las elecciones presidenciales de 1938, dio un nuevo golpe de Estado y permaneció en el poder hasta 1945, cuando fue depuesto por un golpe militar, entregando el poder ejecutivo al presidente del Supremo Tribunal Federal. Según Alfred Stepan (1975), en el período de 1945 a 1964 hubo un crecimiento del activismo militar, asumiendo un papel de árbitro o moderador del poder. El autor afirma: “Hubo movimientos militares en 1945, 1954, 1955, 1961 y 1964, un intento fallido en 1961 y otro movimiento en 1955, que precipitó un contramovimiento en defensa de las autoridades constitucionales” (p. 66). Stepan (1975) demarca como característica llamativa de los movimientos militares y sus intentonas de golpe, en el período de 1945 a 1964, el hecho de que se produjeron cuando las élites políticas expusieron dudas sobre el derecho o la legitimidad del ejecutivo para mantener o asumir el poder (Stepan, 1975, p. 66).

¹³ El concepto de *Revolución Pasiva* en los *Cuadernos de la Cárcel*, de Antonio Gramsci, consiste en la reconstrucción de los diferentes matices que tiene la noción en el pensamiento de otro autor, (Vincenzo Cuoco en su *Saggio storico sulla rivoluzione napoletana – 1801*) y luego reelaborado y enriquecido, va adquiriendo otro significado, “un poco diferente al de Cuoco”, como diría Gramsci. Este es un concepto central para entender el ‘proyecto’ de los *Cuadernos* y el pensamiento de Gramsci.

En la historia política contemporánea del país, merece mención especial el Golpe Cívico-Militar del período de 1964 a 1985. Según Florestan Fernandes (2006), en Brasil, el período dictatorial configuró una “contrarrevolución burguesa preventiva”. Es decir, la debilidad estructural de la burguesía brasileña y su incapacidad para promover un capitalismo nacional la hizo optar por una alternativa burguesa autocrática. En este interregno, el gobierno militar se caracterizó por dos vías fundamentales. En el primero, adoptó una política económica basada en la internacionalización de la economía nacional, presumiendo de una legislación sociolaboral anfitriona de la sobreexplotación laboral en el país. En la segunda vía, implementó un régimen político-militar de excepción, basado en la persecución y combate de todos los movimientos de carácter popular, que se han intensificado en el país desde mediados de la década de 1950 (Porto, 2022). Es un momento de suspensión de los derechos civiles y políticos, con el quiebre de las instituciones democráticas. El proyecto de país de la Dictadura Militar, con un supuesto sesgo nacionalista y patriótico, radicaliza la penetración de capital extranjero para financiar su proyecto desarrollista. De hecho, para asegurar la expansión/consolidación del parque industrial brasileño, los gobiernos dictatoriales, en la década de 1970, contrajeron una deuda externa a tasas de interés flotantes, que creció exponencialmente con la globalización del capital y la financiarización de la economía con un supuesto sesgo nacionalista y patriótico, radicaliza la penetración de capital extranjero para financiar su proyecto desarrollista.

Luego de 21 años de dictadura cívico-militar, presionados por fuerzas progresistas y democráticas, los militares iniciaron un proceso de apertura política, denominado “lento y paulatino”, a través del cual transfirieron el poder a los civiles, manteniendo intactos los intereses de la burguesía. En este proceso de “debacle” de la Dictadura Cívico-Militar, se emprendió una amnistía amplia, general e irrestricta.¹⁴ Esta amnistía se extendió a los militares, incluidos los torturadores, manteniendo en la impunidad a los agentes del poder dictatorial que cometieron crímenes atroces, dejando rezagos de la Dictadura Cívico-Militar en la estructura del Estado. Esta es una de las dimensiones de la incompletitud de la democracia brasileña, con repercusiones en el Brasil del presente, con la extrema derecha apoyando el retorno del Régimen Militar y sus mecanismos de represión, violadores de los Derechos Humanos.

Vale la pena mencionar, específicamente, la mitad de la década de 1970 y la de 1980, como momentos de efervescencia de la lucha política en la construcción de la democracia brasileña, con el surgimiento de una sociedad civil plural, marcada por la fuerza de los Movimientos Sindicalistas y de los Nuevos Movimientos Sociales, en defensa de la implementación de una cultura de derechos, plasmada en la Constitución Federal de 1988, la denominada *Constitución Ciudadana*. Cabe destacar que la dimensión de ciudadanía, redefinida y reapropiada por los movimientos sociales de la época, incorporó:

¹⁴ En 2008, la Asociación de Abogados de Brasil (OAB) solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) que excluyera del ámbito de aplicación de la Ley de Amnistía los delitos comunes cometidos por agentes de represión contra opositores políticos durante el Régimen Militar. Este artículo, en su momento, fue controvertido y no fue aceptado, dejando un legado que todavía hoy marca la cultura política brasileña.

[...] las características de las sociedades contemporáneas, como el papel que se le da a la subjetividad, el surgimiento de nuevos sujetos sociales, sujetos de un nuevo tipo, mujeres, negros, homosexuales, etc., el surgimiento de nuevos temas y de nuevos derechos traídos por los movimientos sociales y la ampliación del espacio de la política (Dagnino, 2004, p. 2).

En este contexto de democratización, se instituye un Partido nacido de las luchas sindicales: el Partido de los Trabajadores¹⁵, cuya actuación, con diferentes matices, impregna la contemporaneidad brasileña, en las últimas cinco décadas (1980-2023). Para Meneguello (2003), el PT, como originario de los movimientos sindicales y sociales, contrario a la dictadura civil, militar y empresarial (1964-1985), surgida a partir de fines de la década de 1960, construyó una dura crítica a las visiones y prácticas de la izquierda tradicional, en cuanto a “[...] las bases del instrumentalismo y la vanguardia [...] que los llevaron a romper con la tradición de los grupos de izquierda de generaciones anteriores” (Meneguello, 2003, p. 42). Las principales organizaciones de la izquierda brasileña, en ese momento, eran el Partido Comunista Brasileño (PCB) y el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) (Maciel, 2022).

En toda esta construcción democrática, una figura política merece especial mención: Ulisses Guimarães, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, uno de los principales artífices de la *Constitución* de 1988, parece presagiar lo que sucedería cuatro décadas después con el Golpe de Estado de 2016:

La *Constitución* ciertamente no es perfecta [...]. En cuanto a ella, discordar, de acuerdo. Divergir, sí. **Descumplirla, Nunca. Afrontarla, nunca. Un traidor a la Constitución es un traidor a la Patria.** Conocemos el maldito camino. Romper la *Constitución*, cerrar con llave las puertas del Parlamento, garrotear la libertad, enviar a los patriotas a la cárcel, al exilio y al cementerio. [...]. **Odiamos la Dictadura. Odio y repugnancia.** (Discurso de Ulisses Guimarães, 5 de octubre de 1988. Asamblea Nacional Constituyente. Énfasis añadido).

El proceso de redemocratización, instaurado en Brasil a mediados de las décadas de 1970 y 1980, también se puede caracterizar como una democracia inconclusa, desde la última década del siglo XX en adelante (Dagnino, 2004). De hecho, el proceso de democratización más reciente, de fines de la década de 1970 y 1980, confluyó, en 1990, con los procesos de ajuste y restricción del Estado democrático de derecho. Es la contemporaneidad brasileña, tal como la define Alba Carvalho:

¹⁵ El Partido de los Trabajadores (PT) salió del plan de intenciones para ser de hecho una organización nacional, el 10 de febrero de 1980, en el Colégio Sion, en São Paulo. En el marco de las posibilidades formales creadas por el régimen militar con la reforma partidaria de 1979, el partido se construyó, inicialmente, proponiendo la superación de las prácticas sindicales, partidarias e ideológicas vigentes en el periodo. Las resoluciones partidarias, aprobadas durante la fundación del PT y que explicaban sus concepciones programáticas iniciales, fueron el Manifiesto, el Estatuto del PT, el Programa y el Plan de Acción. Estos documentos subrayaban la necesidad de que la clase obrera interviniera en la vida social y política del país, con el fin de transformarlo, pues era “[...] cansado servir como masa de maniobra de políticos y partidos comprometidos con el mantenimiento del actual orden económico, social y político” (Manifiesto, 1980). Para un análisis político de estos documentos fundacionales del PT, véase el texto de Elda Maciel, de 2022, titulado: *El Proyecto PT para Brasil entre la intención programática y el mundo real*.

[...] comienza con la debacle de la Dictadura Cívico-Militar de 1964 y, en consecuencia, con los procesos de democratización, con un auge en la década de 1980, época histórica marcada por las luchas por la afirmación de los derechos civiles, políticos y sociales, trayendo a escena nuevos sujetos políticos, organizados en colectivos y movimientos sociales de diferentes perfiles. Es la articulación de una sociedad civil fuerte, plural, permeada por las expresiones de las fuerzas sociales, articulada a partir de banderas específicas, siempre en el horizonte de la construcción de la democracia. [...] En el ámbito de los caminos de la democratización, Brasil, en 1990, desencadena su proceso de inserción en el capitalismo financiarizado, configurando la experiencia brasileña de Ajuste Tardío, subordinado, dependiente, periférico, que se reproduce hasta hoy, 2022, con diferentes configuraciones (Carvalho, 2022).

Según Antunes (2022), a principios de la década de 1990, luego de la primera elección presidencial desde el fin de la dictadura, con la victoria de Fernando Collor de Mello (1990-1992), se produjo el momento de inserción del neoliberalismo en el país, lo que implica una hegemonía creciente del capital financiero, el adelanto de ganancias y plusvalías, la liberalización económica, con el aumento de la privatización de empresas públicas y la desregulación de la legislación laboral. Así, Ricardo Antunes (2022) caracteriza la década de 1990 como el período de la “desertificación neoliberal”, cuando se dismanteló la oposición al capitalismo y se sacaron radicalmente de la agenda política del país reformas básicas (agrarias, urbanísticas, tributarias, entre otras) (Porto, 2022).

Mención especial merece, en el análisis de las fuerzas sociales en disputa, la Era FHC: es la afirmación de un proyecto de transnacionalización de la burguesía. En rigor, con la apertura irrestricta de la economía brasileña, siguiendo intensamente los preceptos de la agenda de Washington, importantes segmentos de la estructura productiva, dominados por la burguesía nacional, fueron incorporados por el capital transnacional, en el marco de la financiarización. En este nuevo contexto, la entrada de capital extranjero está asociada, sobre todo, a operaciones de fusión/adquisición. Vale la pena destacar las consideraciones de Américo Moreira (2003):

[...] Las fusiones/adquisiciones se adaptan más al contexto de bajo crecimiento que caracterizó el período del plan de estabilización brasileño. Se trata de actividades que no tienen por objeto aumentar el capital productivo, sino que están esencialmente asociadas a operaciones de reestructuración productiva que producen destrucción de empleo y aumentan las importaciones, con el objetivo de modernizar las empresas adquiridas.

Estos movimientos son parte de una lógica de centralización del capital, que, por supuesto, no es exclusiva de la economía brasileña. El estancamiento económico es determinante de una reconfiguración de la estructura productiva que termina redistribuyendo cuotas de mercado a favor del capital extranjero, en detrimento del capital público y privado nacional (Américo Moreira, 2000).

Esta dinámica aumenta el grado de desnacionalización de la estructura productiva del país, alejándose cada vez más de un proyecto nacional. De esta manera, se profundizan nuevas configuraciones de dependencia de la economía brasileña, a partir de su inserción en el capitalismo financiarizado, vía el Plan Real tal como lo circunscribe Filgueiras (2000, pp. 30-31):

[...] el Plan Real constituye, sobre todo, un producto económico, político e ideológico de la confluencia, a escala mundial, de tres fenómenos que marcaron el desarrollo del capitalismo en las dos últimas décadas (años 80 y 90) de este siglo, a saber: la hegemonía de la doctrina y las políticas liberales, la escisión del proceso de reestructuración productiva de los países capitalistas centrales y la reafirmación del capitalismo, es decir, como sistema de producción globalizado [...]. Este plan no es simplemente un programa de estabilización solitario. En esencia, va mucho más allá, ya que está vinculado a un proyecto mayor, de redefinición de la economía brasileña y su inserción en el nuevo (des)orden internacional, según las ideas del Consenso de Washington.

En efecto, la Era FHC, marcada por la llamada *estabilidad monetaria*, es un tiempo de Reforma del Estado, en consonancia con las exigencias del capital globalizado, sin atender a la agudización de la cuestión social¹⁶: desempleo estructural, precariedad e informalización del trabajo, pobreza histórica sumada a sus figuraciones contemporáneas¹⁷, alta concentración del ingreso, desigualdades estructurales y segregaciones socioespaciales (Bezerra, 2015, 2018). La Era FHC es un momento de naturalización de las reconfiguraciones del capitalismo, constituyendo un tiempo histórico de afirmación del neoliberalismo en la vida brasileña.

¹⁶ Desde la perspectiva aquí adoptada, la cuestión social comprende un fenómeno sociohistórico originalmente ligado a la lógica del capital en cuanto al modo de producción y reproducción de la vida en el capitalismo. Como señala Ianni, la misma sociedad productora de desarrollo económico construye las desigualdades constitutivas de la cuestión social, que adquiere distintas configuraciones en las particularidades de las formaciones sociohistóricas y culturales (Iamamoto, 1999; Ianni, 1989). Entre las múltiples refracciones de la cuestión social en la contemporaneidad, la pobreza es aprehendida aquí como una de sus expresiones limitantes (Bezerra, 2015, 2018).

¹⁷ La pobreza constituye un fenómeno sociohistórico y político ligado orgánicamente a la lógica explotadora y opresiva del capital en cuanto al modo de producción y reproducción de la vida social. Asume, sin embargo, diferentes figuraciones en las particularidades de las formaciones sociohistóricas y culturales. En esta perspectiva analítica, Bezerra (2015; 2018) explica que la pobreza gana nuevas configuraciones y visibilidad pública en las décadas de 1990 y 2000, en medio de su densificación en el seno del capitalismo contemporáneo en sus procesos de globalización, para considerar: acumulación flexible, reestructuración productiva, contrarreformas del Estado, desmantelamiento de los sistemas de protección social, supresión real y simbólica de derechos. Estas transformaciones del capitalismo contemporáneo remiten a una amplia bibliografía, trabajando ejes analíticos del debate actual (Chesnais, 1996; Harvey, 1994; Marx, 1997; Sennett, 2000 y 2004; Oliveira, 1995; Teles, 1999; Antunes; Alves, 2004; Carvalho, 1999 y 2008). Como señala Bezerra (2015), las transformaciones en la (in) civilización del capital –que derivó en la complejización y globalización de la pobreza (Chossudovsky, 1999)– se dan en consonancia con procesos simultáneos de deconstrucción del Estado Social/de Bienestar y su metamorfosis en Estado Penal/Penitencia (Wacquant, 2005, 2010), también llamado *Estado Centauro* porque “liberal, arriba; paternalista, abajo”, como lo define Wacquant (2010). Así, la pobreza asume múltiples configuraciones y representaciones presentes en los discursos mediáticos, políticos y académicos. Sobre las construcciones socio-históricas y político-culturales sobre la pobreza en la contemporaneidad, discutir y analizar sus principales figuraciones e interpretaciones –esbozadas en particular en los debates francés y norteamericano sobre las nociones de “nueva pobreza”, “exclusión social”, “desafiliación social”, “vulnerabilidad social” (Castel, 2000); “marginalidad avanzada” (Wacquant, 2005, 2010); y sus versiones en Brasil, con énfasis en la “inclusión precaria” (Martins, 1999), la vulnerabilidad socioeconómica y la vulnerabilidad civil (Kowarick, 2010), perfiladas a partir de las peculiaridades de la formación sociohistórica brasileña, ver Bezerra (2015, 2018).

Así, en el Brasil contemporáneo, desde la última década del siglo pasado y los primeros años del siglo XXI, en la confluencia de la democratización y el ajuste del país al capitalismo financiarizado, involucrando a los Gobiernos Collor de Melo (1990-1992), Itamar Franco (1992-1994), Fernando Henrique Cardoso (1995-1998; 1999-2002) persisten los intentos de privatizar grandes espacios de la política estatal, que incluyen políticas públicas –entre las que se destacan las políticas de Seguridad Social, Salud y Educación–, empresas estatales y la precariedad de las relaciones laborales (Johnson, 2022).

La intensidad de las movilizaciones que, a mediados de la década de 1980, llevaron al fin de la Dictadura Cívico-Militar y a la elaboración de una nueva Constitución Federal, para consagrar amplios derechos sociales, a contrapelo de los lineamientos neoliberales, en auge en Occidente configuró así una correlación de fuerzas que permitió una oposición clasista a los gobiernos del Ajuste y su agenda neoliberal. Así, en este período, la resistencia estuvo protagonizada por centrales sindicales, partidos políticos y organizaciones sociales que surgieron en el escenario de la sociedad civil, durante el último cuarto del siglo pasado, protagonizando movilizaciones masivas, provocando conflictos con los sectores dominantes. Tal resistencia permitió atenuar el alcance de los lineamientos neoliberales (Johnson, 2022).

De hecho, en su momento, las fuerzas sociales creadas durante la redemocratización, como el Partido de los Trabajadores (PT), la Central de Trabajadores (CUT), el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), los Movimientos Populares y Comunitario de Barrio –para constituir los Movimientos Sociales clásicos– y los Nuevos Movimientos centrados en las luchas por derechos e identidades encabezan la lucha contra los lineamientos neoliberales. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) también emergen como fuerzas sociales en resistencia. Tales fuerzas sociales, de carácter eminentemente clasista y democrático popular, encarnaron dimensiones de una disputa hegemónica, contraria a los intereses del capital, materializadas en las Políticas de Ajuste y en todas las formas de opresión. De hecho, en medio de disputas hegemónicas, las fuerzas progresistas y de izquierda consiguieron reducir el avance de las directrices neoliberales en Brasil, aun cuando sin fuerza suficiente para desmontar tales políticas que, con nuevas formas, permanecen dominantes hasta el umbral de la tercera década del presente siglo.

Al mismo tiempo, fuerzas progresistas de izquierda llegaron al poder en los estados de la Federación, desarrollando expresivas experiencias democráticas, siendo emblemático el caso de los gobiernos del PT en Rio Grande do Sul, con la gestión alternativa del Presupuesto Participativo y las experiencias de los Consejos de Gestión de Políticas Públicas que se expanden a lo largo del país en los diferentes niveles estatales. Además, como confrontación con el llamado “pensamiento único neoliberal”, se destacan las diversas versiones del Foro Social Mundial¹⁸, que tuvo lugar en Brasil, desde principios de la década de 2000, articulando fuerzas progresistas y de izquierda de todo el mundo, reafirmando la posibilidad de “otro mundo posible”, más allá del sistema del capital en el marco de la expansión del neoliberalismo.

¹⁸ El primer Foro Social Mundial tuvo lugar en Porta Alegre, en 2001. En sus diferentes versiones, uno de los principales objetivos se opuso al Foro Económico Mundial, realizado en Davos, Suiza, desde 1974, afirmando que otro estándar económico y social mundial es posible.

En esta disputa hegemónica, las fuerzas progresistas y de izquierda no presentaron un proyecto alternativo al capitalismo, capaz de lograr una amplia adhesión en la sociedad. Sin embargo, a principios del siglo XXI, la correlación de fuerzas permitió una disputa por la hegemonía entre fuerzas progresistas y fuerzas conservadoras. El escenario de confrontación y descontento social, dado el carácter cada vez más excluyente de las políticas de ajuste, entonces en boga, abre espacio en el escenario brasileño para el surgimiento de gobiernos progresistas (Luiz Inácio Lula da Silva [2003-2006; 2007-2010]; Primer Gobierno de Dilma Rousseff [2011-2014]). Dichos gobiernos asumen las políticas de ajuste, sirviendo, sin embargo, a los intereses inmediatos de las masas populares, mediante avances en las políticas sociales, con énfasis en las políticas de combate a la pobreza. Es el surgimiento de la Era PT, permeada de contradicciones, en la intención de lograr un pacto de clase, nunca consumado en su integralidad.

Es precisamente en esta contradictoria Era del PT (2003-2016) y su supuesto pacto de clases donde radican las raíces coyunturales de la crisis orgánica del Estado brasileño. En 2002, con la victoria del Partido de los Trabajadores (PT) y la elección del mayor dirigente sindical del país (Lula) para la presidencia de Brasil, parecía que iban a soplar nuevos vientos en dirección a la política nacional. Sin embargo, el PT ya no era el mismo y el *transformismo*, en los términos del concepto desarrollado por Gramsci, había llegado a sus profundidades, en particular, en lo que el comunista sardo caracterizó como *transformismo molecular*¹⁹.

De hecho, el PT abandonó el concepto de *partido de clase*, capaz de mantener la lucha por la independencia política de la clase obrera (Porto, 2022). En rigor, los sectores dominantes del PT asumen una perspectiva cercana a la socialdemocracia, en términos de social liberalismo. Las disputas se intensifican dentro del PT, con tendencias minoritarias que cuestionan el orden establecido.

De hecho, en los gobiernos encabezados por el PT, se produce lo que el sociólogo Francisco de Oliveira (2007), inspirado en el legado de Antonio Gramsci, llama “hegemonía inversa”: una nueva forma de dominación, propia de la época contemporánea, en la que los dominados realizan la “revolución moral” que se transforma, y deforma, en capitulación ante la explotación desenfrenada. Específicamente, existe lo opuesto al consentimiento, ya que no son los dominados quienes consienten en su propia explotación —como en las formas tradicionales de dominación—, sino que son los dominantes, los capitalistas y el capital, quienes consienten en ser dirigidos políticamente por los dominados, a condición de que la “dirección moral” no cuestione la forma de explotación capitalista. Chico de Oliveira explica, al referirse a los gobiernos del PT liderados por Lula:

¹⁹ En el *Cuaderno 8* y tipo B, Gramsci se refiere al párrafo 36 del travestismo, escrito en febrero de 1932. Desde el principio se destaca la asociación fundamental que hace Gramsci entre travestismo y revolución pasiva. El autor considera la naturaleza real de los partidos militantes en su identificación superficial con el pueblo, resultado de un distanciamiento entre las clases altas y el pueblo, identificación que se olvida en cuanto se presenta un momento de crisis. Gramsci identifica, en el contexto de Italia, dos periodos en los que ocurrió este fenómeno histórico: 1) De 1860 a 1900, transformismo molecular, es decir, los exponentes políticos de los partidos democráticos de oposición se incorporaron individualmente a las clases conservadora y moderada; 2) A partir de 1900, el transformismo de grupos radicales enteros que pasan al campo moderado.

Parece que los dominados dominan, pues dan “dirección moral” e incluso, físicamente están al frente de los organismos del Estado, directa o indirectamente, y de las grandes empresas estatales. Parece que son los propios capitalistas, ya que los grandes fondos de pensiones estatales son el corazón del nuevo sistema financiero brasileño y financian fuertemente la deuda pública interna. Parece que los dominados gobiernan la política, pues tienen bancadas poderosas en la Cámara de Diputados y el Senado. Parece que la economía finalmente se estabilizó, que se dispone de una moneda sólida y que esta hazaña se debió a la política del gobierno, especialmente en el primer mandato de Lula. **El conjunto de apariencias esconde algo más, para lo cual aún no tenemos nombre, ni quizás concepto.** Pero sin duda habrá que seguir las huellas del legado de Antonio Gramsci, el ‘pequeño gran sardo’, para encontrar el camino de su desciframiento. El consentimiento siempre ha sido producto de un conflicto de clases en el que los dominantes, elaborando su ideología, se convierten en la ideología dominante, trabajan para construir las clases dominadas a su imagen y semejanza. Este es el núcleo de la elaboración de Marx y Engels en La ideología alemana, que el pequeño gran sardo desarrolló admirablemente. **Estamos ante una nueva dominación** (Oliveira, 2007, p. 6; énfasis añadido).

De hecho, en los trece años de gobierno del PT (2002-2016), segmentos de izquierda y sectores progresistas ocuparon el aparato del Estado (sociedad política), pero no obtuvieron el poder en las esferas de la economía y la política, que se quedaron bajo el dominio de segmentos del capital, en el marco de un modelo arraigado en las políticas neoliberales y con el conservadorismo de las propias fuerzas de derecha, para controlar efectivamente el Poder Legislativo (Cámara y Senado) y el Poder Judicial. En esta configuración de relaciones de poder, los gobiernos del PT son conducidos a una política de concesiones en nombre de la gobernabilidad, para abrir espacio a ciertos arreglos políticos de los que derivan, entre otros, la llamada *asignación mensual*, el Mensalão²⁰.

²⁰ El Mensalão es considerado como un esquema de distribución de recursos públicos a los parlamentarios, operado por el Partido de los Trabajadores, en el Congreso Nacional, a cambio de apoyo político para el apoyo del primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, en la Presidencia de la República (2003/2006). Fue sometido a la sentencia del Tribunal Supremo como Acción Penal n. 470/2006. A pesar de las “narrativas” de los medios comerciales brasileños y de sectores de la Justicia Nacional, en particular del Ministerio Público y del Supremo Tribunal Federal, que indujeron a la opinión pública a creer en un esquema de corrupción generalizada, en el ámbito del PT no se demostró la veracidad del esquema Mensalão, a lo largo del juicio en la Corte Suprema. De hecho, en cuanto a la supuesta distribución de fondos públicos por parte del Partido de los Trabajadores, lo que se observa en el proceso de Mensalão es la liberación de recursos públicos para reformas parlamentarias al presupuesto del Gobierno Federal, como está previsto constitucionalmente, no corroborando así la tesis de la fiscalía. Sin embargo, el ponente del Mensalão, la Acción Penal 470, ministro Joaquim Barbosa, en un caso clásico de activismo político judicial, justifica, en la referida Acción Penal, que los recursos para el Mensalão vendrían del Banco do Brasil. Sin embargo, como se señaló, esta tesis tampoco se confirma, dado que los recursos a los que se refiere el ministro eran, en realidad, recursos del Fondo de Publicidad de la empresa privada de tarjetas de crédito Visa Net, con la que operaba el Banco do Brasil. Dicho Fondo fue utilizado para publicitar su marca de tarjeta de crédito. Sus clientes –Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y bancos privados como Bradesco– son responsables de administrar sus fondos, por lo que no constituyen fondos públicos. Un análisis sociopolítico del Mensalão es desarrollado en la tesis de maestría de José Jair Galvão da Silva, Galvão (2023).

De hecho, el escándalo Mensalão estalló en junio de 2005, cuya cobertura mediática fue desencadenada por la revista VEJA, con amplia repercusión en el escenario político brasileño, iniciando un proceso de desgaste del PT y de la izquierda.

En medio de los tejidos contradictorios de la llamada *Era Petista*, es necesario resaltar que los gobiernos de Lula, en un escenario internacional –en lo que respecta a la exportación de commodities y la disponibilidad de capital especulativo– lograron desarrollar un modelo que demostró ser un éxito, con “crecimiento económico e inclusión social”. Así, el mecanismo de distribución del ingreso, durante la primera década y media de este siglo, permitió oficialmente que la pobreza presentara un descenso significativo y con amplios sectores empobrecidos, accediendo a rangos de consumo antes impensables (Filgueiras; Gonçalves, 2007).

Innegablemente, las políticas de combate a la pobreza en los gobiernos del PT, en lo que se refiere al aumento real del salario mínimo, los beneficios de la seguridad social, la implementación de amplios programas sociales, con énfasis en el Programa *Bolsa Família* y *Mi Casa, Mi Vida*, la inclusión de segmentos vulnerables en el sistema de crédito constituye un hito de ascensión social de aquellos en situación de pobreza en Brasil, arraigada en el consumo (Carvalho, Guerra, 2015). Asimismo, tales gobiernos dieron institucionalidad a las políticas de identidad, dando visibilidad, en el Estado, a las agendas de las llamadas minorías, históricamente ubicadas en los márgenes de la vida brasileña. Son políticas dirigidas a enfrentar las desigualdades y exclusiones raciales y de género de la población LGBTQIA+.

Al mismo tiempo, en la política exterior brasileña, una intensa política de integración latinoamericana asume un papel destacado, aliándose con gobiernos progresistas, en la perspectiva de confrontar al imperialismo estadounidense. En este sentido, cabe destacar la creación de los BRICS, perfilando la alianza estratégica que busca fortalecer el Sur Global, tanto en la dimensión económica como geopolítica, reuniendo a los siguientes países denominados emergentes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Tales políticas tienden a conducir a grados de autonomía en su desarrollo social y económico, no guiadas exclusivamente por lineamientos neoliberales (Katz, 2015).

En la Era del PT, la correlación de fuerzas indica un doble movimiento, orgánicamente ligado: por un lado, se mantiene el dominio de las fuerzas transnacionales del capital, específicamente las finanzas y los sectores neoextractivistas; por otro lado, en la línea de la ola progresista, entonces dominante en América Latina, surgió una fuerza popular que dio un carácter popular-democrático a los gobiernos del PT, sin que fuese una alternativa clasista al proyecto neoliberal. En medio de esta contradicción, los gobiernos encabezados por el PT lograron mitigar el desmantelamiento de las políticas de seguridad social –salud, previsión social y asistencia social– y trajeron avances significativos en las políticas de educación. Además, en gran medida, se frenó la privatización de empresas estatales, manteniendo, sin embargo, las denominadas *Asociaciones Público-Privadas* (APP).

Los avances relativos en la inserción social y en el propio sistema de seguridad social ocurrieron, contradictoriamente, en medio del desarrollo de un modelo de ajuste rentista neoextractivista, privilegiando los sectores del capital financiero, la agroindustria y la minería (Carvalho, Milanez, Guerra, 2018; Moreira, Sebag, 2014; Johnson, 2022). Así,

en este período, tales sectores del capital fueron ganando espacio en las políticas gubernamentales, drenando inmensas riquezas al exterior y facilitando el fortalecimiento de los intereses de los terratenientes en el país. Y más: en su amplia gama de alianzas, los gobiernos del PT lograron fortalecer a las empresas privadas del sector de la construcción civil y de alimentos, así como a Petrobras, para proyectar un importante sector empresarial nacional (Johnson, 2022).

En sus contradicciones, los gobiernos del PT asumen políticas de ajuste con ciertas inflexiones que caracterizaron su perspectiva de gobierno. Es el liberalismo social del PT, constituyendo una alternativa de convivencia con las políticas de ajuste. Bajo su dirección, el tema central es que la Era del PT no implementó las reformas estructurales necesarias para el cambio social a largo plazo. Este es el caso de la ausencia de reforma tributaria, reforma agraria, reforma urbana y reforma de la política de comunicación, entre otras. De hecho, la inserción social a través del consumo, durante los gobiernos del PT, fortaleció una visión liberal, en la medida en que la formación política crítica, así como el fortalecimiento de la participación política, fueron paulatinamente dejados de lado (Braga, 2012; Pfeifer, 2014). Innegablemente, los gobiernos del PT no invirtieron en fortalecer el poder popular, ni siquiera en la construcción de políticas de combate a la pobreza. Así, se debilitaron los mecanismos de participación popular, comprometiendo la resistencia de clase de la sociedad civil.

En medio de memorables circuitos de “crecimiento con inclusión social”²¹, los gobiernos del PT encabezados por Luiz Inácio Lula da Silva alcanzaron amplios niveles de popularidad. En 2010, el presidente Lula, al final de su gobierno, según IBOPE, 2010, tenía una aprobación del 83% de la población brasileña. El gobierno de Dilma Rousseff (2011–2014), por otro lado, enfrentó un contexto geopolítico desfavorable –marcado por signos de la crisis orgánica del capitalismo globalizado en el contexto brasileño, con énfasis en la caída de los precios de las materias primas en el mercado internacional y deterioro fiscal. Además, contradictoriamente, este gobierno progresista, marcado por movimientos globales y nacionales de indignación –impugnación de las políticas neoliberales– experimentó condiciones objetivas que cuestionaron la adhesión al modelo brasileño de ajuste, hasta entonces considerado exitoso. Más densamente, afectaron la legitimidad misma del PT.

Fueron momentos de visibilidad pública de una crisis de hegemonía en curso en el Brasil actual, en el que surcos, tensiones, conflictos y disputas político-culturales se intensificaron y se desarrollaron; las *Jornadas de 2013* simbolizaron un nuevo tiempo de prácticas organizativas y de protesta de/en la sociedad civil brasileña. Se sumaron diferentes grupos y movimientos sociales, especialmente compuestos por jóvenes; con variadas matrices político-ideológicas desde los campos de la(s) derecha(s) a la(s) iz-

²¹ Este modelo de desarrollo económico con inclusión social, considerado exitoso en Brasil en ese momento, se basó en la expansión de los mercados financieros globales y el aumento de los precios internacionales de las materias primas producidas en el país, sumado a las opciones políticas de los gobiernos del PT. De hecho, esta coyuntura favorable creó un ambiente propicio para la estructuración de políticas públicas, el crecimiento económico con baja inflación y la generación de empleos e ingresos, con números positivos si se compara con la década de 1990, en una versión marcada por la ideología de la conciliación de clases.

quiebra(s). Las manifestaciones de 2013 están marcadas por especificidades: énfasis en las emociones (individuales y grupales), articuladas a la política; uso de nuevas tecnologías digitales y redes sociales en línea para la movilización/convocatoria a nivel nacional; amplia cobertura de los principales medios de comunicación. Para Gohn (2019), las Jornadas de 2013 fueron expresivas de una “revuelta popular de masas”, en la que los “movimientos sociales más nuevos” se levantaron y/o adquirieron visibilidad nacional, con rasgos distintivos en relación con los movimientos sociales clásicos y nuevos. La autora explica:

Experiencias previas de movimientos sociales (tanto clásicos como nuevos) se asociaron con luchas por la emancipación y la soberanía popular; la experiencia de los novísimos que surgieron a partir de 2013, vía MBL [Movimento Passe Livre] remite al entramado autonomista, anarquista, anticapitalista de alcance internacional, contraponiéndose a todas las formas burocráticas, jerárquicas y centralizadas y asumiendo un carácter de rechazo a la institucionalidad y valoración de los procesos y prácticas colectivas. Valoran la experiencia, la autonomía y la acción directa. Uno de sus grandes legados fue la legitimación de la protesta social en las calles como forma de cambio coyuntural. Fueron protestas que negaron la política partidaria, como se practica en el país, pero no se definieron como apolíticas. Se plantaron y difundieron a la sociedad y la anti-política se definió como un valor y una nueva representación de la cultura política se formó a partir de ese valor. (Gohn, 2019, 131-132; 135; subrayados nuestros).

En la interpretación de Gohn (2019), junio de 2013 circunscribió, por tanto, la génesis del 5º ciclo de participación y protestas (2013-2018) en Brasil. Para efectos de análisis, la autora acotó cuatro momentos constitutivos del mencionado ciclo, considerando sus características centrales —en cuanto a actores, prácticas y efectos de sus luchas— y años de su materialización en el país, a saber:

1. 2013, con protagonismo juvenil en la calle, con predominio de “colectivos”²²;

²² Al analizar los “colectivos” emergentes en el Brasil actual, Gohn (2022) explica: “Para nosotros, un colectivo es una agrupación sociopolítica y cultural articulada por un conjunto de ideas y valores, con identidades fragmentadas, directrices, prácticas y organizaciones descentralizadas y muchos con la horizontalidad como meta y agendas diversificadas, formas de expresión y repertorios diferenciados” (Gohn, 2022, p. 179; énfasis agregado). Advierte que la génesis del colectivo(s) remite a los períodos 1960-1970 y 1980-1990, estableciéndose fuertes vínculos con la cultura y las artes, así como acciones solidarias. Sin embargo, adquieren amplia visibilidad pública a partir de la primera década del siglo XXI (2010) en Brasil, maximizada durante las *Jornadas de junio de 2013* y sus consecuencias en la vida brasileña. Se diferencian de los movimientos sociales clásicos y nuevos en varias dimensiones, entre las que merecen mención: heterogeneidad y diversidad de prácticas, agentes e influencias teórico-políticas y culturales; protagonismo de los jóvenes; los participantes se declaran “activistas” movilizados por causas sociales/político-culturales/identitarias/temáticas específicas; posibilidad de compromiso individual; contestatario o no; hacer uso de las tecnologías de la información y las redes sociales en línea; enfatizan la experiencia (tópica o sistemática) / participación directa / “experimentos”; predominio de la acción en el espacio urbano, especialmente en el ámbito de los “territorios periféricos; críticas a las llamadas *representaciones*, organizaciones sociopolíticas y formas de “hacer política” denominadas *tradicionales*; priorizan la horizontalidad entre sus activistas participantes, la fluidez y la autonomía en sus configuraciones; trabajan en diferentes frentes, temas y/o causas (especialmente agendas antirracistas, feministas, ambientalistas y culturales/artísticas); influenciada por diferentes matrices teórico-ideológi-

2. 2014, las “organizaciones del movimiento”²³ alineado a las derechas, simultáneamente liberal y conservador en inspiración;
3. 2015-2016, las multitudes vuelven a las calles para protestar, centrándose en el gobierno federal y la destitución de la presidenta Dilma Rousseff;
4. 2017-2018, reconfiguración de articulaciones y manifestaciones callejeras, con foco en el avance de las contrarreformas sociales y la elección de 2018 (Gohn, 2019, 2022).

Este nuevo ciclo de protestas en Brasil (2013-2018) encarnó diferencias, contrastes y heterogeneidad de los sujetos activos, sus concepciones, demandas, prácticas; e involucró varios campos políticos que incluyen y trascienden las divisiones clásicas entre “derecha(s)” e “izquierda(s)”, “conservador(es)” y “progresista(s)”, liberal/neoliberal, socialdemócratas y/o socialistas. De hecho, la irrupción democrática plural, polisémica y multivocal, desencadenada en las *Jornadas de 2013*, alteró el campo de la política y las relaciones de fuerzas político-culturales y partidarias, produciendo tensiones y desarrollos insólitos y contradictorios a la reciente e inconclusa democracia brasileña.

En el análisis de Camila Rocha (2021), esta “nueva derecha” se forjó en la hibridación de diversas ideologías políticas y, así, se transfiguró, no sin tensiones y conflictos, en versiones de “ultraliberalismo conservador”, “neoliberalismo conservador” o un “neoconservadurismo” contemporáneo al brasileño. Exigir el fin del pacto democrático progresista de 1988 y el combate, en sus términos nativos, a la supuesta “hegemonía cultural de izquierda” –anclada en la redemocratización y en la Constitución Federal de

cas, enfatizando el autonomismo (anarquistas y libertarios). Pueden aparecer como “colectivos en red” y/o “sujetos colectivos periféricos”, a considerar, en palabras de Gohn (2022, p. 184): “Son periféricos porque son excluidos, marginados, invisibilizados”. Y aún existen colectivos que se autodenominan *movimientos sociales* o, por el contrario, buscan distinguirse de ellos, según los perfiles de sus participantes y sus dinámicas constitutivas (Gohn, 2019, 2022). Trabajan en diferentes frentes, temas y/o causas (especialmente agendas antirracistas, feministas, ambientalistas y culturales/artísticas); influenciado por diferentes matrices teórico-ideológicas, enfatizando el autonomismo (anarquistas y libertarios).

²³ Las *organizaciones movimientistas*, como las nombró inicialmente Gohn (2019), constituían grupos de “activistas”, en su mayoría jóvenes, alineados a la(s) derecha(s), que buscaban influenciar/moldear la opinión pública brasileña, utilizando, para ese fin, sus nuevos medios informativos, tecnologías y redes sociales virtuales. Cabe señalar el apoyo de las corporaciones empresariales y la importancia de los “think tanks” en la proliferación de su base liberal, con centralidad para dos teóricos de la Escuela Austriaca, a saber: Friedrich von Hayek –defensor del neoliberalismo, exigiendo el papel activo del Estado a efectos de promover el libre mercado– y Ludwig von Mises –para abogar por la permanencia del liberalismo económico (laissez-faire), llamado “libertario” y su correlato “libertarismo”, con foco en la “defensa moral y radical de el libre mercado” (Rocha, 2021, p. 26). En términos de Rocha (2021, p. 25; énfasis añadido): “El libertarismo, a diferencia del neoliberalismo, consiste en una defensa moral radical de la lógica del libre mercado sin restricciones de ningún tipo, considerando la libertad de los seres humanos no coaccionada por otros. Esta diferenciación es importante porque es precisamente la reciente recepción y resignificación de una ideología libertaria para el contexto brasileño, anclada en la obra del economista austriaco Ludwig von Mises, que constituye una de las principales innovaciones de la nueva derecha en el país”. Durante los años 2014 a 2018, las “organizaciones del movimiento” asumieron bases “ultraliberales” y “conservadoras”, constituyendo “contramovimientos”, en palabras de Gohn (2022), debido a la adopción de prácticas antidemocráticas, sobre todo.

1988, y ampliada con los gobiernos del PT– representantes de esta “nueva derecha”²⁴ comenzaron a actuar durante el gobierno de Lula (2006-2010), en medio de la publicación (en junio de 2005) del escándalo de corrupción “Mensalão” y sus consecuencias en el país. Sin embargo, esta “nueva derecha” solo adquirió amplia visibilidad pública y capilaridad nacional en el período 2014-2018, a través de procesos impulsados por medio de los *think tanks*²⁵ y las redes sociales en línea utilizadas con el fin de difundir sus ideas, movilizar y capacitar a su cuadro de “activistas”.

La expansión de estos contramovimientos/contracorrientes, que generaron la “nueva derecha” brasileña, enfocó sus prácticas de protesta contra el gobierno del PT, específicamente durante los mandatos de la expresidenta Dilma Rousseff, para aprovechar

²⁴ De este período, como afirma Rocha (2021), es importante destacar: el Movimento Endereza Brasil (MEB), creado en 2006, fue el primero vinculado a la nueva derecha brasileña y liderado por Ricardo Sales, quien llegó a ser Ministro de Ambiente durante el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, impulsó la campaña para promover el juicio político al entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva; y Cansei (2007), con miras a protestar contra el gobierno Lula tras el accidente aéreo de TAM, además de criticar a los políticos, en particular a los “petistas” y al propio PT, y con la máxima de enfrentar la corrupción centrada en el gobierno lulista. Una característica común a ambos “movimientos” fue la presencia de miembros de las clases medias y de la(s) élite(s) de la población brasileña, liderando protestas de “derecha”.

²⁵ Los *think tanks* son, por regla general, instituciones organizativas privadas, mantenidas por personas naturales y/o jurídicas, y responsables de la difusión de las ideologías políticas de derecha(s), en este caso, la difusión y enseñanza de los grupos pro mercado, que se formaron y expandieron en Brasil a partir de la década de 1980, destacándose el Instituto Liberal, el Instituto Milenium y el Instituto Mises Brasil. Rocha (2021, pp. 27-28) explica: “La expresión *think tanks* se remonta a las salas secretas en las que se discutían las estrategias de guerra y se empezó a utilizar más allá de la década de 1960 en Estados Unidos. [...] los primeros think tanks pro mercado se fundaron en ese país, y probablemente en el mundo, la Fundación para la Educación Económica (FEE), en marzo de 1946 [...] tenía relativa autonomía de los intereses políticos inmediatos para llevar a cabo su principal objetivo: educar al pueblo estadounidense sobre las ventajas del capitalismo de libre mercado”. En Brasil, el primer think tank pro libre mercado, inspirado en organizaciones norteamericanas e inglesas, fue creado en 1983, a saber: el Instituto Liberal (IL), en Río de Janeiro. En los años posteriores a la fundación de IL-RJ, se implementaron sucursales en otras ciudades brasileñas. Los think tanks, en Brasil, alcanzaron su apogeo a principios de la década de 1990 y su relativo declive en 1999, exactamente durante el período de implantación del neoliberalismo en el país, durante los gobiernos del expresidente Fernando Henrique Cardoso. Rocha (2021) también destaca la aproximación e hibridación entre intelectuales y empresarios pro-mercado y conservadores, para delinear el perfil “neoliberal-conservador” emergente en el país en la década de 1980. En términos gramscianos, los think tanks funcionan como aparatos privados de hegemonía de la(s) derecha(s), en la perspectiva de diseminar ideas pro-mercado y, luego, liberales-conservador, formando intelectuales y activistas; traducir y publicar obras inéditas en Brasil –destacando las obras de Hayek y Mises; promover y publicar el pensamiento de Olavo de Carvalho, “filósofo autodidacta” y denominado “ideólogo de la nueva derecha”, fallecido el 25.01.2022. En síntesis, se puede afirmar que los *think tanks* consolidaron una red de diseminación de ideas, valores y prácticas fundamentales convenientes a la emergencia, ampliación y ascension de la “nueva derecha” brasileña en el siglo XXI, la que se fortaleció con el auxilio de las nuevas tecnologías informacionales y redes sociales, destacando Orkut (2004). Esto abrió fructíferas posibilidades para el(los) derecho(s) a dialogar, compartir ideas/valores y organizarse desde sus comunidades virtuales y foros, blogs, sitios web y *hashtags* que, sin abandonar sus herramientas en línea, también salieron a la calle en sus peculiares movilizaciones y protestas, cada vez más antidemocráticas y violentas.

aún los flancos abiertos con acusaciones de corrupción en el alcance y el resurgimiento de la crisis orgánica del capitalismo, con sus impactos nocivos en la economía política brasileña. En el camino, reorientaron sus discursos y acciones hacia la agenda moral y costumbrista, de carácter conservador, en asociación con las agendas liberal/neoliberal/ultraliberal dirigidas, sobre todo, a las críticas a la corrupción centradas en la actuación del gobierno en cuestión, en demandas de contrarreformas del Estado y pro-libre mercado. Sus intereses políticos partidistas se hicieron más explícitos en las elecciones de 2014 y 2018,²⁶ en los años 2015-2016, con sus manifestaciones (en línea y en las calles) a favor del juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, recién elegida para su segundo mandato, en las elecciones de 2014.

La sociedad brasileña estuvo política e ideológicamente polarizada en 2015 y 2016, con tendencia a agudizarse más adelante con la culminación del juicio político y la deposición del gobierno democráticamente electo. ¡La arquitectura del “golpe de 2016”, forjada por fuerzas (neo)conservadoras –destacando la “nueva derecha”– no se materializó sin fuerzas político-culturales opuestas! Vale la pena señalar la (re)articulación de las fuerzas progresistas y/o de las “izquierdas” brasileñas, constituyendo “frentes”²⁷ de defensa del gobierno del PT, elegido democráticamente en las elecciones de 2014, con el desafío de volver a ocupar las calles, disputar los espacios públicos y defender las instituciones democráticas brasileñas, tensas y puestas a prueba en estos tiempos de crisis de hegemonía.

Si, por un lado, se señaló una crisis de hegemonía, desencadenada y/o públicamente visible a partir de las *Jornadas de junio de 2013* y sus implicaciones político-culturales; por otro lado, se pueden demarcar movimientos oscilantes de disputas por la hegemonía dentro de la sociedad civil en el Brasil actual. Crisis orgánica del Estado (Integral) en proceso, ¡sí! Por lo tanto, estamos viviendo y observando un tiempo histórico atravesado por disputas abiertas por la hegemonía en ese país, con registros de choques entre distintas fuerzas sociales en ciclos políticos cruciales, a saber: primero, en la mañosa arquitectura del Golpe de 2016; en el gobierno ilegítimo del expresidente Michell Temer (2016-2018), en medio de la intensificación de las contrarreformas estatales; en el ascenso de la “nueva derecha” y la elección del expresidente Jair Messias Bolsonaro (2019-2022); al interior del (des)gobierno bolsonarista y en el contexto de la pandemia de la COVID-19 que, entrelazados, profundizaron la cuestión social, destacando el desempleo, la pobreza y el hambre. Y, no menos importante, destacamos las disputas político-culturales y electorales vividas durante ese 2022, que convergieron en la reelección, a la presidencia del país, del Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, entonces candidato por el PT y apoyado por un amplio frente popular democrático.

²⁶ Bajo tal denominación, pueden ser considerados: “Vem pra Rua” (VPR), el “Movimento Brasil Livre” (MBL), y los “Revoltados on Line”, iniciados en 2014; y la articulación del “Frente pela Renovação”, en 2017, constituido por diferentes grupos (neo)liberales y conservadores inscritos en el campo de la “nueva derecha”. Véase Gohn (2022) y Rocha (2021).

²⁷ Frente Brasil Popular y Frente Povo Sem Medo formados en 2016 por fuerzas progresistas y/o de izquierda –sindicatos, organizaciones civiles y movimientos sociales (tanto clásicos como nuevos)– y dirigidos a acciones contrarias al juicio político a la expresidenta Dilma Rousseff y la defensa de la democracia. Véase Gohn (2019).

GOLPE DE 2016: MARCO HISTÓRICO DE UNA CRISIS DE HEGEMONÍA

El Golpe de Estado de 2016 pasa a la historia como un hito de nuevas configuraciones sociopolíticas en la vida brasileña reciente. Es un golpe con formato contemporáneo, emergente en países de América Latina –Honduras (2009), Ecuador (2010), Paraguay (2012), Brasil (2016), Bolivia (2019)– articulado por las élites del capital y sectores conservadores de la sociedad, en colusión espuria con el Legislativo, el Poder Judicial y los grandes medios de comunicación y con graves implicaciones en la economía, la política y la cultura, alcanzando la vida cotidiana de la población brasileña.

Para comprenderlo, en su complejidad y particularidad, es necesario situarlo en los circuitos geopolíticos del capitalismo contemporáneo, demarcando las expresiones de la crisis estructural del capital en los países periféricos, especialmente en Brasil. De hecho, esta crisis emergente en los países centrales, en 2008-2009, se desplazó, procesalmente, a diferentes espacios geográficos, llegando incluso a China, creando un escenario internacional desfavorable, con repercusiones en la caída de los precios de exportación de commodities agrícolas y minerales, uno de ellos, los pilares del modelo de ajuste latinoamericano y, en particular, brasileño. Además, el desgaste creciente de las invasiones estadounidenses en Medio Oriente agravó la situación geopolítica.

En este contexto de crisis, la situación en América Latina y Brasil cambia de “signo”, favoreciendo la movilización y avance de la derecha. Entra en vigor lo que Leirner (2020) llama *guerras híbridas*, con el uso concomitante de mecanismos tradicionales y nuevas formas de confrontación, tanto espaciales como virtuales, para favorecer los derechos, en sus diferentes configuraciones (Johnson, 2022). De hecho, las guerras híbridas, que marcan la escena brasileña contemporánea, articulan una mezcla de instrumentos convencionales, asociados al uso de armas avanzadas, tecnologías agresivas, herramientas psicológicas, manipulación de problemas de identidad, promoción de la desinformación, uso intensivo de las redes sociales, prácticas de lawfare, con la politización de la justicia (Ignacio, 2021). Tales guerras fueron ampliamente utilizadas por la derecha, en los procesos de destitución de gobiernos del PT, especialmente en los últimos años del gobierno de Dilma Rousseff (2013-2014).

En un contexto de guerras híbridas, aprovechadas por la derecha, cayeron los índices de aprobación popular del gobierno de Dilma Rousseff y la victoria de la presidenta para un segundo mandato se dio en un escenario de polarización, con un margen de votos restringido. En tal situación, ante la baja popularidad, avanzaron las movilizaciones callejeras de sectores opositores y decayó el apoyo parlamentario. Las formas de guerras híbridas se intensificaron en las redes sociales y los principales medios de comunicación. Así, en 2015, Dilma Rousseff inicia su segundo mandato, bajo fuertes presiones y formas de manipulación de la opinión pública. En efecto, el cambio de rumbo de la política brasileña fue decidido por la burguesía interna, los medios corporativos, los militares, una parte importante de jueces colocados estratégicamente y la invaluable ayuda de las iglesias evangélicas y organizaciones creadas en las movilizaciones de la derecha (Johnson, 2022). En las calles y en las redes sociales se intensifica una disputa ideológica, sobre todo a nivel del sentido común, de las cosmovisiones, favorables a las ideas neoliberales

y al conservadurismo político-cultural. Se cierra el cerco mediático-empresarial-institucional. Finalmente, en 2016 se consolidó la colusión de las élites y fuerzas de derecha, con la destitución de la presidente (Bringel, 2017).

Cabe señalar que este golpe de Estado de 2016 se dio *en el contexto de una crisis de hegemonía, que se expresó en las relaciones de fuerza, dentro de la ecuación Estado/Sociedad Civil*. Más específicamente, las fuerzas progresistas y de izquierda estaban, en ese momento, muy debilitadas por el antiPTismo, en el marco del Lava Jatisimo, que culminó con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. La derecha tradicional, materializada en el Congreso por el gran centro político, el “Centrão”²⁸, no tiene la fuerza suficiente para asumir el rumbo de un país en crisis. El partido de centro-derecha, representado por el PSDB –opositor tradicional de la izquierda desde mediados de la década de 1990– tampoco logra afirmarse como alternativa para conducir la vida política brasileña. Así, se profundiza la crisis orgánica del Estado brasileño, como crisis de hegemonía que se configura, para utilizar palabras de Gramsci, como un “espacio abierto y peligroso”, destinado a la “acción de poderes oscuros, con hombres providenciales” (Gramsci, 13 § 23).

Así, el Golpe de 2016 habilita a Michel Temer como presidente de la República, quien encarna al “hombre providencial”, bajo la égida del autoritarismo, del que nos habla Gramsci. El gobierno de Temer, como gobierno ilegítimo, resultado de un golpe de Estado, emprende el desmantelamiento de la nación brasileña, estratégica para la implementación de políticas de radicalización del dominio del mercado, a expensas de la superexplotación del trabajo. En la jerga popular, le corresponde a Temer hacer el “trabajo sucio”, comprometer principios y elementos fundacionales de la democracia brasileña.

De hecho, en el gobierno de Michel Temer (2016-2018) se desarrollaron procesos para implementar la “arquitectura del Golpe de 2016”, “golpes dentro del Golpe” (Carvalho, 2019), que se suceden en la vida brasileña. Se materializan convulsiones históricas: redefiniciones del bloque de poder, reconfiguraciones del Estado y de la Sociedad Civil, tensiones y ataques frontales a la democracia.

En medio de esta arquitectura del Golpe de 2016, se rompen las políticas de la hegemonía de las fuerzas progresistas, realizadas a partir de enfrentar las desigualdades históricas, la aceptación de las diferencias, la afirmación de los derechos, en una perspectiva inclusiva. Ante una polarización creciente, se inicia una nueva configuración hegemónica, marcada por la regresión de derechos, el desmantelamiento de las políticas públicas y la negación de pautas identitarias.

En este escenario de desmantelamiento y contrarreformas, la relativa resistencia de las instituciones democráticas, los movimientos sociales y los segmentos de la sociedad civil

²⁸ El *Centrão*, como fenómeno de la vida política institucional brasileña, surgió durante el proceso de redacción de la Constitución Federal de 1988 en la Asamblea Constituyente. Por tanto, desde entonces, ha sido una fuerza política de derecha, ideológicamente caracterizada por el fisiologismo, actuando políticamente, en defensa de los intereses de las élites económicas conservadoras, actuando como un fuerte grupo de presión sobre el Poder Ejecutivo. Fue decisivo para el Golpe de Estado de 2016 que sacó a Dilma Rousseff de la Presidencia de la República, habiendo asumido, desde entonces, desde la Presidencia de la Cámara Federal, el protagonismo del Poder Legislativo, entre los años 2016 a 2022.

que protestan, se organizan en manifestaciones callejeras, haciendo oír en el escenario del país un colectivo de voces de indignación. Sin embargo, estas fuerzas de resistencia no son capaces de constituir un bloque contrahegemónico, capaz de provocar inflexiones en la arquitectura golpista, en beneficio de los intereses de los trabajadores y, particularmente, de las masas populares. Esto es lo que se puede ver, de manera emblemática, en la implementación de las contrarreformas laborales, en la educación secundaria y en las reformas a la Constitución de 1988, en la línea del ultraliberalismo.

El Golpe de 2016 instaura un nuevo ciclo de ajuste al capitalismo financiarizado: es un ciclo ultraliberal, enraizado en una política de expoliación de derechos, riquezas nacionales, fondos públicos, privatizaciones, intensificación de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, de privilegiar los intereses del capital externo (Carvalho, Guerra, 2015; Carvalho, Milanez, Guerra, 2018).

En este nuevo ciclo de ajuste, introducido por el Golpe de Estado de 2016, el gobierno de Michel Temer desencadena un proceso de desmantelamiento de derechos, vinculados al proyecto civilizatorio del país en los circuitos de democratización. Desde mayo de 2016 hasta finales de 2018, el gobierno de Temer implementó una nueva versión del modelo de ajuste rentista-neoextractivista, centrado íntegramente en políticas de ajuste fiscal y austeridad, basado en una explotación intensa y violenta de la fuerza de trabajo y un recrudecimiento de la pobreza, afectando fuertemente a las poblaciones que viven en los márgenes de la sociedad (Carvalho, 2021).

Se trata de un período histórico de excepción, regido por el autoritarismo, estructurando la arquitectura pesada del golpe de 2016 que buscó sentar las bases de un proyecto de extrema derecha diseñado para el largo plazo y que se expresó con fuerza en el período 2016-2018, en medio del recrudecimiento de la crisis brasileña, que afecta, sobre todo, a los trabajadores y trabajadoras. En efecto, la arquitectura de “golpes sucesivos dentro del Golpe”, plasmada en el conjunto de las llamadas *contrarreformas* y cambios constitucionales, trastorna el aparato jurídico-institucional que asegura los derechos y conquistas democráticas, desmontando el patrón de protección social que fueron perfilados en los procesos contemporáneos de construcción de la democracia. Se rompe así el Pacto de Ciudadanía de la Constitución Federal de 1988 e incluso el Pacto Getulista para la Consolidación de las Leyes del Trabajo-CLT.

En los tiempos de autoritarismo de la administración Temer (2016-2018), dos embestidas claves merecen especial mención, mismas que se articulan a los procesos de desmantelamiento de la Protección Social brasileña, afectando fuertemente el Modelo de Seguridad Social plasmado en la Constitución de 1988. El primero incide directamente en el histórico pacto por la afirmación y el reconocimiento de los derechos de la Constitución Federal de 1988, introduciendo cambios de gran calado encaminados a asegurar un ajuste fiscal radicalizado. En ese sentido, es emblemática la Enmienda Constitucional 95, del “Tope al Gasto Público”, aprobada el 13 de diciembre de 2016, que congela el presupuesto de políticas públicas por veinte años. De hecho, se trata de una “enmienda símbolo” del Golpe, introduciendo un nuevo régimen fiscal, con repercusiones directas en el Presupuesto de la Seguridad Social (Carvalho, 2021).

La segunda embestida se materializa en la contrarreforma laboral, plasmada en dos leyes, a saber: la Ley N° 13.467, del 13 de julio de 2017, que desmantela la CLT, legaliza

la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, modifica las normas democráticas en la relación capital/trabajo, en un contexto de creciente vulnerabilidad del movimiento sindical; la segunda es la Ley N° 13.429, del 31 de marzo de 2017, que liberaliza la tercerización y amplía el contrato temporal (Krein, 2018). En rigor, esta reforma de la legislación laboral altera más de 200 puntos de la CLT, modificando aspectos fundamentales en el ámbito de la protección laboral, con énfasis, entre muchos otros en las formas de contrato y jornada, vacaciones, seguro de desempleo, condiciones de insalubridad, protección y seguridad en el trabajo (Krein, 2018).

En este contexto de sucesivos desmantelamientos y, en particular, de debacle del Estado Democrático de Derecho, el Brasil del presente está marcado por el avance y la organización de la derecha y, en particular, de la extrema derecha, con estrategias definidas y configuraciones diversas. De hecho, desde las *Jornadas de 2013*, con el reforzamiento real de los enfrentamientos pro-impeachment de Dilma Rousseff, la “derecha gana las calles y las redes sociales”. Son derechos en plural, surgidos de diferentes loci, que se han cruzado en el país en los últimos seis años, en una simbiosis perversa de doctrina neoliberal, fundamentalismo religioso e ideología militarista (Cavalho, 2019; 2021). En rigor, desde las *Jornadas de 2013* segmentos de la extrema derecha reclaman el regreso de la dictadura militar y todo su aparato represivo.

Según Roger Griffin (2003), la extrema derecha actual se diferencia de la extrema derecha tradicional en varios aspectos, con nuevas estrategias, conformaciones ideológicas y organizativas. Tales metamorfosis tendrían un carácter tan abismal que llevó a Griffin (2003) a elaborar un nuevo concepto para caracterizar este nuevo fenómeno, al que denominó *derecha grupuscular*. Tal noción se aplicaría a pequeñas entidades políticas que, en la mayoría de los casos, tienen pocos miembros, poca visibilidad y casi ningún apoyo público. La importancia de esta “derecha específica de grupo” se desprende de la facilidad con la que se articula, estratégica e ideológicamente, con otros pequeños grupos de derecha o de extrema derecha, para lograr sus objetivos. En otras palabras, es un movimiento en el sentido de que sectores importantes de la sociedad están dispuestos a abdicar de los pilares democráticos, para abrazar ideas extremas en el campo de las costumbres y del espectro político (Porto, 2022).

En rigor, el Golpe de Estado de 2016, de carácter parlamentario-legal-militar-mediático, puede ser considerado como un momento constitutivo (Zavaleta, 2009) del cambio en la correlación de fuerzas en la sociedad civil brasileña, consolidando marcas históricas de una sociedad que se vuelve cada vez más violenta, naturaliza la exclusión social y profundiza las jerarquías sociales (Johnson, 2022). De hecho, en términos de la disputa hegemónica, los sectores que defienden la violencia y el negacionismo en detrimento del ejercicio democrático de la política se han ido fortaleciendo, ganando y aglutinando adeptos de diferentes estratos sociales.

El gobierno de Temer se prolongó hasta el final de su mandato en medio de denuncias de corrupción y bajos niveles de aceptación social. Al mismo tiempo, el activismo judicial (Galvão, 2021) condujo a uno de los procesos de *lawfare* más grandes de la historia reciente contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, afectando también a líderes de empresas que se destacaron bajo los gobiernos progresistas y a figuras de la política del Partido de los trabajadores (Johnson, 2019). El trabajo de desmantelamiento del gobier-

no de Temer se completa siguiendo los dictados de la plataforma “Puente al Futuro”, que guiará el rumbo de las políticas postgolpe (Mustafa, 2019).

En el contexto del Golpe, la sociedad política fue capturada por la ofensiva neoliberal, monitoreada heterogéneamente. De esa manera, se rompen los pactos que permitieron la redemocratización brasileña, así como la institucionalidad, abriéndose al despotismo característico de la subordinación hegemónica occidental. La disputa por la hegemonía en la sociedad civil se tensiona, día tras día, y las mediaciones también son blanco de enfrentamientos (Gramsci, 2002).

El dominio de la derecha en el aparato estatal se consolida a través de las elecciones democráticas de 2018 para elevar a la Presidencia de la República a Jair Messias Bolsonaro, un político mediocre de perfil autoritario que, en el contexto de la crisis y el anti PTismo, en los circuitos de las guerras híbridas, sobre todo, en el espacio virtual, emerge como lo nuevo en política, asumiendo matices de “mito”. El bolsonarismo irrumpe como fenómeno sociopolítico, encarnando un proyecto autoritario de extrema derecha, arraigado en la violencia, el autoritarismo, la desinformación y el conservadurismo reaccionario del fundamentalismo religioso.

BOLSONARISMO: EL DOMINIO DE LAS DERECHAS EN EL APARATO ESTATAL Y LA IZQUIERDA BAJO FUEGO (2019-2022)

En la dinámica de la historia política brasileña contemporánea, más específicamente, en el contexto del *Brasil del Presente*, el bolsonarismo constituye un fenómeno notable en sus procesos y diferentes configuraciones, expresándose en los cuatro años del gobierno de Bolsonaro y después, mostrando su carácter violento y naturaleza golpista ya en el inicio de una nueva era marcada por la derrota electoral, en 2022, con la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva.

El bolsonarismo surgió al final de la segunda década del siglo XXI y en el umbral de la tercera, después de la elección de Jair Messias Bolsonaro, en las elecciones presidenciales de 2018. Es un fenómeno sociopolítico, con raíces y capilaridades en la sociedad brasileña, siendo determinante para comprender sus sentidos y significados político-ideológicos. Es fundamental evaluar su nivel de penetración en la cultura política, delimitando grupos y segmentos sociales que se identifican con su núcleo ideológico y sus prácticas antidemocráticas y violentas (Carvalho, 2019, 2021).

En este esfuerzo analítico, una de las cuestiones en el curso de la vida republicana es comprender cómo un presidente elegido democráticamente por voto popular se convierte sistemáticamente en verdugo de la democracia, descalificándola, luego de que pasaran más de tres décadas de la debacle de la Dictadura Cívico-Militar (1964-1985). Analistas y militantes progresistas y de izquierda, desde el primer momento, estaban preocupados: ¿volvería a llamar el fascismo a nuestra puerta? Publicaciones en periódicos y artículos científicos, en su momento, dieron muestras de que sí, dado el movimiento pendular en clara aproximación con el autoritarismo, el reaccionario y el conservadurismo. En el eco de esas señales, no había duda de que se trataba de grupos y personas que se burlaban de la democracia, exaltaban la violencia y apoyaban el armamento de la población brasileña:

para cada persona, un revólver; para cada persona, un arma de fuego sería la solución de nuestros problemas seculares (Porto, 2022).

Innegablemente, el bolsonarismo es resultado de la convergencia de fuerzas constitutivas de la derecha y la extrema derecha en el escenario brasileño de la segunda década del siglo XXI y principios del tercero. En rigor, el bolsonarismo va más allá de Jair Bolsonaro, aunque esta figura grotesca y patética tiene significados sociopolíticos, trayendo consigo marcas históricas de la formación social brasileña y de nuestra propia cultura política. Siguiendo a José Murilo de Carvalho (2019), el ADN militar del presidente electo en 2018, reforzado por él mismo en la mayoría de sus testimonios y entrevistas, y la enorme presencia de personal de cuartel en el gobierno, provocó erupciones en algunos sectores de la población brasileña, temerosos de la reedición, en el siglo XXI, de una dictadura militar con relaciones promiscuas con el neoliberalismo (Porto, 2022). De todos modos, ¿cómo explicar la emergencia y consolidación del bolsonarismo en Brasil, constituido en el contexto del Golpe de 2016?

Un elemento a considerar para explicar el bolsonarismo es la constitución de la llamada nueva derecha brasileña, en su peculiar y compleja composición, con sus diferentes configuraciones. A lo largo de la segunda década del 2000, en los circuitos constitutivos de la crisis brasileña contemporánea, se constituye en el país una derecha con nuevos contornos a tono con las tendencias mundiales. Se sustenta en un atrevido plan estratégico de construcción y difusión de un ideario, de actualización de ideas y valores de la dictadura cívico-militar de 1964, mezclándose con elementos ideológicos del neoliberalismo y elementos doctrinarios de moralismo y del fundamentalismo religioso. También, desde una perspectiva genocida de la seguridad pública frente a la violencia (Carvalho, 2019, 2021). Resulta fundamental dilucidar esa extraña composición de la nueva derecha brasileña que cuenta con la adhesión de segmentos de las elites y de las clases medias, particularmente de jóvenes y de determinados segmentos de las masas que habitan las periferias.

En rigor, se trata de derechas que se entrelazan y complementan, constituyendo la base de lo que se denomina el *núcleo duro de la ideología bolsonarista* que ganó fuerte penetración social en el contexto del *lavajatismo*, descalificando a la política, a los políticos y, especialmente, a la izquierda (Carvalho, 2019, 2021). Es innegable la fuerza social del antiPTismo, que se extendió en medio de una “cruzada anticorrupción”, llevada a cabo de manera espectacular, por la “Operación Lava Jato”, ampliamente difundida por los medios de comunicación. En junio de 2019, el poder de esta cruzada “anticorrupción” comenzó a ser confrontado con las revelaciones de Intercept Brasil, que la mostraron como una “Operación de Filtraciones Rápidas”.²⁹

²⁹ La llamada *Filtración Rápida, Vaza Jato*, fue una serie de reportajes, publicados por el sitio web *The Intercept Brasil*, durante los años 2019 a 2020 que reveló acciones y comportamientos poco éticos y transgresiones de la Fuerza de Tarea de la Operación Lava Jato, con énfasis en las relaciones entre el coordinador de dicho operativo en el ámbito del Ministerio Público de la Federación, Deltan Dallagnol y el entonces Juez Federal, Sérgio Moro. Los reiterados informes, elaborados a partir de archivos de mensajes privados, grabaciones de audio, videos, fotos y documentos judiciales, acabarían con las dudas que se pudieran tener sobre la actuación del activismo político de Lava Jato y el exjefe del 13° Juzgado Federal de Curitiba contra el expresidente Lula. *Vaza Jato* sería fundamental para cambiar la comprensión del Supremo Tribunal Federal sobre la Operación Lava Jato y, específicamente respecto de

De hecho, el surgimiento del bolsonarismo se da en un Brasil en crisis, con la democracia en desmantelamiento, a raíz de un golpe de Estado, el Golpe de Estado de 2016. Se trata de un tiempo histórico de crisis de hegemonía, que se expresa en nuevas relaciones de fuerzas dentro de la ecuación Estado/Sociedad Civil.

En las elecciones de 2018, las fuerzas progresistas y de izquierda fueron anuladas por el odio, construido sistemáticamente por la connivencia de las élites con el Poder Judicial y sedimentado por los medios de comunicación. La detención política del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el 7 de abril de 2018, se revela como un símbolo de estos tiempos de Golpe y de dominio de las derechas, ocupando el conjunto del Estado brasileño, involucrando al Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial (Galvão, 2021).

De hecho, es en esta simbiosis de derechas, crisis, conservadurismo, avance autoritario, políticas ultraliberales y contrarreformas, inseguridades e inestabilidades que se constituye el “Bolsonarismo”, como “punto de llegada” del Golpe de 2016, su culminación, con consecuencias impredecibles, en el umbral de la tercera década del siglo XXI. En el actual momento histórico brasileño, con el tercer gobierno de Lula, iniciado oficialmente en enero de 2023, la cuestión, que permea el análisis de las relaciones de fuerzas, es evaluar las perspectivas del bolsonarismo por fuera del aparato estatal. De hecho, en las elecciones de 2022, el bolsonarismo, incluso con estrategias espurias de uso ostensible del aparato estatal, logró un voto expresivo. El elemento central de análisis es verificar los rumbos del bolsonarismo. Al no aceptar la derrota electoral, segmentos radicales del bolsonarismo emprendieron actos violentos que culminaron con el terrorismo de la invasión y depredación de las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el 8 de enero de 2023, fecha que entra para la historia como confrontación contra el Estado Democrático de Derecho, de forma nunca vista en la historia de la República brasileña.

Entrando en el debate, surge una segunda cuestión clave sobre la composición misma del bolsonarismo, en su versión original de 2019 y en sus reconfiguraciones en el ámbito de 2020, sobre todo a lo largo de 2021-2022 y, ahora, a principios de 2023. En rigor, el bolsonarismo presenta una composición compleja y de riesgo, que articula diferentes matrices: ultraliberalismo dependiente, militarismo autoritario, reaccionarismo político-cultural y justicialismo de exterminio de los considerados *bandidos*, como sustento de la seguridad pública (Carvalho, 2019, 2020).

Márcio Porto (2022), al resumir la composición del gobierno de Bolsonaro (2019-2022), identifica tres centros de gravedad político-ideológica en su base de apoyo. El primero está formado por oficiales activos y de reserva de las Fuerzas Armadas, ubicados estratégicamente en cargos institucionales, particularmente en los sectores administrativos, responsables de las políticas de infraestructura. El segundo tuvo como objeto el control del poder judicial, representado en un principio por el ex juez Sérgio Moro, imbuido de la tarea de intensificar las acciones del aparato represivo del Estado, cuya actuación fue combatida parcialmente por el Congreso Nacional y por la difusión de las conversaciones sobre temas vergonzosos expuestos por el Ministerio Público, en el ámbito de las operaciones de Lava Jato. Inviabile y en curso de colisión con su mayor

la condena de Luiz Inácio Lula da Silva, lo que inclusive llevó en 2021 a la Suprema Corte de Justicia a reconocer la parcialidad del exjuez Sérgio Moro en los casos relacionados con el entonces expresidente de la República, anulando las condenas contra Lula en el ámbito del Lava Jato.

patrocinador, el presidente Jair Bolsonaro, Sergio Moro tiró la toalla optando por una candidatura a la presidencia de la República en 2022, que de hecho no prosperó. En rigor, con la salida de Moro, el fundamento jurídico de la defensa radical del gobierno quedó plasmado en la figura de Augusto Aras, fiscal general de la Unión metamorfoseado en fiscal general del Gobierno.

Y, según los aportes de Porto (2022), en tercer lugar, pero no menos importante, se destaca el núcleo económico en el poder, que promovió una política liberal, en cuyo seno se encuentra el aumento de la desregulación de la economía brasileña, en línea con los lineamientos del gran capital financiero.

Porto (2022) evalúa que la pandemia de COVID-19, a principios de 2020, pospuso temporalmente los proyectos de destrucción del Estado, hasta nuevo aviso. Finalmente, las sesiones de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del COVID-19, en el Senado Federal, explicaron los modos de ser y hacer del abominable núcleo ideológico del gobierno, actuando sobre diversos sectores gubernamentales, atacando con vehemencia el medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas, a las poblaciones afrobrasileñas, a campesinos, mujeres y población LGBTQIA+.

Es innegable que el bolsonarismo encarna una composición heterodoxa, permeada por tensiones que se revelaron en los cuatro años de gobierno, con la eliminación sistemática de personajes clave, que, de alguna manera, podrían comprometer su proyecto autoritario, ultraliberal, extremadamente conservador.

Los militares en el bolsonarismo y sus bases ideológicas y políticas

En el desentrañamiento del bolsonarismo, es fundamental analizar de forma específica la inserción de los militares en la composición del gobierno de Jair Bolsonaro, o sea, sobre el sentido y las perspectivas de la participación de los uniformados en la crisis brasileña contemporánea. Como acertadamente cuestiona Manoel Domingos Neto (2021), ¿cómo entender las disposiciones para apoyar y legitimar el liderazgo de un indisciplinado oficialista, excomulgado por la institución en la década de 1980, por actitudes de insubordinación y de explosivas disposiciones corporativas rebeldes? ¿Cuáles son las razones que permiten comprender el significado de la actuación militar directa en la campaña electoral de Bolsonaro? Además, ¿cuál es la naturaleza de las opciones de participación militar al aceptar desempeñar funciones clave en el gobierno de Bolsonaro, arriesgarse a politizar la corporación militar y caer en el desprestigio ante la sociedad? ¿Cuáles son los límites de la complicidad entre Bolsonaro y los militares? (Oporto, 2022).

Para Moraes (2019), desde la elección de 2018, han habido varias interpretaciones sobre la fuerte participación de los militares en el gobierno de Bolsonaro. El ensayista destaca, en sus reflexiones, dos interpretaciones en definitiva compatibles. La primera vislumbraría rayos de equilibrio, a partir de la presencia de militares en el gobierno, frente a las disposiciones ultraliberales de rendición, de ideas y prácticas protofascistas y evangélicas talibanes identificadas en el gobierno. El otro considera esta presencia como indicativa de la creciente ocupación del poder del Estado por parte de las Fuerzas Armadas. En todo caso, ante los indicios de posibles pugnas internas en el campo político de la derecha, hay que tener en cuenta que los militares deben al presidente la dádiva de su

retorno al núcleo central del poder del Estado, sin que se haya suspendido el funcionamiento de las instituciones republicanas y también sin la presencia de tropas en las calles, clausura del Congreso Nacional o censura explícita a la prensa (Porto, 2022).

Leirner (2021) sostiene que, para comprender el significado del involucramiento de los militares en los hechos políticos más significativos ocurridos en el país, al menos desde 2013, es necesario partir del esclarecimiento de la instauración de cierto tipo de guerra: la híbrida. El punto de partida en el esfuerzo por comprender este proceso abarca las llamadas *Jornadas de junio de 2013*. De hecho, en los últimos años, muchos intérpretes identifican en los hechos que caracterizaron aquellas manifestaciones el punto de inflexión de una especie de “revolución de colores” que sería el desencadenamiento de una estrategia de la que muchos hablan, pero pocos pueden decir de qué se trata: una guerra híbrida. Según la interpretación de Leirner, es plausible que los militares aprovecharan el contenido de las *Jornadas de junio de 2013* y se mostraran partidarios del intervencionismo propagado por la derecha, sin embargo, fueron mucho más allá, en su participación. En otras palabras, en el entendimiento de ese estudioso, los militares actuaron como *encantadores* de varios sectores militares en sus furores anti-PT, entrelazados con elementos de una estrategia de lo que llama *guerra híbrida*, resultando en la toma del Estado. El autor señala que este proceso de intensificación de la participación y el protagonismo militar en el gobierno de Bolsonaro ha registrado un crecimiento visible, especialmente desde 2019.

En medio del mismo esfuerzo analítico, Leirner (2021) es consciente de que muchos militares y civiles surfearon en las olas del ambiente hostil al Partido de los Trabajadores (PT) y a la izquierda en general, como efecto colateral de las consecuencias del lavajatisimo, contribuyendo al crecimiento de la candidatura de Bolsonaro. Sin embargo, el eje central de sus problematizaciones gira en torno a sus análisis comprensivos de cómo una parte del generalato articuló deliberadamente ciertos discursos, legitimó ciertos puntos de vista y se colocó en el *front* de las posiciones políticas de derecha. No sería, por tanto, mera coincidencia que estos generales formaran un grupo de élite de la jerarquía militar, en cierto modo íntimos conocedores y practicantes de las estrategias que se elaboraron para desmantelar a los insurgentes en Haití, en la República Democrática del Congo y, luego, en un regreso al ámbito local de Brasil, en las Operaciones de Garantía de la Ley y el Orden (GLOs). Tal grupo de generales, entrenados en operaciones psicológicas, habría elaborado una versión nacional de la teoría de la guerra híbrida, puesta en práctica, desde entonces, en territorio brasileño. Tratase de una especie de espiral político-ideológica y militar que, a primera vista, se presenta como portadora de una baraja doctrinal y estratégica. Tal componente confuso es en el fondo precisamente la columna vertebral de una doctrina de estrategia de defensa desarrollada por los estadounidenses, en los contornos posmodernos de hacer la guerra. Así, el grupo de generales antes identificado, elaboró, en un primer momento, un viraje, o lo que se denomina un *ataque cognitivo*, al interior de las propias Fuerzas Armadas y, posteriormente, tal arsenal de ideas penetró en la población brasileña en general. La consecuencia más explícita de esto, hoy en día en Brasil, es que estamos inmersos en un universo de absurdos, caos, incertidumbres y

desacuerdos.³⁰ La gran cuestión es que tales procesos difícilmente son percibidos como una guerra, debido a la heterodoxia de las acciones que los caracteriza.

Leiner (2021) demuestra que fue alrededor de la década del 2000, especialmente después de las guerras estadounidenses en Irak y Afganistán, que los militares comenzaron a tratar el concepto de *guerra híbrida* en producciones documentales, aproximándolo a las guerras salvajes tradicionales o convencionales, mezclándolas con elementos tácticos irregulares. Para los operadores matriciales del concepto de *guerra híbrida* el punto central es enfatizar la no distinción entre guerras estatales y no estatales, es decir, el centro neurálgico es provocar la generalización de los conflictos, haciendo cada vez más fluidas las fronteras entre la guerra y la paz, civiles y militares, siendo perfectamente plausible que estemos en guerra sin darnos cuenta. Según Leirner, en las bases de esta doctrina estaría, en el ámbito militar, la comprensión del mundo desde la dicotomía amigo/enemigo, cuya operacionalidad sería válida para “una persona, una institución, una Fuerza Armada extranjera, para un país y para una ideología” (Porto, 2022).

En la cartilla de la guerra híbrida, según Piero Leirner (2021), para ganar la batalla es esencial la influencia de una “clase media no comprometida políticamente” y que los no comprometidos comiencen rápidamente a oponerse a sus líderes políticos. Lo fundamental es lograr una expansión del descontento, actuando por medios propagandísticos y operaciones psicológicas para desacreditar al gobierno, como se hizo en el caso del juicio político a Dilma Rousseff y, ahora, en la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022. En los últimos años, Brasil ha sido un perfecto laboratorio político e ideológico, en el que se verificaron efectivamente los preceptos de la doctrina de la guerra híbrida. Cabe recordar que uno de los principales instrumentos de este proceso fue la Escuela Superior de Guerra, nido político e ideológico de los principales generales con cargos importantes en el gobierno Bolsonaro, tales como Hamilton Mourão, Augusto Heleno, Eduardo Villas Bôas, y otros, todos adiestrados en diferentes doctrinas y prácticas desarrolladas, desde 2014, y que pasaron a contaminar el mundo intra y extra muros de los cuarteles, exacerbando la figura de enemigos internos, representados emblemáticamente por las izquierdas y el PT, construyendo un imaginario simbólico y eficaz de que la única alternativa sería una candidatura con ligas umbilicales con los militares (Porto, 2022).

En el escenario de un horizonte de expectativas poco auspicioso para la democracia en Brasil, el 1 de enero de 2023, Luiz Inácio Lula da Silva tomó posesión de su tercer mandato a la Presidencia de la República, asumiendo compromisos para garantizar la reestructuración de un país plural, diverso, socialmente incluyente, ambientalmente sustentable, donde las instituciones funcionen efectivamente y, por último y no menos importante, sin olvidar que debe enfrentar los problemas de las relaciones cívico-militares en el país.

³⁰ El 8 de enero de 2023, el Estado democrático de derecho en Brasil vivió uno de los momentos más difíciles de su historia posteriormente a la redemocratización de 1985, tras 21 años de dictadura cívico-militar. La Plaza de los Tres Poderes de Brasilia fue invadida por hordas bolsonaristas que desrozaron la sede de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en medio de un intento de golpe orquestado por la extrema derecha.

Entrando en los entresijos de la disputa hegemónica entre fuerzas progresistas/de izquierda y las bolsonaristas/de extrema derecha, conviene, como guía de análisis, demarcar las posibilidades y perspectivas de este tercer gobierno de Lula, elegido entre una amplia alianza de fuerzas, galvanizadas por la intransigente defensa de la Democracia. De hecho, Lucio Oliver (Oliver, 2023) advierte que la llegada al poder del gobierno por mayorías electorales no conlleva de por sí suficiente acumulación de fuerzas económicas, sociales, político-militares-culturales para tener una mayoría política organizada como poder. Por lo tanto, el programa y la política de estos gobiernos tienden a ser progresistas y no a basarse en reformas profundas. Y he aquí el dilema: ¿Cómo pasar de una situación a otra en tanto fuerza dirigente con poder? Es necesario considerar que si bien las políticas progresistas pueden ser parte de las políticas de acumulación de fuerzas, esto no sucede sin el trabajo colectivo de masas. Para ello, empero, se necesita una concepción y una ubicación estratégica (Oliver, 2023).

Configuraciones y expresiones recientes del bolsonarismo

De hecho, el bolsonarismo en el ejercicio sistemático de la antipolítica, bloqueando los procesos y mecanismos democráticos arroja a Brasil al oscurantismo, con persecución explícita de la ciencia y la investigación. Desde esta perspectiva, emprende ataques frontales a las universidades públicas, en total irrespeto a la autonomía universitaria. Ideologiza las cuestiones científicas cuando estas son contrarias a sus intereses, en un choque permanente con el pensamiento crítico y la ética del buen vivir (Carvalho, 2021).

Los cuatro años de gobierno revelaron una incapacidad del entonces presidente Jair Bolsonaro para asumir el liderazgo de la nación brasileña. En las formulaciones de Leonardo Avritzer (2020), el expresidente se constituyó en la encarnación de la antipolítica, descalificando e incluso negando la condición central de la política en democracia, oponiéndose a procesos de diálogo y con la sociedad civil. En términos de Andreas Schedler (1997), las posturas, la actuación y el discurso de Bolsonaro mezclan dos formas de antipolítica: la *antipolítica moral*, que sustituye el ejercicio de la política por la imposición arbitraria de valores morales, enraizados en el conservadurismo religioso, y la *antipolítica del espectáculo*, al superponer el necesario debate político a través de la teatralización, con el espacio virtual como escenario de acción, descalificando los espacios oficiales, atacando la liturgia del cargo que ocupa (Galvão, 2021). Son emblemáticos de esta antipolítica, e incluso de la falta de habilitación del expresidente para ejercer el cargo, el 7 de septiembre de 2021, y toda la construcción de un intento de golpe de Estado, con la inmediata reacción del Poder Judicial y de las fuerzas políticas democráticas, así como el retroceso aparente de Jair Bolsonaro.

En los caminos del Brasil del Presente, para sustanciar la crisis brasileña que peligrosamente se agudiza, es fundamental realizar un deslinde que entra en la historia reciente del país: el estallido de la pandemia de la COVID-19, en el segundo año del gobierno de Bolsonaro y todavía en curso en el escenario actual de 2023. En Brasil, un país continental, marcado por desigualdades y asimetrías regionales, entre estados y dentro de los propios estados, la pandemia de coronavirus se propagó desde el epicentro de São Paulo y rápidamente tomó forma multicéntrica, con estados en diferentes regiones concentrando

niveles muy altos de infección y muertes. Es la tragedia del coronavirus, con determinantes sanitarios y sociales, reproduciendo, en Brasil, con extrema gravedad, escenarios vividos en todo el mundo. La especificidad brasileña es que esta tragedia sanitaria ocurrió en medio de la mala gestión y los excesos del bolsonarismo, especialmente en el período 2020-2021. Así, la pandemia sanitaria del coronavirus se fusiona con la pandemia sociopolítica-cultural del “bolsonarismo” (Carvalho, 2021). El tema más grave fue la falta de voluntad política de la entonces Presidencia de la República, en el sentido de llevar a cabo un enfrentamiento real a la grave crisis del COVID-19 y a sus trágicas consecuencias económicas y sociales. Bolsonaro, en pleno período crítico de la pandemia, efectivizó, sin límites y controles, la ideologización en el campo de la salud con la defensa intransigente de la cloroquina como remedio al COVID-19, en los llamados *primeros tratamientos*, sin ninguna evidencia científica. El desmando fue total también por la falta de coordinación nacional para enfrentar la pandemia. La crisis política se agudizó bajo diferentes expresiones que abarcaron desde los embates del expresidente con gobernadores y alcaldes, hasta la negación sistemática de cualesquiera medidas sanitarias, inclusive, el uso de la mascarilla y el aislamiento social.

En el escenario de la vacunación —una de las principales medidas para combatir el COVID-19— Jair Bolsonaro, en sentido contrario a otras autoridades que planteaban directrices generales a las naciones, también se atrevió a ideologizar el tema de la vacuna en sí, avanzando en su empeño genocida, despreciando el negativo saldo de alrededor de 700 000 muertos, en un Brasil de luto.

En 2021, el presidente Jair Bolsonaro comenzó a perder popularidad entre la población brasileña, manteniendo, sin embargo, intocable el 20% de sus simpatizantes que lo apoyan incondicionalmente bajo cualquier circunstancia. En el contexto internacional, el expresidente se mostró aislado, dadas sus posiciones no republicanas y las posiciones de su gobierno que comprometieron la imagen de Brasil, consagrada en otros gobiernos, buscando, entonces, alianzas específicas, como el intento de acercamiento con Rusia en febrero de 2022.

Es emblemática la postura irresponsable y agresiva del gobierno de Jair Bolsonaro hacia el medio ambiente, con devastación y quemas en niveles lamentables, nunca vistos, agravados por el desmantelamiento de las estructuras de fiscalización y control ambiental. De hecho, Bolsonaro, en su accionar dentro del Estado brasileño, reveló sus acuerdos espurios con los dueños de capitales vinculados al neoextractivismo y la minería ilegal. Las tierras indígenas, en ese momento, se convirtieron en los blancos preferidos de su política gubernamental antiambiental.

En el contexto del bolsonarismo, es fundamental destacar que la lógica liberal implementada desde el Golpe de 2016 se intensificó, agravando mucho la crisis brasileña contemporánea, añadiendo nuevos elementos. A partir de 2021, la crisis se agudiza con el retorno creciente de la inflación, concentrando el ingreso y aumentando la desigualdad. De hecho, en Brasil, en el umbral de la tercera década del siglo XXI (2019-2022), se vivía una situación de estancamiento: el alza de los precios en el país superaba los dos dígitos, comprometiendo el presupuesto de las familias trabajadoras y, de manera especial, de la población vulnerable, para expandirse con el regreso del país al Mapa del Hambre. Al

mismo tiempo, la actividad económica permaneció estancada. En esta situación límite, el gobierno presentó entonces, como salida, subir las tasas de interés.

El bolsonarismo, en el contexto de 2021/2022, asumió estrategias y tácticas para blindarse ante la posibilidad de un juicio político y preparar el terreno para sus ataques golpistas. Dos estrategias, en su momento, merecen una mención especial. La primera se centra en la alianza de Bolsonaro con el gran centro político, el *Centrão*, reuniendo a la derecha tradicional –representante, por excelencia, del fisiologismo– dejando así caer por tierra el “mito de Bolsonaro” como encarnación de lo “nuevo en política”, bandera desplegada por la derecha en las elecciones de 2018. Esta alianza constituye un elemento estratégico lanzado de la mano del bolsonarismo para garantizar su permanencia en el poder, en medio de más de 153 pedidos de juicio político³¹ archivados por los presidentes de la Cámara Federal, Rodrigo Maia (2019-2020) y Arthur Lira (2021-2022), figuras importantes en las huestes del “Centrão” y aliados de Bolsonaro en ese momento. De hecho, el juicio político, como la “espada de Damocles”, parecía pender sobre la cabeza de Jair Messias Bolsonaro, llevándolo a pararse frente al escritorio de negocios de la derecha tradicional. Es importante considerar que esta alianza del bolsonarismo con el “Centrão” cambia su composición original, agregando la derecha tradicional a las llamadas nuevas derechas, exigiendo contrapartes del gobierno en el juego de fisiologismo político en el que el “centrão” tiene toda la experiencia. Cabe señalar que, en términos de proyecto político, con respecto al ultraliberalismo, el militarismo y el reaccionario político-cultural, no hay un desacuerdo fundamental entre el bolsonarismo y el “centrão”; por el contrario, las afinidades son claras y explícitas (Carvalho, 2021). En rigor, en los últimos días del Gobierno de Bolsonaro (2021-2022), el centrão constituye la fuerza decisiva en la composición actual del bolsonarismo.

La segunda estrategia se refiere a los ataques sistemáticos del bolsonarismo al Poder Judicial, en la figura de los ministros del Supremo Tribunal Federal y del Tribunal Superior Electoral-TSE. Esta estrategia asume distintos matices, desde el ataque frontal a los ministros, en concreto, a Alexandre de Moraes, hasta el persistente pedido de cierre del Supremo Poder Judicial, asumido por los bolsonaristas, en sus manifestaciones, impregnadas de odio y violencia. Tales enfrentamientos permanentes entre el Ejecutivo y el Poder Judicial representaron ataques a la democracia, dejando siempre a la vista el peligro inminente de un golpe de Estado por parte de la Presidencia de la República, anunciado, de diversas formas, el 7 de septiembre de 2021 y el 7 de septiembre de 2022, como ingrediente macabro en las celebraciones patrias. En ese tono autoritario y golpista, una artimaña específica de Jair Bolsonaro y su hueste de seguidores se centró en la acusación, sin ninguna prueba, de fraude encarnado en las máquinas de votación electrónica. Esta acusación indebida fue fuertemente manipulada por Bolsonaro y sus partidarios, especialmente en su último año de gobierno, preparando elementos para un golpe de Estado, a lanzarse en caso de derrota en las elecciones presidenciales de 2022.

De hecho, desde fines de 2019, con la liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, y, sobre todo, en 2020 y 2021, nuevos vientos comenzaron a mover el tablero de la escena política del país, alterando la correlación de fuerzas. En esa perspectiva, el Poder

³¹ Durante el gobierno de Bolsonaro, la Cámara Federal recibió 153 solicitudes de juicio político, con 97 solicitudes originales, 7 adiciones y 47 solicitudes duplicadas (Pública, 2022).

Judicial asume un papel protagonista, realizando procesos de “judicialización de la política” y “politicación de la justicia” (Galvão, 2022), esta vez, en favor de la democracia. En el escenario brasileño reciente, hay hechos históricos decisivos: la restitución de los derechos políticos del entonces expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y el reconocimiento de la parcialidad del exjuez Sérgio Moro, en el proceso contra Lula, en el ámbito del LavaJato.

Otro elemento importante en el juego político fue la instalación de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del COVID-19, en abril de 2021, con base en las deliberaciones del Supremo Tribunal Federal. De hecho, la CPI difundió, en cada sesión, pruebas de delitos por omisión y actuación del gobierno de Bolsonaro, llegando incluso a señalar delitos de corrupción. El país y el pueblo brasileño, a través de los medios de comunicación, vieron en su irresponsabilidad y evidencia de crímenes en diferentes niveles el espectáculo abominable de las entrañas del gobierno de Bolsonaro.

A fines de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2021, en un clima propicio para la resistencia y la lucha, emergen y se consolidan manifestaciones callejeras contra el bolsonarismo. Estas seis manifestaciones, realizadas cada mes, mostraron el descontento y la indignación de segmentos de la población contra el bolsonarismo. Y la lucha de clases, en ese momento, estaba claramente explicada... Las derechas y el gobierno de Bolsonaro también salieron a las calles, en motopaseos y manifestaciones, para expresar su apoyo al bolsonarismo.

En la disputa hegemónica, ya en el segundo semestre de 2022, hito, decisivo, fueron precisamente, en la conmemoración del evento democrático del 8 de agosto de 1977, los actos de protesta realizados en todo el país, ante los ataques del bolsonarismo contra la democracia y sus instituciones con cuestionamiento, infundado, del proceso electoral brasileño, con insinuaciones de postergación del proceso electoral e, incluso, con el llamado de posible irrespeto a la voluntad popular, expresado en las elecciones de 2022. Merece destacarse el evento del 8 de agosto de 2022 en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Paulo, de la lectura de la “Carta por la Democracia”, con casi un millón de firmas de brasileños y brasileñas, incluidas figuras públicas de diferentes áreas. En esa oportunidad también se leyó la “Carta por la Democracia”, articulada por la Federación de Industriales de San Paulo (FIESP), que manifestó la adhesión de segmentos del capital a las luchas democráticas. Este acto histórico contó con la amplia participación de diferentes fuerzas sociales, presagiando ya el gran frente amplio que garantizó la elección de Luiz Inácio Lula da Silva a la Presidencia de la República, en las elecciones de 2022.

Consideraciones finales: Brasil en la afirmación de la democracia

Las elecciones presidenciales de 2022 estuvieron marcadas por polarizaciones y tensiones, revelando dos proyectos antagónicos en disputa. El primero es el *Proyecto Bolsonarista*, asumido por la extrema derecha, liderada por Jair Messias Bolsonaro, para apalancar los intereses de segmentos del capital y, en particular, de las élites financieras, las vinculadas al agronegocio y la minería, beneficiarios por excelencia de las acciones estatales del gobierno de Bolsonaro. Es un Proyecto de Nación acorde con los ideales neoliberales-conservadores, en estrecha conexión con la ideología militarista y con la re-

tórica moralista y reaccionaria del fundamentalismo religioso (Johnson, 2022; Carvalho, Guerra, Américo Moreira, 2021).

El otro es el *Proyecto de un Frente Amplio Democrático*, enarbolado por fuerzas progresistas y de izquierda, bajo el liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva, que plantea un ideario democrático de derechos, fundado en la dialéctica igualdad-diferencia, en la perspectiva de una reconstrucción de políticas públicas volcadas para las clases trabajadoras y, prioritariamente, para los segmentos vulnerabilizados por el capital y por la colonialidad del poder (Pinho, 2022; Maciel, 2022; Bezerra, 2022; Porto, 2022).

En medio de una feroz disputa y una intensa polarización, el Proyecto Democrático popular ganó las elecciones de 2022, en la segunda vuelta, por un pequeño margen de votos, y Lula fue elegido para su tercer mandato en la presidencia de la República de Brasil. Las tensiones que marcaron el proceso electoral se mantienen y se reconfiguran, tanto a nivel macro de la geopolítica como a nivel nacional, con la consolidación de una extrema derecha de carácter golpista y violento.

De hecho, las dimensiones de las crisis que vive la geopolítica mundial en la contemporaneidad impactan intensamente en la coyuntura nacional, en particular a los sectores dominantes, alineados bajo la hegemonía estadounidense, conduciendo según el caso a posturas más unipolares o multipolares. En suelo brasileño, es posible observar varias dimensiones de las guerras híbridas, que presionan para la intensificación de las políticas neoliberales y el conservadurismo a la manera de sectores del Partido Republicano de los EE.UU., vinculados a las ideologías defendidas por Donald Trump (Johnson, 2022).

Indiscutiblemente, la situación geopolítica mundial es de inestabilidad, con un recrudescimiento de la disputa entre Estados Unidos y China/Rusia, en medio de una guerra que confronta al poder ruso con el imperialismo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), materializada en la Guerra de Ucrania, que estalló en febrero de 2022 y está en curso. De hecho, hay un choque de modelos capitalistas, con intereses económicos y geopolíticos bien definidos.

Bajo ese marco, los vínculos entre el trumpismo y el bolsonarismo son nítidos y se expresan en las posturas autoritarias y conservadoras que marcaron los cuatro años del gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y continúan persistiendo, en medio de estrategias golpistas, en una feroz ofensiva contra la democracia y sus instituciones. Cabe mencionar, como elemento importante de las diversas expresiones de la correlación de fuerzas en la dimensión geopolítica, la posición del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien se manifestó en total desacuerdo con el bolsonarismo y sus vínculos ideológicos políticos y tácticos con el trumpismo, sustentando con tal posición, circunstancialmente, la defensa de la democracia, amenazada por las fuerzas de la extrema derecha. Ello refuerza el Proyecto del Frente Amplio Democrático.

Es un hecho indiscutido que la victoria de las fuerzas progresistas en Brasil, a principios de 2023, cambia la correlación de fuerzas que ahora vivimos en el umbral del tercer gobierno de Lula (Lula 3). En primer lugar, se destaca el sentimiento de alivio que siente gran parte de la sociedad con la salida de Jair Bolsonaro y su proyecto considerado neofascista por analistas y militantes. La toma de posesión de Lula, el 1 de enero de 2023, revestida de un fuerte simbolismo popular, constituyó una fiesta democrática anhelada, renovando esperanzas para una nueva era. Sin embargo, el bolsonarismo contó

con un voto expresivo aun en su derrota electoral, que delimita una fuerza social nada desdeñable, alentada por un grupo significativo en el Congreso vinculado a la derecha y la extrema derecha, con representantes del militarismo y el fundamentalismo religioso, de gran parte de las elites financieras y empresariales y del agronegocio predatorio del medio ambiente.

Apoyado en un Frente Amplio Democrático, con fuerzas sociales de diversos espectros, el gobierno de Lula deberá enfrentar desafíos para aplicar su programa de gobierno enfático en el cumplimiento de demandas igualitarias. De hecho, el gobierno actual está bajo presión desde dentro y de fuera para que continúe las pautas neoliberales, que son dominantes en el escenario mundial. En rigor, el social liberalismo del PT, en el tercer gobierno de Lula, enfrenta una coyuntura compleja, marcada por la consolidación de un contexto de estancamiento, a nivel mundial y en Brasil. Sin embargo, en medio de tensiones y desafíos se puede apreciar una clara tendencia al avance en la defensa de los intereses democrático-populares.

Las primeras señales del gobierno petista (Lula 3) indican la garantía de la lógica del ajuste fiscal, sin afectar los compromisos asumidos en la campaña presidencial, para enfrentar la cuestión social, los dilemas ambientales y la degradación que afecta al medio ambiente y a los pueblos originarios.

En esa perspectiva, resulta crucial que el nuevo gobierno logre la aprobación de una *Reforma Tributaria Progresiva*, que incluya la carga sobre la renta y el patrimonio de los segmentos más ricos, contribuyendo a la reducción de las desigualdades en el país, agravadas exponencialmente en el gobierno de Bolsonaro en medio de la pandemia de COVID-19. La reforma tributaria también tendría como objetivo sustituir los impuestos indirectos, que gravan la producción, por impuestos directos sobre las ganancias de la renta y del patrimonio. También hace parte de la agenda del gobierno posibilitar la reindustrialización del país, con base en una matriz energética limpia, para garantizar la preservación del medio ambiente.

La implementación de su estrategia de reindustrialización por parte del gobierno de Lula no está exenta de contradicciones: representa una tensión con el modelo de ajuste rentista neo-extractivista, predominante en Brasil con diferentes matices desde la década de 1990. Finalmente, a diferencia de las concepciones ortodoxas, una de las directrices del actual gobierno de Lula es mantener el equilibrio de las cuentas públicas sin comprometer sus inversiones en las áreas social, ambiental y de infraestructura. El gobierno pretende aprobar un nuevo marco fiscal, contraponiéndose a la Enmienda Constitucional/95, del Techo de Gasto Público, símbolo de la lógica ultraliberal del Golpe de 2016, que acentuó las desigualdades sociales.

De acuerdo con el Frente Amplio Democrático que lo apoya, el gobierno asume una composición plural, con representaciones de diferentes fuerzas sociales. Ha designado personalidades públicas relevantes para áreas estratégicas y recreado el Ministerio de Cultura. Garantiza rango ministerial a secretarías y órganos vinculados a agendas secundarias en el gobierno anterior, como las de la Mujer, Derechos Humanos y Ciudadanía, además de establecer un órgano específico para reconocer y garantizar los derechos de la población LGBTQIA+. También innova con la creación de tres ministerios: Pueblos Indígenas, Igualdad Racial y Gestión e Innovación en los Servicios Públicos.

En el ambiente internacional, el nuevo gobierno pretende retomar el protagonismo mundial de Brasil, promoviendo un giro en la política exterior, con acciones efectivas en temas relevantes como la cooperación en América del Sur y África, la Cuestión Ambiental, los Derechos Humanos y los acuerdos comerciales regionales, destacando el Mercosur y la Unión Europea.

Un hito histórico en el contexto de la correlación de fuerzas brasileña es la aparición pública del *terrorismo de extrema derecha* que confronta el Estado Democrático de Derecho y su institucionalidad. Ese es un fenómeno mundial, con expresiones particulares en Brasil, en términos de actos cometidos para “provocar terror social o generalizado, poniendo en peligro a personas, bienes, paz pública o seguridad pública”, como lo indica la Ley Antiterrorista (nº 13.260, de 16 de marzo de 2016). En esa perspectiva, se destacan los actos de segmentos extremistas del bolsonarismo que, insatisfechos con la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y llamando al regreso del expresidente Jair Bolsonaro vía golpe de Estado, después de las elecciones bloquearon carreteras, accesos a ciudades, intentaron invadir la sede de la Policía Federal (PF), fraguaron atentados con bomba cerca del aeropuerto de Brasilia, promovieron vandalismo en el día de la diplomatura del presidente y vicepresidente democráticamente elegidos. Un punto alto en la estrategia golpista de los bolsonaristas fueron los campamentos, en los jardines exteriores de los cuarteles militares, en las capitales y grandes ciudades brasileñas, con una duración de más de dos meses, con una estructura logística impresionante. Tales expresiones de terrorismo de derecha culminan en un ataque a la democracia y sus instituciones nunca antes visto en la historia republicana brasileña.

En rigor, el 8 de enero de 2023 marca el ataque violento y autoritario de la extrema derecha en Brasil contra el Estado Democrático de Derecho, al intentar tomar las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se trató de un intento de golpe de Estado, de una embestida bárbara contra la propiedad pública, destruyendo el patrimonio artístico y cultural, saqueando edificios, en un afán de borrar la memoria secular brasileña. Los policías que defendieron valientemente el Palacio de Planalto, el Congreso Nacional y la sede del Supremo Tribunal Federal aseguraron en sus testimonios que se trataba de terroristas con entrenamiento específico para atentados, mezclándose con una masa de maniobras, yendo contra edificios símbolo de la democracia. Conviene resaltar que tales prácticas de terror bolsonarista fueron planeadas meticulosa y debidamente financiadas a través de una estructura organizativa forjada en las redes sociales *on line* y materializadas en las calles.

La extrema derecha brasileña, en el espacio de sus *think tanks*, apoyándose en sus intelectuales orgánicos—teniendo a Olavo de Carvalho como icono— hizo uso maquiavélico al revés del “pensamiento gramsciano”, a favor de intereses autoritarios y liberal-conservadores. El terrorismo de la extrema derecha de los bolsonaristas parece indicar la existencia de una amalgama de las dos formas de lucha acuñadas por Antonio Gramsci al discutir la cuestión de luchar por el socialismo. De hecho, el terror bolsonarista posibilita una “*guerra de posiciones*”, expresada en la formación procedimental de activistas, difusión de sus ideas, tergiversaciones y ataques al marxismo, propagación de *fake news*, uso, con profesionalismo, del mundo virtual y ocupación de espacios públicos, especialmente las universidades. Al mismo tiempo, fortalecidos por esa difusión político-ideo-

lógica liberal-conservadora, construyen prácticas terroristas de extrema violencia, que se evidenciaron en todo el proceso posterior a la elección del presidente Lula, culminando el 8 de janeiro.

La disputa hegemónica está abierta, bajo una nueva correlación de fuerzas, instaurada en 2023. El gran desafío para los sectores progresistas y de izquierda es la construcción democrática en respuesta a las interpelaciones de nuestro tiempo. En esta perspectiva, se impone una pregunta fundamental para orientar los debates públicos y erigir un plan táctico-estratégico: ¿qué democracia es posible construir a partir de una movilización de masas en este nuevo tiempo que se instaura en Brasil?

REFERENCIAS

- ALMEIDA, Silvio Luis de (2018). ¿Qué es el racismo estructural? *Belo Horizonte* (MG): Alfabetización, (Colección Feminismos Plurales).
- AMÉRICO Moreira, Carlos (2022). Brasil y Nordeste: reflexiones sobre las configuraciones del proceso de acumulación de capital en diferentes momentos. En: Junior, Airton Saboia Valente; Alves, María Odete; Santos, Camila Ribeiro Cardoso (Orgs). *Banco do Nordeste do Brasil: 70 años de aportes al desarrollo regional*. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2022. Disponible en: <https://www.bnb.gov.br/documents/45799/2019277/Banco+do+Nordeste++70+Anos.pdf/fc4c4597-0c52-0472-fe5d-00dfa92c954e?t=1658242016967>.
- AMÉRICO Moreira, Carlos; Almeida, Agamenón Tavares de (2013). La dinámica reciente de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Brasil y sus impactos en la cuenta corriente. *FEE Indicadores Económicos*, Porto Alegre, 41, n. 1, p. 9-22. Disponible en: <https://revistas.planejamento.rs.gov.br/index.php/indicadores/article/view/2849/3159>.
- AMÉRICO Moreira, Carlos; Sebag, Emanuel (2014). ¿Un nuevo patrón exportador de especialización productiva? Consideraciones sobre el caso brasileño. *Revista de la Sociedad Brasileña de Economía Política*, Niterói, n. 38, p. 89-106, junio. Disponible en: <https://revistasep.org.br/index.php/SEP/article/view/56>.
- AMÉRICO Moreira, Carlos; Sebag, Emanuel (2017). Le Partenariat transpacifique et le futur du commerce bilatéral Brésil-Chine. *Revue Études Internationales*, v. 8, 3-4, p. 429-441. Disponible en: <https://www.erudit.org/fr/revues/ei/2017-v48-n3-4-ei03574/1044628ar/>.
- AMÉRICO Moreira, Carlos; Sherer, André Luis Forti (2002). Mercados emergentes y nuevas formas de dependencia en América Latina. *FEE Indicadores Económicos*, Porto Alegre, 30, n. 1, pp. 49-73, junio. Disponible en <https://revistas.planejamento.rs.gov.br/index.php/indicadores/article/view/1359/1725>.
- ANDRÉS, Klimán; Williams, Shannon D. (2015). Por qué la “financiarización” no ha deprimido la inversión productiva de EE.UU. *Revista de economía de Cambridge*, 39 (1), p. 67-92. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/24694946>.
- ANTUNES, Ricardo (2022). *Capitalismo pandémico*. São Paulo: Boitempo.

- BERNARDINO-COSTA, Joaze; Maldonato-Torres, Nelson; Grosfoguel, Ramón (Orgs.) (2018). *Decolonialidad y pensamiento afrodiáspórico*. Belo Horizonte: Autêntica Editora. (Colección Culturas e Identidades Negras).
- BEZERRA, Leila María Passos de Souza (2015). *Pobreza y lugar(es) en los márgenes urbanos: luchas de clasificación en los territorios estigmatizados del Grande Bom Jardim*. 450 ss. Tesis (Doctorado en Sociología). Programa de Posgrado en Sociología, Universidad Federal de Ceará, Fortaleza.
- BEZERRA, Leila María Passos de Souza (2018). *De territorios vulnerables/riesgo social a territorios vividos en los márgenes urbanos: un análisis de la implementación del Sistema Único de Asistencia Social en Fortaleza - CE*. Informe (Posdoctorado) – Universidad Federal de Ceará, Programa de Posgrado en Sociología, Fortaleza (CE).
- BIGNOTTO, Newton (2020). *Brasil en busca de la democracia: de la Proclamación de la República al siglo XXI (1889-2018)*. Río de Janeiro: Time Bazaar.
- CARVALHO, Alba M. Pinho de; Guerra, Eliana (2015). Brasil en el Siglo XXI en los Circuitos de la Crisis Capital: el modelo brasileño de ajuste en el foco de la crítica. *Revista de Políticas Públicas*, v. 19, pp. 41-60. Disponible en: <http://periodicoeletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/3864>.
- CARVALHO, Alba M. Pinho de; Guerra, Eliana. C.; Bezerra, Leila M. Passos de S.; Américo Moreira, Carlos (2022). Crisis del capital: la contemporaneidad brasileña en las vías de ajuste dependiente al capitalismo financiarizado. *Revista de Políticas Públicas*, v. 26 (Especial), pp. 296-314. Disponible en: <https://periodicoeletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/2028>.
- CARVALHO, Alba María Pinho de (2020). Ultraneoliberalismo, militarismo y reaccionario en el Brasil actual: una composición de riesgo, un desafío a la lucha política. En: COUTINHO, J. *et al.* La crisis capitalista, el avance de la derecha en el continente latinoamericano y los desafíos de la resistencia. *Revista de Políticas Públicas*, vol. 24, pp. 129-149, 2020. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/3211/321165167008/movil/>.
- CARVALHO, Alba María Pinho de (2021). *La Coyuntura Socioeconómica y Política Reciente y la Seguridad Social en Brasil*. [Material de apoyo a la asignatura *Políticas Públicas en Brasil*, impartida en el Programa de Políticas Públicas de la UFMA].
- CARVALHO, Alba María Pinho de (2022). La Política de Asistencia Social en la contemporaneidad brasileña: agravamiento de la Cuestión Social, desprotección social, desmantelamiento del SUAS y resistencia en el Brasil Actual (2016-2022). En: *Conferencia inaugural del módulo sobre Política de Asistencia Social. Curso de Perfeccionamiento en CRESS – CEARÁ*. 23 de junio.
- CARVALHO, Alba María Pinho de; Guerra, Eliana; Américo Moreira, Carlos (2021). Hegemonía y crisis de hegemonía en la relación Estado/sociedad civil: modos analíticos de pensar el poder. En: Oliver Costilla, Lucio F. (Coord.). *Problemas teóricos del Estado Integral en América Latina. Fuerzas en tensión y crisis*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- CARVALHO, Alba María Pinho de; Guerra, Eliana Costa (2015). Brasil en el siglo XXI en los circuitos de la crisis del capital: el modelo de ajuste brasileño en el foco de la crítica. *Revista de Políticas Públicas*, São Luís, v. 19, núm. 1, enero/junio, 2015,

- pp. 41-60. Disponible en: <http://periodicos eletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/3864>.
- CARVALHO, Alba María Pinho de; Milanez, Bruno; Guerra, Eliana Costa (2018). Rentismo-neoextractivismo: la inserción dependiente de Brasil en los caminos del capitalismo globalizado (1990-2017). En: Rigotto, Raquel María; Aguiar, Ada Cristina Pontes; Ribeiro...
- CARVALHO, José Murilo de (2019). *Fuerzas Armadas y Política en Brasil*. 2ª ed. São Paulo: Sin embargo.
- CASTILLO, Rodrigo (2013). *El liberalismo social: auge y crisis de la supremacía burguesa en la era neoliberal*. São Paulo: Expresión Popular.
- CHESNAIS, François (2017). *Capital financiero hoy: corporaciones y bancos en las recesiones globales duraderas*. Chicago: Libros de Haymarket.
- CHESNAIS, François (2017). Le capitalisme at-il rencontré des limites infranchissables? Contretemps, *Revue de Critique communiste*, febrero. Disponible en: <https://www.contretemps.eu/chesnais-limites-capitalisme/>.
- COUTINHO, Carlos Nelson (1994). La dualidad de poderes y la revolución en el pensamiento marxista. En: Coutinho, Carlos Nelson. *Marxismo y política: la dualidad de poderes y otros ensayos*. São Paulo: Cortez Editora.
- COUTINHO, Carlos Nelson (2008). El Estado brasileño: génesis, crisis, alternativa. En: Coutinho, Carlos Nelson *Contra la Corriente: Ensayos sobre Democracia y Socialismo*. 2da. edición revisada y actualizada. São Paulo: Cortez Editora.
- COUTINHO, Joana y Oliver Costilla, Lucio (Orgs.) (2023). *Problemas teóricos do Estado integral. Forças em tensão e crise*. Sao Paulo: Lutas Anticapital.
- DAGNINO, Evelina (2023). “Retomar la reinención democrática: ¿cuál ciudadanía, cuál participación?”. *Foro Social del Nordeste*, Recife, 24 al 27 de noviembre de 2004 A3o>. Consultado el: 19 de enero.
- FERNANDES, Florestán (2006). *La revolución burguesa en Brasil*. São Paulo: Globo.
- FILGUEIRAS, Luis (2000). *Historia del Plan Real*. São Paulo: Boitempo.
- GOHN, María da Gloria (2022). *Activismos en Brasil: movimientos sociales, colectivos y organizaciones sociales civiles: ¿cómo impactan y por qué importan?* Petrópolis: Voces.
- GOHN, María da Gloria (2019). *Participación y democracia en Brasil: de la década de 1960 a los impactos posteriores a junio de 2013*. Petrópolis: Vozes.
- GRAMSCI, Antonio (1999). *Cuadernos de la cárcel*. Edición crítica del Instituto Gramsci.
- GRIFFIN, Roger (2003). *De la mucosidad al rizoma: introducción al derecho groupuscular. Patrones de prejuicio*, Londres, Routledge, v. 37, núm. 1. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0031322022000054321?journalCode=rpop20>.
- GUIMARAES, Ulisses (1988). Texto completo del discurso del Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Cámara de Diputados, Rádio Câmara, Câmara e historia, Brasília, Disponible en: <https://www.camara.leg.br/radio/programas/277285-integra-do-discurso-presidente-da-assembleia-nacional-constituente-dr-ulysses-guimaraes-10-23/>.
- HARVEY, David (2016). *17 contradicciones y el fin del capitalismo*. São Paulo: Boitempo.
- HUSSON, Michael (2017). Une crise systémique qui plonge ses racines dans les rapports de production capitalistes. A l'encontre, 3 de mayo. Disponible en: <https://>

- alencontre.org/economie/une-crise-systemique-qui-plonge-ses-racines-dans-les-rapports-de-production-capitalistes.html.
- IGNACIO, Julia (2021). Guerras híbridas: ¿aprende todo sobre este concepto! ; *Politizar! Noticias, Conceptos, Política Internacional*, 22 de noviembre. Disponible en: <<https://www.politize.com.br/guerras-hibridas/>>. Consultado el: 15 de enero. 2023.
- KREIN, José Dari (2018). El desmantelamiento de derechos, las nuevas configuraciones de trabajo y el vaciamiento de la acción colectiva: Consecuencias de la reforma laboral. *Tempo Social*, abril, v. 30, núm. 1, 2018, pp. 74-104. Disponible en: <https://www.revistas.usp.br/ts/article/view/138082/138676>.
- LEIRNER, Piero C. (2001). *El sistema de guerra: una lectura antropológica de los ejércitos modernos*. 220 ss. Tesis (Doctorado en Antropología) – Universidad de São Paulo, São Paulo.
- LEIRNER, Piero C. (2020). *Brasil en el espectro de una guerra híbrida*. São Paulo: Alameda.
- LEIRNER, Piero C. (2021). De la Campaña a la Conquista del Estado: los militares en el capítulo de la guerra híbrida brasileña. En: Filho, João Roberto Martins (org.). *Los militares y la crisis brasileña*. São Paulo: Alameda.
- LÍVIA Alves Dias (Orgs.) (s/f). *Tramas por la Justicia Ambiental: diálogo de saberes y praxis emancipatorios*. Fortaleza: Ediciones UFC.
- MACIEL, Elda María Freire (en prensa) (s/f). *El proyecto PT para Brasil entre la intención programática y el mundo real*.
- MENEGUELLO, Raquel (2003). El rostro dominante de la izquierda brasileña: avances, cambios y dilemas del Partido de los Trabajadores. En Nicolau, Jairo (et al.) *Elecciones y Partidos*. Río de Janeiro: Fundación Konrad Adenauer. (Cuadernos Adenauer – IV).
- MORAES, Joao Quartim de (2019). El factor militar en el gobierno de Bolsonaro. *Revista Margem Esquerda*, São Paulo. norte. 32, mayo, pp. 40-47.
- NETO, Manuel Domingos (2021). Rangos desconocidos. En: Filho, João Roberto Martins (Org.). *Los militares y la crisis brasileña*. São Paulo: Alameda.
- OLIVER Costilla, Lucio F. (2023). Reflexiones sobre las perspectivas del Gobierno de Lula, tras los atentados terroristas de segmentos bolsonaristas. [*Debates en el Grupo PAPIIT Brasil*]. Enero 2023.
- PAULANI, Leda María (2012). La dependencia se redobló. *Le Monde Diplomatique*, Economía, Número 61, 3 de agosto. Disponible en: <https://diplomatique.org.br/a-dependencia-redobrada/>.
- POULANTZAS, Nicos (2009). *El estado, el poder, el socialismo*. São Paulo: Editora Paz e Terra.
- PÚBLICO (2022). Las solicitudes de juicio político de Bolsonaro. *Agência Pública*. Disponible en: <https://apublica.org/impeachment-bolsonaro/>.
- ROCHA, Camila (2021). *Menos Marx, más Mises: liberalismo y nueva derecha en Brasil*. São Paulo: Sin embargo.
- SALAMA, Pierre (2012). China – Brésil: Industrialización y “desindustrialización precoz”. Fondation Maison des Sciences de L’homme, Seminario BRICS, París, n. 6 de marzo 2012. Disponible en: <https://shs.hal.science/halshs-00684834>.

- SCHWARCZ, Lilian Moritz (2019). *Sobre el autoritarismo brasileño*. São Paulo: Companhia das Letras.
- SEMERARO, Giovanni (2016). “Crisis orgánica” y lucha de clases en Gramsci. Praxis y hegemonía popular, pp. 13-24. Disponible en: <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/PHP/article/view/10392>.
- SOUZA, Jesse (2017). *La élite atrasada: de la esclavitud a Lava Jato*. Río de Janeiro: Leya.
- WACQUANT, L. (2005). *Los reclusos de la ciudad: Estudios en marginalidad avanzada*. Trans. Joao Roberto Martins Filho. 2 ed. Río de Janeiro: Revan.
- WACQUANT, L. (2010). *Castigar a los pobres: la nueva gestión de la pobreza en Estados Unidos [La ola punitiva]*. 3 ed. Trad. Sergio Lamarão. Río de Janeiro: Revan.
- WERNECK Vianna, Luiz (1999). La judicialización de la política en Brasil, En: Werneck Vianna, Luiz (et al.). *La judicialización de la política y las relaciones sociales en Brasil*. Río de Janeiro: Editora Revan.

PROBLEMÁTICAS METODOLÓGICAS: LA EXTREMA DERECHA Y EL MOVIMIENTO INDÍGENA Y CAMPESINO EN BRASIL

JOANA APARECIDA COUTINHO, LIA PINHEIRO BARBOSA

ASPECTOS DE REFERENCIA Y METODOLÓGICOS PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO POLÍTICO DE LA EXTREMA DERECHA EN BRASIL¹

Para comprender el surgimiento de la “extrema derecha” en Brasil, es necesario hacer una retrospectiva histórica y comprender su relación con el crecimiento de la derecha en el mundo, pero pensando en la formación socio-histórica brasileña. Sin querer ocuparnos de un debate tan extenso, aquí nos centraremos en el crecimiento de la derecha conservadora en los últimos años, tras haber tenido esta un breve ascenso político en Brasil. La pregunta que nos hacemos es cuál es el proyecto de esta derecha que coquetea con el fascismo y el nazismo. ¿Cuáles son los proyectos de la derecha para el país?

La Acción Integralista (AI), fundada por Plinio Salgado, es quizás la que ayer fue la expresión más significativa de lo que hoy se denomina “ultraderecha”. El integralismo en la década de 1930 incluso se organizó en un partido político, influenciado por el fascismo italiano. En su concepción ideológica estaban incorporados los valores del fascismo y la instauración de un Estado centralizador cuyos principios estaban en la base del corporativismo (Barbosa, 2015).

Este movimiento se reorganiza en el siglo XXI buscando rearticular el movimiento y sus ideales. Pero, lo que hay que destacar es que “Acción Integralista” se reorganiza en un contexto de ascenso de la “extrema derecha” en Brasil y en el mundo. Después de 14 años de gobiernos progresistas, la ola conservadora que comienza a movilizarse a partir de 2013 se convierte en una avalancha que se apodera de la sociedad brasileña. ¿Cuáles son las motivaciones para un crecimiento tan grande de grupos conservadores que coquetean con el fascismo y el nazismo en el país? La investigadora Adriana Días (2016: web) apunta a un crecimiento del 270% de las células neonazis en Brasil en los últimos tres años (de enero de 2019 a mayo de 2021). Y, no está de más asociar el crecimiento de estos grupos de extrema derecha con la elección de Jair Bolsonaro en 2018 como presidente de la República en Brasil; aunque no se limite a ella. Se equivoca quien crea que una derrota electoral como la de 2022 significa una derrota del “fascismo”.

¹ Traducción al español por Lucio Fernando Oliver Costilla.

Pero cuáles son los grupos que apoyan a un gobierno de “extrema derecha” en el país que desde un principio demostró sus contradicciones, pero sigue teniendo gran atractivo para una determinada capa de la sociedad. No podemos ignorar que el proceso electoral de 2022 reveló una sociedad fracturada y que buena parte de ella está encantada con el canto de la sirena que, en este caso, entona viejas canciones fascistas: basta ver la situación del pueblo yanomami que muere de pobreza a causa de la política implementada y seguida estrictamente por parte del ahora expresidente Jair Bolsonaro. ¿Pero volviendo a las preguntas iniciales?Cuál es el proyecto nacional que presentan estos grupos. Son racistas, clasistas, prejuiciosos, pero ¿a quién va dirigido su discurso?

Movimientos de derecha

MBL-MOVIMENTO BRASIL LIBRE

Fundada en 2014, esta organización tuvo una gran participación en las movilizaciones de calle y en el Golpe de Estado de 2016. Plantea como sus principios:

- a. Promover el liberalismo, defendiendo la libertad individual, la propiedad privada y el estado de derecho;
- b. “La libre empresa y el emprendimiento”;
- c. “la primacía del individuo y la sociedad sobre el Estado”;
- d. “la democracia representativa”;
- e. el fin de los monopolios estatales y la privatización de las empresas públicas,
- f. luchar contra los privilegios de la élite del servicio civil.

Visto de primera mano, no hay diferencias en el programa de este grupo y cualquier otro de la derecha liberal. Pero el caso es que no solo apoyó al gobierno de Bolsonaro (con algunas discrepancias), sino que también señaló objetivos como “escuela sin partido”, “ideología de género”, etc.

VEN A LA CALLE

Quizás sea uno de los más emblemáticos movimientos de derecha que surgieron alrededor de 2014 y que dieron sustentabilidad al Golpe de Estado de 2016. Su bandera principal fue la “lucha contra la corrupción”, motor del fenómeno del procedimiento judicial llamado “Lavado a Chorro”, para llevar a prisión a casos de corrupción en ámbitos específicos. Hoy está claro comprobadamente que su lucha contra la corrupción nunca fue más que una pieza publicitaria. Según información en el sitio web del grupo, tienen alrededor de 14,000 voluntarios en todo Brasil y movilizan a más de 2 millones de personas a través de las redes sociales (WhatsApp, Facebook, Twitter, etc.).

Un punto clave es pensar cuál es la inserción social de movimientos de esta magnitud en este momento, en particular bajo la crisis del Estado que se configura como crisis de hegemonía. Como hemos dicho antes, la crisis de hegemonía, entendida como la define Gramsci, es una crisis de autoridad y esta un elemento de la crisis “orgánica” del Estado

liberal. Es la pérdida de hegemonía de la clase dominante, en su formato liberal: no logra forjar consensos en la sociedad. La crisis está instalada: la clase dominante ya no es capaz de forjar consensos entre las masas. La crisis de “autoridad” es la crisis de hegemonía o la crisis del Estado en su conjunto; la clase dominante pierde consenso, pero no pierde autoridad. Ya no es la clase dirigente, pero sigue siendo la clase dominante. En este interregno, hemos visto crecer a la “extrema derecha”, que coquetea abiertamente con el fascismo. La ideología es uno de sus aspectos centrales. Estos grupos de extrema derecha avanzan en una construcción ideológica que pretende incorporar su cosmovisión en todas las instituciones, comenzando por las escuelas (tanto en el nivel fundamental como en la universidad). Uno de sus centros de formación es el “Millennium”. ¿Qué es “Millennium”?

Es un instituto de formación que destaca por “ser formadores de opinión e *influencers*”. Con la misión de “promover la democracia, la economía de mercado, el estado de derecho y la libertad”, expresa claramente el pensamiento de la derecha en el país. Por otro lado, tenemos que considerar la manera en cómo este instituto defiende las agendas de la derecha a través de un discurso sumamente religioso, que crece con el avance del pentecostalismo en el país y su “teología de la prosperidad”. La lucha contra la “ideología de género” constituye su creación mediática, pero tiene eco en el conservadurismo de las familias brasileñas. En ese sentido, hemos visto el esfuerzo del pensamiento conservador de derecha por reagruparse desde principios de los años 2000, como muestra la consigna “Medios sin Máscaras”. Las siguientes hipótesis orientan nuestra investigación:

- a. La crisis del Estado capitalista, que ya no es capaz de responder a la idea de lo “universal” dirigido a la sociedad en su conjunto. Eso se acompaña de la crisis de la democracia representativa. Asimismo, podemos decir que la pérdida de hegemonía de la clase dominante no significa que las clases populares hayan constituido ya una hegemonía, lo que en la práctica abre el espacio para el crecimiento de una “extrema derecha” fascista;
- b. El proyecto de la derecha conservadora (diferenciándola de la derecha liberal) que podemos asociar al Integralismo brasileño está en la formulación del llamado “Bolsonarismo”, aún sin Bolsonaro;
- c. El fondo histórico de una ideología conservadora alimenta la ideología fascista, como señalan Florestan Fernandes (2015) y René Zavaleta (2009) pensar el fascismo como ideología, especialmente en América Latina.

El tema de los intelectuales en la formación del Estado y en la vida política, social y cultural, como lo plantea Gramsci, es importante para comprender las diferentes concepciones del mundo. Este es un tema de suma importancia que debemos enfrentar con todo el rigor teórico y la práctica política. Así, la problemática es descifrar la concepción del mundo que mueve las mentes que se adhieren al discurso conservador. ¿Cuáles son las perspectivas a las que apunta la mayoría de estos movimientos de extrema derecha que han logrado cierto éxito en las sociedades latinoamericanas y, especialmente, en Brasil?

Fábio Frosini, en el texto “La ideología en Marx y en Gramsci” (2014, pp. 559-582), observa que la ideología no se caracteriza por la deshonestidad del ideólogo. Engels, por cierto, escribe que este hace su trabajo “a conciencia”. El ideólogo no tiene intención de

“engañar”: él, por el contrario, “cree” decir cosas verdaderas. El verdadero pensador no se opone al ideólogo por la deshonestidad de este último, sino porque es capaz de “llenar” su conciencia de contenidos reales, que son las verdaderas “fuerzas motrices” del proceso mental. Finalmente, la diferencia entre la conciencia “falsa” y la conciencia “verdadera” radica en la capacidad de identificar la forma y la fuente en que nacen los pensamientos.

Gramsci nos da claves importantes para pensar cómo rebasar las barreras creadas para mantener a las clases populares en una situación subalterna: la necesidad de una reforma moral e intelectual. Se trata entonces de criticar el sentido común (y el folclore), desarrollar una reforma moral e intelectual basada en la cultura popular y promover el progreso intelectual de masas, con el objetivo de diluir la división entre intelectuales y no intelectuales. Tan pronto como el progreso intelectual de masas permite que los individuos y los grupos sociales se comprendan a sí mismos, ello tiene impacto en las luchas por las “hegemonías” en el campo de la ética y la política.

Imposible no recordar sobre la “Cuestión Meridional” en los textos de Gramsci, en un Brasil que parece fracturado entre un Nordeste que vota casi masivamente por el candidato que en el imaginario es de izquierda (Luis Inácio Lula da Silva) y un Sur que vota por la extrema derecha. Al hablar del fascismo y el Sur, Gramsci formula que la cuestión del Sur no puede ser resuelta por la burguesía sino temporalmente, de manera episódica, con corrupción o con hierro y fuego. El fascismo exasperó la situación y, en gran medida, la esclareció.

La cuestión del sur es también para Gramsci una cuestión territorial; y es desde este punto de vista que debe ser examinado, para establecer un programa de gobierno obrero y campesino que quiera encontrar amplia repercusión entre las masas (Gramsci, 1987). La crisis radical del régimen capitalista –que se inició en Italia, así como en el mundo entero, con la guerra– no fue resuelta por el fascismo. Este, con su método represivo de gobierno, hizo muy difícil o, mejor planteado, impidió casi completamente las manifestaciones políticas de la crisis general del capitalismo, pero no generó un alto a esa crisis, ni, mucho menos, una retomada y un desarrollo de la economía nacional.

DIMENSIONES METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA DISPUTA POR LA HEGEMONÍA EN LA SOCIEDAD: PRAXIS POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS Y CAMPESINAS

Introducción a los aspectos metodológicos

En ese apartado del método de investigación, presentamos los elementos metodológicos utilizados para el análisis de los casos que configuran la disputa en y por la sociedad civil en la crisis del Estado en Brasil. Para ello, analizamos la crisis orgánica y la disputa hegemónica a partir de la *praxis* política de dos sujetos histórico-políticos vinculados al campesinado y a los movimientos indígenas: la Vía Campesina-Brasil y la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB). En la primera etapa de nuestra investigación (2019-2020), tratamos de analizar, teóricamente, la cuestión de la hegemonía en dos perspectivas (Oliver, 2021):

1. Desde el Estado y los distintos proyectos histórico-sociales como un vehículo o modo de construcción y consolidación del poder político como hegemonía;
2. Desde la subalternidad y las distintas fuerzas histórico-políticas nacionales en la disputa hegemónica hacia otra concepción colectiva de proyecto nacional. Asimismo, situamos el carácter abigarrado de la disputa hegemónica en el contexto de América Latina (Barbosa, 2021), en diálogo con el planteamiento metodológico de Zavaleta (2009) con respecto al abordaje de la nación y del Estado-nación como problemática histórica.

En este caso, reconocemos dos elementos primordiales de nuestra formación sociohistórica:

- a. El carácter heterogéneo de nuestras sociedades que incide en la composición de las fuerzas histórico-políticas, las cuales asumen un carácter diverso;
- b. La confluencia dialéctica del carácter colonial, patriarcal y capitalista de nuestro momento constitutivo y sus reverberaciones en la naturaleza de las estructuras de dominación, explotación y poder propias de la ecuación Estado-sociedad civil en la historia presente, y que inciden en la naturaleza de la crisis orgánica del Estado, la crisis democrática y los desafíos del campo popular en la construcción de una unidad política, en términos de unificar una voluntad colectiva para el enfrentamiento de esa crisis y de las fuerzas políticas de la extrema derecha.

Para la segunda etapa de la investigación (2021-2022), definimos cuatro indicadores teórico-metodológicos para el análisis de la disputa en y por la sociedad civil en la crisis del Estado:

1. Evaluación de la lucha de clases en el contexto social de Brasil en la actualidad histórica, sobre todo en los últimos seis años (2016-2022), caracterizado por una agudización de la crisis orgánica del Estado resultante del golpe parlamentario y el ascenso de la extrema derecha en el país;
2. Configuración de la dinámica de conflictos de hegemonía en la sociedad civil entre fuerzas dominantes y dominadas, destacando “momentos de normalidad hegemónica” y de “crisis hegemónica”;
3. Demarcación de momentos históricos de carácter intensamente colectivo y de articulación común de las organizaciones del campo popular, al enfrentar un asunto movilizador en los procesos de desarrollo de la vida nacional;
4. Caracterización de lo urbano y lo rural en cada formación sociohistórica, en el contexto de la civilización capitalista contemporánea, identificando las perspectivas y las diferentes concepciones culturales de las fuerzas urbanas y rurales. En el caso de este último indicador, si bien analizo movimientos que emergen de las problemáticas históricas inherentes al contexto rural, en tanto bloque histórico arrojan luces a las problemáticas históricas que afectan el conjunto de la sociedad civil.

Contexto histórico de América Latina y los sujetos de la investigación

La definición de los *sujetos históricos de la investigación* es fruto del movimiento dialéctico de las luchas sociales en la transición del siglo XX al XXI, período histórico en que el campesinado y los movimientos indígenas de América Latina articularon una estrategia de enfrentamiento de la ofensiva neoliberal en los planes local, nacional, transnacional y global. Dos procesos políticos fueron basilares en la reconfiguración del campo popular en este período: la Campaña *500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular* (1989-1992) y la insurgencia armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en el albor de 1994. Ambos arrojan luces sobre las persistencias de la cuestión colonial en la conformación y naturaleza del Estado, en la disputa hegemónica y de la urgencia por debatirla en el siglo XXI, un período histórico de profundización de las «lógicas de separación» del capitalismo, propios del conflicto capital-naturaleza y sus impactos en el desgarramiento del tejido social, de la crisis del Estado y de la democracia.

La *Campaña 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular* reflejó no solo el rechazo a la postura colonializante de la celebración del V Centenario de la Colonización, sino también la articulación de un crisol de resistencias del campo popular, de carácter diverso, empero en una lucha común, en contra de los impactos del neoliberalismo en ámbito global. En esa dirección, se consolidó una alianza regional de las luchas agrarias para proponer una agenda teórica y política que diese cuenta de la interpretación crítica de la etapa actual de desarrollo del capitalismo, caracterizada por el neoextractivismo como fenómeno emergente en el siglo XXI y caracterizado por una vertiginosa ampliación de las fronteras de espoliación del agronegocio, de la minería, de la industria petrolífera, todas vinculadas a las *commodities*. En otros términos, en que se intensifica la extracción del valor a partir de la espoliación territorial y del *extractivismo*, expresión cabal de las nuevas características que asume la reproducción ampliada del capitalismo en la región.

Además de la articulación de los movimientos indígenas, vemos un proceso similar con los movimientos agrarios, sobre todo con la fundación de la Vía Campesina Internacional (LVC) como fruto de ese proceso histórico. En 1994, se conforma la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), en Lima, Perú, bajo la consigna “Unidos en Defensa de la Vida, la Tierra, el Trabajo y la Producción”, con la participación de 84 organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes y de organizaciones de trabajadores rurales de 18 países de América Latina y el Caribe (LVC, 2019). Cabe destacar que la CLOC es la catarsis de un tejido social de acción política de carácter heterogéneo, por lo tanto, abigarrado, sembrado en el marco de la Campaña *500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular*. Involucra una diversidad de sujetos histórico-políticos, formados en contextos políticos nacionales, empero atravesados por las grandes problemáticas históricas de Latinoamérica y el Caribe.

Situar el contexto histórico de América Latina en la transición de siglos nos permite deshebrar los hilos de la histórica lucha de las clases subalternas y aprehender el carácter abigarrado de los bloques históricos nacionales y la naturaleza de los distintos proyectos histórico-sociales, en sus entrelazamientos con la disputa de la hegemonía en una escala regional y global. Ello corresponde a una comprensión de la hegemonía en los sentidos

de Gramsci (2011), es decir, en su *rapport pedagógico* en tanto fenómeno de dirección política y cultural que involucra el movimiento histórico de las fuerzas políticas no solo en los contextos nacionales, sino también en los vínculos históricos en una escala internacional.

La Vía Campesina-Brasil y la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) son fruto de ese proceso histórico y desarrollan un papel central en el análisis coyuntural y de denuncia de la actual crisis orgánica del Estado y de la democracia, sobre todo en los últimos seis años. En el ámbito de nuestra investigación, realicé un análisis documental y de los datos obtenidos en distintas instancias etnográficas junto a la Vía Campesina-Brasil (2019-2022) y del acompañamiento de las actividades realizadas por la APIB en el período pandémico (2020-2022), además de las entrevistas con organizaciones miembro de La Vía Campesina Brasil. Identificamos elementos sustanciales para apreciar cómo estas fuerzas histórico-sociales caracterizan la evolución de la crisis del Estado integral en el contexto nacional y regional, al tiempo que identificamos persistencias y tendencias en la articulación de estrategias de enfrentamiento de la extrema derecha y en la defensa de la democracia.

Análisis de la disputa hegemónica en los últimos seis años (2016-2022)

En un análisis de la disputa hegemónica en el siglo XXI, identificamos que, a pesar del avance del imperialismo estadounidense, los umbrales del siglo XXI representan una nueva configuración de la hegemonía imperialista, en que China ocupa un papel central, al territorializar su hegemonía en el sur global. Este país se ha convertido en una de las mayores potencias políticas, tecnológicas y económicas, expandiéndose no solo en el continente asiático, sino también en América Latina y África, beneficiándose de los pactos bilaterales y del papel desempeñado por los Estados nacionales para abrir nuevos mercados al capital chino, especialmente los vinculados a la extracción de minerales.

Es menester destacar que la política neodesarrollista, implementada por los gobiernos progresistas en la primera década del siglo XXI, propició la configuración de la hegemonía china en América Latina. Un buen ejemplo de esta expansión económica es la formación de los BRIC (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), en que participa Brasil (Barbosa, 2020). En esa dirección, hay una reconfiguración de la disputa hegemónica de carácter imperialista entre potencias –Estados Unidos y China– que se enfrentan por la dirección y el dominio político y económico. En el ámbito de esta disputa, la adhesión de los gobiernos es un aspecto importante; así, la disputa por el establecimiento de un alineamiento político basado en la desestabilización de la democracia en los países no alineados constituye un eje central.

El disenso hegemónico entre Estados Unidos y China se intensifica en la primera década del siglo XXI, tanto a nivel global, dentro de una lógica imperialista de disputa de mercados y dirección política, como en los contextos nacionales, especialmente por parte de Estados Unidos, en el sentido de dismantelar a los gobiernos de carácter progresista e instituir, en su lugar, otros alineados a su política. La guerra híbrida (Korybko, 2018) ha constituido la principal estrategia imperialista de Estados Unidos, poniendo en mar-

cha las tácticas de dominación de espectro completo (Ceceña, 2005) para el impulso de golpes políticos en diferentes países.

El ascenso de la extrema derecha en diferentes países de América Latina, Europa y Asia, entre ellos Brasil, es el resultado exitoso de la guerra híbrida y del realineamiento político con Estados Unidos. La base ideológica de estos gobiernos está formada por (Barbosa, 2022):

- a. Una base ideológica colonial-racista-patriarcal;
- b. Una base ideológica fascista y,
- c. Una base ideológica articulada a los fundamentalismos religiosos, con un fuerte contenido patriarcal, tanto en las religiones monoteístas, como el cristianismo y el islam, como en las religiones politeístas, como el budismo. Estos gobiernos también se caracterizan por la profundización de las medidas estructurales neoliberales, especialmente con la reanudación de la privatización de las empresas estatales, los cambios radicales en la legislación laboral y la retirada obligatoria de los derechos laborales, con la inseguridad laboral, la uberización y el aumento de la masa de desempleados en el mundo; la descomposición o destrucción de lo público en privado, es decir, las políticas que no se dirigen a la colectividad, sino a un determinado grupo político, económico y religioso; la extinción de las políticas sociales o su reducción presupuestaria, especialmente las relacionadas con el medio ambiente, la reforma agraria, las cuestiones territoriales y educativas.

En el desarrollo de la investigación, identificamos que la Vía Campesina-Brasil y la APIB identifican, en sus análisis, esa reconfiguración de la disputa hegemónica en escala global y sus articulaciones en los contextos regionales y nacionales. Asimismo, ambas fuerzas históricas destacan que el ascenso de un gobierno de extrema derecha fascista, como el caso de Jair Messias Bolsonaro, obedece a dos movimientos históricos:

1. Reposicionar ideológicamente Brasil para una transición hegemónica de China a los Estados Unidos;
2. Garantizar el espolio territorial para profundizar la extracción desenfrenada de materias primas y energías, sobre todo en los territorios indígenas.

Para ello, el gobierno de Bolsonaro incidió en los siguientes aspectos:

- a. Ruptura con la institucionalidad y pérdida de la democracia, que se traduce en una crisis orgánica del Estado;
- b. Profundización del desmantelamiento de la dimensión pública del Estado y, en especial, de los órganos directamente relacionados con la gestión de la política agraria, fundiaria y territorial;
- c. Incremento de la violencia en los territorios, propio de la disputa territorial impulsada por el capitalismo por espoliación, resultando en el aumento de la desterritorialización, el asesinato de liderazgos o, aún, del genocidio de las poblaciones indígenas, en especial, los Yanomamis;
- d. Criminalización de las organizaciones populares;

- e. Intensificación de un marco legal-regulatorio para rescindir conquistas históricas relacionadas a la reforma agraria y a la demarcación de tierras indígenas y quilombolas;
- f. Fortalecimiento de la hegemonía del patronato rural en el Congreso;
- g. Desmovilización de la base, sea por el miedo del discurso de odio proferido por el presidente y sus seguidores, sea decurrente del momento político anterior, del Partido de los Trabajadores y de sus estrategias de desmovilización frente a sus contradicciones políticas internas.

Es menester destacar que una serie de acciones de los gobiernos del PT, tanto con Luis Inácio Lula da Silva como con Dilma Rouseff, reflejan continuidades de la política neoliberal y revelaron contradicciones profundas de un gobierno elegido por el campo popular: impulso de una política neodesarrollista, con un ciclo de expansión por expropiación que potencializó el agronegocio, la minería, el sector energético; política de reordenamiento territorial con la retomada del Programa de Consolidación y Emancipación de los Asentamientos,² para desvincular los asentamientos de Reforma Agraria de la responsabilidad institucional del INCRA; sanción de la Ley 13.260/2016, la Ley Antiterrorismo, que prevé pena de reclusión de 12 a 30 años. Esa ley ha sido retomada por Bolsonaro para criminalizar la protesta social en Brasil (Barbosa, 2020).

En las entrevistas realizadas con organizaciones de la Vía Campesina Brasil, se reconocen los límites de los gobiernos de Luis Inácio Lula da Silva y de Dilma Rouseff, sobre todo en el no cumplimiento de la pauta política popular y por ser el período en donde se fortaleció el capitalismo por expropiación y expoliación, sobre todo en relación con el agronegocio, a la extracción mineral, hídrica y eólica. A pesar de ello, las organizaciones destacan que había mayores posibilidades de diálogo y negociación en un marco democrático y para atender algunas demandas relacionadas a las políticas públicas en el campo educativo y de la producción agraria de base familiar y campesina. Ello ha representado disyuntivas para las organizaciones del campo popular frente a las persistencias de una agenda política neoliberal en los gobiernos del PT (Barbosa, 2020) y que se profundiza enormemente a partir del golpe político del 2016.

La desaceleración de la Reforma Agraria durante los gobiernos del PT se intensifica aún más en el contexto del golpe político y el ascenso de la extrema derecha, con el aumento del capital transnacional en la política agraria para fortalecer el agronegocio. El desmantelamiento de los órganos de gestión de la política agraria, Ministerio del Desarrollo Agrario (MDA), facilita e intensifica la apropiación de tierras por parte de extranjeros y la expansión del mercado de las grandes empresas transnacionales de alimentos. Asimismo, se incrementa la ofensiva violenta de disputa de los territorios indígenas, campesinos y de comunidades quilombolas.

Con respecto a la cuestión territorial, la APIB denuncia la ofensiva de las fuerzas políticas vinculadas al gobierno Bolsonaro en la disputa de los territorios indígenas. En los últimos seis años el carácter autoritario y violento de la extrema derecha se refleja en el incremento de los conflictos socioterritoriales, sistematizados por organizaciones de la Vía Campesina Brasil, como la Pastoral de la Tierra (CPT) y el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), en los Cuadernos Conflictos en el Campo y en el Informe Violencia

² Política de gobierno de Fernando Henrique Cardoso en el 2000.

en Contra de los Pueblos Indígenas en Brasil, respectivamente. En la Plataforma CACI (Cartografía de Ataques contra Indígenas) encontramos datos acerca de los asesinatos de líderes indígenas. El incremento de la violencia en los territorios campesinos e indígenas revela que el campo, no solo en Brasil, como en toda América Latina, es el territorio donde se da la lucha de clases en los contextos de las nuevas dependencias económicas, en las formas de integración subordinadas y dependientes de las economías nacionales y regionales en el capitalismo global.

En 2021, la APIB ha articulado un proceso de resistencia frente al Proyecto de Ley 490/2007 - Ley del Marco Temporal, ampliamente apoyada por el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), solo serán reconocidos como territorios indígenas aquellos en que se pueda comprobar la presencia indígena el 5 de octubre del 1998, fecha en que entra en vigor la última Constitución Brasileña. En 2022, la APIB también enfrenta nueva ofensiva en sus territorios, con el Proyecto de Ley 191/20 - Ley de la Minería, que objetiva liberar la extracción mineral y la explotación de hidrocarburos en territorios indígenas. En realidad, existen aproximadamente más de veinte proyectos de ley en tramitación (en proceso de análisis en esta etapa de la investigación), todos relacionados con la liberalización de los territorios indígenas, campesinos, quilombolas y de comunidades tradicionales para la libre explotación extranjera (Barbosa, 2020), sobre todo para los emprendimientos de carácter extractivista, lo que evidencia el papel regulador del Estado, tanto de los gobiernos progresistas como de los de la extrema derecha, en la expansión de las fronteras para la espoliación territorial.

Asimismo, en este siglo, los países periféricos, como es el caso de Brasil, siguen atrapados en un colonialismo global, como regiones proveedoras de materias primas, mano de obra barata y esclavizada, además de convertirse en zonas de sacrificio (Svampa, 2019), en nombre de un desarrollo pautado en la espoliación territorial, el saqueo violento y predatorio, la desterritorialización, flujos migratorios resultantes del incremento de la violencia, de la pobreza y desigualdad, y de una profunda crisis democrática y de hegemonía. Para el caso de América Latina, la explotación global afecta el conjunto de la sociedad, empero su faz más cruel se encuentra en las zonas rurales, una vez que la región es considerada estratégica para el capital financiero y transnacional, sobre todo por ser reducto de riquezas hídrica, mineral, eólica, de energía solar, de semillas, tierras, entre otros bienes de alto interés económico. La disputa territorial se lleva a cabo entre los conglomerados económicos vinculados al capital transnacional, las fuerzas políticas internas y las poblaciones indígenas, campesinas, ribereñas, de comunidades tradicionales, de pescadores, entre otras, que defienden sus territorios en contra de la ofensiva del capitalismo por espoliación, por lo tanto, un capitalismo global.

La crisis orgánica y de la democracia es una realidad en Brasil. En términos de su superación, la Vía Campesina Brasil reconoce la urgencia por un proyecto político sólido y autónomo del campo popular. De acuerdo con las entrevistas, se reconocen las fortalezas de tener una plataforma política que conlleva a un diálogo horizontal y a la construcción de una unidad política y de alianzas entre la diversidad de organizaciones. No obstante, a ello, consideran que es urgente avanzar en un proyecto político construido y conducido por la clase trabajadora del campo. En estos tiempos de agudización de las contradicciones propias de un gobierno de extrema derecha, como el de Bolsonaro, y las posibi-

lidades de su reelección, la Vía Campesina Brasil se ve delante de una encrucijada, en el sentido de reconocer los límites del progresismo del PT en un programa político basado en la conciliación de clases y en el no cumplimiento pleno de la plataforma política del campo popular y los posibles caminos para enfrentar a la fascistización de la sociedad brasileña. Una reflexión común a las organizaciones se sintetiza en preguntarse: ¿Cuál sería un proyecto histórico socialista de la clase campesina en Brasil? ¿O de la diversidad de pueblos rurales de ese país?

Tendencias de los movimientos campesinos e indígenas en 2022

Lo novedoso en el ámbito de la lucha social de los movimientos rurales campesinos e indígenas, en la transición del siglo XX al XXI, fue la articulación de una estrategia y una táctica en escala nacional, transnacional e internacional, con el avance en el diseño y consolidación de procesos políticos alternos que tienen cuenta de evaluar críticamente los impactos de esa reconfiguración de la hegemonía en escala global y en el que el territorio sigue siendo el blanco de disputa. La Vía Campesina Brasil, miembro de la CLOC-LVC, y la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil constituyen un ejemplo concreto en la composición de fuerzas sociales que se entretiene nacional e internacionalmente. Ello nos desafía a profundizar la naturaleza misma de la lucha de clases en contextos de abigarramiento de la disputa hegemónica, como es el caso en estudio, sobre todo para pensar el carácter heterogéneo de estos movimientos y los desafíos en la articulación de una unidad en la diversidad.

Observamos dos tendencias a partir del caso analizado en Brasil: el desplazamiento analítico de las contradicciones capital-trabajo a la aprehensión de la contradicción capital-naturaleza, sobre todo porque estos movimientos empiezan a comprender, de forma crítica, que el metabolismo social del capital incide negativamente en la sobrevivencia del planeta. Asimismo, la postura ecocida y genocida del gobierno de Jair Bolsonaro torna urgente incorporar a las estrategias de resistencia y enfrentamiento de la dimensión territorial y comunal (Barbosa, 2022), proceso que será discutido más detenidamente en el capítulo.

Otra tendencia estuvo más centrada en el año de 2022, año electoral en Brasil, para las elecciones presidenciales, en el Congreso y en el Senado, es la articulación de una estrategia nacional para la formación de una bancada parlamentaria, basada en las candidaturas provenientes de los movimientos campesinos e indígenas, ya sean candidaturas individuales o mandatos colectivos populares, tendencia inaugurada por el Partido Socialismo y Libertad. En el caso del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que es miembro fundador de la Vía Campesina Brasil, la decisión de lanzar candidaturas en diferentes estados del país (Sampaio, 2022) es resultado del debate interno y coyuntural del papel del MST como fuerza política y movimiento orgánico en el ámbito de la lucha de clases (Sampaio, 2022). En la articulación del campo popular, el MST sostiene que, ante la crisis democrática, urge la movilización popular y la disputa electoral (Sobreira, 2022) como estrategias para defender la democracia y enfrentar el avance del bolsonarismo en el país. La composición de un bloque parlamentario responde a la estrategia de enfrentar al Frente Parlamentario Agropecuario, que tiene la hegemonía

política en el Congreso Nacional, incrementada durante los gobiernos del PT (2002-2016) y fortalecida tras el golpe parlamentario de 2016. Actualmente, el MST tiene tres diputados en la Cámara Federal (Sampaio, 2022) a saber: Almir Assunção (PT-BA), João Daniel (PT-SE) y Marcon (PT-RS) componen el llamado “núcleo agrario” de la bancada petista.

La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) lanzó, en febrero, la Campaña Indígena 2022, en la que llama a los líderes indígenas a lanzar sus candidaturas. En 2020, la APIB lanzó la Campaña Indígena de Demarcación de las Casillas, en la que se eligieron 236 candidatos municipales de 71 pueblos indígenas. Según los datos sistematizados por la APIB, desde 2016 hay 1,715 candidaturas, número que aumenta en 2020, con 2,177 candidaturas municipales (Campanha Indígena, n.d.) distribuidas por regiones: 920 (región Norte), 503 (región Noreste), 355 (región Centro-Oeste), 164 (región Sureste) y 234 (región Sur) (Ibid.) En 2022, la APIB lanzó la Carta a los Pueblos Indígenas de Brasil (Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil (APIB), 2022) documento que enfatiza la ofensiva del capital en los territorios indígenas, profundizada en los contextos de pandemia de la COVID-19.

Finalmente, identificamos en los análisis de los movimientos estudiados en Brasil el debate relacionado a la construcción de la estrategia y la táctica de enfrentamiento del fascismo: el Frente Único de Izquierda; el Frente Popular de Izquierda y el Frente Democrático. El proceso electoral con la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva conllevó a la unidad entre el Frente Popular de Izquierda y el Frente Democrático como estrategias a corto plazo para la disputa de las elecciones, culminando en la victoria electoral de Lula e, incluso, de la mayoría de los candidatos vinculados a la Vía Campesina-Brasil y de la APIB.

REFERENCIAS

- ARTICULACIÓN de los Pueblos Indígenas del Brasil (APIB) (2022, 8 de febrero). Aldear a política: Eleições 2022 – carta aos povos indígenas do Brasil. *Campanha Indígena*. <https://campanhaindigena.info>.
- BARBOSA, J. R. (2015). *Chauvinismo e extrema direita: crítica aos berdeiros do sigma*. UNESP.
- BARBOSA, Lia (2020). “Challenges Facing Latin American Peasant Movements under Progressive Governments and New Right-Wing Parties”. *Latin American Perspectives*, Issue 234, Vol. 47, Núm. 5, septiembre, pp. 94-112.
- BARBOSA, Lia (2021). “El carácter abigarrado de la disputa hegemónica y la crisis orgánica en Brasil: notas para debatir los problemas históricos y las perspectivas de superación”, en Oliver, Lucio (org.). *Problemas teóricos del Estado Integral en América Latina. Fuerzas en tensión y crisis*. México: UNAM, pp. 150-166.
- BARBOSA, Lia (2022). “Lo territorial, lo comunitario y los comunes frente al despojo extractivista en América Latina: aproximaciones al debate teórico-político de la CLOC- Vía Campesina”, en Bastos, Santiago; Martínez, Edgar (coords.). *Comunidad, colonialismo y capital. Respuestas al despojo desde América Latina*. Ecuador: Religación Press, Bajo Tierra y Tiempo Robado Editoras: Ecuador, pp. 380-412.

- CAMPANHA Indígena (n.d.). *Campanha Indígena Demarcando as Urnas*. Recuperado de <https://campanhaindigena.info>.
- CECEÑA, Ana (2005). “Estratégias de construção de uma hegemonia sem limites”, en Ceceña, Ana Esther. *Hegemonias e emancipações no século XXI*. Buenos Aires: CLACSO, 2005, pp. 35-55.
- FANTÁSTICO (2022, 16 de enero). Grupos neonazistas crescem 270% no Brasil em 3 anos, estudiosos temem que presença online transborde para ataques violentos. *Fantástico*. <https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2022/01/16/grupos-neonazistas-crescem-270percent-no-brasil-em-3-anos-estudiosos-temem-que-presenca-online-transborde-para-ataques-violentos.ghtml>.
- FERNANDES, F. (2015). Notas sobre o fascismo. En *Poder e contrapoder na América Latina*. Expressão Popular.
- FROSINI, F. (2014). Ideologia em Marx e em Gramsci. *Educação e Filosofia*, 28(56), 559-582.
- GRAMSCI, Antonio (2011). *La alternativa pedagógica*. Caracas: PROA/Editorial Laboratorio Educativo.
- KORYBKO, Andrew (2018). *Guerras Híbridas: das revoluções coloridas aos golpes*. São Paulo: Expressão Popular, 2018.
- OLIVER, Lucio (2021). *Problemas teóricos del Estado Integral en América Latina. Fuerzas en tensión y crisis*. México: UNAM.
- SAMPAIO, C. (2021, 16 de noviembre). Entidade do campo popular desde 1984, MST busca ampliar número de representantes no legislativo. *Brasil de Fato*. <https://www.brasildefato.com.br/2021/11/16/entidade-do-campo-popular-desde-1984-mst-busca-ampliar-numero-de-representantes-no-legislativo>.
- SAMPAIO, C. (2022, 14 de marzo). MST prepara candidaturas de mulheres lutadoras para este ano. *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)*. <https://mst.org.br/2022/03/14/mst-prepara-candidaturas-de-mulheres-lutadoras-para-este-ano/>.
- SOBREIRA, V. (2022, 3 de enero). Os desafios dos movimentos populares: manter-se nas ruas e derrotar Bolsonaro nas urnas. *Brasil de Fato*. <https://www.brasildefato.com.br/2022/01/03/os-desafios-dos-movimentos-populares-manter-se-nas-ruas-e-derrotar-bolsonaro-nas-urnas>.
- SVAMPA, Maristella (2019). *As fronteiras do neoextrativismo na América Latina: conflitos socioambientais, giro ecoterritorial e novas dependências*. São Paulo: Elefante.
- ZAVALETA, René (2009a). *La autodeterminación de las masas*. Buenos Aires: CLACSO.
- ZAVALETA, René (2009b). Notas sobre la cuestión nacional en América Latina. *Antología CLACSO*.

MÉXICO: CRISIS Y LÍMITES DE LA RENOVACIÓN POLÍTICA

LUCIO FERNANDO OLIVER COSTILLA, DENIH MONSIVÁIS MARTÍNEZ,
PILAR GODÍNEZ MEJÍA, ANTONIO EDUARDO MIRANDA RODRÍGUEZ,
MÁRGARA MILLÁN MONCAYO

INTRODUCCIÓN

Los objetivos

En este capítulo interesa analizar la relación entre las concepciones ético-políticas, de visión ideológica-social y de proyecto nacional en la disputa de fuerzas histórico-políticas en el país, teniendo en consideración, como trasfondo, los problemas y las contradicciones acumuladas de la vida nacional y popular mexicana. Para ello, analizamos las recientes tensiones, encuentros y desencuentros del Estado y, en general, de la sociedad política con la sociedad civil en México; esto es, se pretende realizar, desde la perspectiva del Estado integral, la crítica de los proyectos nacionales, incluyendo la cultura que acompaña a las posiciones políticas asumidas por organizaciones y representantes políticos e ideológicos, actores y sujetos de la diversidad social compuesta por los trabajadores, los empresarios, los movimientos sociales e identitarios, las comunidades originarias y la masa popular, en el marco de la disputa de proyectos por la dirección del Estado.

Un papel relevante en el análisis lo tiene la valoración de la política del gobierno actual y del movimiento político-social que lo apoya. Se analizan algunos ejes de la lucha ideológico-política en la situación de creciente crisis de una hegemonía neoliberal de más de tres décadas, y el sustento y la perspectiva de las políticas nacional-desarrollistas del movimiento de la autollamada *Cuarta Transformación*. Consideramos también los posicionamientos de los movimientos sociales populares y comunitarios actuantes ante las problemáticas del país y las disputas mencionadas.

Se trata de evaluar qué tanto se puede hablar de una renovación política del Estado y de algunos aspectos del capitalismo dependiente mexicano, en el entendido de que estamos ante un proceso abierto de *recuperación-continuidad-cambio* de las formas sociales y políticas predominantes en México, con influencias tanto globales como nacionales. También incluimos una valoración de los posicionamientos de los intelectuales que influyen en el conjunto de políticas, instituciones, mediaciones político-institucionales y organizaciones de la sociedad civil. Así, nuestro estudio es tanto sobre la actual crisis del Estado como sobre las disputas por el proyecto nacional y por la hegemonía en las

trincheras del Estado. Se pretende analizar la lucha de posiciones entre fuerzas histórico-políticas, en el entendido de que lo históricamente decisivo pende del grado de identificación y conformidad de las masas con determinadas ideas y políticas de las fuerzas en conflicto.

La cultura como política

Las ideologías son las que sustentan la formación y acción estatal de determinadas fuerzas y distan de ser la falsa conciencia del mundo. Las concepciones del mundo de las fuerzas, los sujetos, actores y dirigentes se concretan en la lucha por conformar una visión influyente en y de la sociedad civil, es decir, cuando la cultura como política aparece en primer plano.

Este estudio se apoya en la teoría histórico-crítica y en el análisis específico de las fuerzas, las problemáticas, las contradicciones y los conflictos de la formación social mexicana y del Estado integral mexicano.

EL ESTADO INTEGRAL: UN ENFOQUE METODOLÓGICO

Consideramos necesario precisar que en este trabajo las nociones de *sociedad civil*, la *hegemonía* y el *Estado* tienen significados precisos y distintos de los que se utilizan en las ciencias sociales tradicionales. La sociedad civil a la que estudiamos en el caso mexicano es entendida en el sentido de Gramsci, como el ámbito societal con derechos y deberes que no contiene solo la diversidad de intereses, organizaciones, concepciones e influencias de toda sociedad, sino que se encuentra ligada culturalmente a la disputa por el poder político público, por la vigencia de un proyecto de país, por mediaciones políticas y una determinada conformidad general de las mujeres y los hombres *masa* (Gramsci, 1999, C. 11, § 12), en tanto individuos y grupos ligados a concepciones partícipes de una determinada hegemonía civil, esto es, al predominio de una serie de concepciones e ideas histórico-políticas sobre lo adecuado y lo deseable en cada formación social, que universalizan las propuestas y la acción de determinadas fuerzas.

La noción de sociedad civil, por lo antes dicho, alude a la existencia de una dada hegemonía que ha conquistado o se encuentra en entredicho en el conjunto de la sociedad (Gramsci, 1999, C. 6, § 24), es decir, refiere al distanciamiento o la aceptación de masas de la dirección intelectual, cultural, moral, política y económica de un Estado que organiza social, política, popular, institucional y nacionalmente a millones de individuos bajo una determinada concepción de lo deseable como normal y adecuado –proyecto de sociedad, de vida y de Estado– para el conjunto de una sociedad en un espacio y tiempo dado.

Para nosotros, y desde Gramsci, la *hegemonía* no significa la imposición del predominio de una determinada fuerza, agrupación o partido, ni la imposición de un proyecto de país y de organización política sobre la sociedad y los grupos políticos. La concepción de la *hegemonía* alude a la capacidad de dirección intelectual, moral, ética, política y económica que logra una determinada fuerza sobre el conjunto mayoritario de una formación histórico-social. Ello implica el logro de un consenso para determinado proyecto de sociedad y de país, aun cuando no se reduzca al consenso mismo, sino que aluda a la reproducción

aceptada de un conformismo social de las grandes mayorías a una determinada forma social.

En consecuencia, consideramos que el complejo de fenómenos de la actual coyuntura sociopolítica puede ser apreciado, sintetizado y condensado a partir de la noción del Estado integral, entendido este en sentido amplio y complejo como una relación orgánica de poder y dirección institucional en, desde y sobre la sociedad civil. Ello incluye el análisis de la interacción del conjunto social, ideológico y político, ya que esto se trasluce en el grado de influencia de los diversos elementos ético-culturales, económico-sociales y de poder en la dinámica y características de la vida social como totalidad (Gramsci, 1999, C. 4, § 134; C. 13, § 17).

Partimos de que la relación de fuerzas, la supremacía de clase, el bloque de poder, el bloque histórico y la específica orientación ideológico-política prevaleciente de las élites e instituciones, la dirección cultural y política tienen un nexo con los intereses, trazos y tendencias prevalecientes en la sociedad y buscamos evaluar ello en términos del predominio de concepciones que rigen, organizan y dirigen la acción de las masas en tanto trinchera y sostén del Estado (Gramsci, 1999, C. 13 § 7). Existe siempre una permanente interdependencia entre las diversas tendencias y fuerzas ideológico-políticas actuantes de la sociedad y el Estado. Por ello, entendemos esa interdependencia, con Gramsci, como unidad orgánica de poder entre sociedad civil y sociedad política.

Metodológicamente, entendemos que los ámbitos considerados como sociedad política (líderes, partidos, constituciones, leyes, ejércitos y organizaciones con actuar político, instituciones y mediaciones) y los componentes económico-sociales y de clase, de la sociedad civil del país (los trabajadores, campesinos, empresarios, capas medias y las comunidades originarias) *construyen* un vínculo ideológico-cultural determinado con el Estado y la dirección institucional e ideológica existente, entendida esta última como la problemática de la persistencia, continuidad, debilitamiento o el cambio de una dada *hegemonía histórico-política* (Gramsci, 1999, C. 19, § 24). Nos interesa apreciar cómo las diversas fuerzas de la sociedad se diferencian y relacionan entre sí en la disputa por una concepción de vida, un programa y un proyecto nacional; cómo se constituyen como elementos dirigentes por medio de una lucha por influir en y organizar a la sociedad y por participar con autonomía histórica y autodeterminación política en las instituciones.

Cabe mencionar que no perdemos de vista que el Estado moderno es un ámbito de poder separado de la sociedad y un fenómeno de enajenación de la misma, resultante de sus contradicciones. Entendemos que todo Estado moderno es un complejo de relaciones, universalizado y establecido por fuerzas en disputa y que adquiere vigencia a partir de la manera en que estas moldean e inciden en una noción de país, una forma política, un aparato de poder, de represión y administración y una proyección económica e ideológica en, de y sobre la sociedad. Es, por lo mismo, una relación tanto de dominio como, especialmente, de dirección de la sociedad, que opera como síntesis y condensación de poder y se manifiesta en una relación de interdependencia entre élites, grupos de interés y poder, grupos sociales, masas populares y proyectos político-ideológicos, interrelacionados entre sí, a partir del grado de autonomía lograda y ejercida por las diversas fuerzas histórico-políticas por medio de la lucha.

En suma, los Estados nunca son iguales a sí mismos en el tiempo y en el espacio. Son fenómenos histórico-políticos que tienen momentos constitutivos, ciclos de desarrollo, situaciones de crisis. La compleja articulación entre las instituciones y la sociedad civil atraviesa por transformaciones relacionadas con los procesos de hegemonía, con avances y retrocesos de distintas fuerzas dirigentes e ideologías colectivas. Nuestro enfoque del Estado mexicano contemporáneo pondrá énfasis en las transformaciones ocurridas en los últimos años que conllevan desplazamientos en la sociedad política y la sociedad civil, mismos que modifican las formas del Estado.

Si bien analizamos en la medida de lo posible el conjunto de las relaciones, en este capítulo priorizamos el estudio de las concepciones ideológicas que actúan en la formación y estructuración de las fuerzas en la relación social de poder (Gramsci, 1999, C. 10 y 11). Ello es un aspecto poco estudiado en el examen del Estado y paradójicamente es donde la sociedad civil se constituye plenamente como elemento activo del nexo constituyente del fenómeno de la hegemonía –como dirección– compartiendo, como ya se ha dicho, con los grupos dirigentes y con las masas un determinado conformismo social con el proyecto de sociedad y de poder (Gramsci, 1999, C. 11, § 12). Es con esos elementos y características que la sociedad civil se constituye en una trinchera y no en un apéndice del Estado (Gramsci, 1999, C. 6, § 24 y C. 13, § 7). De esta forma, estamos muy lejos de entender al Estado como el puro dominio de las oligarquías, aunque en ciertas coyunturas se reduzca a eso y oculte la manera en que la sociedad comparte los ejes fundamentales de dicho dominio (Zavaleta, 2009).

Estamos convencidos de la pertinencia del enfoque de Gramsci respecto de que la política y el poder se sustentan en una ideología difundida y compartida entre las élites y las masas. Esto alude a la cultura como política y no a las normas y valores sociales en sí mismas, sino a su relación con el fenómeno del poder. Por ello, incorporamos también una apreciación sobre el papel y la función de los intelectuales, quienes tienen en su haber dar contenido y forma a una visión del mundo y una concepción de lo adecuado para la sociedad y el Estado.

LA SUPREMACÍA DEL ESTADO MEXICANO, SUS CONTRADICCIONES ACUMULADAS Y SUS FORMAS MODERNAS EN PERSPECTIVA ECONÓMICA E HISTÓRICA POLÍTICA

En este capítulo, tratamos de alejarnos de los lugares comunes de la ciencia política sobre el Estado y la sociedad –el Estado visto como fenómeno reducido a las instituciones y la sociedad como la pura diversidad de elementos que establecen un vínculo externo, por la vía electoral y la reducción del análisis a las formas delegativas de representación– para centrar nuestra atención en el examen y la caracterización de las fuerzas reales, las que han sido forjadas históricamente en los ámbitos de la economía, la política, las ideologías y la cultura y que se expresan en la dinámica del dominio y la lucha política (y electoral) en torno del poder, las instituciones y prácticas políticas en el país, es decir, partimos de una *perspectiva político-histórica de las relaciones sociales de poder*.

La relación de fuerzas, por lo mismo, tiene vínculo con la historia, las contradicciones y problemas del país, en tanto capacidad acumulada y presente, que les da a estas fuerzas

un lugar en la lucha nacional y popular y en la definición de la orientación en lo interno, en lo internacional y en lo mundial.¹

No obstante lo mencionado en el apartado metodológico, cabe señalar que la autonomía relativa y la supremacía del Estado sobre la sociedad son rasgos históricos de la mayoría de los Estados modernos (Liguori, 2007), cuestión que se reafirma en el México contemporáneo, especialmente en referencia al poder político ideológico-histórico, con atributos de colonialidad, surgido de la Revolución, las reformas cardenistas, los regímenes nacional desarrollistas, modificado parcialmente con motivo de la crisis de 1968, de los últimos treinta y cinco años de los gobiernos pro empresariales inmediatamente anteriores al actual y bajo el gobierno vigente (Meyer, 2019).

Sin duda, el papel preponderante del Estado es producto de las características de la lucha de intereses contrapuestos en la misma sociedad, del nivel ideológico político de las fuerzas históricas en donde se produce el predominio de un grupo dirigente histórico. (Córdova, 1989 y Zavaleta, 2009). La clase política general inculcó e impulsó –incluso, con violencia– en la sociedad rasgos económico-corporativos particularistas y autoritarios en las clases populares, las comunidades originarias, los empresarios y las capas medias de la sociedad, formados en la historia moderna de México.

Para apreciar y valorar los proyectos activos que inciden en el Estado, determinando sus orientaciones y políticas, es necesario, por tanto, ir más allá de sus programas, de su aparente racionalidad, de sus intenciones y deseos, para entenderlos como expresión de la acumulación y lucha de fuerzas con una perspectiva histórica, social universal y general (Zavaleta, 2009).² Un rasgo característico del Estado mexicano es su persistente colonialidad y monoculturalidad que debilita su capacidad de representar y expresar al conjunto de la sociedad, para imponer permanentemente los intereses y las concepciones de élites dominantes urbanas que han normalizado la discriminación de las poblaciones indígenas y el colonialismo interno (González Casanova, 1999).

La situación actual, empero, es la expresión de las problemáticas, contradicciones y conflictos activamente presentes y acumulados bajo la continuidad y discontinuidad del Estado, esto es, de las concepciones y acción de las masas populares, de las iniciativas de las élites históricas, los bloques de poder, los procesos, los sistemas políticos, el movimiento orgánico del capitalismo dependiente, la sociedad, las mediaciones y la ideología. Todo ello puede ser resumido hoy en nuestro país en la constitución de determinados ciclos hegemónicos y su crisis, hasta llegar a la problemática de caracterizar la situación del Estado capitalista moderno mexicano.

¹ Entre los autores destacados que han abordado el Estado mexicano contemporáneo referenciamos a Arnaldo Córdova, 1972/73; José Revueltas, 1963; Arnaldo Martínez Verdugo, 1971; Adolfo Gilly, 1977; Lorenzo Meyer, 1980/90; González Casanova, 1963/1978/2018; Roger Bartra, 1978; Armando Bartra, 2014; Enrique Semo, 2021; Elvira Concheiro, 2022; John Ackerman, 2021; Rina Roux, 2018. Las fuerzas políticas también han caracterizado el fenómeno, véanse los proyectos nacionales del PRI, del PAN, de Morena.

² Obviamente, el enfoque dista de proponer el reforzamiento abstracto del Estado, y contribuye al conocimiento de los elementos que dificultan la elevación ideológica política de las fuerzas populares y nacionales de la sociedad civil y el logro de la autonomía política popular, lo que precisa de un Estado democrático popular acotado y subordinado a la sociedad y bajo la dirección de las fuerzas que promueven la emancipación.

Hoy, la formación social mexicana está plenamente integrada a la economía mundial y sometida a la globalización neoliberal, bajo el dominio del gran capital corporativo y financiero transnacional. Considerar las formas y mecanismos de la integración mundial de México es, por tanto, referencia necesaria para comprender el posicionamiento de las distintas fuerzas ideológico-políticas y de los intentos de sumisión o soberanía nacional relativa ante fenómenos que actúan en la economía, la sociedad, las comunidades, la ideología y la política de la nación.

Durante los últimos treinta y cinco años, las fuerzas empresariales han ocupado espacios principales de poder y dirección, mediante un proyecto neoliberal que aparentemente buscaba reducir la supremacía histórica del Estado y dar un mayor espacio a las fuerzas capitalistas nacionales y transnacionales y a las fuerzas sociales en la determinación de las directrices del poder. Sin embargo, su actividad llevó a que el Estado se transformara en una fuerza de imposición del proyecto particular neoliberal, sin propiciar un real desarrollo político autónomo e independiente de las fuerzas sociales y políticas. Aunado a ello, se produjo una descomposición del Estado que condujo a una entronización de los cárteles del narcotráfico y de las redes del crimen organizado en el poder público, a nivel nacional y local, que, a su vez, combinadas con la actividad misma de ciertos grupos empresariales —minerías, hidroeléctricas, etc.—, explica el grado y la forma de la violencia ejercida contra los proyectos democrático-populares, los defensores del territorio y la autodeterminación de las comunidades.

El proyecto neoliberal no se pudo imponer del todo y por ello se generó una crisis de hegemonía histórica que derivó en el triunfo electoral de una nueva fuerza nacionalista popular con un proyecto de restauración nacional-desarrollista del Estado.

La confrontación de intereses y proyectos se presenta hoy bajo la forma de un *inestable equilibrio histórico político de fuerzas locales, nacionales, regionales y globalizadas* en pugna. Ocurre también que en México existe una fuerza popular muy activa, extendida, precarizada, poco politizada, pero con una acumulación histórica de capacidad productiva, de diversas perspectivas locales, nacionales, culturales, y de relación directa y con influencia en el Estado de más de un siglo, período en que han prevalecido variables proyectos capitalistas, una dirección política autoritaria de las élites dirigentes y una integración económico-corporativa de las fuerzas sociales y económicas, tanto empresariales como populares. Entre las fuerzas hay una tendencia hacia un inestable equilibrio que gira en torno a su variada capacidad de dirigir al país y la cristalización de agudas y graves contradicciones y conflictos.

LA ACTUAL COYUNTURA MEXICANA. ELEMENTOS SUSTANCIALES DEL ANÁLISIS

Considerar la situación actual de México nos implica discurrir sobre:

1. Las problemáticas históricas de la formación social del país, frente a las cuales se posicionan y actúan las distintas fuerzas de cambio y conservación. La fase actual del capitalismo mexicano dependiente, que impone un modelo de acumulación subordinado al gran capital transnacional, acentúa la desigualdad social y económica,

desestructura la economía e impide la regulación estatal. Ello intensificado por la “economía ilegal” y la actividad de las redes del crimen organizado.

Esto conlleva los siguientes fenómenos persistentes en el ámbito económico:

- El desarrollo desigual del campo mexicano y la orientación de gran parte de su producción a los mercados internacionales.
- El rentismo y extractivismo en la economía mexicana.
- La desarticulación de la industria y el peso dominante de las empresas transnacionales sobre la actividad maquiladora y manufacturera.
- Las deformaciones que introduce la dependencia de las remesas y la economía del turismo dominada por empresas transnacionales.
- El crecimiento de la economía informal, abarcando el 55.8% de la población en condiciones de trabajar (INEGI, 2022), junto a la desigualdad y precarización de las ciudades y las poblaciones campesinas.

Por otro lado, encontramos aspectos políticos-culturales que siguen primando en la forma social mexicana y que se vieron acentuados en el periodo neoliberal:

- La subordinación a las estrategias de los Estados Unidos.
 - La persistencia de la descomposición del Estado, especialmente en ciertos aparatos y regiones del país (manifestada, por ejemplo, en la complicidad de los poderes locales con el crimen).
 - El carácter elitista y distanciado de los partidos políticos y las instituciones –como el Congreso, el Poder Judicial y la burocracia administrativa– respecto de la sociedad.
 - La persistencia del presidencialismo como forma política de dirección y eje del Estado, pese a las características distintas que asume en los distintos periodos.
 - La falta de autodeterminación y participación de las masas populares en las decisiones políticas referentes a los proyectos nacionales y locales.
 - La predominancia de una cultura mediática y social-elitista, racista y patriarcal.
 - La insuficiencia de una cultura crítica en las masas populares.
 - La continuidad del colonialismo interno y las consecuencias vigentes del proyecto nacionalista de mestizaje y el monoculturalismo impuesto.
 - La persistencia del autoritarismo como concepción y rasgo distintivo de las relaciones sociales, tanto en la sociedad política como en la sociedad civil.
 - La existencia de una cultura política acorde a las premisas y valores del capitalismo mercantilista.
2. La herencia de políticas y concepciones empresariales que incidieron en las relaciones de fuerza y que afectaron tanto a la sociedad política como a la sociedad civil.

Previo a las reformas políticas recientes, las fuerzas políticas modernizadoras neoliberales impulsaron una modernización excluyente, con una tendencia al despojo sobre la gestión popular de los recursos y una actualización del vínculo subordinado con los Estados Unidos, manifestado, por ejemplo, en la iniciativa Mérida y las políticas de seguridad y

migración. Así mismo, la descomposición de las instituciones, la corrupción, la desnacionalización, la elitización y la subordinación despolitizada de las masas alcanzaron el cenit.

En lo económico ha prevalecido una oligarquía transnacionalizada que promovió el aumento de la desigualdad y mostró indiferencia ante el crecimiento de la economía informal y el desempleo estructural, así como ante el incremento de la dependencia productiva de las cadenas globales corporativas transnacionales de producción y el dominio del capital financiero mundial sobre el conjunto de la economía.

Por otro lado, se agudizaron cuestiones sociales y políticas, tales como la desintegración de las periferias urbanas, los pueblos y las comunidades originarias en su relación con la economía, la política y la cultura nacional; la concentración excesiva de población en el centro del país y en unas pocas ciudades; la inclusión pasiva y subordinada de las mayorías en la vida nacional; el desplazamiento de población a causa de la violencia de los cárteles del narcotráfico, el abuso sobre la población y la desaparición de personas, aunado a la problemática del corredor migratorio de Centroamérica, el Caribe y del sur del país, todo ello en un marco de corrupción política y complicidad de las élites que han dirigido a la mayoría de los estados locales con el crimen organizado.

Las persistentes concepciones y propuestas ideológico-políticas individualistas –de competencia y primacía del mercado–, que en el pasado reciente crearon nuevas mediaciones verticales, profundizaron el capitalismo dependiente y subordinado del país y las formas *dirigistas* de supremacía estatal, impidiendo la construcción y transformación democrática del Estado y abrieron camino al rechazo a una economía social soberana. La política se transformó en una negociación mercantilista de élites y los partidos se separaron de la sociedad para ajustarse a las directivas clientelares del Estado y las corporaciones transnacionales. Mientras que la visión del mundo, las concepciones y el sentido común prevaleciente en las grandes mayorías del país configuran la persistencia de una cultura colectiva despolitizada y autoritaria de la sociedad civil.

Los elementos anteriores conforman el marco de referencia de la disputa de concepciones y proyectos de las fuerzas en y por la sociedad política y la sociedad civil en la coyuntura actual.

PERSISTENCIA DE LOS MOMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO MEXICANO

El gobierno actual se ha propuesto un proyecto progresista restaurador del Estado. Este proyecto se caracteriza por intentar establecer un grado de regulación de la economía y el retorno a las políticas públicas y sociales universales establecidas en la *Constitución*. Para ello, apela a la memoria histórica de la población y a las demandas de los movimientos sociales: busca legitimidad a partir de reivindicar al Estado-nación como el canalizador ideal de las luchas populares. En este proyecto se aprecia la persistencia de rasgos del estatismo histórico modificado por políticas democráticas y populares.

Las conquistas e instituciones derivadas de la Revolución de 1910-1921 y de las reformas de 1936-1940 siguen siendo la referencia más fuerte de las relaciones políticas y culturales en el Estado integral mexicano contemporáneo (Oliver *et al.*, 2017).

La ideología autoritaria y estatista generada en esos grandes momentos transformadores persiste influyendo hasta el presente, tanto en la sociedad política como en la sociedad civil. Esto pese a los cambios que han buscado superarla o modificarla, tales como las reformas democratizantes de 1979, con cambios desde arriba y reconocimiento abierto a todos los partidos electorales, y otras reformas pensadas para incentivar un capitalismo transnacionalizante, como la modificación del artículo 27 constitucional en 1992, para dar pie a la venta privada de los ejidos y la privatización de empresas estatales.

De manera sobresaliente podemos aludir a la *ideología nacional popular* proyectada en el Estado, que no pudo ser eliminada por las políticas neoliberales que significaron una mayor subordinación a las políticas de acumulación de capital y a la captación de espacios del poder burocrático del Estado por parte de sectores privilegiados de las clases medias y, sobre todo, por grupos del capital financiero y corporativo transnacionalizado.³

Así mismo, a pesar de los cambios neoliberales de finales del siglo pasado e inicios del presente, que se propusieron legitimar al Estado nacional de competencia (Hirsch, 2002) con la privatización de lo público, la sumisión a la economía transnacional y a la geopolítica de los Estados Unidos, persistieron, debilitados pero actuantes, los elementos ideológicos claves de los *momentos constitutivos del Estado integral mexicano* que hasta hoy se niegan a desaparecer:

- a. **La política orientada a crear una economía capitalista interna**, con soberanía alimentaria y uso racional de los recursos, desestructurada hoy e integrada a la globalización contemporánea.
- b. **El capitalismo de Estado**, con sus empresas estatales estratégicas y su ideología nacional desarrollista.
- c. **Las políticas públicas y sociales como ejes de los derechos y las libertades que articulan la relación del Estado con las masas** en torno a la salud, educación, vivienda, seguridad social, asistencia económico-social y soberanía.
- d. **Las instituciones de Estado que han mediado la relación entre la sociedad política y la sociedad civil**: las fuerzas armadas, los órganos electorales y los partidos del Estado, los programas de apoyo y los subsidios a los sectores marginales urbanos y a los campesinos, y la política interna e internacional de un Estado que ha capitalizado el sentir de los mexicanos.
- e. **El burocratismo de la sociedad política y sus correlatos corporativos, autoritarios y clientelares en la sociedad civil**, modificados parcialmente por las luchas democráticas de los últimos 54 años.
- f. **Una clase política que se asume como dirigente privilegiada de interpretación de la nación y del pueblo**, referente de la soberanía nacional popular, conformada por alianzas entre grupos políticos que se hubieron apropiado de una perspectiva general del Estado y de su carácter popular y nacional (Revueltas, 1963; Martínez Verdugo, 1971; Zavaleta, 2009).

³ De ahí surgieron las políticas para crear órganos autónomos, focalización y privatización de las empresas estatales y las políticas públicas, ocupación transnacionalizada de la economía, subsidios especiales a los empresarios, corrupción estatal como forma de gobierno, etc.

- g. **Una ideología nacionalista popular** que considera la funcionalidad del capitalismo como relación social dominante, pero reconoce contradicciones entre clases. Bajo esta ideología prevalece la idealización del elemento ético-moral de los funcionarios públicos y los líderes sociales y empresariales como articuladores de la unidad de la nación, de la salud de la economía y las instituciones del país.
- h. **La política como asunto exclusivo de la burocracia del Estado y los partidos, así como la peculiar politización de la sociedad civil considerada en función del apoyo a la orientación y las determinaciones de los dirigentes políticos-burocráticos del Estado**, aspecto que en las últimas décadas ha sido crecientemente cuestionado por organizaciones populares de la sociedad civil, así como por los sectores empresariales que siguen presentes en la disputa por la dirección al interior del Estado.
- i. **La soberanía nacional negociada, construida a partir de tratar de equilibrar una autonomía relativa del Estado con la dependencia** de los Estados Unidos, lo que le ha permitido a los gobiernos mexicanos presentarse con políticas diferenciadas a las de América Latina, como la negativa a participar en el bloqueo a Cuba.

Esos rasgos nacional-desarrollistas siguen incidiendo en la actual situación y hacen parte de un Estado donde las masas populares son referencia pasiva de las políticas y conforman el movimiento contradictorio y conflictivo de la sociedad política y la sociedad civil.

LA CRISIS DEL NEOLIBERALISMO Y EL MOVIMIENTO POLÍTICO EMERGENTE

Bajo el Estado neoliberal y la dirección empresarial oligárquica, las reformas democráticas posteriores a 1968 fueron extremadamente deformadas, debilitadas y estancadas; ellas se vieron impactadas y distorsionadas por la orientación privatista y elitista de las reformas empresariales de carácter neoliberal posteriores a 1988. Sucedió lo que comentaba la investigadora brasileña Evelina Dagnino (2006), en el sentido de que bajo el empuje del Estado de competencia transnacionalizado y el neoliberalismo capitalista transnacional se generó una *hibridación de proyectos*, para dar lugar en los periodos neoliberales a un social liberalismo estatal que, cual hoyo negro, se tragó y transformó los proyectos democráticos en políticas neoliberales y autoritarias de un Estado empresarial transnacionalizado, y reforzó una sociedad apolítica y clientelar, conformada a partir de su alta precarización.

El resultado fue la contradictoria hegemonía capitalista neoliberal, la cual atravesó un proceso de debilitamiento bajo los cinco gobiernos del período neoliberal de 1988 a 2018 (Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto), ante los cuales se fue fortaleciendo una resistencia de los segmentos populares de la sociedad civil al corporativismo estatal, en el contexto del desgaste organizativo-social provocado por la privatización y una profunda reducción de miras públicas y nacional-populares de las instituciones clave del Estado.

La inconformidad acumulada llevó al triunfo electoral de la opción progresista-popular que se propuso revertir o modificar el dominio privatista empresarial, el deterioro de las formas corporativas de agrupación de la sociedad civil, el debilitamiento de los

derechos y la propagación de fenómenos de exclusión e informalidad en la vida social y económica de los trabajadores, los campesinos y las comunidades.

El debilitamiento de la hegemonía de la vieja clase política neoliberalizada se aceleró ante el nuevo movimiento político encabezado por López Obrador, centrado, como se ha dicho, en un proyecto de recuperación de un Estado popular nacionalista, no obstante, sin identidad de clase, sin crítica histórico-social del capitalismo dependiente y sin una perspectiva de crítica teórico-política del Estado, llevando a cabo apenas una crítica a las instituciones de la democracia liberal de élites y a la corrupción estatal que acompañó a las privatizaciones y el programa transnacionalizado de la anterior clase política dirigente. De esta manera, el movimiento político-electoral morenista se centró en líderes identificados con el progresismo y no en aquellos que luchan por una conciencia democrática radical en la sociedad.

El antecedente inmediato del movimiento de la Cuarta Transformación fue el bloque de fuerzas populares que lograron la conquista del gobierno del entonces Distrito Federal después de 1997, bajo la dirección de Cárdenas, Muñoz Ledo y López Obrador. Pero este grupo tenía distintas posiciones y López Obrador tuvo capacidad para romper con esa hibridación y sumar, en un torrente de oposición y cambio, a las corrientes democrático-populares y de nacionalismo popular en un solo movimiento político-nacional de renovación política, contraponiéndose al proyecto depredador oligárquico empresarial de la clase dirigente mexicana, cuya ideología neoliberal se caracterizaba por su alta subordinación al capital transnacional y su subalternidad a la perspectiva estratégica de los Estados Unidos.

Resaltan varios elementos nuevos que se transparentaron en el debilitamiento de la hegemonía de las clases dirigentes del capitalismo transnacionalizado y se viabilizaron en el impulso de masas por una opción electoral alternativa de carácter progresista: el extremismo de la clase transnacional capitalista depredadora, alineada a una ideología de combate de ultraderecha, centrada en los negocios con segmentos de esta clase, asociados a los grupos del narcotráfico y con vínculos estrechos con la clase dirigente de los Estados Unidos, coincidió en un mismo tiempo y espacio con la relativa caducidad de las formas políticas del corporativismo obrero campesino y comunitario, con la resistencia organizada de sindicatos minero, petrolero y electricista, en convivencia con una masa desbordante de trabajadores de economía maquiladora y economía informal de más del 60 por ciento de los trabajadores, una clase media dividida entre un sector moralmente hartado de la corrupción y desnacionalización y un amplio segmento conservador de defensa de sus privilegios y beneficios, el particularismo de los movimientos de educadores como la CNTE, y el proyecto comunitario autonomista del Consejo Indígena de Gobierno, el Congreso Nacional Indígena y el EZLN.

Los resultados electorales de 2018 en favor del candidato Andrés Manuel López Obrador y la abundante votación para Morena⁴ manifestaron la crisis de hegemonía del programa y políticas neoliberales de los partidos del orden, lo cual conllevó una renovación de la ideología nacional desarrollista en las mayorías populares.

⁴ 30 millones 113 mil 483 votos, que constituyeron el 53.19 % de la votación total, en tanto que toda la fuerza de derecha neoliberal *sumada* alcanzó 24,861,705 millones, esto es, el 44 % de la votación (INE, 2022: web).

La burocracia dirigente del Estado, a partir de diciembre 2018, se conformó con una mayoría en las cámaras de representantes electos del partido Morena –y sus coaliciones– y ha logrado consolidar un movimiento influyente en los órganos representativos de las entidades nacionales, estatales y locales, contando con fuerte apoyo social popular, empero, heterogéneo, con múltiples concepciones, corrientes y posiciones y con persistencia de algunos rasgos clientelares y particularistas.

Se puede apreciar que dentro del proyecto de la Cuarta Transformación hay una disputa de concepciones y grupos dirigentes, tanto en el Estado como en los diversos ámbitos del partido. Las múltiples disputas al interior de Morena están atravesadas por el *obradorismo* –como movimiento político-ideológico y burocrático en torno a la dirección de López Obrador–, que se caracteriza por impulsar un *cesarismo presidencialista-progresista*⁵, en donde el presidente pase a ser la figura dominante en las decisiones y la orientación política del Estado y el partido, con un gran apoyo de seguidores activos que perciben a la figura de López Obrador como personificación de la política.

En términos de la relación con las masas, el obradorismo muestra una continuidad de la concepción nacional-desarrollista tradicional, la cual ubica al pueblo como un elemento de apoyo y legitimación de las políticas de gobierno y proyecto estatal, por ende, no busca que estas se organicen por sí mismas y establezcan un vínculo autodeterminado con la política, en su lugar, se remite a su inclusión pragmática en el consumo, al ejercicio de derechos, en tanto que se buscan adherentes que le signifiquen votos al partido, sobre todo en función de la correlación de fuerzas políticas locales. Por ello, no excluye la conformación de alianzas amplias con empresarios, funcionarios políticos previos de distintas ideologías y dirigentes de movimientos sociales de diversa orientación, para constituirse como gobierno.

Por otro lado, encontramos que en Morena tiene un peso político importante la actividad e influencia de los denominados *operadores políticos pragmáticos*, que se distancian de los postulados enunciados por la Cuarta Transformación, como ha sido el caso de las intervenciones de Ricardo Monreal y de Mario Delgado en la organización de congresos y selección de dirigentes electorales del partido (García, 2023: web). Encontramos en la vida interna de la organización del partido una dinámica de acuerdos de grupos que no siempre siguen las formas democráticas abiertas a la participación de las bases y que derivan en la toma de decisiones autoritarias. El pragmatismo de estos grupos deja ver que los triunfos electorales se convierten en objetivo principal, antes que gestar una política integral de cambio en la sociedad.

Las disputas al interior de la Cuarta Transformación y las falencias ideológicas de sus grupos son un impedimento significativo para la constitución de un bloque amplio de poder progresista y la renovación de una clase general con capacidad política dirigente que sea el núcleo del proceso de transformación (Zavaleta, 2009).

⁵ Fenómeno distinto al de una concentración excesiva de poder, lo que caracteriza a otros dirigentes de Estados con gobiernos progresistas, como fue el caso del finado presidente de Venezuela, Hugo Chavez.

LAS POLÍTICAS Y PROYECTOS DEL GOBIERNO ACTUAL

En el marco de los objetivos de la Cuarta Transformación, podemos decir que las medidas que ha tomado el gobierno federal han tenido cierto impacto encaminado a la modernización y la recuperación institucional que remite a las matrices ideológico-políticas del Estado nacional-desarrollista.

En lo económico, el gobierno ha optado por la ejecución de diversos megaproyectos que buscan estimular la actividad económica empresarial capitalista, el acceso al empleo y la capacidad de consumo por parte de los sectores populares, haciendo énfasis en aquellos que habitan en las áreas empobrecidas del sur y sureste del país. Entre estos proyectos destacan el tren maya, el nuevo aeropuerto para la zona metropolitana del Valle de México, el ferrocarril de alta velocidad del Istmo de Tehuantepec (que pretende conectar el Golfo de México con el Océano Pacífico y que se propone que esté rodeado de empresas maquiladoras internacionales), el proyecto integral Morelos (que plantea un corredor industrial entre Morelos, Puebla y Tlaxcala), todo lo cual ha conllevado una fuerte inversión económica estatal. No obstante, los megaproyectos desarrollistas perfilados para las áreas rurales no han sido todavía acompañados de otros similares para las ciudades, que permitan a las urbes enfrentar problemáticas del trabajo informal, la efectivación del derecho al acceso popular a la vivienda y diversas demandas de economía social propuesta por las organizaciones autónomas de los trabajadores urbanos y los movimientos indígenas en las ciudades.

Estos proyectos sintetizan una disputa de concepciones y una lucha de posiciones (Gramsci, 1999; C. 15) que existen al interior de la sociedad política y la sociedad civil. Por su parte, la Cuarta Transformación ha señalado que el sur y sureste del país han sido objeto de políticas históricas de marginación y atraso, y los megaproyectos ofrecen opciones de industrialización, empleo e incremento de la actividad comercial que elevaría a esas regiones en su actividad e inclusión económica.

En oposición crítica se han presentado las concepciones y la posición política del Consejo Nacional Indígena y de un sector de la intelectualidad afín al neozapatismo, que consideran que el desarrollo debe estar asociado a la elevación de la participación económica directiva de las comunidades originarias y al crecimiento de la autonomía u organización propia que permita un cambio profundo en las relaciones político-culturales del país. Esto ha abierto un flanco de lucha y organización en defensa del territorio y los bienes comunes por parte de algunas comunidades y pueblos, frente al proyecto desarrollista impuesto por el gobierno, lo que ha generado la simpatía de ciertos sectores de la sociedad mexicana, que ven en ellos un interés legítimo.

La distancia de ambos posicionamientos ha favorecido que prime la desconfianza entre el gobierno y el Consejo Nacional Indígena y se anule la posibilidad de un debate o un diálogo frente a lo cual el gobierno ha optado por asumir los proyectos como decisiones irreversibles, en tanto que se consideran como asuntos de interés estratégico de seguridad nacional.

Acompañado de esto, grupos de oposición que se han identificado previamente con el proyecto neoliberal, explotador de recursos y despojador de territorios, se han valido

de estas situaciones para contraponerse al gobierno y presentarse como defensores del ecologismo abstracto.

Por otro lado, el gobierno de AMLO ha llevado a cabo la recuperación de empresas públicas que se encontraban en un avanzado proceso de privatización, especialmente en sectores estratégicos de la economía, como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, las encargadas de la dispersión de aditamentos para el sector agrícola bajo el Programa Nacional de Fertilizantes, así como la inversión estatal en vías de comunicación, puertos y refinerías. Aunado a ello, se efectuó un blindaje nacionalista de otro tipo de recursos emergentes, como el litio.

En el ámbito social, este gobierno ha realizado un esfuerzo considerable en la revaloración de lo público, poniendo en primer plano el derecho de la sociedad a tener políticas públicas universales y de calidad. Esto se ha manifestado en una confrontación con los poderes económicos que dominaban, por ejemplo, los ámbitos de la salud y la alimentación. Una iniciativa importante en el sector salud ha sido combatir el monopolio de las trasnacionales farmacéuticas, encargadas de la producción e importación de los medicamentos para tratar las enfermedades más frecuentes en la población.

Por otro lado, el hecho de que este sexenio estuviera atravesado por la emergencia sanitaria mundial derivada del COVID-19, evidenció que era necesario un cambio en la orientación de las políticas de salud y un mejoramiento de la infraestructura de atención a la población. Esto derivó en la aplicación de políticas para controlar a las empresas farmacéuticas, mejorar el servicio médico, fiscalizar el contenido de los alimentos a la venta en el mercado, y procurar políticas para mejorar la infraestructura. Queda pendiente sin embargo, una política integral que garantice el acceso generalizado de la población a la prevención y a la atención médica puntual, de calidad y suficiente en todos los niveles y que la población no se vea obligada a buscar la medicina privada para tener una atención efectiva.

Otra dimensión significativa en cuanto a las políticas públicas se encuentra en el ámbito de la educación. Se inició una revisión de la reforma educativa neoliberal y una renovación del Plan Nacional de Educación y los libros de texto para cuestionar las concepciones individualistas y eficientistas para en su lugar impulsar el pensamiento crítico y la vinculación con la comunidad. Destaca también la política de otorgamiento de becas universales para estudiantes de todos los niveles educativos.

Por otro lado, se dio paso a la reestructuración del CONAHCYT (antes CONACYT), que implicó también una confrontación con los cotos de poder que controlaban y privatizaban los presupuestos destinados a la investigación y becas, para proyectar una nueva política de Ciencia y Tecnología con criterios públicos y sociales nacionales.

En cuanto a derechos laborales, la política se orientó a la elevación del salario de los trabajadores y al reconocimiento de sus derechos, a través de las propuestas de regulación del trabajo existente bajo el régimen del *outsourcing*. Además ha estado presente la idea de generación de empleos públicos en el campo, aunque temporales, como el programa sembrando vida, dirigido a población joven en situación de marginalidad e incluso, a migrantes centroamericanos.

Un aspecto importante a considerar para la propia posibilidad de estas políticas sociales universales ha sido el saneamiento de la política económica financiera. Las iniciativas

han sido, principalmente, la lucha contra grandes privilegios financieros que estaban enquistados en los periodos anteriores, el fin de los subsidios y el cobro de impuestos a los grandes capitales empresariales, el control de los movimientos financieros realizados a través de los bancos y la recuperación de la capacidad de investigación de la unidad de la inteligencia financiera sobre las inversiones y movimientos de capital de diverso tipo.

El tema del combate a la corrupción de Estado ha ocupado un lugar central en las políticas del gobierno. En torno a ella se han desplegado políticas de reestructuración económica y moral en las instituciones del gobierno federal, poniendo en primer plano una contradictoria concepción de austeridad en la administración pública.

Con el fin de sustentar política y socialmente las medidas gubernamentales, se han desplegado ejercicios de consulta popular a niveles locales y nacionales, que sin embargo no están adecuadamente reguladas y no han podido constituirse como un marco participativo que promueva la reflexión crítica de las masas, pues se han utilizado, más bien, como un intento de vinculación moral entre gobierno y población.

El terreno de la seguridad pública representa un problema de especial dificultad y atención para el gobierno actual. Pues no se trata solo de implementar medidas de pacificación, sino también de reconstrucción del tejido social; los años de la guerra contra el narcotráfico propiciaron la proliferación de grupos del crimen organizado que expandieron sus actividades ilícitas más allá de la producción y el comercio de drogas. La situación ha llegado a niveles donde estos grupos han sustituido en algunas regiones no solo al Estado como mediador, sino también han moldeado las relaciones sociales en todos sus niveles y las han subsumido a la dinámica económica criminal (Payley, 2020).

Las políticas del gobierno de la 4T han girado en torno a la investigación y confiscación de recursos financieros y monetarios de las organizaciones y prestanombres. También han realizado un importante proceso contra el tráfico legal e ilegal de armas provenientes de Estados Unidos, distanciándose de las políticas de seguridad nacional de dicho país y de la intervención que pretenden sobre estas al interior de México (Iniesta, 2023), cuestionando fuertemente las presiones de la DEA y el Departamento de Estado de EE.UU. hacia el gobierno mexicano. En el aspecto político, el gobierno ha buscado desplazar a los gobernadores y fiscales que presuntamente tendieron puentes de complicidad con el crimen organizado⁶, como fue el caso de Tamaulipas y, recientemente, Morelos.

Otra de las políticas de seguridad ha sido la conformación de la Guardia Nacional y una política centralizadora del poder militar, las cuales forman parte de las acciones a mediano y largo plazo. A propósito, es importante mencionar que este proceso de re-centralización del poder castrense del Estado es valorado por algunos analistas de la prensa y ONG's como militarización, es decir, un proceso progresivo y de delegación del poder civil al poder militar, sobre todo por la creciente asignación de presupuesto pú-

⁶ Específicamente hacemos referencia al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, véase para el caso del primero: <https://elpais.com/mexico/2022-10-05/la-fiscalia-ordena-la-captura-de-cabeza-de-vaca-exgobernador-de-tamaulipas.html> y en el caso del segundo: <https://www.jornada.com.mx/notas/2023/08/06/capital/vinculan-a-proceso-a-Uriel-Carmona-fiscal-de-morelos/>.

blico a la SEDENA y la SEMAR, y la creación y supeditación de la Guardia Nacional a SEDENA. Las preocupaciones aluden a que el ejército –como institución y poder armado– ha estado involucrado en crímenes de Estado, como fue el caso de Ayotzinapa y las comisiones de la verdad, en donde el hermetismo y la cerrazón por parte de los militares para abrir sus archivos ha sido un obstáculo para el acceso a la justicia y la reparación del daño. Esto crea una desconfianza creciente en el proyecto centralizador de AMLO, entre ciertos sectores, sobre todo con los colectivos de familiares de desaparecidos, víctimas y académicos, en contraste con las declaraciones del presidente apuntan a justificar la necesidad de una nueva relación y una nueva dirección del ejército (Guevara, 2021).

Preocupan de sobremanera a sectores organizados de la sociedad civil (movimientos sociales, feministas, víctimas, familiares de desaparecidos, ONG's) dos cuestiones sobre la Guardia Nacional: por un lado, la discrecionalidad y opacidad en torno a la formación y legalización de la Guardia Nacional, pues haberla conformado por militares y elementos de la extinta Policía Federal Preventiva aumenta la desconfianza ante cualquier política que involucre el uso o administración de la fuerza pública, debido al historial de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército mexicano. Por otro lado, las actividades en las que ha estado involucrada la Guardia Nacional son de índole civil, incluido el apoyo al Instituto Nacional de Migración (INAMI) que ha sido evidenciado en el trato discriminatorio y violento hacia las caravanas de migrantes.

Por último, es necesario señalar un problema de la relación del gobierno con diversas organizaciones de la sociedad civil que no están organizadas institucionalmente, y forman parte de la lucha y resistencia popular, y que observan la violencia del crimen organizado. Simultáneamente, denuncian episodios de violencia ejercida por sectores de las fuerzas armadas, y critican las políticas de seguridad del Estado mexicano. Se trata de familiares de desaparecidas y desaparecidos, activistas ambientales, jóvenes, académicas y académicos que han trabajado en la reconstrucción de sus comunidades, evidenciando que existe una relación tensa con el Estado. No queda claro por qué el gobierno no considera a estos grupos de la sociedad civil y los movimientos sociales como potenciales aliados estratégicos en la construcción de una alternativa para la paz, la concordia y el bienestar.

En torno de la presencia actual del ejército se abre un debate tanto en la sociedad civil como en el Estado, sobre cuáles deben ser sus funciones y su papel en la sociedad actual. Por una parte están quienes sostienen que el ejército no debe participar en la vida social civil, ni en actividades económicas o realizando tareas de seguridad civil, proponiendo que sea sustituido por corporaciones locales de policía y seguridad, aunque estas se encuentren debilitadas en muchos aspectos. Y por otro lado, hay quienes plantean que el problema consistía en los gobiernos anteriores, en haber involucrado directamente al ejército en la confrontación armada, combatir fuego con fuego sin una política de luchar contra la corrupción en las instituciones armadas y de seguridad, es decir, sin una política de desarrollo social.

Por su parte, el gobierno de AMLO está reforzando al ejército para que cumpla tareas de desarrollo y no de represión, aún cuando haga parte de las políticas de seguridad; como parte de ello, el gobierno consiguió que el Congreso de la Unión aprobara una iniciativa que legaliza la participación del ejército en las tareas de seguridad hasta

2028. En medio de esta indefinición, la escala de violencia del crimen organizado no ha cesado, tanto en los estados donde ya había inestabilidad y violencia, como Guanajuato y Tamaulipas, así como en otros, donde estuvo incubándose una situación de desestabilización del estado, como en Jalisco y Chiapas, donde actualmente se vive una ola de violencia y desplazamiento forzado sin precedentes (Iniesta, 2023: web).

Como pudimos ver, en las diversas políticas del gobierno actual ha habido una serie de claroscuros que expresan la dificultad para conformar una política de transformación unitaria y coherente, que embata la acumulación de prácticas político-culturales y problemas históricos de la forma política mexicana.

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO NACIONAL DEL GOBIERNO

Para llevar a cabo las nuevas políticas, el gobierno se planteó primero recobrar la autonomía relativa del Estado⁷ en una situación en la que, a decir del presidente actual, el Estado había sido instrumentalizado y tomado por grupos económico-políticos subordinados a la globalización neoliberal y al capital financiero corporativo y vinculados a los partidos dominantes que habían hecho prevalecer intereses asociados a la privatización, a la corrupción, a beneficios empresariales, a la complicidad con economías ilegales y grupos del crimen organizado, y a definiciones particulares de diverso tipo.

En ese sentido, el gobierno se ha planteado un cierto tipo de separación del poder político respecto de la clase capitalista nacional y transnacional y afirmar un proyecto propio de conducción ante los grupos organizados y los problemas nacionales.

Así mismo, se ha intentado desplegar una nueva relación política con la sociedad civil, especialmente con los jóvenes, adultos mayores y en general con el conjunto social de trabajadores, campesinos y pueblos; no obstante, se ha privilegiado un concepto abstracto de pueblo que desemboca en los individuos, en menoscabo de la lucha por la transformación y el diálogo con expresiones de organización propias de los grupos sociales, como se refleja en la evasión de la problemática de las organizaciones sociales independientes y de las comunidades originarias y sus luchas por el territorio, su autonomía local y su participación en los proyectos que les competen, poniéndolas en la misma situación de las organizaciones corporativas.

Se ha señalado que muchas políticas del gobierno se han llevado a cabo por medio de una dirección unipersonal, caracterizada como *cesarismo* (Leroux, 2020), en el cual hay la persistencia de una concepción de una forma del Estado que lleva al presidente a ser el gran iniciador de políticas públicas y sociales y a asumirse como canal privilegiado para decidir y aplicar la política. Sin embargo, consideramos que tal valoración es insuficiente y que el poder centralizado del actual gobierno tiene otras aristas a considerar. En principio, sostenemos que no se ha vuelto a la situación del presidencialismo histórico autoritario del siglo pasado, en el cual el poder ejecutivo sometía a los otros poderes públicos (cámaras, poder judicial, medios de comunicación, etc.), los cuales en la actua-

⁷ Entendemos por esto la capacidad de construir y legitimar un proyecto de nación y sociedad, de tal manera que se pone en primer término el interés general frente a los intereses particulares y privados. Referentes obligados para esta conceptualización son René Zavaleta (2009) en *El Estado en América Latina* y Marx en *El 18 Brumario de Luis Bonaparte*.

lidad siguen jugando un papel importante de expresión y/u oposición. Aunado a ello, el presidente ha respetado las acotaciones constitucionales de las últimas décadas, que establecen una autonomía relativa de los poderes públicos y de los derechos ciudadanos y sociales.

La concepción de *cesarismo* vinculada a expresiones autoritarias difiere de la noción que recuperamos desde Antonio Gramsci, en la cual el *cesarismo* expresa una política de poder estatal concentrado para superar una situación de conflicto, ante una crisis política que surge de un empate catastrófico de fuerzas (Gramsci, 1999, C. 13, § 27). La utilización de ese poder concentrado puede tener rasgos regresivos, lo que significa que se beneficia a las fuerzas que propugnan por el regreso a una dominación oligárquica, con restricción de derechos; por otro lado, puede existir un cesarismo de carácter progresista, en la medida en que una personalidad utiliza su poder concentrado para posibilitar mayor participación de la sociedad, un despliegue de novedades institucionales y una ampliación de políticas sociales y derechos.

En el caso mexicano contemporáneo, consideramos que estamos ante una situación de *cesarismo progresista restaurador*. El carácter progresista deviene de que se ha promovido el respeto a las formas y participación democráticas, la recuperación de instituciones, derechos sociales, empresas de Estado y políticas públicas de carácter universal, además del hecho de que se ha impulsado una mayor inclusión de la sociedad en la economía y la política, aunque enmarcado en los límites que la globalización neoliberal impone. Sin embargo, contradictoriamente, es también restaurador, en tanto que refuerza la idea de *Estado nacional desarrollista* como el que existía en México en el siglo pasado —en la faceta del momento del milagro mexicano—, en la cual este Estado se presenta como la forma más viable de organizar el poder y la sociedad. En todo caso, cabe señalar que el conjunto popular que sustenta y va detrás del proyecto y la figura presidencial tiene una débil definición programática, una desorganización interna y una gran fragmentación que fueron canalizadas mayormente por el partido Morena y es usado retóricamente, bajo la noción de *pueblo*, por el gobierno en turno como sustento de legitimidad de las políticas estatales.

Debido a su contraste con las orientaciones neoliberales dominantes en el mundo contemporáneo, al proyecto del gobierno se le ha caracterizado también como *Estatismo nacionalista tardío y retardatario con formas jacobinas* (Bartra, 2021), en la medida en que está refincando el poder del Estado omnímodo basado en instituciones del pasado y en empresas públicas históricas, como petróleo, electricidad, construcción, algunos sectores mineros, etc. Esa caracterización unilateraliza el regreso de elementos estatales y se centra en las acciones de la sociedad política sin ver la complejidad de la relación de esta con la sociedad civil y sus condicionamientos históricos, por lo que aparece más como crítica ideológica que como análisis puntual y certero del proyecto y las políticas del gobierno.

Un buen punto de partida es analizar la relación entre la sociedad civil y la sociedad política para poder caracterizar el proyecto actual, cabe preguntarse sobre la actual correspondencia entre sociedad política y la sociedad civil, no entendiendo esta como igualdad o relación armónica, sino como una relación orgánica entre los componentes del Estado Integral.

Podemos considerar que en la sociedad ha avanzado un nivel de conformidad por parte de las mayorías sobre las nuevas directrices del gobierno, aunque con claroscuros, que podría tener su origen en las reminiscencias de la ideología colectiva respecto de las instituciones históricas del Estado.⁸ Consideramos que representa la persistencia, en el modo de pensar y actuar de las grandes mayorías de la población, de una determinada concepción de la vida colectiva deseable y del Estado como organizador y garante del proyecto de nación de la anterior ideología de la Revolución mexicana (Arnaldo Córdova, 1972; Revueltas, 1963). Tal ideología ha logrado constituir un sentido común amplio, de hondas raíces, que ha acompañado las demandas de las luchas por la justicia social y aún es en buena medida referencia de lo deseable para los sectores populares.

A medida que avanzó el capitalismo en el país, estas concepciones nacionalistas derivaron en concepciones desarrollistas carentes de crítica, las cuales en su seno consideran que, con el crecimiento económico, la gran masa tiene derecho a participar de las riquezas producidas a nivel nacional y ello se tiene que ver reflejado en bienes públicos e instituciones de protección social y avance cultural.

Es sobre la base de esta ideología que en la actualidad se apoya, sin gran cuestionamiento y sin nuevas concepciones y propuestas críticas, la autoridad de una clase política dirigente burocrática que personifica el proyecto popular y nacional, que solicita el apoyo de la población, pero, conservando la concepción abstracta de pueblo, la cual asume como parte de su programa y desconoce la necesidad y el derecho a la autonomía ideológica y a la autodeterminación política de las grandes masas. Podemos destacar que hay una relativa promoción de una participación deliberativa de la sociedad popular en determinadas decisiones centrales, sin embargo, continúa siendo insuficiente y está vigente una inclusión que, cuando manifiesta solo el apoyo a las decisiones de Estado, contribuye a mantener la subalternización de las masas.

A pesar de la presencia de nuevas formas corporativas, este gobierno ha procurado medios democráticos de conducción de su proyecto, bajo la idea de Cuarta Transformación del país. Ha respetado la libertad de organización y expresión de la sociedad, en contraposición con los mecanismos del viejo Estado autoritario mexicano y de los gobiernos neoliberales. Pese a que se ha conducido por medios políticos abiertos e inclusive con consultas públicas para algunas medidas, en toda la ideología de la Revolución mexicana actualizada no está contemplada la construcción de una democracia en la que la sociedad se organice por y para sí misma y participe conscientemente, y con elementos críticos, como sujeto en las decisiones públicas.

La concepción de la democracia que ha prevalecido ha abierto un espacio para la crítica de los distintos proyectos en juego, pero es muy pobre como forma de politización y organización avanzada de la sociedad civil, y sigue muy cercana a las concepciones de la denominada *democracia liberal*. Una transformación democrática profunda que recoja las problemáticas nacionales y populares no resueltas en el desarrollo histórico del país conlleva la necesidad de crear procesos, órganos, espacios, foros de debate del proyecto nacional que no terminen en la inacción o en la conformidad con las instituciones y

⁸ Esta nos parece una cuestión sumamente importante desde la perspectiva de la cultura como política, coincidiendo con la perspectiva de Gramsci (Gramsci, 1999, C. 11, § 12).

que por lo mismo vaya más allá de las formas tradicionales de decisión vinculadas a las instituciones, órganos establecidos y actores existentes.

Una expresión de esas limitaciones de la democracia representativa como mecanismo de gobierno es que no ha propiciado un diálogo político con representantes críticos de las comunidades originarias, de asociaciones de derechos humanos, de organizaciones feministas y de búsqueda de desaparecidos, de grupos de periodistas que realizan un trabajo de riesgo y otras organizaciones autónomas populares. Este fenómeno es grave, porque al ser grupos asediados por la represión y la política del crimen organizado, han quedado sin la protección estatal y, en muchos casos, en la omisión por parte del Estado.

Por otra parte, la renovación política de la Cuarta Transformación y los esfuerzos para separar al Estado respecto del poder económico no han debilitado suficientemente el peso y el poder adquirido por grupos empresariales, fuerzas políticas e intelectuales proclives a defender un capitalismo transnacional, el elitismo autoritario y el neoliberalismo, las cuales han mantenido poder y autonomía. Estas atienden a intereses propios asociados con la búsqueda del lucro y la valorización del gran capital como si fuera el interés general de toda la nación. Sin embargo, dichas élites han perdido muchos privilegios del período anterior: como subsidios a impuestos, fondos públicos para utilización privada, etc. Las élites mencionadas representan un freno para el avance de una política de cambios, pues se mantienen como fuerza cuestionadora y litigante con el apoyo de una parte de la sociedad (Gómez, 2015).

Hay en curso la creación de **un bloque dominante en el poder actual** que entrelaza varios componentes: **una gran masa popular urbana y rural con segmentos amplios con una politización incipiente** que son un sostén del proyecto, en un difícil y disputado proceso de agrupamiento y organización política contradictoria en el partido-movimiento Morena. Una prueba es el visible y masivo apoyo popular a los mítines convocados por el presidente en fechas estratégicas;⁹ **una burocracia política emergente** que incluye tecnócratas, políticos históricos, nuevos líderes juveniles que aspiran a presentarse como renovación de la clase general del Estado, que mantienen la representación mayoritaria en las Cámaras a partir del partido Morena y sus aliados, entre ellos figuras emergentes como el subsecretario de salud Hugo López Gatell, figura representativa del periodo de la pandemia; **sectores de trabajadores organizados en algunos sindicatos nacionales** que todavía tienen peso e incidencia, como el apoyo polémico y disputado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, piezas clave del momento electoral; **un sector de la clase capitalista financiera empresarial transnacionalizada** que ve con simpatía el nacionalismo desarrollista y ve una ventaja en la regulación de la economía como parte del retorno a un cierto capitalismo de Estado y aprovecha para su beneficio los vínculos con el presidente, que es el caso del empresario Carlos Slim.

Este bloque dominante cuenta con el apoyo de un sector menor de las clases medias e intelectuales, sin embargo, aún resiente la ausencia significativa de una buena parte de estas, cuyos integrantes se han adherido a una posición conservadora.

⁹ No descartamos la presencia de *freeriders* o acarreados, pero sí cabe plantear la pregunta de qué tanto es el núcleo duro de la presencia de ciudadanos en las manifestaciones y marchas, y qué tanta es la presencia de lo que la tradición liberal denomina “ciudadanos libres y convencidos”.

Por otra parte, están los pueblos indígenas originarios que han establecido distinta relación con el gobierno, algunos de colaboración como los yaquis de Sonora y los de la Sierra Norte de Puebla, y otros de oposición radical de izquierda como el Congreso Nacional Indígena, las comunidades que afirman su autodeterminación, sobre todo en estados como Michoacán, las zonas de Guerrero –organizadas en coordinadoras de policías comunitarias– las comunidades de las regiones de los megaproyectos que aún resisten y contravienen el decurso de esas políticas de Estado en Yucatán, Campeche, Oaxaca y Morelos.

Intelectuales, clases y sociedad civil

En las crisis políticas y en procesos de cambios de régimen, así como en los periodos álgidos de disputa de fuerzas por la dirección de la sociedad y el Estado, el papel de los intelectuales es muy significativo. Por un lado, porque, como dice Gramsci, “es la clase portadora de las nuevas ideas” y con ella “la concepción de Estado cambia de aspecto” (Gramsci, 1999, C. 1, § 150), por otro lado, por el lugar que estos ocupan en el conjunto del sistema de relaciones sociales y de fuerza, ya que son un componente imprescindible para construir un bloque histórico alternativo (Gramsci, 1999, C. 12, § 1). De tal manera que el análisis de estos sujetos individuales y colectivos, creadores de la cultura y las ideologías, es importante para la lucha de las concepciones acerca del Estado y, así mismo, para entender la complejidad de la problemática de la hegemonía en las crisis estatales y en términos de la caducidad, el debilitamiento o la conformación de nuevos grupos históricos de poder.

Como ya mencionamos, no obstante el triunfo electoral y las diversas políticas emprendidas para forjar el cambio, los intelectuales de la Cuarta Transformación no han logrado constituirse plenamente como una alternativa de dirección ético-política de los sectores populares en su generalidad, principalmente porque no existe en todos los casos una correspondencia clara entre la agenda de los movimientos sociales y las elaboraciones políticas y estratégicas del partido.

Por otro lado, la gran mayoría de los movimientos de los sectores populares no han consolidado agendas políticas autodeterminadas y siguen subalternos a la cultura política que ha predominado históricamente en México, en la que sigue prevaleciendo el corporativismo, el autoritarismo, el clientelismo y prácticas democráticas incompletas, que se anclan exclusivamente a la democracia delegativa (O’Donell, 1994; González Casanova, 1964).

En medio de toda esta tensión, los grupos de la oligarquía neoliberal no han cesado de incidir en el ámbito público: han impulsado a sus propios intelectuales para emprender disputas en la opinión pública nacional e internacional, así mismo han tratado de influir en los movimientos sociales (ambientalismo, feminismo, seguridad, paz social, etc.), los congresos legislativos y en diversas instituciones públicas y privadas. En esta constante disputa por el sentido común, por la dirección de la cultura política y la opinión pública, los intelectuales orgánicos de la derecha han tenido como vehículo a los grandes medios de comunicación, en especial la prensa corporativa empresarial.¹⁰

¹⁰ Aunque no lo tratamos en este análisis, la reciente polémica contra los libros de texto gratuitos es

Para Gramsci, los intelectuales orgánicos son organizadores de la “hegemonía social y del gobierno político, tanto del “consenso espontáneo dado por las grandes masas de la población” a la orientación y proyectos de los grupos dominantes, como a los grupos que disputan la dirección del Estado y los gobiernos (Gramsci, 1999, C. 10, § 1). Hay, por lo mismo, intelectuales orgánicos de las fuerzas y los proyectos de las derechas conservadoras, como de los nuevos grupos sociales en ascenso que buscan modificar la situación.

De tal forma que la noción de “intelectual orgánico” *per se* no tiene una carga valorativa progresista o conservadora, sino que, como nos advirtió antes Gramsci, “todo grupo social crea sus propios intelectuales”, y su papel depende del lugar que ocupan estos en el sistema de relaciones de fuerza, así como en los proyectos histórico-políticos a los que se adhieren y la base social que los sustenta. Su labor principal está en la construcción de la hegemonía de un grupo social, de forma que con sus actividades contribuya al apareamiento, elaboración y sostén de una determinada hegemonía, cultura política y sentido común.

Así mismo, como señala Gramsci, en países con un capitalismo dependiente y una base económica industrial relativamente desarticulada, insuficiente y subordinada, “es propio de la función de los intelectuales poner al Estado como un absoluto: así es concebida como absoluta su función histórica, es racionalizada su existencia” (Gramsci, 1999, C. 1, § 150). Sus actividades están relacionadas estrechamente con la elaboración y socialización de las concepciones sobre el Estado, la sociedad civil y la cultura.

Un rubro complejo de analizar es aquel que pone al centro la disputa que hay entre los intelectuales orgánicos de la Cuarta Transformación, los de la derecha y los intelectuales de diversos movimientos sociales. El ámbito y alcance de dicha disputa tendría que abarcar e impactar no solo la manera en que se construyen las políticas estatales, sino poner en el centro las concepciones sobre lo público, la autodeterminación popular, la economía social, el bienestar común, la democracia, de tal manera que la noción de progreso y de nacionalismo popular adquieran un verdadero sentido crítico.

Los intelectuales orgánicos adheridos al gobierno actual han promovido un giro crítico a las concepciones del poder y la cultura política como dominio de élite, pero no han construido una concepción del poder popular autodeterminado.

Un aspecto a destacar es que los intelectuales de la 4T se han concentrado en promover, principalmente, una narrativa específica de la historia mexicana y un discurso histórico sobre sus transformaciones para dotar de sentido el programa y la actuación gubernamental (Semo, 2021; Von Wobeser, 2022).¹¹ Así mismo, han planteado la recuperación de varios personajes históricos para sostener una serie de valores populares, nacionalistas y neodesarrollistas.

un ejemplo de cómo los medios de comunicación utilizan recursos para atacar y tratar de frenar una reforma necesaria como la educativa, al respecto puede leerse la siguiente crónica: “¿Qué controversia hay entre la SEP y los libros de texto escolares en México?” de Natalia Cano, *CNN noticias*, 9 de agosto de 2023, disponible en: <https://cnnespanol.cnn.com/2023/08/09/controversia-sep-libros-de-texto-escolares-mexico-orix/>.

¹¹ La idea de las transformaciones de México está desarrollada en estas obras con suficiencia académica, pero también se puede encontrar en artículos de opinión de autores como Pedro Salmerón y Fabricio Mejía Madrid.

Al interior de Morena, se han conformado varios grupos de intelectuales, que pueden diferenciarse entre sí por sus orientaciones, que han asumido la tarea de *organicidad* de la que Gramsci hablaba, constituyendo centros de formación política, blogs, libros, revistas y espacios virtuales, que intentan incidir en clases medias y grupos populares. Esto en un contexto en el que la tradición política mexicana le otorga un papel menor a la teoría como comprensión y elaboración crítica de las problemáticas sociales. Por otra parte, se menosprecia la importancia que tendría el desarrollo de una ideología crítica del sentido común popular, y que fuese el eje de la conformación de un real núcleo dirigente colectivo ideológico-político en el gobierno y el partido-movimiento Morena que vaya más allá del momento del presidente actual.

En la vida política intelectual de México hay también otras corrientes y movimientos populares que no consideran al Estado como un campo de lucha al que busquen acceder, ya que se le concibe como un espacio de dominio que se contrapone a la concepción de autonomía y organización social que reivindican —y que en algunos casos territorialmente ejercen—, por ejemplo, expresiones tales como el EZLN/Congreso Nacional Indígena y organizaciones de los movimientos feministas.

A partir de que López Obrador asumió la presidencia en 2018, comenzaron a registrarse debates públicos en los que se reflejaba la tensión entre algunos grupos de intelectuales y asociaciones civiles contrarios a los cambios y al presidente en turno, el cual ha promovido cierta hostilidad hacia los intelectuales en general, incluso a aquellos cuya crítica quiere profundizar una concepción radical de las transformaciones.

En lo que respecta a la labor de los intelectuales opositores al cambio y al proyecto del gobierno, cabe señalar que la nueva situación política ha transparentado y reactivado la relación entre las clases capitalistas y sus intelectuales. Por una parte, ha adquirido destaque y privilegio la opinión de agentes clasistas como la COPARMEX, el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo empresarial y otros organismos similares, que se han aliado con otros sectores políticos que promueven el mantenimiento de la agenda neoliberal y una visión del mundo que hace culto al mercado y al lucro. Los intelectuales que se han asumido como portavoces de estos sectores han enarbolado comunicados, manifiestos, cruzadas, plantones, asociaciones y hasta partidos políticos, que son expresión amplia de los intereses corporativos y de una visión del mundo que pone en el centro el afán de ganancias, el individualismo, la competencia y el elitismo en la sociedad, ignorando la dinámica real de la sociedad popular con sus necesidades y problemáticas.¹²

Varios de estos intelectuales¹³ han llamado la atención, a través de los grandes medios conservadores de difusión, sobre lo que para ellos es un fenómeno de centralización de

¹² Los posicionamientos del dirigente empresarial Claudio X González, como los del empresario Salinas Pliego en televisión, han sido ejemplo de esta posición. El pasado 14 de marzo de 2023, el empresario Ricardo Salinas Pliego lanzó un *tweet* mencionando, desde su visión, algunas de las claves del éxito, donde resalta el uso del término “Buenos ancestros”, lo cual es controversial ya que se ha impugnado en el debate público actual el hecho de que muchas de las familias más ricas del país comenzaron acumular riqueza a partir de que los abuelos o los padres tuvieron una relación cercana con el Estado, y mediante el uso patrimonialista del poder público para hacer negocios privados.

¹³ Enrique Krauze (historiador), Héctor Aguilar Camín (*Milenio*), Roger Bartra, Héctor de Mauleón (*El Universal*), Agustín Basave (*Proceso*), Alejandra Moreno Toscano (*Milenio*), José Woldenberg, José Narro Robles, Francisco Valdez Ugalde (FLACSO), Gabriel Zaid (poeta, *Letras Libres*), Mónica Lavín

la comunicación por el presidente y una coartación de la libertad de expresión y, bajo su óptica, de la democracia misma; estos grupos no han escatimado en presentarse como defensores de las libertades individuales, de la libre competencia económica, de la democracia y de la limitación de la injerencia del Estado sobre las agendas del mercado nacional.

La cruzada ideologizada por la democracia y la libertad de expresión les ha unificado con intelectuales del sector comunicativo, entre periodistas, columnistas, escritores y artistas diversos, con quienes, en conjunto, han emprendido diversas actividades en donde se rediscuten, desde una perspectiva neoliberal, las concepciones de *autoritarismo*, *libertad* y *democracia*, contrarias a las que promueve la presidencia actual. Un ejemplo de esta labor es visible en el lanzamiento del *Manifiesto por la república, la democracia y las libertades*, firmado el 31 de mayo de 2021 (Semáforo.mx, 2021: web), por más de cuatrocientos intelectuales de diversas áreas, en el que se acusa al presidente de autoritarismo, por el hecho de recuperar las instituciones históricas y dirigir el Estado, y llaman a no votar por su partido, Morena, mientras que se presentan como defensores de la democracia y la libertad.

La intensa actividad de esos intelectuales ha contribuido a mantener ciertos debates en la opinión pública, que ponen al centro temáticas que han sido constantes desde el inicio del sexenio, aunque no siempre han sido tratadas con el mismo grado de profundidad. Involucran posiciones que enaltecen la visión privatista y que se oponen, sin alternativas y sin arraigo popular y comunitario, a las propuestas democráticas y de desarrollo de la cuarta transformación; sus mensajes oscilan entre el cuestionamiento de la pertinencia de las políticas de la presidencia en términos económicos, ecológicos, y redistributivos, posiciones supuestamente críticas que en algunos casos arrastran concepciones verticalistas del ejercicio del presupuesto y la toma de decisiones, así como de subordinación a una lógica individualista-mercantil-capitalista.

Por otra parte, se han producido escasos debates sobre cómo enriquecer con cuidado ambiental, político y cultural las propuestas del presidente, como las del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, u otros megaproyectos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la refinería de Dos Bocas. Por su parte, los intelectuales orgánicos a la 4T las han defendido por la vía de la propaganda sobre los beneficios y un constante discurso nacionalista y, al mismo tiempo, por la promoción de insuficientes y cuestionables ejercicios de consulta ciudadana, viabilizados sin la importancia y la complejidad que podrían tener.

A su vez, en amplios sectores de la corriente pragmática de la Cuarta Transformación ha prevalecido una tendencia corporativa y de menosprecio a la urgencia de la sociedad para conocer y analizar con profundidad los problemas nacionales y ha habido reticencia a promover debates populares para construir un consenso amplio de nuevas alternativas del México actual. Quizá ello explica sus dificultades para escuchar los argumentos de sectores de pensamiento crítico y la escasa apertura al diálogo con los movimientos sociales, como los de defensa del territorio, que cuestionan la noción de progreso y las políticas económicas que dirigen la intervención sobre los espacios que les competen

(literata), Sara Sefchovich (literata, columnista de *El Universal*), Ángeles Mastretta (literata), Rafael Pérez Gay (escritor, *Milenio*), Eduardo Matos Moctezuma (investigador INAH).

a las poblaciones; así mismo con los movimientos magisteriales y normalistas, que siguen insistiendo en una reestructuración más profunda de la educación pública, en su democratización y de los movimientos por la paz, en la resolución de casos de desaparición forzada como el de los normalistas de Ayotzinapa. Especial tensión pública se ha generado en la relación de los intelectuales orgánicos de Morena con los movimientos feministas y sus lamentables respuestas a la necesaria radicalidad de las exigencias de las mujeres y familiares de víctimas de feminicidio y desapariciones, y han optado en algunas ocasiones por criminalizar sus protestas y acusarlas de favorecer a los sectores de la derecha neoliberal. En el mismo tenor, se han mantenido las declaraciones en torno a las querrelas del EZLN y el Congreso Nacional Indígena, quienes no han cesado de criticar la actuación gubernamental.

¿A quién le hablan estos intelectuales conservadores y progresistas? Como dijimos antes, el papel de los intelectuales en la disputa en y por la sociedad civil puede observarse también a partir de que ambos retoman tradiciones políticas de larga data, es decir, su historización permite no solo recoger los debates contemporáneos, sino identificar las fuerzas históricas ante las que responden y la manera en que se entretajan en una sociedad civil atravesada por clases y proyectos de clase. Los intelectuales identificados con la derecha y que actúan tratando de influir en la opinión pública y medios masivos de comunicación interpelan a los componentes discriminatorios anidados en las clases medias, así mismo al autoritarismo cultivado en ellas y en las clases populares. Se han esforzado por exaltar el elitismo y procurar la despolitización, promoviendo valores abstractos sobre libertad y trabajo. Así mismo, han procurado que se instale una concepción de sociedad civil aparentemente disociada y contraria al Estado.

Siguen actuantes y presentes los proyectos de derecha de las élites políticas económicas y partidarias neoliberales, tanto internos como internacionales, que hubieron dirigido el gobierno desde 1982 hasta 2018, y especialmente a partir de su consolidación en 1989-2000 con la constitución del “partido unificado del orden” del PRI y el PAN, para sustentar un nuevo Estado empresarial, hasta su bancarrota política-electoral al cabo de los desprestigiados gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Esa fuerza empresarial política se expresa hoy como oposición conservadora impulsora de la concepción geopolítica de un capitalismo “democrático liberal”, que se desplaza en algunos momentos hacia las posiciones de jacobinismo profascista de las élites de ultraderecha neoliberal autoritaria (Ramírez *et al.*, 2022). Su actuación política se basa en una constante confrontación ideológico-política contra López Obrador y sus políticas progresistas democráticas. Estos, más que desarrollar argumentos, se dedican a hacer pasar por universal la experiencia particular de su posición y privilegios, además de alimentar la desinformación a través de *fakenews* e información destinada a reaccionar a cada una de las iniciativas del gobierno de AMLO. No lo entienden como un proyecto nacional integral, sino como iniciativas desorganizadas de la voluntad presidencial. Sin embargo, debe quedar la pregunta por su capacidad de actuación y movilización de recursos y votos de cara a las elecciones de 2023 y 2024.

La crisis electoral de la política tradicional de los partidos de élite ha llevado también a un mayor activismo de ultraderecha sobre todo en los medios de comunicación conservadores. Desplazadas de su influencia dominante en el Estado, buscan reinstalar el proyecto

ultraliberal transnacional del capitalismo global, que adquirió supremacía política institucional en los gobiernos anteriores.

En la investigación identificamos también a las diversas fuerzas populares que buscan lograr y afirmar su autonomía en la ideología y la política, algunas de las cuales se diferencian del proyecto de la presidencia de López Obrador y reclaman su autodeterminación a partir de una crítica mayor al capitalismo dependiente, al dominio mundial de la globalización neoliberal, al poder de las burocracias y a las insuficiencias de democracias delegativas.

Está presente en el país un movimiento popular histórico con diversas expresiones nacionales, regionales y locales, urbanas e indígena-campesinas. En sus experiencias y debates han ido elaborando diversas posiciones políticas propias: radicales, socialistas, críticas o de autonomismos. Nos preguntamos por qué esas fuerzas histórico-políticas no han logrado ni se han propuesto conformar una agenda política común. Sin embargo, han dado lugar a movimientos sociales y comunitarios que tienen un abanico de planteamientos que son parte de una lectura propia del país, sus características y sus vías de salida para desarrollar la politización de la sociedad popular. Destacan entre ellos el movimiento de maestros y otros movimientos urbanos populares, el proyecto del CNI y el EZLN y diversos movimientos comunitarios por la defensa de los territorios, el agua, el ambiente, las tradiciones, etcétera.

Varias fuerzas organizadas de origen, característica y adscripción popular han mantenido una distancia y oposición al gobierno actual, pero al parecer no han sido capaces de superar el límite de las reivindicaciones particulares o su actuación en un territorio regional determinado, ni tienen un planteamiento desarrollado que podría considerarse una agenda política nacional democrática-transformadora para unir a las masas populares, disputar su dirección, crear una agenda política nacional basada en la autodeterminación organizada de las masas populares y conducir un bloque de poder alternativo.

En lo que alcanzamos a apreciar en sus posicionamientos y reclamos, se mantienen aún en el nivel de debates sobre lo particular, lo local o lo parcial y no se aprecian todavía caminos de ampliación de su influencia política en gran escala, con un proyecto nacional democrático social que promueva la autonomía de los movimientos populares y con una agenda política plurinacional, distinta y contrapuesta teóricamente al proyecto progresista democrático del gobierno, pero que pueda coincidir con muchas de las políticas prácticas de este.

Gran parte de los movimientos populares actuales aún no cuentan con una política de masas urbanas que vaya más allá de las reivindicaciones económico-corporativas, y no han logrado construir colectivamente una agenda política unificada de cambios urgentes, para enfrentar las insuficiencias de las políticas del Estado y proveer de salidas a la vida económica y política del país. Estas fuerzas histórico-políticas populares realizan múltiples actividades de resistencia, pero no están impulsando una actividad política unitaria nacional que reivindique una democracia alternativa a la institucional, una propuesta de economía social y estatal a nivel nacional y una ideología crítica popular que abra una reforma intelectual y moral en el país, en que la distinción clasista y la crítica no signifiquen sectarismo y separación, sino contribución a un gran movimiento nacional popular por la emancipación social.

Es urgente abrir las puertas para un gran debate nacional que permita la unidad política de la diversidad de la izquierda y las corrientes críticas, para lograr lo que Gramsci denominaba la “catarsis”, es decir, la elevación política y la superación de las posiciones propias por medio del diálogo político-popular (Gramsci, 1999, C. 10). Para ello, los intelectuales tienen que superar sus perspectivas localistas y ubicarse como elementos orgánicos de un gran movimiento de lucha por la hegemonía civil que impulse el pensamiento crítico, la imaginación sociológica, la teoría social histórico-crítica y la fusión entre pensamiento y opciones políticas.

De todo lo anterior, se puede derivar que el papel de la intelectualidad en el momento actual de México aún es poco constructivo respecto a definir un proyecto nacional y acorde a las necesidades de las fuerzas histórico-políticas en lucha en el país.

LA CRISIS DEL ESTADO COMO EQUILIBRIO CATASTRÓFICO ENTRE LAS DIVERSAS FUERZAS

Con el acceso al gobierno en diciembre de 2018 y por los resultados electorales que trasladaron la dirección del ejecutivo del Estado a un nuevo grupo político, se produjo un gran viraje en la situación del poder nacional y en la mayoría de los estados locales del país, sin que todavía se pueda hablar de que se ha superado la crisis de hegemonía, donde persisten elementos de los proyectos de Estados de “competencia” impulsados por la globalización neoliberal (Hirsch, 2002).

Además de persistir tal concepción en el centro del poder económico-corporativo y financiero y tener la aceptación de amplios sectores de la clase política, sigue influyendo en las masas populares y en las clases políticas un sentido común tradicional (Gramsci, 1999, C. 11; González Casanova, 1964) autoritario, abigarrado, contradictorio, con múltiples ideas equívocas e irracionales, en el que tiene un gran peso la idea de que el mercado y el capital organizan adecuadamente a la sociedad y a los individuos, y que estos tienen éxito social o económico en la medida de su esfuerzo personal. En ese aspecto, el nacional desarrollismo, el Estado de bienestar y la democracia liberal conviven con la ausencia de crítica al movimiento orgánico del capitalismo mundial y al capitalismo dependiente de nuestro país, y con una visión muy restringida, también sin crítica colectiva, del sistema político-democrático-liberal.

Como en su momento analizamos, para la concepción progresista dominante el pueblo es una idea abstracta con una visión muy precaria y elemental de lo público, en que no termina por reconocerse como el ámbito social y político de derechos y responsabilidades y medio sustancial de satisfacción de necesidades sociales de todo tipo (salud, educación, seguridad social y colectiva, vivienda, etc.). Tampoco se ha socializado en las distintas clases y capas de la sociedad la idea de que esta, en tanto pueblo organizado y participativo, puede ser el sujeto activo y autodeterminado de los asuntos públicos. Por el contrario, sigue vigente el culto a las élites políticas y administradoras de la economía, el Estado, la administración, la educación, etcétera, como referencia al privilegio de quienes tienen la experiencia, la formación y la capacidad para dirigir los asuntos sociales, manteniéndose formas de exclusión y discriminación de grandes segmentos sociales ur-

banos y rurales y de comunidades originarias, a los que no se les incluye en las decisiones políticas ni en los procesos de renovación del Estado.

La crisis de la hegemonía neoliberal puso en entredicho a los partidos políticos estatizados a lo largo de los últimos 35 años, a la clase política administradora tradicional que se había entronizado en el Estado con concepciones y políticas empresariales, y mostró hasta dónde había llegado, para 2018, el alejamiento de ese Estado respecto de la sociedad civil y sus reivindicaciones, siendo la extrema corrupción de las élites dirigentes del partido del orden anterior (principalmente la alianza PRI-PAN) una de sus expresiones, pero quizá, no obstante su afectación al país, no fue ni siquiera el elemento más significativo en términos ideológico-políticos.

Fueron las concepciones tradicionales de las masas y de los líderes políticos las que estuvieron presentes en la dominación neoliberal. Frente a ella, el cambio actual de políticas del gobierno no ha conllevado automáticamente la elevación ideológica y política de la sociedad, ya que no conduce, ni implica, a que los movimientos sociales se organicen y unifiquen con autodeterminación, ni lleva de por sí a que se construya un poder propio de la sociedad y este haga parte central del bloque de poder dirigente, no obstante los esfuerzos de algunos sectores de la Cuarta Transformación y de las organizaciones políticas de la izquierda.

Por lo anterior es que consideramos que, en términos ideológicos, lo que existe en el país es *un equilibrio catastrófico entre las fuerzas histórico-políticas y una crisis orgánica del Estado*, dado el dominio de la economía por el capital financiero y las grandes corporaciones, y la falta de superación por parte de la fuerza progresista de la influencia alcanzada por la ideología privatizadora de culto al mercado, el eficientismo individualista y la privatización de los bienes públicos, que tiene a una clase empresarial y política como los dueños de la economía dependiente y de los grandes medios de comunicación, aspectos que aún cuentan con un grado amplio de consenso social en la clase media y en algunas capas populares.

Estas fuerzas de ideología mercantil empresarial buscarán, por medio de la economía y de la actuación político-electoral de sus dirigentes y de los medios de comunicación, recuperar su condición privilegiada en las decisiones estatales, para priorizar de nuevo la acumulación de capital. En términos políticos, lucharán por recobrar el orden empresarial nacional-transnacional del Estado asentado en la reducción de lo público y la ampliación de lo privado en la sociedad y en el Estado.

Por otro lado, en tanto en la sociedad no se produzca una amplísima politización crítica nacional de masas –basada en nuevas concepciones sobre la democracia, el Estado, la política, la economía social y los derechos colectivos– continuará el equilibrio entre la hegemonía neoliberal en crisis y una nueva ideología política cuyo centro, por ahora, no es la sociedad sino el Estado, no son los movimientos sociales y políticos-populares y democráticos, sino los movimientos políticos ligados a Morena, las instituciones y líderes del gobierno progresista. La crisis orgánica del Estado consiste en que ninguna de las fuerzas histórico-políticas en lucha es capaz de proponer verdaderas salidas políticas que modifiquen las relaciones de fuerzas de manera estable y con una visión de futuro diferente.

Con motivo de las políticas del presidente actual, el Estado está recuperando instituciones centrales de organización y dirección económica, social, cultural y política de la sociedad. Incluso se ha llegado a plantear por los políticos de la corriente de la Cuarta Transformación que lo que se busca es un Estado de bienestar, cuyo eje pretende retomar las políticas sociales del capitalismo de Estado (de la mano de Pemex, CFE, megaproyectos económicos, litio, etc.), con base en un acuerdo con las grandes corporaciones transnacionales capitalistas para que paguen impuestos suficientes que permitan socializar políticas de seguridad y lograr contar con recursos para buscar un apoyo de masas a las políticas progresistas.

Sin embargo, a pesar de que el gobierno ha retomado las riendas estatales del país, pervive una crisis del Estado (como en la mayor parte de América Latina) en el sentido de que, en la situación, lo nuevo no nace plenamente todavía y lo viejo sigue sin poder morir (Gramsci, 1999, C. 3), mientras que políticamente se hace difícil resolver para la fuerza progresista, por el desgaste acumulado de las instituciones recuperadas del Estado de la Revolución mexicana (ejército, instituciones públicas, empresas nacionales, etc.) y debido a que todavía hay áreas regionales del territorio en que grupos del crimen organizado imponen la violencia y la descomposición política al servicio de intereses privados ilegítimos.

La hegemonía neoliberal está en crisis como concepción amplia, sin embargo subsiste en la medida en que sus postulados perviven en grandes sectores de la sociedad política y la sociedad civil y en tanto no se ha consolidado una lucha de posiciones por otra hegemonía popular democrática que organice a la sociedad y al Estado como sujetos activos actuantes y con autodeterminación en un nuevo programa democrático popular. En esa situación, la disputa en y por la sociedad civil es la clave de la posibilidad de una salida política estable, que conduzca al país a una soberanía articulada del Estado en su sentido integral (incluyendo como sujeto a los sectores populares activos en lo público) y un proyecto internacional orientado a un mundo multipolar en ascenso.

Dada la densidad institucional de México —no solo en lo económico-político, sino en lo ético-ideológico—, ninguna propuesta popular con un alto grado de autodeterminación en torno de un proyecto emancipador democrático-anticapitalista parece posible solo como lucha espontánea y parcial de movimiento, de resistencia o de inconformidad colectiva popular inmediata, pues subsisten en los grandes sectores populares muchas de las concepciones, políticas y reconocimientos (radicales, jacobinos, populares, clasistas aun cuando autoritarios) elitistas, institucionalistas y democrático-liberales del Estado constituido durante el siglo XX.

La lucha de posiciones (Gramsci, 1999, C. 15) se está constituyendo como una forma política necesaria para que las diversas fuerzas forjen una voluntad colectiva nacional popular con capacidad de dirección ético-política de cambio en la sociedad y en el Estado, adquieran convencimiento y claridad sobre por qué y cómo orientar críticamente los procesos sociales e ideológicos, generando cambios organizativo-políticos, una elaboración programática compleja de autonomía ideológica y política popular y la innovación y transformación institucional que exprese un poder propio de la sociedad.

Por lo anterior, es imprescindible determinar bajo qué condiciones puede elevarse, en estos tiempos, una fuerza política hasta constituirse en fuerza dirigente de toda la socie-

dad, capaz de ser la dinamizadora y conductora de un proyecto crítico y transformador de la sociedad política y la sociedad civil basado en nuevas concepciones. Estamos ante la problemática de la lucha por una hegemonía civil que se sustente en y promueva un cambio intelectual y moral en las mayorías populares; haga avanzar una economía social y pública suficientemente extendida, capaz y fuerte ante un capitalismo privado transnacional o un capitalismo de Estado; impulse una agenda política nacional e internacional compartida, bajo la dirección y supervisión de una sociedad autodeterminada. Para ello será necesaria una fuerza que actué en la crisis orgánica del Estado y se constituya en una crítica de transformación del Estado, continuadora y, sobre todo, superadora del progresismo desarrollista actual.

Nuestro argumento sobre el cambio en la continuidad del Estado mexicano busca fundamentarse en una perspectiva de carácter histórico-político y no (solo) sociológico, es decir, tiene que ver con la capacidad de los movimientos populares para intervenir en la crisis como parte de la disputa.¹⁴

Hoy, fuerzas políticas progresistas de restauración y modernización del poder económico, político e ideológico del Estado han logrado acceso al gobierno, pero ese proyecto y sus políticas son en cierta forma insuficientes, incoherentes, parciales y no representan una solución profunda y estable a las contradicciones y problemas del país, sino que fungen como una mejora y un paliativo a la situación de las mayorías, para las cuales significan, sin embargo, una mayor libertad de expresión y organización, el mejoramiento de los ingresos y el bienestar de los sectores populares carentes y excluidos, sin por ello tener capacidad para resolver tendencias y problemas histórico-estructurales.

LOS SUJETOS POLÍTICO-POPULARES Y LAS DIFICULTADES DE LA LUCHA POR LA AUTODETERMINACIÓN EN EL PROCESO ACTUAL

Un dato importante a resaltar es el que tiene que ver con el problema del sujeto fundamental de las transformaciones, hoy conducidas por fuerzas políticas vinculadas a la administración del Estado y que no anidan en una fuerte sociedad organizada y consciente: estamos aludiendo a las fuerzas histórico-políticas populares, que a lo largo de los últimos cuarenta años no han logrado todavía adquirir una autonomía histórica, una autodeterminación política, ni superar la dirección de una clase política estatal capitalista-popular, además de que se mantienen como grupos sociales cuyo programa son políticas económico-corporativas.

Las grandes masas populares urbanas, las clases trabajadoras de distinto tipo y situación, las clases medias bajas, los campesinos, las comunidades originarias, entre tanto, con gobiernos progresistas entre medio, siguen desorganizadas respecto de su propio proyecto y se mantienen subalternas a la dirección del Estado, carecen de proyectos ideológico-políticos autónomos de masas basados en un pensamiento crítico que oriente su acción política.

Añadido a lo antes dicho, cabe decir que las grandes mayorías populares han sido afectadas profundamente por el proyecto reestructurador del capitalismo global que las

¹⁴ Sobre esto, recomendamos la lectura del capítulo teórico-metodológico de este volumen.

ha desorganizado y fragmentado y siguen bajo la influencia de ideologías que las subalternizan a las reformas neoliberales y elitistas o a una dirección política progresista que no las asume como sujeto dominante y dirigente.

Además de ello, los cambios tecnológicos, la extensión de las maquilas y montadoras, la influencia de modelos rentistas-extractivistas y de producción especializada para la exportación han llevado a la generación de una fuerza de trabajo con capacidad tecnológica adecuada para ejecutar los procesos de trabajo en las corporaciones transnacionales, pero tuvo como efecto la disminución numérica y la condición de trabajadores formales con derechos, hizo avanzar la precarización de la fuerza de trabajo, acentuó la sobreexplotación, el bajo salario y la inestabilidad, redujo su participación en la producción y sustituyó muchas actividades productivas, comerciales y de servicios por agencias internacionales contratantes de trabajadores, además de haber sido afectados por la economía y la política del narcotráfico.

En los últimos 40 años, los trabajadores y las masas populares no lograron su afirmación productiva con derechos, no avanzaron en su organización autónoma y la liberación colectiva autodeterminada de sus proyectos, aun cuando se han liberado del control de las instituciones del Estado, es decir, no han sido parte de una elevación ideológico-política dirigente que genere sus propias concepciones y posiciones, de tal manera que incluso en la resistencia y bajo la centralidad política de AMLO y las corrientes prevaletentes en Morena, la hegemonía capitalista sigue prevaletiendo en las grandes masas populares mexicanas.

Todo proyecto político de transformaciones tiene que superar las dificultades impuestas por el orden previo, para llevar a cabo cambios en el orden económico, político o ideológico, mientras que lo que tiene a su favor son sus orientaciones en relación con las necesidades sociales acumuladas.

Una primera dificultad para consolidar las nuevas políticas del gobierno es que requiere un gran apoyo para llevar a cabo alteraciones históricas y políticas profundas y no solamente emanaciones ideológicas del arte de gobierno para obtener legitimidad temporal.

En el caso de una política de transformaciones progresistas y desarrollistas, a estas alturas de la experiencia histórica, es muy posible que su éxito a corto plazo no se corresponda con una capacidad de la sociedad para, con organización popular autónoma, enfrentar las causas profundas de los problemas nacionales y de las desigualdades sociales brutales.

Ideológicamente, un programa progresista y desarrollista es insuficiente en cuanto no atiende a la mayoría de las contradicciones económicas, políticas e ideológicas del país y que determinan sus efectos sociales: las de la insuficiencia del capitalismo dependiente para crear ciudadanía y democracia estables; las del Estado, que dirige a una sociedad sobreponiéndose a ella, sin posibilitar que esta se autodetermine; las de elaborar su política a partir de ideologías populares que no reconocen problemas centrales de una sociedad extremadamente desigual, asediada por el colonialismo interno, periférica, dependiente, patriarcal.

Consideramos que el problema fundamental es que la correspondencia temporal entre Estado y sociedad civil no se vincula a una continuidad, pues no existen los elementos

necesarios de autoorganización, autonomía y autodeterminación de las clases y masas populares. La politización electoral no es suficiente para que las mayorías creen una agenda política propia, para generar un empoderamiento que sostenga una democracia radical y que sea el pilar de un nuevo Estado democrático popular de transición, basado en una economía social y en un pensamiento histórico-crítico de masas.

El problema profundo está en el nivel organizativo, político e ideológico-cultural de la propia sociedad mexicana, que aún no ha transformado sus características y en la cual no ha habido una construcción política autodeterminada y de criticidad de las fuerzas sociales y políticas, de manera que se reclamen fuerzas históricas y políticas populares. La falta de una noción de sujetos populares autónomos como fundamento de la política de transformaciones de los movimientos y organizaciones es quizá el principal aspecto problemático de la cultura política actual.

El movimiento popular tiene como desafío estudiar, reconocer y evaluar la ideología y la cultura real de la sociedad y generar un proceso de politización popular que, acompañado por la elevación ideológico-política de las masas populares, afirme una autonomía política, de pensamiento crítico y de organización en este sector actuante, que permita que prevalezca la unificación de la sociedad civil en torno a la crítica histórico-social del capitalismo, la crítica histórico-política del Estado y la crítica histórico-ideológica del sentido común. Con ello, la fuerza real de un Estado democrático popular estará en la sociedad y no solo en sus gobernantes, por bien intencionados que sean.

A manera de conclusión, consideramos que, si bien hoy se presentan elementos que podrían considerarse significativos para una renovación política en México, esta tiene limitantes de importancia, tales como la continuidad de algunos aspectos propios de la formación social mexicana, los condicionantes de nuestro capitalismo extremadamente dependiente y los que reposan en la cultura política y el sentido común tradicionales, así como los elementos ideológicos que dificultan la organización autónoma de los sectores populares y que incluyen el pragmatismo de varios sectores de la sociedad política y la sociedad civil.

Es urgente abrir las puertas para un debate nacional y una acción colectiva que permita la unidad política de la diversidad de la izquierda y los distintos sectores populares, para lograr lo que Gramsci denominaba la “catarsis”, es decir, la elevación política y la superación de las posiciones propias de los movimientos sociales y de las diversas corrientes y sectores políticos proclives al cambio, por medio del diálogo y la acción política popular. Para ello, los movimientos sociales, sus intelectuales y políticos tendrían que tomar conciencia de los límites de sus perspectivas localistas y particularistas y ubicarse como elementos orgánicos de un gran movimiento de lucha por la hegemonía civil que construya una dirección política alternativa, que reivindique el pensamiento crítico, la imaginación sociológica, la teoría social y la fusión de esta con las opciones políticas.

REFERENCIAS

ACKERMAN, John M. (2021). *El cambio democrático en México. Retos y posibilidades de la “Cuarta Transformación”*. México: Siglo XXI Editores.

- BARTRA, Armando (2014). *Crisis global y encrucijadas civilizatorias*. México: Fundación Heberto Castillo Martínez.
- BARTRA, Roger (1978). *El poder despótico burgués*. México: Era.
- BARTRA, Roger (2021). *El regreso a la jaula. El fracaso de López Obrador*. México: Debate.
- CONCHEIRO, Elvira (2020). *Arnoldo Martínez Verdugo. Obra de un dirigente comunista*. México: AKAL.
- CÓRDOVA, Arnaldo (1972). *La formación del poder político en México*. México: Era.
- CÓRDOVA, Arnaldo (1989). *La Revolución y el Estado en México*. México: Era.
- DAGNINO, Evelina et al. (2006). *La disputa por la construcción democrática en América Latina*. México: FCE.
- GARCÍA, Aura (2023). “Mario Delgado se queda al frente de Morena hasta 2024; Tribunal Electoral valida extensión de mandato”, *IMER Noticias*. <https://noticias.imer.mx/blog/mario-delgado-se-queda-al-frente-de-morena-hasta-2024-tribunal-electoral-valida-extension-de-mandato/>.
- GILLY, Adolfo (2008). *La revolución interrumpida*. México: Era.
- GÓMEZ, Álvarez (2015). “La desnudez, Estado corrupto”. *Debate*. México. <https://www.debate.com.mx/opinion/La-desnudez-del-Estado-corrupto-20150716-0212.html>.
- GONZÁLEZ Casanova, Pablo (1964). *La democracia en México*. México: Era.
- GONZÁLEZ Casanova, Pablo (2006). *Sociología de la explotación*. Argentina: CLACSO.
- GRAMSCI, Antonio (1999). *Cuadernos de la Cárcel*, Cinco Tomos, México: Era.
- HIRSCH, Joachim (2002). *El Estado Nacional de competencia*. México: UAM-X.
- INIESTA, Pedro (2023a). “Chiapas celebra el Día Internacional de Pueblos Indígenas entre violencia y desplazamiento forzoso”. *De raíz media*. <https://deraiz.media/2023/08/10/chiapas-celebra-el-dia-internacional-de-pueblos-indigenas-entre-violencia-y-desplazamiento-forzoso/>.
- INIESTA, Pedro (2023b). “Gobierno de México busca reanudar en EE.UU. demanda contra fabricantes de armas”. *De raíz Media*. <https://deraiz.media/2023/07/27/gobierno-de-mexico-busca-reanudar-en-ee-uu-demanda-contra-fabricantes-de-armas/>.
- LEROUX Ortiz, Sergio (2020). “Desencanto democrático y cesarismo: una respuesta desde la arquitectura republicana”, en *Perfiles Latinoamericanos*, número 28.
- LIGUORI, Guido (2007). *Roteiros para Gramsci*. Brasil: Editorial UFRJ.
- MARTÍNEZ Verdugo, Arnoldo (1971). *PCM Trayectoria y perspectivas*. México: Ediciones de Cultura Popular.
- MEYER, Lorenzo (2019). “El poder vacío: El agotamiento de un régimen sin legitimidad”. *Debate*, México.
- O’DONELL, Guillermo (1994). “Delegative Democracy”, *Journal of Democracy*. Johns Hopkins University Press, Vol. 5, Núm. 1, enero, pp. 55-69.
- OLIVER, L. (2016a). *La ecuación Estado/Sociedad Civil en América Latina*. México: UNAM-Ediciones La Biblioteca.

- OLIVER, L. *et al.* (2016b). *Transformaciones recientes del Estado Integral en América Latina. Críticas y aproximaciones desde la sociología política de Antonio Gramsci*. México: UNAM-Ediciones La Biblioteca.
- OLIVER, L. *et al.* (2021). *Problemas teóricos del Estado Integral en América Latina. Fuerzas en tensión y crisis*. México: FCPyS-UNAM.
- PAYLEY, Dawn (2020). *Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo*, México: Ed. Libertad bajo palabra.
- PÉREZ-TAYLOR, Rafael (2013). “Antropología de la violencia en el desierto de Sonora”, en *Antropología del desierto: etnicidad e identidad*, pp. 289-310, México: UNAM, IIA.
- RAMÍREZ, Miguel *et al.* (2022). *Las derechas en México: Debates analíticos y estudios de caso*. México: INEHRM, PUEDJS-UNAM.
- REVUELTAS, José (1963). *Ensayo sobre un proletariado sin cabeza*. México: Era.
- ROUX, Rhina (2005). *El Príncipe mexicano*. México: Era.
- SEMO, Enrique (2021). “Las tres grandes transformaciones de México” en *Historia del pueblo mexicano*. México: INEHRM. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/692259/Historia_del_pueblo_mexicano__13ene22.pdf.
- VON Wobeser, Gisela (Coord.) (2022). *1810, 1858, 1910. México en tres etapas de su historia*. México: FCE.
- ZAVALETA, René (2009). *Antología. La autodeterminación de las masas*, Bogotá: Ed. El siglo del hombre-CLACSO.

GUATEMALA: RELACIONES SOCIOHISTÓRICAS Y TENSIONES EN LA SOCIEDAD CIVIL

MARIANA LÓPEZ DE LA VEGA, PATRICK JOSEF ILLMER
VERÓNICA YANELI TENERIA MENDIETA

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DE LA CRISIS

Desde finales del siglo pasado, la Plaza de la Constitución, ubicada en el centro de la Ciudad de Guatemala, se había llenado periódicamente con habitantes de las áreas rurales que evidenciaron su descontento con las políticas gubernamentales, la falta de cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la denuncia de las graves problemáticas que estaban enfrentando. La participación urbana que acuerpaba estas manifestaciones casi nunca sobrepasaba los centenares de personas asociadas a las organizaciones sociales y expresiones políticas de izquierda. Por ello, durante el 2015, resultó aún más sorprendente el surgimiento repentino de movilizaciones con miles de manifestantes que fueron impulsadas desde las clases medias urbanas ladinas¹ que tradicionalmente se caracterizaban por una politicidad pasiva y conservadora. El desencadenante de las movilizaciones fueron las investigaciones desarrolladas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un mecanismo impulsado desde las Naciones Unidas con el objetivo de investigar estructuras del crimen organizado y de corrupción enquistadas en el entramado estatal. A pesar de las maniobras de los grupos dominantes y del gobierno en turno encabezado por el ex general Otto Pérez Molina para no renovar el mandato y deshacerse de este mecanismo instalado en el país desde 2007, la CICIG empezó a relevar estructuras de poder en el núcleo de la sociedad política guatemalteca y su *modus operandi*. En las concentraciones predominaba un marco pequeño-burgués amparado en el rechazo a las expresiones partidarias y destacando la corrupción como problema

¹ Entre este estrato de la pequeña burguesía destacaron grupos sociales como profesionales, estudiantes de las universidades privadas, gerentes y asalariados con especialización (Véliz, 2016). Los niveles desenfrenados de corrupción que habían llevado al borde del colapso al Estado y amenazaban su posición social diferenciada, así como sus expectativas de ascenso social, elevando los niveles de indignación entre estos sectores (Fonseca, 2015). Por otro lado, desde un principio participó un espectro de colectivos y organizaciones sociales de izquierda, así como integrantes de la única universidad pública, la Universidad de San Carlos de Guatemala. En los espacios rurales se dio una multiplicidad de expresiones de apoyo, pero en muchos casos con una crítica más profunda del orden social y las políticas gubernamentales, reafirmando la distancia entre los acontecimientos políticos de la Ciudad de Guatemala y las zonas rurales mayoritariamente indígenas.

central. Mientras las expresiones más progresistas fueron incapaces de influir en las manifestaciones y darle un cauce hacia demandas más estructurales, los principales medios corporativos y representantes claves de las élites económicas tradicionales agrupadas en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se alinearon estratégicamente con las protestas.

La ola de manifestaciones culminó en septiembre de 2015 con la renuncia del presidente Pérez Molina a unas semanas de la contienda electoral. Al mismo tiempo, la articulación encontró sus límites cuando las principales fuerzas conservadoras insistieron en las elecciones como una salida de la crisis, preparando el terreno para la victoria electoral de Jimmy Morales² y el posterior escenario que integrantes de la sociedad civil, entre ellos algunos intelectuales, han denominado como una “regresión autoritaria”. De este modo, las movilizaciones que en un primer momento profundizaron el escenario de crisis de hegemonía dieron paso a una salida impulsada desde los grupos dominantes. A través de una reconfiguración de equilibrios y pactos entre las principales fuerzas empresariales y militares, se consolidó una alianza que redobló los esfuerzos para eliminar los elementos que pusieron en duda la corrupción e impunidad imperante que funge como bisagra del excluyente orden social guatemalteco.

La crisis coyuntural del 2015 y las dinámicas de las movilizaciones en la plaza representan un punto de entrada para este trabajo que busca descifrar la relación entre crisis y la forma estatal guatemalteca, así como proporcionar una caracterización de los movimientos y fuerzas sociales que se despliegan en el marco de esta interrelación. Además de problematizar la configuración hegemónica, sus elementos fundantes y la forma en que se actualiza.

Con el objetivo de obtener una caracterización de Guatemala y su relación con la crisis, partimos de la perspectiva teórica del Estado integral. Mostraremos cómo en Guatemala la configuración hegemónica se ampara en una combinación de tácticas, entre las cuales figuran la desorganización y contención coercitiva de segmentos antagónicos de la sociedad civil; procesos de dirección e influencia con diferentes grados de consenso activo y pasivo; así como la cooptación corrupta de las mediaciones entre sociedad civil y Estado. Como resultado, se configura una constelación social propensa a la crisis, pero persistente en su estructura de poder que, dependiendo de las circunstancias coyunturales, combina y/o refuerza alguna de las dimensiones inherentes a su hegemonía.

Para este análisis retomamos la noción de *crisis* como método de conocimiento, en donde es la forma clásica de la revelación o reconocimiento de la realidad del todo social (Zavaleta, 2015, p. 214). Vemos en ella una herramienta y una guía para reflexionar y estudiar a la sociedad. A diferencia de otros momentos, en coyunturas como la crisis del 2015 se hacen presentes perturbaciones en la organización de la sociedad y el Estado, así como quiebres ideológicos donde la realidad social reacciona de conjunto y en estas reacciones se revelan fuerzas sociales y contradicciones.

² Jimmy Morales fue originalmente conocido como un actor con inclinaciones racistas y de orientación evangélica que a partir de estas características no solo logró una simbiosis con un segmento importante del electorado guatemalteco. Sus debilidades y limitaciones políticas también lo convirtieron en un operador útil para articular una alianza siniestra entre militares y segmentos empresariales.

Al ser la crisis un resultado más que una preparación (Zavaleta, 2015) nos lleva a cuestionarnos ¿de qué es resultado este momento de crisis? Como hipótesis inicial, consideramos que se constituye como un nudo de contradicciones que se vinculan con una forma particular de las clases dominantes guatemaltecas de configurar un sistema hegemónico. De este modo, en Guatemala la crisis está íntimamente relacionada con la crisis de hegemonía, con las convulsiones políticas, sociales, económicas y de autoridad que se derivan del fracaso de las clases dirigentes de constituir un proyecto que pueda generar mayores márgenes de representatividad y cohesión por diferentes vías (Gramsci, C. 13, § 23, 1999).

Al tiempo, un elemento clave en los momentos de crisis de hegemonía es la movilización de la sociedad civil. Entendemos a la sociedad civil como el conjunto de los aparatos “privados” de hegemonía (Gramsci, C. 6 § 137, 1984), puesto que en la multiplicidad de sociedades “una o más de ellas prevalecen [...] constituyendo el aparato hegemónico de un grupo social sobre el resto de la población (o sociedad civil)” (Gramsci, C. 6 § 136, 1984). En consecuencia, Gramsci nos ofrece una concepción politizada de la sociedad civil, la cual forma parte de la lucha política y las fuerzas sociales. Así mismo, no existe sociedad civil sin sociedad política y, por ende, sin procesos de hegemonía, lo que implica reflexionar al Estado a partir de las relaciones de fuerza y los mecanismos de consenso y coerción que se establecen. De este modo, el terreno de la sociedad civil se consolida como una dimensión analítica clave para acercarse a la comprensión no solo de la crisis³, sino también de la forma estatal desde una perspectiva integral. Por ello, en el caso de Guatemala nos parece clave analizar las relaciones complejas y cambiantes entre este plano analítico y el de la sociedad política. Con el propósito de dar cuenta de la configuración hegemónica guatemalteca y su relación con la crisis, estructuramos el trabajo en tres apartados. Una primera parte desarrolla algunos condicionantes sociohistóricos de la formación del Estado guatemalteco. Al respecto, conceptualizamos la raíz oligárquica de la forma estatal, las características abigarradas de la sociedad guatemalteca y el rol de la violencia como mediación entre sociedad política y sociedad civil como determinantes de larga duración.

El segundo apartado se enfoca en la sociedad civil. Traza las principales dinámicas que se desarrollan en este plano haciendo referencia a importantes procesos que movilizan a la sociedad, sea en términos progresivos o reaccionarios. Es a partir de las fuerzas en movimiento que derivamos conclusiones sobre la forma estatal guatemalteca y el modo en que los grupos dominantes configuran la hegemonía.

Un tercer apartado se enfocará en la cooptación de las mediaciones entre Estado y sociedad civil, un proceso que se intensificó en el marco de la transición hacia la demo-

³ Actualmente, América Latina está inmersa en una crisis del Estado. En este marco es importante comprender la naturaleza de dicha crisis. Siguiendo a Gramsci, se necesita distinguir los movimientos que se presentan como orgánicos de los de coyuntura. Los orgánicos se distinguen porque se presentan contradicciones de cimiento en la estructura económica, donde se afecta el proceso de acumulación de capital. Estos movimientos dan lugar al surgimiento de posturas con una crítica histórico-social que afecta más allá de las clases dirigentes. Por su parte, en la crisis de coyuntura la variación de la relación entre las fuerzas no conlleva una modificación inmediata en el movimiento de las estructuras económicas, políticas o ideológicas, y la crítica se presenta de forma cotidiana, afectando únicamente a los grupos dirigentes (Gramsci, C. 13, § 17; C. 15, § 5, 1999).

cracia, el cual ha sido un mecanismo clave para los grupos dominantes para reproducir su posición privilegiada en la sociedad y navegar diferentes instantes de crisis. A partir de ello, se consolidó el plano social de las élites como el terreno desde el cual se definen las disputas hegemónicas.

DETERMINANTES SOCIOHISTÓRICOS

La raíz oligárquica de la forma estatal guatemalteca

Como en el caso de la mayoría de los países de la región latinoamericana, el proceso inicial de formación del Estado guatemalteco fue impulsado por una coalición de élites de ascendencia europea. Este círculo cerrado de élites oligárquicas se apoyó en imaginarios y diferenciaciones raciales para engendrar una estructura institucional que respondía a sus intereses (Casaús, 2007). En consecuencia, fuertes nociones de autoritarismo y la marginalización de las mayorías indígenas se convirtieron no solo en rasgos de los grupos dominantes, sino que además se inscribieron como características constitutivas en la operatividad del Estado guatemalteco.

Estrategias como el repartimiento y la encomienda representaron los pilares de un orden socioeconómico amparado en una jerarquización racial (Martínez, 1994, p. 48). En este contexto se creó la categoría de *ladino* para referirse a los mestizos y los segmentos de la población que no alcanzaron los ideales económicos, sociales y culturales criollos sin ceder sus propias aspiraciones de ascenso social (Brunner *et al.*, 1993, pp. 25-27). En el largo plazo, los criollos lograron consolidar las características oligárquicas en un extremo de la pirámide sociocultural, mientras todas las características asociadas con las culturas indígenas fueron clasificadas en su conjunto como inferiores y ubicadas al otro extremo de este marco. Los ladinos, en cambio, se convirtieron en un segmento poblacional donde resonaron las aspiraciones e ideas dominantes y se reafirmaba –al menos de manera intermitente– la hegemonía de los grupos dominantes.

Un proceso clave en la determinación de largo plazo de los marcos ideológicos de los grupos dominantes y la operatividad institucional fue la configuración de lo que Tischler (2001) denomina un *Estado finquero*. Esta forma estatal se edificó sobre una diversidad de mecanismos como la servidumbre por deudas, formas de trabajo obligatorio, además del despojo masivo de tierra.⁴ La contraparte de la jerarquización sociocultural fue la integración dependiente en el mercado global que institucionalizó un orden social que sintonizaba los intereses de los grupos dominantes con los intereses metropolitanos. Esta vinculación particular con las redes del capitalismo global se amparó en un modelo agroexportador en cuyo núcleo se ubicaba la finca, una forma de organización socioeconómica que se consolidó como un microcosmos de la sociedad guatemalteca y cuyos ejes fueron el despojo de los pueblos indígenas de sus tierras y el trabajo forzado (Tischler,

⁴ El Estado finquero construyó una territorialización diferente en donde lo “indio” apelaba a lo comunitario y lo “ladino” a lo propietario, lo cual fue modificando los sistemas autónomos de las regiones por los de sociedades monetarizadas que contaban con mayor flujo de capital, reproduciendo ciclos de despojo diferenciados de acuerdo con las características de cada territorialidad.

2001). El legado trascendente de este orden violentamente impuesto se plasmó en un incipiente aparato estatal que se convirtió en garante para la reproducción de este modelo.

En esta línea es importante señalar que más allá de su forma de operativizar la estructura económica, el orden finquero se concretó en un ethos señorial de las élites (Tischler, 2001; Torres-Rivas, 1975), una matriz ideológica inspirada en nociones de darwinismo social y un énfasis en la pureza de sangre (Casaús, 2007). Este marco simbólico se reprodujo entre las clases dominantes con pocas alteraciones durante la primera mitad del siglo XX, puesto que los procesos de modernización económica no conllevaron la emergencia de una burguesía para cuestionar el predominio de la clase terrateniente. En el núcleo de estos grupos sociales, la incorporación de nuevos miembros se dio de manera casi exclusiva a partir de inmigraciones europeas, aceptadas por su aporte de capital, nobleza o capacidad de negociar beneficios con el bloque dominante (Casaús, 2007). Además, gran parte del surgimiento de modos burgueses de producción estuvieron vinculados a un simple “cambio de piel” (Torres-Rivas, 2011, p. 137), es decir, una diferenciación de estrategias de acumulación al interior de la misma oligarquía. A partir del acceso privilegiado a los recursos del Estado y la protección gubernamental, algunas facciones empezaron a combinar sus intereses en la agricultura con emprendimientos en el sector industrial y financiero. Por otro lado, la gradual expansión de los derechos de ciudadanía y de votación a secciones más amplias de la población no alteró la vinculación instrumental de las élites con el Estado político. Resultados electorales fueron manipulados hacia gobiernos más favorables a los grupos oligárquicos o a partir de una combinación de represión política, manipulación y subordinación clientelista de sectores de la población indígena al cooptar su liderazgo (Taracena-Arriola *et al.*, 2002, p. 416). Los marcos normativos fueron constantemente respaldados por mecanismos extraoficiales que llegaron a ser intrínsecos al modo de las elites de imponer su autoridad. El resultado fue una “oligarquización de la vida política” (Torres-Rivas, 2011) que al reproducirse durante décadas terminó por constituir una mentalidad e instituir una praxis autoritaria de gobernar. Esta matriz ideológica alimentada por la persistencia de la forma finquera se consolidó como una determinante central de la formación estatal guatemalteca, así como de sus clases dominantes.

El carácter abigarrado de la sociedad civil

La configuración del núcleo oligárquico tiene consecuencias para el marco integral de la forma estatal guatemalteca. Retomando a autores como Zavaleta (2009a, 2009b) y Lechner (2012), es posible acercarse al grado de afianzamiento de los procesos de nacionalización. Estos trabajos retoman la diferenciación y vinculación dialéctica entre estructura y superestructura como punto de partida para desarrollar un planteamiento que distingue entre diferentes grados de éxito o fracaso en el proceso de nacionalización. En el caso de los procesos “exitosos” de configuración nacional, el Estado se erige como poder político sobre una sociedad civil con cierto grado de homogeneización en la base económica y la construcción de significados nacionales compartidos en el ámbito de la cultura política. Por otro lado, en el caso de las nacionalizaciones incompletas de América Latina, en vez de formas de regularidad y subsunción real, persisten las características “abigarradas”

(Zavaleta, 2009a, 2009b), es decir, una heterogeneidad económica y sociocultural de colectividades que conviven en una sociedad, donde en muchos casos la nación representa poco más que un supuesto (Illmer, 2021, p. 141).

En situaciones de “nacionalización exitosa” –en muchos casos precedidos por la eliminación de diferencias étnicas– se abren formas más orgánicas de entretimiento entre Estado y sociedad civil. En cambio, los casos de heterogeneidad estructural se tienden a plasmar en formaciones estatales “aparentes” (Zavaleta, 2009b), donde una parte de la sociedad busca definir lo nacional y dominar un territorio, sin que represente o tenga vínculos con grandes segmentos sociales del territorio. En el caso guatemalteco, este carácter aparente ha sido históricamente reafirmado por los marcos culturales de clasismo y racismo que contraponen un núcleo oligárquico de poder a una sociedad civil abigarrada. Desde una perspectiva socio-histórica, destaca la manera en que este núcleo de poder determinó la orientación de la forma estatal, primero al controlar de manera autoritaria la sociedad política, luego al cooptar las mediaciones entre Estado y sociedad civil. Por otro lado, en gran parte del siglo XX persistieron amplios segmentos de la población, entre los cuales seguía predominando la lógica comunitaria como forma organizativa y referente de vida económica y cultural. Autores como Taracena *et al.* (2002) y Grandin (2007) permiten comprender cómo estos espacios se mueven en una constante tensión entre autonomía y subalternización, dependiendo de su ubicación precisa, de su grado de integración a las estrategias de acumulación y subordinación a las tácticas sociopolíticas de los grupos dominantes.⁵

Esta orientación local tuvo consecuencias ambivalentes. Por un lado, se mantuvieron las posibilidades para la reproducción autónoma de marcos culturales y políticos. En muchos ámbitos, esto permitió a los espacios comunitarios sostener una autorregulación hacia dentro y el desarrollo de sus propias formas organizativas. Por otro lado, en el largo alcance, esta autodeterminación se combinó con las limitaciones en traducir sus formas organizativas en una gramática social que fuera recogida por las mediaciones y la forma estatal *per se*.

Entre los pocos intentos de articular proyectos políticos que tuvieran como horizonte la construcción de hegemonía, y que cuestionaron la estructura oligárquica de poder desde esta sociedad civil abigarrada, destaca la revolución de 1944. Este proceso organizativo fue impulsado principalmente desde los espacios urbanos y las clases medias, cuyas movilizaciones revelaron la propensión a la crisis inherente al orden excluyente oligárquico-militar (Tischler, 2001; Torres-Rivas, 2011). A la falta de oportunidades para los profesionales de clase media en el marco de una sociedad organizada verticalmente alrededor de un modelo agroexportador se sumó la capacidad de liderazgo de grupos emergentes de intelectuales y universitarios. A partir de la articulación de estos sectores se impulsó un proyecto político que intentó cambiar el rumbo de la orientación estatal. Sus ejes programáticos se basaron en un proyecto nacional prefigurado desde los

⁵ Por ejemplo, algunos espacios comunitarios y comunales en tanto al decir de Tzul como “una forma de gobierno, que produce instituciones para autorregularse hacia adentro y que al mismo tiempo no pierde de vista y se hace cargo de los cambios y las regulaciones que el Estado y el capital realizan en las comunidades” (Tzul, 2019, 106).

sectores progresistas entre la población ladina urbana que intentó ampliar su alcance con reformas a la legislación agraria y laboral.

Sin embargo, las discusiones sobre la identidad nacional, la colonialidad y el racismo que sostienen la estructura de dominación sobre las comunidades indígenas no era tratado por estos sectores, en tanto las referencias hacían énfasis en la negación y/o “integración” de los sectores indígenas. Se manifestaron como determinante de larga duración las dificultades de articular proyectos políticos y alianzas interculturales en una sociedad, donde el abigarramiento es reforzado por divisiones profundamente consolidadas. Al enfrentarse no solo al bloque oligárquico-militar, sino también a los vientos geopolíticos en el marco de la guerra fría, se reveló la imposibilidad de defender los pocos avances derivados de esta primavera democrática. A la vez, el escenario reveló la resiliencia del bloque oligárquico, así como su disposición constante de recurrir a la violencia y la coerción para defender una hegemonía débil y una forma estatal aparente.

La violencia como mediación de las relaciones Estado-sociedad civil

En la trayectoria de largo plazo, la violencia y los recursos coercitivos se consolidaron como estrategias inherentes a la forma estatal guatemalteca y una constante forma de mediar las relaciones entre Estado y sociedad civil, y entre gobernantes y gobernados. Los grupos dominantes guatemaltecos vivieron con miedo del enemigo desde abajo, imagen asociada en un primer momento a la resistencia indígena. Por ello, es poco sorprendente que el ejército surgiera como una de las primeras ramas institucionales como consecuencia de la revolución liberal de 1871, reemplazando las milicias vinculadas de manera directa a las estructuras locales de poder amparado en las fincas (Taracena *et al.*, 2002). En este sentido, el aparato coercitivo fue central a la ampliación de la economía finquera como pilar de la vida socioeconómica.

Derivado de que integrantes del núcleo de la oligarquía no se involucraron de manera directa en la institución armada, esta representó una plataforma de ascenso social para sectores ladinos. La importancia de la coerción directa y legal en el mantenimiento de la estructura de dominación dio paso a una serie de regímenes autoritarios en la primera mitad del siglo XX, así como una concentración de decisiones y recursos en manos de caudillos. Durante décadas, figuras militares encabezaron los diferentes gobiernos en una estrecha alianza con la oligarquía, sin cuestionar el *ethos señorial* que orientó el actuar político-cultural de un grupo social cuya posición dominante y riqueza no se origina en el control sobre el capital sino sobre la tierra (Torres-Rivas, 1975).

En la segunda mitad del siglo XX, se renovaron los “pactos” con la institución militar que hasta 1950 representó un aliado subordinado al bloque dominante. Sin embargo, el contexto de la Guerra Fría permitió a las estructuras militares forjarse espacios de autonomía y para 1970, ante el crecimiento de la amenaza insurgente de las guerrillas, el ejército llegó a ser sinónimo de la institucionalidad estatal al tomar cargo de todas sus ramas. Aprovechando su margen de acción y legitimidad, este escenario no solo dio vía libre para movilizar recursos para enfrentar a los grupos insurgentes. También permitió a la institución castrense competir por la orientación del Estado, participar en la definición de lo nacional y perseguir sus propias ambiciones económicas y políticas (Illmer, 2018).

Es también en este contexto que el *ladino*, entendido como no-indígena, se estableció como el agente primario de construcción del proyecto nacional guatemalteco (Brunner *et al.*, 1993; Taracena *et al.*, 2002).

El auge de la intensidad del conflicto armado y el despliegue territorial del ejército en los años setenta desató una ola de terror contra la población rural con operaciones de tierra arrasada y genocidio en un intento de asentar el miedo en la memoria colectiva. El ejercicio del terror se constituyó como una forma sistemática de ocupar la coerción, así como una consensualidad pasiva, sostenida sobre los efectos psicosociales de una población vejada (López, 2015). Todo lo “diferente” en términos culturales y políticos –comunista, sindicalista, activista indígena– y cualquier actividad social que de una manera cuestionaba el marco ideológico militar fue presentado como un peligro para los valores nacionales y, por ende, merecía ser eliminado. Al paso que las fuerzas armadas se convirtieron en la fuente legal y moral de la sociedad, impulsaron la deshumanización propagandística de las expresiones antagonistas en el terreno de la sociedad civil (Illmer, 2022). Un giro más explícito de las estrategias contrainsurgentes hacia la “captación de corazones y mentes” de la población a partir de 1982 reflejaba una creciente preocupación sobre el carácter no-integrado de la población indígena, situación que desde la perspectiva contrainsurgente permitía un acercamiento y una manipulación por parte de las fuerzas guerrilleras (Taracena *et al.*, 2004).

Entre las tácticas empleadas en el marco de estos esfuerzos destacó el reclutamiento forzado para el servicio militar, la eliminación de pautas colectivistas y la modernización de la vida productiva, la concentración y reeducación ideológica de la población rural, así como la promoción de misiones pentecostales para rehacer las comunidades en términos espirituales y eliminar simpatías con la insurgencia.

En el contexto del conflicto armado, las tácticas orientadas a reconfigurar la subjetividad indígena encontraron sus límites para seducir a segmentos importantes de la población. De la mano con el terror y la violencia masiva, la recuperación territorial socavó los intentos de aumentar la confianza entre una población indígena que igualaba a la institucionalidad estatal con su discriminación y explotación histórica. Sin embargo, las décadas de conflicto armado dejaron el legado de una sociedad civil captada por el terror y miedo, eliminación de una generación entera de líderes y lideresas sociales, la desintegración de redes colectivas y comunitarias, la persistencia de desigualdades extremas, así como la reproducción e interiorización de marcos autoritarios.

De este modo, la violencia se terminó impregnando en ambos planos de la forma estatal: representa un mecanismo clave asociado al poder estatal e influyente en las interacciones en el terreno analítico de la sociedad civil. Se suma a la raíz oligárquica y la configuración abigarrada de la sociedad como condicionante de larga duración de la forma estatal guatemalteca. Esto nos lleva al próximo apartado de este trabajo donde desarrollamos cómo estas dimensiones operan y se actualizan en el tiempo presente para sostener una determinada configuración hegemónica. Para ello, nos adentramos en el plano de la sociedad civil para identificar las principales fuerzas y movimientos de esta dimensión analítica. De manera sintética, identificamos tres tendencias principales que operan: primero, un segmento progresista que agrupa las propuestas de cambio del *status quo*. Segundo, un segmento conservador que se complejiza como derivación del men-

cionado núcleo oligárquico y opera en defensa del estatus quo. Tercero, un segmento social no formalmente organizado que, sin embargo, con diferentes grados de exclusión, subalternización y no participación, llega a reafirmar el poder del bloque dominante.

TENDENCIAS Y TENSIONES EN LA SOCIEDAD CIVIL GUATEMALTECA

Resurgiendo de los escombros: la sociedad civil “progresista”

El cierre de los espacios organizativos y la represión feroz contra expresiones de descontento durante el conflicto armado⁶ dificultó en la segunda mitad del siglo XX formas amplias de organización social y popular que no tuviera vínculos con los grupos armados insurgentes. En muchas zonas, el solapamiento geográfico, la represión indiscriminada y las demandas similares fomentaron un acercamiento entre las organizaciones sindicalistas, activistas de la iglesia católica y las comunidades indígenas con las fuerzas insurgentes (González, 2011). Por otro lado, ya en el curso de los años setenta, una de las facciones guerrilleras, el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) estimuló nuevas pautas de organización civil, entre las cuales destacó el surgimiento del Comité Unidad Campesina (CUC) (Bastos y Camus, 2003; Le Bot, 1995).

A pesar de que la incidencia de organizaciones civiles con planteamientos progresistas en la transición hacia una constitución democrática a mediados de los años ochenta fue sumamente limitada, en el contexto de una intensificación en los esfuerzos internacionales para lograr un cese del conflicto armado, nuevos tipos de activismo social aparecieron en el espacio público, como el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la Coordinadora de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), el Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG), y surgieron organizaciones de mujeres como la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), el grupo Ixquic, el Grupo Guatemalteco de mujeres, el grupo Tierra Viva (Villa, 2019), las cuales surgieron con un énfasis en denunciar las violaciones de derechos humanos y trabajar para sanar el tejido social y comunitario (Brett, 2006).

Los años noventa del siglo pasado vieron otra ampliación sustancial de este espectro organizativo. Al mismo tiempo, empezaron a surgir divisiones en el ámbito de estas expresiones sindicales, populares e indígenas. Una primera divergencia surgió alrededor de la politicidad de lo indígena y la denuncia de la prolongación en el tiempo de las bases coloniales para sustentar el capitalismo, es decir, colonialidad del poder (Quijano, 2000). Basado en reclamos dirigidos a las facciones guerrilleras de no haber problematizado suficientemente las dimensiones étnicas en la insurgencia y con un énfasis en la revitalización de la identidad Maya, una parte de las organizaciones se distanciaron de las expresiones partidarias y organizativas vinculadas a la URNG (MacLeod, 2013).

⁶ El conflicto armado guatemalteco hace referencia al periodo entre 1960 y 1996 y el enfrentamiento armado entre el Estado guatemalteco y diversos grupos insurgentes que a partir de 1982 se fusionaron en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. A pesar de tratarse de una guerra contrainsurgente, gran parte de la violencia se desplegó contra la población civil e indígena. Negociaciones de paz se alargaron hasta 1996 para poner fin al conflicto.

Otras agrupaciones, en cambio, mantuvieron su cercanía política con las facciones de la insurgencia.

Por otro lado, a pesar del aumento numérico de organizaciones civiles, este no se plasmó en un aumento de la fuerza de articulación. Gran parte de las nuevas organizaciones surgieron bajo la figura de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en línea con una concepción particular y limitada de sociedad civil que regía entre las instituciones internacionales multilaterales y de cooperación. Desde su rol como asesores de las negociaciones de paz, instancias como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano abogaron por la creación de una Asamblea de Sociedad Civil (ASC) con el mandato de elaborar propuestas para los Acuerdos de Paz (Howell y Pearce, 2001, pp. 160-173). Sin embargo, cabe señalar el limitado impacto que tuvo la ASC sobre los Acuerdos de Paz, especialmente en el abordaje de problemáticas estructurales como el tema agrario, en el cual no se logró sumar fuerzas suficientes para obtener concesiones de las élites económicas que se opusieron a cualquier planteamiento redistributivo y ubicaron el libre mercado en el centro de las soluciones (Granovsky-Larsen, 2014; Brett, 2006). En el largo plazo, estas recetas neoliberales contribuyeron a la fragmentación del movimiento campesino y la gradual pérdida de influencia a nivel nacional (Granovsky-Larsen, 2014). Además, el espacio de la Asamblea de Sociedad Civil (ASC) profundizó la mencionada división en el espectro organizativo entre el ala popular que mantuvo una cercanía con los grupos insurgentes y un ala culturalista que articuló sus acciones alrededor de una identidad Maya con énfasis en aspectos como la educación bilingüe, los idiomas mayas o la protección de sitios sagrados (Bastos, 2010). Incluso al interno de estas dos alas organizativas surgieron conflictos a partir de la competencia entre liderazgos y organizaciones por influencia y fondos que podemos vincular con esta organización de una parte de la sociedad civil. Como consecuencia de esta institucionalización y profesionalización de gran parte del tejido organizativo, las organizaciones se dedicaron a desarrollar actividades y proyectos a partir de la validación y el financiamiento de las agencias internacionales. Si bien permitió sostener actividades y cubrir temáticas importantes, también conllevó una tendencia a moderar discursos, profundizar relaciones de competencia y alejar los procesos organizativos y sus prioridades de las comunidades rurales y se imponía la agenda de las financiadoras (Biekart, 1999; Bastos, 2010; Howell y Pearce, 2001, p. 158, López, 2019).

En el campo de las expresiones partidarias, las agrupaciones de izquierda reprodujeron estas tendencias a la fragmentación e incapaces de luchar por la hegemonía, se encaminaron hacia una gradual desarticulación. Las persistentes disputas entre el liderazgo derivado de diferentes grupos insurgentes imposibilitaron la creación de espacios para articular consensos y proyectos comunes a pesar de una cercanía en los planteamientos de fondo. A esto se sumaron dificultades de tejer relaciones con el ámbito comunitario y los sectores populares. Por otro lado, la debilidad de las mediaciones progresistas preparó el terreno para la cooptación de partes de su liderazgo por parte de gobiernos y partidos conservadores y su integración en posiciones institucionales. En el caso de dirigentes indígenas, Cojtí (2010) documentó la consolidación de “ventanillas indígenas” que, al operar sin presupuesto y en un entorno institucional antagónico, quedaron sin impacto.

En los segmentos de la sociedad en donde la organización y acción seguían predominando la “forma comunidad”, los colectivos tuvieron que encontrar sus propias respuestas a los profundos retos socioeconómicos y psicoemocionales del posconflicto. Un ejemplo de las múltiples formas de organización son la constitución de nuevas formas de vínculos sociales y comunitarios para defender los territorios, para mantener la memoria colectiva y para lograr una salud integral y la sanación corpo-territorial, trabajo impulsado sobre todo por colectividades de mujeres, y el cual ha sido invisibilizado o planteado en un segundo plano en muchas ocasiones (López, 2019). A pesar de los enormes retos y la destrucción de tejidos sociales, fue desde estos márgenes de autonomía que surgió una de las contestaciones más contundentes al orden posconflicto con la oposición a las estrategias orientadas a la mercantilización de los bienes naturales. Al paso que la información sobre las concesiones petroleras, mineras e hidroeléctricas llegaba a las comunidades indígenas, ladinas y xincas de diferentes regiones del país, quienes se adhirieron a esta defensa de los territorios. El elemento articulador fue la determinación local de las relaciones económicas, culturales y políticas en sus territorios, así como la contestación de los excluyentes procesos de toma de decisiones para avalar los proyectos (Illmer, 2018). Ante la ausencia de una consulta a la población afectada, las comunidades procedieron a desarrollar sus propios mecanismos procedurales para dejar en constancia su desacuerdo desde el plano local a través de una forma autoorganizada de referéndum, los procesos de consultas comunitarias.⁷

A partir de esta defensa de territorio, también surgieron nuevos espacios de coordinación departamental o regional como la Asamblea Departamental de Huehuetenango, la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waquib’Kej, el Consejo de los Pueblos del Occidente, el Consejo de Pueblos Tezututlan o la Coordinadora Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día. Por otro lado, la defensa de territorio permitió la revitalización de movimientos campesinos como CODECA, que al integrar entre sus demandas la nacionalización de la energía eléctrica y el boicot al pago de facturas de electricidad amplió la agenda convencional de las organizaciones campesinas. Además, en el marco de estos diferentes espacios de coordinación regional y nacional, también surgió una serie de propuestas que en línea con los procesos constitucionales de Bolivia y Ecuador plantearon la construcción de un Estado plurinacional o refundación del Estado.

Los esfuerzos de coordinación regional también encaminaron a retomar la disputa electoral y los intentos de ubicar representantes en el Congreso. A la vez, la fragmentación siguió caracterizando y mermando las potencialidades de estas expresiones partidarias. Las rivalidades entre diferentes líderes, la competencia por fondos e influencia, así como la dificultad de elaborar propuestas capaces de articular diferentes segmentos populares y comunitarios seguían debilitando estas expresiones organizativas. Los resultados electorales de las últimas elecciones en 2019, en las cuales cuatro partidos de izquierda con recursos limitados y sin un trabajo organizativo sostenido se disputaron un mismo electorado, reflejaron esta encrucijada que tiene consecuencias con las preguntas que emanaron de los días de la plaza.

⁷ Hasta la fecha se han celebrado consultas comunitarias en línea con diferentes modalidades y marcos legales en más de 90 municipios del país, lo cual refleja el dinamismo inherente a estos movimientos territoriales.

La articulación hegemónica en la sociedad civil: las fuerzas sociales conservadoras

Además de las dinámicas organizativas con una orientación progresista, en la sociedad civil se presentan dos núcleos organizativos que operan como puntos de gravedad para la irradiación de creencias y prácticas conservadoras. Por un lado, resalta el núcleo de las élites económicas tradicionales que evolucionaron como fuerza organizativa a lo largo del siglo XX desde una identidad señorial finquera hacia una subjetividad empresarial neoliberal con una agenda ideológica alineada con las vertientes más radicales del libre mercado. Por otro lado, a partir de la persistente importancia de la coerción para mediar las relaciones entre Estado y sociedad civil en la segunda parte del siglo XX, resaltamos la consolidación de otro núcleo organizativo: el tejido organizativo que derivó de las asociaciones cercanas a la institución castrense. Estas dos fuerzas, que en coyunturas específicas concordaron o entraron en conflicto, han actuado como puntos de referencia para el impulso de tendencias conservadoras y reaccionarias en la sociedad civil.

La consolidación del momento oligárquico en el plano de la sociedad civil se formalizó en 1957 con la creación del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) que evolucionó hacia una de las cámaras empresariales más poderosas de la región. Antes de esta formalización, la influencia del gran empresariado sobre los regímenes autoritarios era tal que estas élites no consideraron necesario establecer una asociación. Desde su fundación, el CACIF evolucionó hacia un órgano clave para articular y proteger los intereses del sector privado ante cualquier iniciativa de reforma de los gobiernos de turno (ICEFI, 2007). Según la coyuntura específica, este gremio se movilizó para oponerse a reformas fiscales, defender a capa y espada la propiedad privada, impulsar la liberalización económica y controlar la deuda pública.

El contexto del referéndum de 1999 orientado a implementar una serie de reformas que habían sido negociadas como parte de los Acuerdos de Paz evidenció por primera vez en el contexto posguerra la capacidad de movilización por parte de los núcleos conservadores. El CACIF y los partidos políticos afines promovieron una campaña mediática para alertar sobre los peligros que una redefinición de Guatemala como nación multicultural, étnicamente plural y multilingüe implicaba. Instigando miedo de “un revanchismo racista” y señalando el riesgo de una “balcanización” de Guatemala (Warren, 1998), movizaron el inconsciente racista de la sociedad y el rechazo a las reformas.

En la primera fase de transición desde el anticomunismo hacia el neoliberalismo y la gradual consolidación de un Estado nacional de competencia, las élites asociadas al CACIF lograron consolidar una posición hegemónica. Varias familias oligárquicas se convirtieron en grupos corporativos transnacionales, multiplicando su capacidad de acumulación y riqueza durante estas décadas del neoliberalismo.⁸ Su articulación hegemónica en el terreno de la sociedad civil se apoyó en el despliegue de una red de fundaciones, tanques de pensamiento y universidades para la profundización y difusión

⁸ Entre estos grupos corporativos destacan el Grupo Pantaleón (familias Herrera Zavala y Herrera Ibarguen), Grupo Multiinversiones (familias Bosch y Gutiérrez), el Grupo Castillo Hermanos (familia Castillo), el Grupo Novella (familia Novella), el grupo Botrán (familia Botrán), el Grupo Fragua-WallMart (familia Paiz), el Grupo Campollo (familia Campollo Codina), el Grupo Berger Widmann (familia Berger Widmann). Para más detalles véase Solano y Solís, 2007.

de postulados radicales de libre mercado y desarrollo. Instituciones como la Universidad Francisco Marroquín, Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), y el Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES), llegaron a ser laboratorios para la reproducción de la Escuela Austriaca del neoliberalismo. Los medios de difusión masiva, cuyos exponentes más importantes se encontraron en manos de los grupos corporativos de estas élites, fueron estructurando interpretaciones de la realidad y la circulación de información en la sociedad. En paralelo a la elaboración y estandarización de un lenguaje libertario en el campo económico, iniciativas editoriales como la Sociedad de Amigos del País impulsaron una relectura de la historia y un alineamiento de las iniciativas educativas con una interpretación de la realidad del país desde la perspectiva de las élites económicas.

Por otro lado, se consolidó una red de fundaciones caritativas que jugó un rol central para la legitimación simbólica de las élites económicas tradicionales. Entre ellos destaca FUNDESA, que se convirtió en la principal fuente de propuestas y cuyas iniciativas se tradujeron casi sin mediación en los planes gubernamentales de desarrollo. Además, se convirtió en una asociación clave para tejer alianzas con otros sectores sociales a partir de iniciativas como el Foro Guatemala, el Grupo Barómetro y el Movimiento Cívico. Esta infraestructura de irradiación de posturas, estrategias y discursos fueron claves para la naturalización de ideas de rechazo a lo público, la condenación de la burocracia estatal y la legitimación a una oposición feroz contra el aumento de compromisos fiscales de los grupos dominantes.

Además de esta “organización de consenso” por parte de las organizaciones empresariales tradicionales (Valdez, 2015), identificamos un segundo núcleo organizativo que impulsó creencias conservadoras en el plano de la sociedad civil. Es un espectro de organizaciones que se deriva históricamente de la promoción de un nacionalismo militarista alineado con el proyecto contrainsurgente. Parte de esta matriz ideológica fue impulsada desde la institucionalidad estatal con las operaciones orientadas a ganarse “corazones y mentes” de la población que complementaron a la brutal violencia militar. Sin embargo, el reclutamiento de alrededor de un millón de hombres en patrulleros de autodefensa civil, la reorganización de las actividades económicas en agro-aldeas y aldeas modelo, así como las campañas psicológicas orientadas a desalentar simpatías con las guerrillas y alinear especialmente las mentalidades indígenas con las ideas de una nación guatemalteca también implicaron una profunda reconfiguración a nivel de la sociedad civil. La pérdida de legitimidad de la institución militar en el contexto de los Acuerdos de Paz solo sumergió momentáneamente el legado de estas tendencias ideológicas. Pronto estas posturas resurgieron con la exigencia del resarcimiento para los ex patrulleros y los ex militares, así como la oposición a cualquier avance en temas de justicia transicional (Benítez, 2022).⁹

⁹ Entre las organizaciones que impulsaron estas demandas destacaron la Fundación contra el Terrorismo, la Asociación de Veteranos Militares Miembros de las Tropas del Ejército de Guatemala (Avevitregua), la Asociación de Tropas Retiradas del Ejército de Guatemala (Astregua), la Asociación de Veteranos de Guerra Combatientes Unidos, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avevilgua).

El núcleo organizativo de esta fuerza social vinculada a la tradición militarista adquirió un dinamismo particular a partir de su imbricación con las iglesias pentecostales. Mientras las estructuras de poder de la iglesia católica permanecieron en gran parte asociadas y alineadas con las élites económicas tradicionales, en línea con las estrategias contrainsurgentes de la región, inició el impulso al pentecostalismo con un mensaje político en el cual relegan las preocupaciones terrenales y fomentando un retiro de los feligreses de otras actividades comunitarias. La proyección micropolítica hacia las estructuras emocionales de segmentos urbanos y rurales implicó una alta receptividad entre los segmentos populares, socioeconómicamente marginalizados y traumatizados por la violencia. Además, en las primeras décadas del siglo XX y con la rutinización de las contiendas electorales, los feligreses pentecostales se convirtieron en una clientela política clave que permitió a élites emergentes que en gran parte derivaron de círculos militares, ganarse segmentos importantes del electorado.¹⁰

En las últimas dos décadas, esta fuerza social emergente amplió su espectro integrando una diversidad de actores del capital económico emergente y cooperativista, ex militares, operadores del crimen organizado, actores políticos, así como contratistas de Estado. Sin embargo, una parte importante de esta fuerza social conservadora en el plano de la sociedad civil se desplegó sobre las redes del proyecto contrainsurgente y sus derivaciones. Central a su articulación, fue una interpelación populista de la sociedad y un distanciamiento discursivo del CACIF y las élites económicas tradicionales. Esta fuerza social emergente también se diferenció a nivel operacional de los grupos asociados al CACIF, al estructurar su influencia de manera descentralizada sobre las redes locales de poder.

Esta fuerza social que ampara a las élites emergentes cuenta con un amplio espectro de ideólogos y columnistas de prensa en los principales periódicos, canales de televisión dedicados a la difusión de contenidos religiosos y el análisis político.¹¹ A pesar de no contar con la misma capacidad y presencia mediática como las agrupaciones tradicionales, a partir de contratos y concesiones estatales, estos sectores incursionaron de manera eficaz en el sector televisivo y radial, así como el terreno de las redes sociales. Especialmente en el ámbito de las redes sociales y las operaciones de netcenters se reveló la experiencia en inteligencia militar entre estas facciones que les permitió dirigir campañas de información, circular rumores y noticias falsas y en coyunturas claves, estimular reacciones espontáneas entre la sociedad.

Las dos fuerzas sociales conservadoras presentadas aquí solo cuentan con núcleos organizativos limitados. Sin embargo, lo que comparten es su capacidad de articular e integrar bajo su dirección otros segmentos de la sociedad civil. En muchos casos esta adhesión es temporal, basada en premisas de corto plazo y en coyunturas vinculadas a

¹⁰ La centralidad de la religión en las disputas políticas se ejemplificó con la incursión de pastores en el ámbito político, así como la movilización de seguidores contra lo que plantean como ideología de género, el aborto y en pro de la familia.

¹¹ Entre los columnistas y periodistas afines destacan personas como Eduardo Mayora Alvarado, José Raúl González Merlo, Alfred Kaltschmitt, Mario David García, Gonzalo Asturias Montenegro, Danilo Parinello, Ricardo Méndez-Ruiz Valdés, Raúl Minondo Ayau, Humberto Preti, Luis Enrique Pérez y Óscar Germán Platero Trabanino.

las contiendas electorales. A la vez refleja cierta disposición y receptividad entre amplios segmentos de la sociedad para entablar un tipo de relaciones transaccionales.

Pautas de subalternización en la sociedad civil guatemalteca

En el caso guatemalteco, la disputa y el conflicto político se caracteriza principalmente por el antagonismo entre tendencias progresistas y conservadoras. A la vez, planteamos la importancia de considerar el peso de los segmentos de la sociedad civil que no pertenecen a estos dos núcleos organizativos. Al respecto, Gramsci nos hace repensar lo organizativo, al mencionar “que en una determinada sociedad nadie está desorganizado y sin partido, siempre que se entiendan organizaciones y partidos en sentido amplio y no formal” (Gramsci, C. 6, § 136, 1984, p. 104). A pesar de la dificultad de circunscribir y demarcar claramente estos segmentos organizados en sentido amplio, son una pieza clave, puesto que representan masas con diferentes grados de subalternización o distanciamiento político en la configuración hegemónica de Guatemala.

Ante un imperante escenario de desigualdad, el pequeño estrato de clase media se vuelve el segmento principal para la recepción y reproducción de las ideologías y esquemas cognitivos dominantes. Afligido por la preocupación de un descenso social, este grupo social compite ferozmente para aprovechar las pocas oportunidades en la economía formal que ofrece un modelo jerárquicamente determinado y mediado en todas sus dimensiones por la corrupción. Los segmentos populares y comunitarios, por otro lado, son los sectores que más sufren por la ausencia de un “poder infraestructural del Estado” (Mann, 1986). Dejados a su suerte en el marco de una estructura económica dominada por estrategias rentistas y la exportación primaria, las posibilidades de estructurar su sobrevivencia en la economía formal resultan sumamente limitadas.

A estos segmentos populares les toca sostenerse en el ámbito de la economía informal, donde se mantiene cerca del 70% de la población ocupada (PNUD, 2020). Podemos señalar dos consecuencias de esta constelación: por un lado, ante el desamparo de las instituciones estatales, se refuerza una búsqueda autónoma de soluciones y formas de afrontar las dificultades socioeconómicas. Esto refuerza y revela una fuerte capacidad autoorganizativa entre los segmentos barriales y comunitarios marginalizados que estructuran su sobrevivencia en condiciones de alta precariedad y vulnerabilidad. Por otro lado, induce una manera particular de “estar en sociedad” independientemente y con una profunda desconfianza hacia la institucionalidad estatal, lo cual se debe a la debilidad en la operatividad pública del Estado. A pesar de cierta potencialidad inherente a esta gestión autónoma de la sobrevivencia, al sostenerse en el tiempo debilita el proceso de exigir derechos y responsabilidades a la institucionalidad estatal. Esta tendencia es profundizada por la persistente irradiación de discursos que arremeten contra concepciones de lo público, enfatizan la auto-responsabilidad por fracasos y profundizan el sentido de competitividad en una sociedad civil caracterizada por formas de subsunción excluyente.

Cierto caudal electoral fue compensado con roles para administrar proyectos, asistencia a través de programas sociales, así como plazas en las ramas institucionales para familiares y amigos (Saenz de Tejada, 2015). Ante la ausencia de garantías, la incipiente cultura de exigir derechos fue desplazada por una disposición clientelar, mientras la

suerte de amplios segmentos de la población pasó a depender de los favores de operadores delegados por los grupos de poder. Considerando el rol central que los grupos dominantes jugaron históricamente en impulsar la violencia como recurso de poder, parece contradictorio que el tema de la inseguridad estimule apoyo para las propuestas del bloque dominante. Sin embargo, al ignorar los mecanismos complejos de transmisión de la violencia, así como su relación con la desigualdad, las propuestas reaccionarias de los sectores conservadores y militares se convirtieron en las interpretaciones que más resonaron entre los sectores afectados por la criminalidad y violencia. La línea roja en la cobertura mediática no solo reforzó emociones de injusticia y venganza, sino que además consolidó predisposiciones autoritarias entre la población. Peticiones de mano dura, linchamientos, ejecuciones extrajudiciales y comités de vigilancia fueron algunos elementos que expresaron esta movilización a partir del miedo y en nombre de la seguridad que ha sido instrumentalizada políticamente por los sectores conservadores.

De este modo, una amalgama de factores que van desde las extremas dificultades socioeconómicas, las dinámicas de seguridad, el impacto del cambio climático y la consolidación de un corredor seco en el oriente del país hasta la cooptación de las mediaciones, instigaron un sentimiento de profunda crisis en el terreno de la sociedad civil, siendo la migración uno de los síntomas, donde anualmente Estados Unidos –principal país receptor de la migración– deporta alrededor de 40 mil personas (AP, 2023).

Si en momentos previos la migración fue una decisión tomada con cierto grado de libertad y con una perspectiva de inversión familiar, ahora las decisiones de abandonar el país parecen estar impulsadas por una profunda pérdida de horizontes de posibilidad que se deja ver especialmente entre las generaciones jóvenes. De nuevo se revelan las capacidades autoorganizativas tan arraigadas en la sociedad civil para emprender trayectorias que a la vez implica enormes riesgos para las personas y familias involucradas. Al respecto, es importante destacar cómo el fenómeno de la migración tiene implicaciones importantes para la reproducción socioeconómica de la sociedad en su conjunto. Las remesas llegan a representar el 19% del PIB y la principal fuente de sustento para grandes partes de la población. Tan solo en el 2022 las remesas sumaron un total de 18 mil 40 millones de dólares, superando el valor de las exportaciones que fue de 13 mil 200 millones de dólares (AP, 2023), de ahí que las remesas establezcan un circuito económico que permite a gran parte de la sociedad subsistir en paralelo y al margen de las excluyentes estrategias de acumulación de las élites. De este modo, representa una dinámica de expulsión que, sin embargo, no agudiza las contradicciones al interior de la sociedad.

En el caso guatemalteco, son evidentes las pautas de marginalización, subalternización y los obstáculos a la participación en los canales formales que son promovidos por los grupos dominantes. Como consecuencia, se constituyen amplios segmentos sociales que desde una posición de exclusión política, social y económica siguen representando una pieza clave en la reproducción de una hegemonía excluyente a partir de una posición de pasividad política y receptividad para los marcos ideológicos dominantes. A la vez, pretendemos mostrar en el apartado siguiente que para reproducir esta configuración hegemónica y superar momentos de crisis, la cooptación de las mediaciones representa la dimensión que complementa la reproducción de esta estructura de poder.

LA COOPTACIÓN DE LAS MEDIACIONES COMO ESTRATEGIA HEGEMÓNICA

La transición desde arriba y la actualización de la forma aparente del Estado

Al interno de la configuración hegemónica se encuentra un sistema de mediaciones entre Estado y sociedad civil. Representan elementos claves para determinar el grado de estabilidad hegemónica y para condicionar la orientación general del Estado. Su control permite a la clase dominante aparecer ante el resto de la sociedad como el poder general de la sociedad. Por ello, en el caso de Guatemala, ante la gradual deslegitimación internacional de un autoritarismo crudo y abiertamente coercitivo, las clases dominantes dieron paso en 1980 a la transición hacia un régimen formalmente democrático sin ceder el control sobre las mediaciones y a partir de ello, sobre la operatividad institucional. De este modo, la transición puede ser vista como un ajuste estratégico de la perspectiva contrainsurgente (Torres-Rivas, 2006). Esto, bajo la mirada y el asesoramiento de Estados Unidos, donde las autoridades militares seguían manteniendo un control estrecho sobre las autoridades civiles e intervinieron de manera sucesiva para evitar cualquier ampliación indeseada del pluralismo democrático.

A pesar del surgimiento de una ola de partidos para las elecciones parlamentarias de 1985, las expresiones conservadoras y esencialmente antidemocráticas dominaban el espectro de opciones políticas, mientras la prohibición de expresiones vinculadas a las fuerzas insurgentes se mantuvo durante las primeras rondas electorales.

Mientras la ausencia de vínculos significativos con la sociedad caracterizó a las primeras organizaciones políticas, una serie de ajustes legislativos reforzaron la fragilidad organizativa y un déficit en vitalidad democrática. Entre ellas destacó la ausencia de financiamiento público para los partidos, lo cual desde un principio abrió la puerta hacia la influencia y el condicionamiento privado (Castillo, 2008). Las clases económicas dominantes representaban la única facción societal capaz de movilizar los recursos necesarios y procedió a imponer los límites operacionales y determinar las jerarquías internas de las organizaciones políticas.

Además, en el marco de las reformas constitucionales de 1985, las élites económicas tradicionales lograron implementar una serie de salvaguardas para controlar la rama judicial del Estado y blindarse ante cualquier asalto a sus intereses. Por ejemplo, en la legislación fiscal las fuerzas políticas acordaron un candado para calmar las preocupaciones de los grupos oligárquicos sobre un eventual aumento de impuestos. La Corte de Constitucionalidad, mecanismo integrado a partir de las reformas constitucionales, se convirtió en la plataforma para contestar cualquier intento de poner en peligro los privilegios fiscales (Jonas, 1991; Schneider, 2014). A partir del mecanismo de las comisiones de postulación, los grupos dominantes quedaron confiados de poder controlar los mecanismos de designación de los magistrados, a la vez que socavaron la posibilidad de construcción de mecanismos orientados a una redistribución del excedente y la construcción de un poder con carácter público (Escobar, 2019).

Ante una sociedad civil dividida y debilitada por décadas de represión contrainsurgente, las élites económicas avanzaron en la promoción de su visión del país a partir de

la cooptación de las mediaciones políticas e institucionales. Como menciona Urrutia (2012, pp. 323-324), estos sectores vieron las primeras competencias electorales del periodo transicional como una manera de medir la habilidad de imponer sus objetivos en la sociedad en un medio y largo plazo bajo un régimen democrático formal. Este control sobre las principales mediaciones por parte del bloque dominante también dio impulso al surgimiento de una clase política particular. Impregnado por décadas de autoritarismo, los representantes políticos emergieron como operadores para intereses vinculados a las principales facciones militares y económicas.

Como veremos en el siguiente apartado, en casos donde grupos políticos o gobiernos amenazaron con aumentar sus grados de autonomía, las élites económicas tradicionales recurrieron a otras tácticas ancladas en su capacidad de movilizar segmentos afines entre la sociedad para condicionar sus márgenes de operación. Por otro lado, el episodio alrededor del autogolpe de Serrano Elias, en 1993, reveló cómo las élites económicas fueron capaces de dividir su apoyo entre diferentes partidos solo para reagruparse con una versatilidad cínica en coyunturas claves. Además, las asociaciones empresariales se volvieron plataformas claves para oficiales estatales y operadores políticos. Salarios oficiales para representantes fueron complementados de manera privada, que operaron en posiciones ejecutivas durante sucesivos gobiernos con un mandato de vetar cualquier asalto a sus intereses corporativos (Gutiérrez, 2013). A partir de esta combinación de ajustes estratégicos en coyunturas claves y la cooptación de las mediaciones y espacios institucionales, los grupos dominantes no solo tomaron control de la ola de privatizaciones de los años noventa. También condicionaron de antemano las posibilidades de las negociaciones de paz y consolidaron sus intereses en el centro de la sociedad posconflicto.

Contexto de la paz: concentración de poder y hegemonía débil

Ante las presiones internacionales para poner fin al conflicto armado, se reconfiguraron las relaciones al interno del bloque dominante, lo que provocó la reconfiguración estatal en Guatemala.¹² Para la mayoría de las élites económicas tradicionales, las oportunidades monetarias de la paz, en combinación con la confianza de poder controlar las mediaciones estatales democráticas, presentaron incentivos claves para respaldar las negociaciones de paz. A la vez, fueron disolviendo su alianza con la institución castrense y se presentaron como los actores idóneos para guiar al país hacia la paz.

Por otro lado, el contexto de las negociaciones de paz coincidió con la preeminencia global del pensamiento neoliberal, cuyas recetas de liberalización y privatización resonaron entre las clases dominantes. Una nueva generación de empresarios surgió entre las filas de las familias oligárquicas para apoyar entusiastamente estas iniciativas. Sin comprometerse con medidas que abordaran las persistentes contradicciones sociales y

¹² Al respecto, un debate que se suscitó a partir de estos reacomodos y reconfiguraciones giró en torno al acceso de una ciudadanía que se caracteriza por ser restringida, donde a pesar de los esfuerzos de importantes segmentos de la sociedad civil, predominaron los intereses de la finca cafetalera, la milicia, sectores de iglesias cristianas y protestantes, al grado que en la actualidad la ciudadanía es para unos cuantos y los espacios de diálogo y participación –sobre todo formales– tienen importantes restricciones.

económicas, impulsaron la expansión del mercado en ámbitos como la problemática agraria, la firma de tratados de libre comercio, así como la privatización de servicios públicos. En línea con las presuposiciones históricas, mantuvieron que la sociedad de posguerra y las políticas estatales deberían estar alineadas con sus requerimientos y estrategias de acumulación. Estas dinámicas debilitaron la profundidad del momento constitutivo que hubiera podido representar el contexto de la paz. Desde la victoria del “no” en el referéndum sobre las reformas constitucionales planteadas en los Acuerdos de Paz en 1999, la articulación hegemónica con la sociedad se construyó no tanto alrededor de un proyecto político, sino a partir de la seducción consumista y la propagación de un marco cultural basado en una mezcla de premisas racistas y aspiraciones individualizantes que encubrieron los procesos de subsunción excluyente de amplios segmentos de la sociedad.

Mientras las expresiones de izquierda nunca recuperaron una capacidad de articulación con la sociedad y de influencia sobre la orientación estatal de posguerra, la liberalización y transnacionalización de la economía que marcaron los años noventa abrieron una serie de nuevas oportunidades económicas y el empoderamiento de segmentos de la sociedad vinculadas a ellas. Las telecomunicaciones, la constitución de empresas subsidiarias en el campo de la energía, el petróleo y la minería, las maquilas, así como la agroindustria enfocada en productos no tradicionales que actuaron como plataforma para el surgimiento de nuevos actores económico-políticos. Cabe mencionar que, a pesar de un incremento en la inversión directa extranjera y crecientes alianzas entre corporaciones multinacionales para acceder a tecnología, productos y marcas, las élites guatemaltecas representan el grupo con menos vínculos económicos transnacionales en la región (Bull *et al.* 2014, p. 61). La preocupación de los sectores oligárquicos por ser subsumidos a la competencia del capital transnacional motivó la actualización de una cultura política autoritaria para determinar sin mediación a las operaciones estatales al subsumirlas a un campo de interacciones entre élites. En estos intentos del capital nacional de competir y ponerle límites a la competencia transnacional, la capacidad de controlar las funciones institucionales y gobiernos representa una matriz clave para salvaguardar privilegios y oportunidades de negocio. Como consecuencia, a finales de los noventa se consolidó la competencia entre el capital nacional tradicional y el capital emergente por cooptar el marco institucional en el centro del campo de la política formal, mientras en las articulaciones con la sociedad predominaron formas de integración vertical y clientelar en las estructuras políticas.

En este contexto, un segmento de oficiales públicos e integrantes de la clase política con hábitos poco democráticos adquirieron centralidad como operadores de los diferentes segmentos de las clases dominantes. Esto se plasmó en un efecto multiplicador en las transacciones corruptas, donde la asignación discrecional de contratos de negocios, el pago de sobornos, esquemas de lavado de dinero y la determinación informal de procesos formales de toma de decisiones se consolidó como el *modus operandi*. Es decir, las facciones políticas tendieron a alinear sus prácticas con las reglas que estructuraban a su vez las relaciones de la sociedad política durante las décadas del autoritarismo.

A pesar de que la institución castrense se ubicó entre los perdedores de las negociaciones de paz debido a su desprestigio y vinculación a las graves violaciones a los derechos humanos, redes específicas del ejército vinculados a oficiales de inteligencia mantuvieron

importantes grados de influencia en el orden posconflicto (Schirmer, 1998, 178-185; Peacock y Beltrán, 2003, pp. 13-50). Basado en un conocimiento detallado de la operatividad del Estado, estos oficiales se reinventaron a partir de sus relaciones con los grupos económicos emergentes, como parte de la clase política y con la incursión en campos de corte económicos con alto potencial de acumulación asociados a las actividades de tráfico ilegal. Basado en estas alianzas, empezaron a ejercer una influencia crucial sobre la competencia por la determinación de posiciones y decisiones institucionales. Además, a partir de sus alianzas y su conocimiento sobre la operatividad de las esferas más oscuras de las instituciones, jugaron un rol decisivo en la consolidación de actores criminales en las esferas más altas del aparato institucional.

La gradual criminalización del Estado político: empoderamiento de la clase política y facciones criminales

En el contexto posconflicto, la disputa por la hegemonía llegó a estar arraigada firmemente en el campo de las élites. Del mismo modo, el principal conflicto político no se dio en la disputa entre diferentes proyectos políticos y sociales, sino que derivó de la competencia entre diferentes redes sobre el acceso a rentas y opciones de acumulación. Una serie de cambios empezaron a poner en peligro la capacidad de las facciones tradicionales para determinar la orientación estatal y sin traducirse en un quiebre ideológico, la línea del antagonismo en el panorama de la política formal y la competencia alrededor de la cooptación de las mediaciones se consolidó entre un bloque de élites tradicionales y facciones emergentes de élites políticas y económicas (Sáenz de Tejada, 2015, pp. 96-97).

Una serie de factores contribuyó a un gradual cambio en las relaciones de fuerza. Por un lado, la importancia de la clase política y de los actores institucionales para mediar el acceso a procesos de toma de decisiones sobre políticas, leyes y rentas se incrementó. Actuando como operadores de las élites emergentes, aprovecharon sus oportunidades para acceder a rentas y usaron sus márgenes de autonomía operacional para favorecer facciones afuera de los sectores tradicionales vinculados al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).

Algunos cambios constitucionales incrementaron los presupuestos municipales y promovieron una descentralización de la contratación pública, inflando rápidamente los presupuestos locales. Estos fondos constituyeron una plataforma clave para actores regionales para acceder a contratos, lavar los procedimientos de las actividades de tráfico e invertir en los candidatos políticos regionales. Al enlazar diferentes escalas geográficas, caciques locales y congresistas regionales consolidaron redes ilícitas tanto políticas como económicas, y facilitaron el flujo de información y capital entre grupos poderosos regionales y operadores políticos centrales.

De este modo, la etiqueta tradicional y emergente empezó a representar puntos de referencia para grupos que compitieron por rentas y posiciones en el campo de las élites que rodeaban los procesos y mecanismos institucionales. Los partidos políticos, los canales formales de mediación entre Estado y sociedad, se convirtieron en vehículos puramente electorales, caracterizados por un constante cambio de identidades políticas y lealtades, así como una relación clientelista de corto-plazo con el electorado. Para el

2010, 35 de los 50 partidos que habían participado en las diferentes contiendas electorales habían desaparecido en el “cementerio de los partidos políticos” (Torres-Rivas y Cuesta, 2007, p. 106) después de una sola participación. En el contexto de la fragilidad de las organizaciones políticas, la competencia para determinar los procesos políticos quedó firmemente arraigada entre los grupos sociales dominantes. Sin limitar su apoyo a una organización política, diferentes facciones compitieron para ubicar sus agentes en posiciones claves del Congreso y de los gobiernos.

En paralelo al incremento de la influencia de las élites económicas y políticas emergentes, iban creciendo sus inversiones en el sistema político. De acuerdo con un reporte de la CICIG en 2015, solo el 25 por ciento del financiamiento deriva de las facciones tradicionales de élites. Contratistas de estado, por otro lado, contribuyeron el 50 por ciento de los fondos, mientras el crimen organizado agregó un 25 por ciento a los presupuestos partidarios. Al igual como para los grupos económicos tradicionales, las redes vinculadas a estrategias ilícitas de acumulación identificaron el acceso al Estado y sus mecanismos como cruciales para diversificar sus emprendimientos y controlar las operaciones institucionales claves.

En este escenario, los partidos políticos fueron desviados de su rol de mediar las relaciones entre Estado y sociedad y, en su lugar, los intereses en juego alrededor de la determinación estatal estuvieron arraigados de manera casi exclusiva en las redes de las diferentes facciones dominantes. Bajo la apariencia de una democracia, el conjunto de reglas formales e informales se actualizó y retroalimentó, una forma particular de hacer política que continúa reflejando la tradición autoritaria de los grupos dominantes. Las estrategias corruptas se incrustaron como una pauta rutinaria y cotidiana que sirvió como plataforma para acceder a posiciones, obtener contratos públicos, comprar votos para elecciones, apropiarse de fondos públicos, crear redes clientelistas y garantizar paso libre a actividades de tráfico y servicios ilícitos.

La resiliencia de este pacto exclusivo que reguló la competencia entre diferentes facciones fue puesto a prueba después de la crisis de 2015 con los intentos de la CICIG de imputar integrantes del CACIF por financiamiento electoral ilícito. Sin embargo, las diferentes facciones emergentes y tradicionales cerraron fila para proporcionar el gobierno con suficiente apoyo para expulsar al comisionado Iván Velázquez y revocar su mandato de la CICIG. Las manifestaciones del 2015 y el contexto posterior mostraron cómo ante la débil capacidad de los sectores movilizados y los segmentos progresistas de articular una alternativa que cuestione los términos subyacentes a la hegemonía, las clases dominantes fueron capaces de deshacerse de un elemento que estaba poniendo en peligro su capacidad de definir la dirección del Estado y la distribución del excedente, apoyándose en el control de la red de mediaciones institucionales. A pesar de la competencia feroz entre diferentes grupos, se repite una forma de superar momentos de crisis al acordar consensos coyunturales e impulsar una salida o solución aparente desde el interior de las facciones dominantes. Mediante el aprovechamiento de la cooptación de las mediaciones legislativas, jurídicas, partidistas e institucionales, se logró mantener a flote la hegemonía.

CONCLUSIONES

Este capítulo tuvo el objetivo de analizar la relación entre la forma estatal guatemalteca y la crisis. La crisis y las movilizaciones del 2015 representaron un punto de entrada para estudiar la capacidad de facciones de élites de darle continuidad a su posición hegemónica, al darle salida a estos momentos de crisis coyuntural desde el interior de sus facciones. Esto implica analizar y dar cuenta de la configuración hegemónica, que a pesar de ser propensa a la crisis, sigue persistente en su estructura de poder. Para ello, iniciamos con la identificación de tres variables sociohistóricas con poder explicativo importante para comprender la particularidad de la forma estatal guatemalteca. La raíz oligárquica engendrada por la forma finquera y la ausencia de un giro o cuestionamiento burgués entre las clases dominantes conlleva un determinado *ethos* que se plasma en formas excluyentes y autoritarias de ejercicio de poder. Por otro lado, el carácter abigarrado de la sociedad civil conlleva potencialidades en términos de las capacidades auto-organizativas y autónomas de las comunidades y pueblos. Sin embargo, también dificulta la articulación de alternativas que contesten la hegemonía vigente cuando se enfrentan a un núcleo de clases dominantes con altas capacidades organizativas. Además, la persistencia duradera del militarismo y de la violencia como mecanismo de mediación no solo acompañó el ejercicio de poder. También se inscribió una receptividad y pautas autoritarias entre amplios segmentos de la sociedad.

Amparándonos en la teorización del Estado integral de Gramsci, la cartografía del terreno de la sociedad civil fue clave para descifrar las fuerzas y movimientos que reproducen o cuestionan la estructura de poder. Entre las principales tendencias destacamos un tejido organizativo progresista dinámico, pero también caracterizado por procesos desarticulados, competencia interna y desradicalización que dificultan una articulación de alternativas y alianzas más amplias entre los sectores indígenas y populares. Por otro lado, se revela un bloque conservador marcado internamente por diferentes aristas y relaciones de competencia que, sin embargo, sostiene una alta capacidad operativa para encontrar consensos en coyunturas claves para cerrar filas como clase. Además, revelan capacidades y recursos para ampliar, aunque sea coyunturalmente, afinidades entre la sociedad civil. Hay un tercer segmento de la sociedad civil que se encuentra alejado del núcleo de estas dos tendencias organizativas mencionadas, pero que puede ser sintetizado a partir de determinadas características que marcan sus prácticas. Formas de subalternización coyuntural o clientelar, grados de pasividad impulsados por autoritarismo e ideologías consumistas o la ausencia de perspectivas políticas desde una posición socioeconómicamente marginalizada, se complementan y tienen como efecto facilitar la reproducción hegemónica de los grupos de poder.

Sin embargo, la capacidad de irradiación y movilización coyuntural en el terreno de la sociedad civil por sí sola es incapaz de explicar la reproducción hegemónica y la capacidad de superación de momentos de crisis por parte de las clases dominantes. Por lo cual, fue necesario adentrarnos en la cooptación del sistema de mediaciones entre sociedad civil y Estado. Es a partir de ellos que los grupos dominantes a pesar de divergencias y una competencia interna férrea, son capaces de controlar con nociones instrumentalistas a las articulaciones que surgen desde la sociedad civil, así como darle una orientación general

al Estado. De este modo, se configura una compleja dinámica de cooptación de las mediaciones políticas e institucionales que permiten la reproducción de una estructura de poder. Esta, a pesar de ser propensa a crisis de hegemonía, se caracteriza por la capacidad de darle salida a estas crisis desde el mismo plano de los grupos de poder en cuyo núcleo participan de manera sistemática intereses del narcotráfico y del crimen organizado.

Con eso revelamos los elementos subyacentes a uno de los retos más importantes del caso guatemalteco. A pesar de periódicos momentos de crisis -principalmente de hegemonía y autoridad-, no ha sido posible tejer desde las clases y grupos étnicos las alianzas ni un proyecto político nacional que se proponga reorientar la dirección de la forma estatal de su trayectoria excluyente y privatizada, y, por ende, que los momentos de crisis coyunturales se vuelvan en momentos orgánicos donde se desplieguen las fuerzas sociales y se susciten cismas y cambios en la estructura, lo que sin duda alteraría tanto la configuración hegemónica como el carácter aparente del Estado.

REFERENCIAS

- ACANDA González, Jorge L. (2009). *Traducir a Gramsci*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.
- AP (2023). “Recibe Guatemala cifra récord de remesas en 2022”. *La Jornada*. <https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/07/economia/recibe-guatemala-cifra-record-de-remesas-en-2022/>.
- ARZÚ, Marta Elena (2007). *Guatemala: Linaje y racismo*. Guatemala: F&G Editores.
- CASTILLO, Cristian (2008). “Entendiendo la real fortaleza partidaria: El concepto de redes de inclusión”. En Ortiz Loaiza, Paola (Ed.) *Partidos políticos en Guatemala: entre institucionalidad y pragmatismo político* (pp. 157-197). Ciudad de Guatemala: FLACSO.
- BASTOS, Santiago (2010). “La política maya en la Guatemala posconflicto”. En Bastos, Santiago y Brett, Roddy (Eds.) *El Movimiento Maya en la década después de la paz (1997- 2007)* (pp. 3-54). Guatemala: F&G Editores.
- BASTOS, Santiago y Camus, Manuela (2003). *Entre el mecapan y el cielo, desarrollo del movimiento maya en Guatemala*. Guatemala: FLACSO/Cholsamaj.
- BENÍTEZ Jiménez, Maira Ixchel (2022). Contramovilización y *backlash* frente a la justicia penal en la Guatemala de posguerra. En Robledo Silvestre, Carolina, Guglielmucci, Ana y Vera, Juan Pablo (Coords.) *Luego. Todavía no. Justicia, democracia y transición en América Latina*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- BIEKART, Kees (1999). *The Politics of Civil Society Building: European Private Aid Agencies and Democratic Transitions in Central America*. Amsterdam: Utrecht International Books and the Transnational Institute.
- BRETT, Roddy (2006). *Movimiento social, etnicidad y democratización en Guatemala, 1985-1996*. Guatemala: F&G Editores.
- BRUNNER, Markus *et al.* (1993). *Projekt Guatemala. Vorder- und Hintergründe der österreichischen Wahrnehmung eines zentralamerikanischen Landes*. Frankfurt A. M.: Brandes & Apsel.

- COJTI, Demetrio (2010). “La educación superior indígena y su relación con el movimiento y el liderazgo indígena”. En Bastos, Santiago y Brett, Roddy (Eds.): *El Movimiento Maya en la década después de la paz (1997-2007)* (pp. 93-133). Guatemala: F&G Editores.
- ESCOBAR, Carolina (2019). “How Organized Crime Controls Guatemala’s Judiciary”. En Rotberg, Robert I. (Ed.), *Corruption in Latin America. How Politicians and Corporations Steal from Citizens*, (pp. 235-263). Lexington: Springer.
- FONSECA, Marco (2015). “#Renuncia Ya ¿Y después?”, en *IPNUSAC Revista Análisis de la Realidad Nacional*, 4 (13), pp. 182-193.
- GONZÁLEZ, Magda Leticia (2011). “Guatemala: La infinita historia de las resistencias más allá de la montaña: la región Ixil”. En: Vela, Manolo E. Castañeda (Coord.) *Guatemala, la infinita historia de las resistencias* (pp. 163-227). Guatemala: Magna Terra Editores.
- GRAMSCI, Antonio (1999). *Cuadernos de la cárcel*, tomo 5. México: Era/BUAP.
- GRANDIN, Greg (2007). *Panzós, la última masacre colonial*. Guatemala: Avancso.
- GRANOVSKY-LARSEN, Simon (2014). “The Guatemalan Campesino Movement under Neoliberal Peace”. En *Latin American Perspectives*, 20(30), pp. 1-21.
- GUTIÉRREZ, Edgar (2013). “La estructura del Estado corrupto”. En *IPNUSAC: Revista Análisis de La Realidad Nacional*, 2(34), pp. 11-19.
- HOWELL, Jude y Pearce, Jenny (2001). “Civil Society Discourses and the Guatemalan Peace Process”. En Howell, Jude y Pearce, Jenny, *Civil Society and Development. A Critical Exploration* (pp. 147-176). Londres: Lyenne Rienner Publisher. Disponible en: <https://annualreport.undp.org/2020/assets/UNDP-Annual-Report-2020-es.pdf>.
- ICEFI (2007). *Historia de la tributación en Guatemala (Desde los Mayas hasta la actualidad)*. Guatemala: ICEFI. Disponible en: <http://icefi.org/historia-de-la-tributacion-en-guatemala-desde-los-mayas-hasta-la-actualidad/>.
- ILLMER, Patrick (2018). “The defence of territory and local struggle for more democracy in post-war Guatemala”. En *Democratization*, Vol. 25, Núm. 5, pp. 771-786.
- ILLMER, Patrick (2021). Descifrando el núcleo de las formaciones aparentes y abigarradas: la constitución oligárquica del poder. En Oliver Costilla, Lucio (Coord.), *Problemas teóricos del Estado Integral en América Latina. Fuerzas en tensión y crisis* (pp. 137-149). UNAM: Ciudad de México.
- ILLMER, Patrick (2022). “Un acercamiento integral a la forma estatal guatemalteca: descifrando la continuidad hegemónica de las élites”. En *Espiral* 29 (85), pp. 83-117.
- JONAS, Susanne (1991). *Of Centaurs and Doves. Guatemala’s Peace Process*. Oxford: Westview Press.
- LE Bot, Yvonne (1995). *La Guerra en tierras mayas. Comunidad, violencia y modernidad en Guatemala (1970-1992)*. México: Fondo de Cultura Económica.
- LECHNER, Norbert (2012). “La crisis del Estado en América Latina”. En Semo, Ilán, Valdés Ugalde, Francisco y Gutiérrez, Paulina (Eds.), *Obras. Estado y derecho (1970-1980)*: Vol. I (pp. 353-455). FLACSO/Fondo de Cultura Económica.
- LEVENSON, Deborah T. (2013). “What happened to the revolution? Guatemala City’s Maras from Life to Death”. En McAllister, Carlota (Ed.), *War by other means:*

- Afermath in Post-Genocide Guatemala* (pp. 195-217). Durham y Londres: Duke University Press.
- LÓPEZ, Mariana (2015). “Comunidades ixiles y Estado en Guatemala: entre la lucha y el despojo”. En Rosales, Marcela y Zenayda Garay, Reyna (Coord.) *La espacialidad crítica en el pensamiento político-social latinoamericano. Nuevas gramáticas de poder, territorialidades en tensión*, CLACSO.
- LÓPEZ, Mariana (2019). “Tejer lo común frente a las violencias: saberes y praxis de mujeres en Guatemala”. En el dossier *Géneros y violencia. Pasado y presente*, Núm. 31 de la revista *Sémata* de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. Disponible en: <http://www.usc.es/revistas/index.php/semata/article/view/5990>.
- MACLEOD, Morna (2013). “Pueblos indígenas y revolución: Los (Des)encuentros entre indianistas y clasistas”. En Álvarez Aragón, Virgilio *et al.* (Eds.) *Guatemala: Historia reciente (1954-1996)*. Tomo III, Pueblos Indígenas, Actores políticos. Guatemala: FLACSO, pp. 25-58.
- MANN, Michael (1986). *The Sources of Social Power*, Vol. I. Cambridge: Cambridge University Press.
- MARTÍNEZ Peláez, Severo (1994). *La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca*. México: Ediciones en Marcha.
- PEACOCK, S. C. y Beltrán, A. (2003). *Hidden Powers in post-conflict Guatemala. Illegal armed groups and the forces behind them*. Washington: WOLA.
- PNUD (2020). *Informe Anual 2020*, Disponible en: <https://annualreport.undp.org/2020/es/>.
- QUIJANO, Anibal (2000). *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- SÁENZ de Tejada, Ricardo (2015). Las redes político-económicas ilícitas, en *Revista Análisis de la Realidad Nacional*, 82, pp. 14-32.
- SCHIRMER, Jenny (1998). *The Guatemalan Military Project. A Violence called Democracy*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- SCHNEIDER, Aaron (2014). *Construcción del Estado y regímenes fiscales en Centroamérica*. F&G Editores.
- TARACENA Arriola, Arturo; Gellert, Guisela; Gordillo Castillo, Enrique; Sagastume Paiz, Tania y Walter, Knut (2002). *Etnicidad, Estado y nación en Guatemala, 1808-1944*. Vol. I. Guatemala: Cirma.
- TARACENA Arriola, Arturo *et al.* (2004). *Etnicidad, Estado y nación en Guatemala, 1944-1985*. Volumen II. Guatemala Cirma.
- TISCHLER, Sergio (2001). *Guatemala, 1944: Crisis y revolución. Ocaso y quiebre de una forma estatal*. Guatemala: F&G Editores.
- TORRES Rivas, Edelberto (1975). “Síntesis histórica del proceso político”. En Torres Rivas *et al.* (Eds.). *Centroamérica hoy* (pp. 9-118). México: Siglo XXI Editores.
- TORRES-RIVAS, Edelberto (2006). “Guatemala: desarrollo, democracia y los acuerdos de paz”. En: *Encuentros*. Guatemala: FLACSO. Disponible en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2658175>.

- TORRES-RIVAS, Edelberto y Cuesta, Pilar (2007). *Notas sobre la democracia y el poder local*. Guatemala: PNUD.
- TORRES-RIVAS, Edelberto (2011). *Revoluciones sin cambios revolucionarios*. Guatemala: F&G Editores.
- TZUL, Gladys (2019). “La forma comunal de la resistencia”. En *Abya Yala Dossier*. México: UNAM. Disponible en <https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/7a052353-5edf-45fe-a7ab-72c6121665b4/la-forma-comunal-de-la-resistencia>.
- URRUTIA, Edmundo (2012). “Medio siglo de historia: los partidos políticos en Guatemala, 1954-2000”. En Álvarez Aragón, Virgilio *et al.* (Eds.) *Guatemala: historia reciente (1954-1996)*. Tomo I. Proceso político y antagonismo social (pp. 263-363). Ciudad de Guatemala: FLACSO.
- VALDÉZ, Fernando J. (2015). *El Gobierno de las Élités Globales. Cómo se organiza el Consentimiento*. Guatemala: Cara Parens.
- VÉLIZ, Rodrigo (2016). “¿Esto apenas empieza? Las raíces de la crisis política guatemalteca”. En Solís Miranda, Regina (Coord.) *La fuerza de las Plazas. Bitácora de la indignación ciudadana en 2015*, pp. 155-199.
- VILLA, Aneli (2019). “Memorias de esperanza. Las luchas de las mujeres en la guerra contrainsurgente de Guatemala”. México: Tesis grado UNAM.
- WARREN, Kate B. (1998). *Indigenous Movements and Their Critics: Pan-Maya Activism in Guatemala*. Princeton: Princeton University Press.
- ZAVALETA, René (2009a). “Cuatro conceptos de democracia”. En Tapia, Luis (Comp.), *La autodeterminación de las masas / René Zavaleta*, Antología. Bogotá: CLACSO / Los amigos del hombre.
- ZAVALETA, René (2009b). “Notas sobre la cuestión nacional en América Latina”. En Tapia, Luis (Comp.), *La autodeterminación de las masas / René Zavaleta*, Antología. Bogotá: CLACSO / Los amigos del hombre.
- ZAVALETA, René (2015). “Las masas en noviembre”. En Tapia, Luis (Comp.), *La autodeterminación de las masas / René Zavaleta*, Antología. México: Siglo XXI.

BOLIVIA: CAUSAS DE LA CRISIS Y DE LA POLARIZACIÓN POLÍTICA

HUÁSCAR SALAZAR LOHMAN

INTRODUCCIÓN

Cuando empezaba el siglo XXI, las múltiples luchas sociales generaron un gran remezón de los pilares sobre los que se sostenía no solo el campante modelo neoliberal y su deriva política, sino también un conjunto de clivajes históricos de las estructuras de dominación boliviana y cuya raigambre tiene una profundidad de siglos de colonización y expoliación. Con todos los problemas, contradicciones y limitaciones, estas luchas retomaron, actualizaron, prefiguraron y –en muchos casos– operativizaron desde las calles un conjunto de horizontes deseables para *transformar* el *estado de las cosas existentes* en aquel momento. Desde lo más básico: el resguardo de un bien común como el agua, hasta la exigencia de transformar el régimen político administrativo del país, incorporando criterios diversos para que *los* pueblos ejerzan soberanía política y económica sobre sus territorios, pasando por muchas otras agendas que eran consideradas como indispensables para trastocar diversas derivas de las relaciones de injusticia y desigualdad en Bolivia.

Ese momento de creatividad social, que tuvo la capacidad de agrietar desde *abajo* el devenir de la historia boliviana, solo fue posible como resultado de un largo proceso de impugnación y significación de las múltiples maneras en que la dominación boliviana se hacía presente en aquel entonces. Fue un tiempo social de crítica profunda, en el que varias –aunque nunca todas– las *credulidades*¹ que sostenían dicha dominación fueron interpeladas. Además, la crítica no era única ni principalmente aquella que emanaba de los espacios intelectuales –aunque la misma tuvo una gran relevancia–, en realidad, era una *crítica radical* que tomaba forma en el día a día de las organizaciones de una sociedad con una reconocida trayectoria de (auto)organización en torno a haceres colectivos para la reproducción de la vida y de múltiples luchas en torno a dichos haceres.

Han pasado más de veinte años desde la Guerra del Agua y poco más de quince desde que el Movimiento Al Socialismo (MAS) llegase a ser gobierno nacional. El ciclo rebelde popular se fue clausurando entre los años 2008 y 2009, cuando la energía transformadora habría de quedar capturada en la retorcida y confusa dinámica estatal y en las disputas

¹ Marina Garcés (2017) señala que las credulidades son aquellas maneras de mirar o entender la realidad que se dan por sentado y que contribuyen a reafirmar procesos de dominación.

partidarias por el poder. La manera en que fue cerrada la Asamblea Constituyente marcó el corolario de ese proceso de transición desde el *abajo* hacia el *arriba*.

Posteriormente se abriría un largo ciclo de “estabilidad política” en la que confluyeron:

1. Un reacomodo de las clases dominantes y el capital transnacional, que terminarían pactando con la nueva burocracia estatal y el partido de gobierno;
2. Un debilitamiento de las estructuras comunitarias que otrora configuraron el escenario político rebelde;
3. Un incremento de los ingresos fiscales como consecuencia del momento favorable de los precios internacionales de las materias primas —que luego disminuiría, en los últimos años de la década pasada—;
4. Un proceso de descomposición del gobierno del MAS que se hundirá en una contradicción cada vez más abismal —y no muy *creativa*, por cierto— entre el discurso y los hechos; y
5. Un resurgimiento no solamente de una derecha política “tradicional”, sino también la actualización de sus imaginarios conservadores, clasistas, racistas y patriarcales.

Es así como la crisis política poselectoral de 2019 hizo aguas en un contexto ya de por sí difícil. Una sociedad polarizada *desde arriba* y desgarrada *desde abajo*, que se vio enfrentada a un escenario electoral ampliamente descompuesto en el marco de una desconfianza generalizada, resultado de varios años de ensañamiento por el poder, corrupción y cada vez mayores rasgos de autoritarismo, que incluso llevaron a desconocer la Constitución Política del Estado que el propio gobierno de turno había promulgado años antes.

Todo lo que pasó desde y luego de las elecciones del 20 de octubre de 2019 no puede quedar encasillado solo como un *fraude* ni tampoco como un *golpe de Estado*. Fue todo eso junto y mucho más... fue una afrenta directa y violenta de quienes detentaban el poder y que terminó afectando de distintas maneras —con consecuencias de corto y largo plazo— al conjunto de la población boliviana.

El objetivo de este documento no es hacer una narración de lo que pasó en octubre-noviembre de 2019 y, menos aún, tratar de reafirmar alguna de las narrativas hegemónicas que terminan por empobrecer la comprensión de la crisis política en la que se sumergió Bolivia luego de aquellas fatídicas elecciones presidenciales. Sin embargo, para profundizar en una lectura crítica de esta crisis no es necesario esperar a que todos los pormenores se conozcan a detalle, sino que es importante dar cuenta de *cómo se produjeron las condiciones para que una disputa por el control del gobierno derivase en una crisis política de tal envergadura y, en especial, en ese conjunto de hechos que terminaron violentando a gran parte de la población boliviana*. Es decir, comprender lo que tuvo que estar pasando al interior de la sociedad para que quienes ejercían el poder estatal o quienes lo detentaban tuvieran la capacidad/posibilidad de delinear y azuzar un escenario tan proclive para la manipulación y la generación de violencia política.

Para escudriñar en estas condiciones que derivaron en el desastre político —y sin ánimo de exhaustividad—, a continuación, se exploran dos dimensiones: la primera tiene que ver con la dinámica que permitió establecer un pacto del gobierno del MAS con las clases dominantes tradicionales del país para lograr gobernabilidad luego del proceso constituyente. Este pacto reconfiguró la política boliviana y desde el mismo se dio lugar

a un conjunto de fenómenos que, una década después, abrirían las puertas para un conflicto como el que se vivió en 2019.

La segunda cuestión que se explora tiene que ver con la manera en que se desarrolló el patrón de acumulación boliviano y la distribución del excedente social sobre la base de ese pacto que se estableció en los primeros años del gobierno MAS. Aunque si bien esta dimensión de análisis es principalmente económica, es fundamental porque nos permite comprender cuáles son las consecuencias de intentar generar un supuesto mejoramiento del bienestar social —o por lo menos una apariencia de ello—, dejando intactas o incluso apuntalando las estructuras de poder económico tradicional del país. El efecto de ello ha sido la reproducción de las clases dominantes tradicionales y la generación de un conjunto de contradicciones y procesos de descomposición al interior de la sociedad boliviana, y que son parte de las condiciones que hicieron posible el desastre político de 2019.

LOS PRIMEROS AÑOS DEL GOBIERNO DEL MAS: DE LA TRANSFORMACIÓN DESDE ABAJO A LA RAZÓN DE ESTADO

Las elecciones presidenciales de 2019 —y los días que vinieron después— significaron un punto de inflexión de las alianzas en torno a los poderes de la economía boliviana. Por primera vez, desde finales de 2008, gran parte de los sectores económicos del oriente boliviano marcaron una distancia explícita y evidente con el gobierno del MAS, plegándose a una posición política que emergió de sus propias instituciones, como es el caso del Comité Pro Santa Cruz², a la cabeza, en ese entonces, de Fernando Camacho. Pero esto no solo sucedió en Santa Cruz, sino también en otras regiones del país —incluida la andina—, en los que algunos poderes económicos que durante la última década (2009-2019) se desarrollaron bajo el paraguas del gobierno de Evo Morales, se mostraron reacios a continuar brindando su apoyo. Este desplazamiento político de una parte importante de las clases dominantes, que terminará confluendo y capturando las reivindicaciones de capas medias que se oponían a un creciente autoritarismo del gobierno del MAS, fue la base para la configuración de un escenario de una conflictividad como no se había visto en más de una década en el país.

Para entender el motivo por el que se dio este resquebrajamiento de las alianzas políticas que fueron la base de “governabilidad” del gobierno del Movimiento Al Socialismo, se debe comprender, antes que nada, cuál fue la causa y los mecanismos que dieron lugar a esas alianzas, algo que para muchos intelectuales de izquierda fue una estrategia circunstancial, pero que, en todo caso, marcó la esencia del gobierno de Evo Morales, en especial desde su segundo mandato que se inició en 2010.

Así, ante la pregunta de ¿por qué el gobierno del MAS terminó pactando y construyendo alianzas con las clases dominantes tradicionales del país entre los años 2008 y 2009, en este trabajo ponemos a consideración la siguiente respuesta: *debido a que estos*

² El comité Pro Santa Cruz es una organización de la sociedad civil cruceña que está compuesta por un conjunto de actores y que supuestamente tiene el propósito de defender los intereses de la población en general. Históricamente este movimiento cívico, al igual que otros que existen en Bolivia, están controlados por instituciones y organizaciones ligadas al empresariado y sectores terratenientes.

pactos y alianzas se convirtieron en una estrategia partidaria para la conservación del poder, estrategia que se sobrepuso a las agendas populares sostenidas por organizaciones sociales que buscaron producir un mandato durante los primeros años del gobierno del MAS. Elaboremos un poco más esta idea.

Bolivia vivió entre 2000 y 2005 un gran momento de efervescencia social que interpeló y constriñó seriamente el avance del modelo neoliberal, aquel que se venía implementando desde mediados de la década de los ochenta. La Guerra del Agua inauguró ese ciclo rebelde y, posteriormente, se sucedieron un conjunto de levantamientos que habrían de derrocar dos presidentes, pero que principalmente impondrían una agenda de transformación social, sostenida en la recuperación de prerrogativas desde ámbitos no estatales de organización política, estableciendo una serie de límites a la forma estatal de gestión de lo público. La denominada “Agenda de octubre” fue el principal ejemplo de ello. En esta agenda y en las múltiples otras que se venían planteando, la delimitación de una Asamblea Constituyente para transformar el país fue tomando cada vez más forma y se convertiría en un mandato consustancial a la votación de las elecciones presidenciales de 2005, aquellas en que Evo Morales fue elegido por vez primera (Gutiérrez, 2009; Kohl y Farthing, 2007).

Es por este motivo que los primeros años del gobierno del MAS estuvieron signados por la inestabilidad política: el gobierno *debía cumplir* una poderosa agenda de transformación, era un gobierno con mandato. Sin embargo, si bien el MAS había ganado las elecciones presidenciales de 2005 con 53.7% de los votos, solo obtuvo una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados (OEP y PNUD, 2012), por lo que sus posibilidades de gestión legislativa eran limitadas. En realidad, su victoria y su fuerza política no respondían tanto a la dinámica de la democracia liberal, sino a la fuerza envolvente de las organizaciones sociales en lucha –aglutinadas en torno a lo que se conoció como el “Pacto de Unidad”³–, las cuales condicionaron orgánicamente su voto a la concreción de sus horizontes en torno a procesos en los cuales pretendían tener un rol protagónico, sin delegar su prerrogativa de decisión, para lo cual también negociaron la participación de sus propios representantes dentro la estructura política del MAS. Es decir, el partido de Morales adquirió el estatus de canalizador y mediador estatal de una serie de reivindicaciones que las organizaciones sociales venían disputando hace ya varios años con las clases dominantes del país.

Ante ello, se hizo cada vez más evidente la posición virulenta y beligerante de estos sectores dominantes, que terminarían atrincherándose en lo que se conoció como la “media luna”⁴. Fueron varios los factores que durante los primeros años del gobierno

³ El “Pacto de Unidad” surge oficialmente en 2004, como una supra-organización indígena originaria campesina que articuló a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia – Bartolina Sisa (FNMCB-BS), Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) y, de manera posterior, se articularía el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ). Esta organización emerge de un acuerdo para impulsar un proceso constituyente y una serie de reivindicaciones en común. Para una profundización al respecto de la formación de este sector se sugiere consultar Garcés (2010).

⁴ Se entiende como “la media luna” a los poderes regionales tradicionales de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y, eventualmente, Tarija.

del MAS generaron oposición, pero la Asamblea Constituyente no solo se convirtió en una de las principales amenazas para sus intereses –junto al proceso de *reconducción de la reforma agraria*⁵–, sino también en un medio para frenar las posibles transformaciones que se venían proponiendo desde abajo.

Ahora bien, es importante recalcar que “la Asamblea Constituyente no fue parte de la plataforma original del MAS” (Postero, 2017: 44), sino que fue impulsada por las organizaciones sociales a la luz de sus propias agendas de lucha. Si bien el gobierno del MAS participó activamente del proceso constituyente, se instaló en un lugar de mediación y de gestión burocrática del proceso constituyente, no como protagonista de la agenda transformadora.

Al principio de la Asamblea Constituyente, el Movimiento Al Socialismo se vio empujado por la presión popular a apoyar un proceso más radical y profundo de transformación del Estado, y pese a las concesiones realizadas por este partido en aquel entonces,⁶ la propuesta del texto constitucional resultante planteaba transformaciones importantes. Sin embargo, ese texto nunca fue llevado referéndum.

Dicho referéndum no se concretó durante el 2008 debido a que el MAS no contaba con dos tercios en el Congreso, lo que permitió a la oposición bloquear la posibilidad de convocar a dicho plebiscito. Frente a ese escenario, en septiembre de 2008, las organizaciones sociales decidieron *sobrepasar* al gobierno e iniciar lo que se denominaría como el “Cercos a Santa Cruz”, una movilización masiva del Pacto de Unidad y otras organizaciones afines a la propuesta constitucional, las cuales tomaron los alrededores de la ciudad de Santa Cruz –núcleo simbólico y efectivo del poder opositor– y que, además de la viabilidad para llevar a cabo el referendo constitucional, se reclamaba justicia por la Masacre del Porvenir, que se suscitó el 11 de septiembre de 2008, en el departamento de Pando.⁷

Luego del establecimiento de un Estado de sitio en aquel departamento y de la consecuente desarticulación de la élite regional –lo que quedaría como una importante

⁵ La Ley 3545 de Reconducción de la Reforma Agraria, aprobada en noviembre de 2006, que establecía la necesidad de que la Tierra debía cumplir una Función Económica y Social para ser respetada su propiedad (Ormachea, 2007). La aprobación de esta ley se dio en respuesta a la presión ejercida por las organizaciones del Pacto de Unidad y del Movimiento Sin Tierra, que marcharon desde distintas regiones hasta La Paz, presionando al propio gobierno. El impulso de un renovado proceso de Reforma Agraria fue prioritario para las organizaciones del Pacto de Unidad y por eso la urgencia de promoverlo desde el inicio del gobierno del MAS, amenazando de manera directa los intereses económicos de la oligarquía del oriente boliviano.

⁶ Por ejemplo, cuando el MAS promulgó la Ley 3364 de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, en la que toda participación en esta instancia fue traducida y constreñida a un formato de democracia liberal, además de otorgar una sobrerrepresentación a la derecha tradicional (Escárzaga, 2012; Martínez y Linsalata, 2011). Esto volvió a suceder cuando el gobierno gestionó una negociación –pese al desacuerdo de varias organizaciones– para la resolución del conflicto que trabó durante siete meses la constituyente, mediante la cual se concedió al bloque de oposición –la derecha más conservadora del país– el hecho de que las decisiones de la Asamblea Constituyente debían contar con 2/3 de la votación y no serían aprobadas por simple mayoría absoluta (Schavelzon, 2012) –como esa derecha estaba sobrerrepresentada, tenía más de 1/3 para bloquear decisiones fundamentales de transformación–.

⁷ El 11 de septiembre de 2008, más de veinte campesinos e indígenas fueron asesinados en El Porvenir (Pando) por grupos armados de la élite regional en un hecho aún sin esclarecer, ni determinar el grado de responsabilidad que el gobierno tuvo (Nehe, 2016).

demonstración de fuerza del MAS—, la situación dio pie a que el gobierno pudiese gestionar un pacto con el poder económico opositor a través de sus representantes políticos bajo los siguientes términos:

1. Desmovilizó el cerco a Santa Cruz, bajo el argumento de destrabar el proceso constituyente, a partir de una decisión unilateral, subordinando a las cúpulas dirigenciales de las organizaciones —lo que generó gran descontento en las respectivas bases sociales (Los Tiempos, 24 de septiembre de 2008) y
2. Estableció un diálogo directo con los representantes políticos de la derecha tradicional del país con el apoyo de organismos internacionales multilaterales, a través del cual se acordó la modificación de 146 artículos de la propuesta de texto constitucional por vía parlamentaria, desconociendo la autoridad de la Asamblea Constituyente.

Esta modificación trastocó radicalmente el sentido de la carta magna, restituyendo una serie de prerrogativas que desde la sociedad organizada se había intentado recuperar, resguardando los principales intereses de las clases dominantes del país, además de negar, banalizar o folclorizar las reivindicaciones de las organizaciones sociales.⁸ Desde la liberalización de toda forma democrática estatal, constitucionalización del latifundio, desconocimiento de prerrogativas políticas, jurídicas y territoriales de los pueblos indígenas, y otras muchas más fueron las aspiraciones que quedaron canceladas o postergadas (Garcés, 2010; Valencia y Égido, 2010).

Esta negociación se convertirá en el hecho más representativo de este pacto. Las clases dominantes del país aceptaron el mando del partido de Evo Morales, dotándole de estabilidad política, a cambio de dos condiciones:

1. Recibir el apoyo del gobierno para la gestión de sus propios intereses económicos en general —con algunas modificaciones y limitaciones, como, por ejemplo, la necesidad de utilizar discursos revolucionarios o limitar ciertos privilegios desproporcionados— y
2. El compromiso del gobierno de “gestionar” a las organizaciones sociales, neutralizando sus aspiraciones de transformación social, de tal manera que ya no representasen una amenaza para sus intereses (Salazar, 2020).

⁸ Los entretelones de esta negociación se encuentran detallados en el texto que fue producido por los mismos gestores de esta negociación: *Del conflicto al diálogo. Memorias del acuerdo constitucional* (Romero, Bórrh, Peñaranda, Ebert, y fBDM, 2009). Este tipo de textos, que por lo general tienden a minimizar los alcances reales de la lucha y concentrar su atención en Estado como ámbito privilegiado, real y “serio” para la política, tienden a considerar esta nueva carta magna como un resultado “algo negociado” (Marsteintredet, 2017) y no como una negación profunda de su sentido original.

VIVIR BIEN EN EL CAPITALISMO EXTRACTIVISTA

[...] ¿ha sido en verdad una excesiva lejanía respecto del “capitalismo” lo que llevó al fracaso a este intento socialista? ¿O ha sido, por el contrario, su excesiva cercanía a él, la falta de radicalidad de la alternativa que representaba?

Bolívar Echeverría/Las ilusiones de la modernidad

En 2017, en el marco de la posesión del nuevo directorio de la Cámara Agropecuaria del Oriente –la organización más importante del sector agroempresarial de Santa Cruz–, el entonces vicepresidente Álvaro García emitió un discurso –uno de los más curiosos, pero a la vez uno de los más ilustrativos– sobre la manera en que el gobierno boliviano estableció una alianza con los sectores dominantes. En el mismo, el exmandatario explica cómo la Revolución Rusa y la experiencia soviética le habían dotado de un conjunto de aprendizajes que le llevaron a concluir que, para el caso boliviano, era necesaria una alianza con la agroindustria cruceña, entre otros sectores dominantes de la economía nacional.

El anterior es un ejemplo bastante ilustrativo de esta esquizofrenia estatal, en el que las palabras no se corresponden con las cosas. Los discursos sobre socialismo, revolución y buen vivir no tienen una correspondencia directa con los procesos de expansión capitalista, afianzamiento de clases dominantes (o surgimiento de nuevas clases dominantes) y el extractivismo depredador; son más bien un conjunto de *palabras mágicas* que buscan producir legitimidad al interior de la sociedad y, en especial, de sectores populares que orbitan en torno al Movimiento Al Socialismo. Profundicemos un poco más sobre las determinantes de este proceso económico que marcó, desde los hechos y no desde las palabras, el “proceso de cambio” durante la última década y media.

La expansión de los grandes capitales nacionales y transnacionales

El gobierno del MAS, como se vio anteriormente, fue estableciendo alianzas con los poderes económicos tradicionales del país para lograr gobernabilidad y estabilidad de su gobierno. Para ello erigió una arquitectura económica en la que los intereses de los sectores económicos ligados a estas clases sociales quedaron prácticamente incólumes. Intereses que además se verían favorecidos por el incremento desproporcionado de los precios internacionales de los *commodities* en el primer lustro de la década pasada.

El sector agroindustrial ha sido uno de los sectores extractivos⁹ más beneficiados al respecto –no por nada el intento de legitimarlo incluso a nombre de los bolcheviques–. En los primeros años del gobierno del MAS, y en especial luego del proceso constituyente, la producción de oleaginosas se disparó en el país. El caso de la soya –la principal oleaginosa producida en Bolivia– es particularmente elocuente, de alrededor de 800 mil toneladas métricas que se producían en 2007, la producción pasó a más de 2 millones en 2014 (McKay, 2017). Estos datos, sin embargo, deben comprenderse como parte de

⁹ Para una explicación detallada sobre por qué entender la actividad agroempresarial como extractivista, sugiero revisar el documento de Ben McKay (2017): “Agrarian Extractivism in Bolivia”.

la ampliación de un proceso productivo que no solo implica la dimensión material del extractivismo, sino una compleja dinámica económica articulada, nuevamente, al capital transnacional.

Si bien la cadena productiva de la soya articula a una gran variedad de actores (desde quienes arriendan sus tierras hasta los que proveen ciertos servicios, pasando por una serie de pequeños y medianos productores), son seis grandes compañías las que controlan el 95% del complejo de exportación sojera y solo dos de estas son bolivianas –con una participación del 18% del total de la exportación– (McKay, 2017; McKay y Colque, 2016).

Esta expansión del agronegocio viene de la mano del incremento sustancial de la producción de oleaginosas transgénicas, la producción de soya genéticamente modificada se incrementó desde el 2005, año en que representaba un 21% del total de la soya producida, hasta llegar a representar, el año 2013, prácticamente la totalidad de esta oleaginosa producida en el país. La expansión de la producción de transgénicos ha venido de la mano de una batería de leyes y decretos supremos emitidos por el gobierno de Morales que habilitan su producción, pese a estar prohibida en la *Constitución Política del Estado Plurinacional*, en su Artículo N° 255.

A su vez, el crecimiento de la agroindustria también se ha convertido en el principal motivo de la expansión de la frontera agrícola en las tierras bajas del país. Según el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, se estima que desde 1996 fueron deforestadas de manera ilegal 5,5 millones de hectáreas, de las cuales el 38% pertenecen a ganaderos, 28% a agroindustriales, 17 % a colonizadores extranjeros, 12% a campesinos y 5% a pueblos indígenas; principalmente en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, La Paz y Cochabamba (Ormachea y Ramírez, 2013). Los desmontes, junto a otros tipos de deforestación que se vienen intensificando en el país –por ejemplo, aquellos relacionados con la construcción de hidroeléctricas–, conllevan consecuencias serias. Bolivia tuvo en la década pasada una tasa de deforestación per cápita doce veces más alta que el promedio mundial (Andersen, 2014) y que solo es superada en todo el mundo por Bostwana, Paraguay y Namibia (Ambrosio, 2016). Solo en 2019 –unos meses antes del proceso electoral y de la crisis política–, 5,3 millones de hectáreas fueron incendiadas en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Al igual que en el caso de los transgénicos, existen un conjunto de normas, como la Ley N° 741, la Ley N° 1171 y el D.S. N° 3973 que avalan e incentivan la quema y los desmontes.

Como parte de esta arquitectura de la “gran” economía nacional, el núcleo de la matriz productiva mantuvo –aparte del creciente sector agroindustrial– a las históricas actividades extractivistas de la minería y los hidrocarburos. En la siguiente gráfica se puede observar el peso relativo de ambos sectores en la composición de las exportaciones bolivianas entre los años 2000 y 2017. Prácticamente un 80% de las mismas corresponde solo a ambos sectores. Ello significa que, aunque el PIB creció sustancialmente, la estructura económica del país no ha tenido grandes cambios, incluso se puede considerar que la dependencia fiscal a estas actividades extractivistas tuvo un incremento sustancial en términos absolutos y relativos durante los primeros años de la década pasada (Sánchez y Velásquez, 2020).

En el caso del sector hidrocarburífero, es importante anotar que la normativa vigente para beneficio de las corporaciones petroleras no solo siguió siendo la misma que fue aprobada en el gobierno de Carlos Mesa en 2005, sino que esta fue “mejorada” por el gobierno del MAS, en la medida en que se traspasó al estado los costos de transporte, los de inversión y de mantenimiento de ductos (Gandarillas, 2014a).

La nacionalización de los hidrocarburos si bien permitió al Estado acceder a una porción relativamente mayor de los excedentes provenientes de la exportación de gas natural, también fue un proceso en que el Estado pasó a hacerse cargo de buena parte de los costos de transporte, inversión y mantenimiento para que las empresas exporten un producto que no ha dejado de ser privado (Gandarillas, 2014a). De la misma manera, ha sido llamativa la permisibilidad del gobierno boliviano con las petroleras. Por ejemplo, en junio de 2016, luego de ocho años después de que saliera del país con un gran prontuario de daños, defraudaciones y delitos ambientales, la transnacional Shell –que adquirió a nivel mundial la British Gas– regresó al país con el respaldo gubernamental (Jiménez, 2017).

Para la minería, la situación es aún mucho más compleja. En primer lugar, se debe diferenciar entre la gran minería privada y la minería cooperativista (sobre la que se hablará más adelante).¹⁰ A diferencia del sector hidrocarburos, en la minería privada solo se revirtieron algunos centros mineros como resultado de la lucha de los propios trabajadores, ya que la política estatal nunca contempló, a diferencia de la Revolución de 1952, una nacionalización amplia del sector. Las tres minas que el Estado controla a través de la Corporación Minera Boliviana (COMIBOL) son: Huanuni, Corocoro y Colquiri, aunque su importancia relativa en términos de la producción nacional no supera el 3 por ciento. En realidad, la gran producción ha estado en manos de un puñado de grandes transnacionales (hasta 2020, más de tres cuartas partes del total de la producción minera¹¹), entre las cuales se encuentra: Minera San Cristobal, Sinchi Wayra, Empresa Minera Manquiri y Pan American Silver (CEDLA, 2014).

Para comprender la dimensión de la transnacionalización del sector minero, es fundamental dimensionar la cantidad del excedente que es apropiado por los capitales privados. En realidad, el Estado boliviano, entre regalías, impuestos y utilidades mineras, no recauda ni el 10% del valor de las exportaciones de minerales.¹² En 2014, el gobierno del

¹⁰ La principal diferencia entre la minería privada y la de las cooperativas es que las primeras explotan los grandes yacimientos con procedimientos intensivos en capital y generalmente controladas por transnacionales, mientras que las cooperativas –un eufemismo para nombrar lo que ahora funciona como un conjunto de empresas capitalistas locales–, se dedican a la explotación de centenares de minas antiguas, pequeñas, de baja ley y que de ninguna manera serían rentables para las grandes transnacionales, ya que estas funcionan a través de procesos intensivos en mano de obra, la cual trabaja en condiciones de precariedad extrema (Francescone y Díaz, 2013). Como ejemplo, en 2013 las tres empresas estatales tenían un total de 7,902 empleados, las cooperativas un total de 119,340, mientras que las empresas transnacionales solo contaban con 8,110 trabajadores (Villegas, 2014).

¹¹ Después de la pandemia, el incremento inusitado del precio del oro ha aumentado significativamente la producción y comercialización de este metal –por medios legales e ilegales– (CEDIB, 2020). La mayor parte de la producción de oro se encuentra gestionada por cooperativas mineras.

¹² Cálculo de un promedio referencial que incluye los ingresos estatales por regalías, impuestos y utilidades mineras frente al valor total de las exportaciones mineras (UDAPE, 2021).

MAS aprobó la nueva Ley de Minería y Metalurgia (Ley 535), que legitima este modelo de extracción de excedente, tanto en términos de la participación en la producción, como en su distribución (Gandarillas, 2014b; Villegas, 2014).

Con todo, agroindustria, minería e hidrocarburos se mantuvieron como sectores privilegiados de la política económica boliviana durante toda la década pasada. No solo como una inercia histórica, sino como una apuesta política que permitió dos cosas:

1. Cumplir con las expectativas de los sectores económicos dominantes del país y de los capitales transnacionales. En otras palabras, se actualizaron las condiciones para que el poder económico pudiese seguir generando procesos de acumulación ampliada a partir de un patrón primario exportador, ya sea desde su dimensión más tradicional, como la minería, o desde la más “moderna”, como la agroindustria.

Y, por el otro lado,

2. Garantizar el excedente necesario para la gestión pública proveniente principalmente de los hidrocarburos y, en menor medida, de la minería privada. Este excedente permitió el crecimiento de la burocracia estatal de manera desproporcionada,¹³ además de la implementación de un conjunto de obras públicas, la gran mayoría de ellas ligada con los procesos del extractivismo –construcción de infraestructura y servicios– y muchas otras ligadas a la construcción de legitimidad política. En cambio, la inversión social se mantuvo a niveles muy bajos, incluso más bajos que durante el periodo neoliberal, si se la compara en términos relativos.¹⁴

El caso del agronegocio es particular, si bien este sector no aporta grandes recursos al erario público, sus actividades se han convertido en un colchón que amortigua un conjunto de problemas económicos y que sirven para disminuir el malestar social y la presión que ello significa para el gobierno. En otras palabras, es la instrumentalización del extractivismo no solo para beneficiar a unos cuantos capitales, sino para la gestión de la precariedad al interior de la sociedad boliviana. Veamos este aspecto de manera más elaborada en el siguiente apartado.

La vía “no legítima” para mejorar el bienestar social

El mantener el núcleo del patrón de acumulación y su esquema de distribución de excedentes en torno a la agroindustria, hidrocarburos y minería, le permitió al gobierno de Evo Morales dotarse del respaldo de las clases dominantes tradicionales del país y del capital transnacional, lo que, junto al importante incremento de los precios internacionales de las materias primas, derivó en un momento de estabilidad política.

¹³ Según Ximena Soruco (2016), para 2001, los funcionarios públicos en Bolivia eran 38,258; en cambio para el año 2013 ese número ascendió 297,039, un incremento del 676 por ciento.

¹⁴ Por ejemplo, es llamativo el Plan de inversiones 2010-2015 presentado por el entonces ministro de economía, Luis Arce Catacora, que muestra que el grueso de la inversión pública (81%) se destinaría a minería, hidrocarburos, megaproyectos de energía eléctrica y vialidad; mientras que ítems de bienestar social, como salud, educación o erradicación de la pobreza extrema recibieron una inversión de menos del 1%, respectivamente.

Pero lo anterior solo fue posible en tanto la presión popular que otrora habilitó un tiempo de transformación social a través de las luchas, fue poco a poco desmantelada (Salazar, 2015). Para ello, el gobierno del MAS generó una “apertura económica” que benefició a algunos sectores populares históricamente marginados, de tal manera que pudiesen acceder a excedentes económicos a los que antes no podían hacerlo. La otra forma de reducir la presión popular que pugnaba por una transformación radical fue la de generar procesos de desarticulación inducida sobre algunos sectores sociales (Tapia, 2011) –sobre esto último volveremos más adelante–.

Pero veamos más a detalle cómo fue posible que algunas capas de sectores populares pudiesen tener acceso a importantes excedentes económicos, dado un orden en el que la estructura económica no cambió de manera sustancial y, por tanto, en ese esquema el beneficio de los sectores populares no tuvo cabida de manera directa.

La pregunta es, entonces, ¿de dónde salió ese excedente económico? Una parte importante fue resultado de lo que puede denominarse como una *política permisiva con actividades no legitimadas de depredación y desahorro social*. No es que la agroindustria, la minería y la producción hidrocarburífera no sean actividades que no depredan, todo lo contrario, pero sí son actividades “legitimadas” por un orden simbólico y jurídico estatal, muy ligadas al discurso del desarrollo y del crecimiento económico.

Sin embargo, el gobierno de Evo Morales, para lograr contener la presión social y en especial para controlar las cúpulas de las organizaciones sociales, no solo permitió, sino que en muchos casos incentivó la producción de un excedente económico a partir del crecimiento desproporcionado de ciertas actividades económicas consideradas “subterráneas” y algunas “ilegales”.

Varias de las mismas pueden considerarse de carácter extractivo, con un impacto profundo en el medio ambiente y en la sociedad por contar con poco o ningún control ni regulación. Aunque la minería cooperativista tiene una historia relacionada con la precariedad¹⁵, es uno de los sectores que más ha crecido en los últimos tiempos como consecuencia del incremento de los precios internacionales de algunos minerales –en especial del oro–.

En los últimos años, son muchos los ejemplos que demuestran los nocivos efectos de la producción cooperativista. En el caso de los efectos ambientales, los más preocupantes son los que tienen que ver con la utilización indiscriminada de mercurio para la producción del oro y con las consecuencias que ello tiene para los ecosistemas y para la salud humana (Campanini, 2021). Pero también están los múltiples enfrentamientos que en los últimos años se han dado con poblaciones campesinas e indígenas, además del avasallamiento de territorios protegidos. El último caso es el del Parque Nacional Madidi, en el que cooperativistas, luego de exigir al gobierno los permisos para su explotación,

¹⁵ Si bien la historia de la minería cooperativista antecede al neoliberalismo, fue en este periodo que se incrementó de manera sustancial. Como consecuencia del desmantelamiento de la estatal Corporación Minera Boliviana (COMIBOL), la parte más importante de la minería quedó en manos de grandes empresas privadas, nacionales y transnacionales, mientras que la explotación menos rentable quedó en manos de pequeñas cooperativas mineras. Estas cooperativas eran intensivas en mano de obra y no necesitaban elevadas tasas de rentabilidad para subsistir, sin embargo, con el tiempo fueron creciendo en función de la variación de los precios internacionales de los minerales.

ingresaron por la fuerza a dicho territorio protegido para explotar oro, generando situaciones de violencia y confrontación (Los Tiempos, 6 de febrero de 2022). Ni qué decir de las operaciones mineras cooperativistas –legales e ilegales– en la región del Norte Amazónico (Campanini y Gandarillas, 2015).

Si bien sobre la minería cooperativista se tiene más información, este no es el único sector que hace parte de este conglomerado de actividades “ilegítimas”. Otro de gran importancia es el del contrabando. Se estima que en promedio esta actividad movía anualmente –antes de la pandemia y de la depreciación de las monedas de los países vecinos– entre \$US 1,680 millones y \$US 2,213 millones (CEPB citado en DAPRO, 2020), monto que podría haber aumentado mucho más en los últimos años. Esta actividad, fomentada por una moneda nacional fuerte debido al tipo de cambio fijo que tiene el país, tiene un fuerte impacto sobre las reservas internacionales y el incremento del endeudamiento público.

Otras actividades, como el narcotráfico, el tráfico de tierras, el tráfico de madera y, últimamente, el tráfico y trata de personas, hacen parte de este conjunto de actividades, aunque sobre muchas de ellas se cuenta con poca información.

Es decir, si bien no son actividades novedosas, sí se han incrementado considerablemente en los últimos años, y se han convertido –de manera directa o indirecta– en medio de vida y de ascenso social para distintos sectores populares. Esto ha permitido al gobierno mantener el tradicional patrón de acumulación del país sin tener que poner en cuestión de manera significativa los intereses de las clases dominantes, ya que no es su excedente el que está siendo redistribuido.

Sin embargo, es importante tener en cuenta algunos aspectos de esta *política permisiva con actividades no legitimadas de depredación y desaborro social*, que no tiene que ver con la discusión sobre legalidad e ilegalidad, sino más bien con los efectos socioambientales de mediano y largo plazo:

- Si bien algunas de estas actividades pueden haber surgido como procesos populares de generación y apropiación de excedente económico, todas ellas terminan asumiendo una forma capitalista, en la que ciertos grupos –muchos de ellos ligados a cúpulas de poder que tienen vínculos con las estructuras estatales–, comienzan a monopolizar los medios de producción y el control de territorios, influencias y vínculos. Al operar a un nivel subterráneo, quienes controlan las actividades pueden llegar a hacerlo como mafias o grupos cercanos al poder. Con el tiempo, además, estas “nuevas burguesías”, terminan generando alianzas y articulándose a las viejas estructuras de poder económico.
- Lo anterior significa que si bien muchos sectores populares terminan logrando ciertos excedentes como resultado de su participación en estas actividades, lo hacen bajo un esquema proletario, aunque, a diferencia de los sectores “formales” o “legítimos”, su inserción en los circuitos económicos se da a partir de un proceso perverso de incertidumbre y precariedad laboral, además, en muchos casos, insertos en un conjunto de relaciones de violencia y extorsión por parte de sus empleadores y de las fuerzas represivas del estado.
- El bienestar social que se genera como resultado de estas actividades es, en la mayoría de los casos, poco sostenible para la mayoría de las personas que se dedican a las mis-

mas, ya sea porque la actividad es altamente dependiente de la demanda internacional, porque los recursos son cada vez más escasos o porque en algún momento –por ejemplo, como consecuencia de la presión internacional– el Estado podría arremeter contra alguna de estas actividades, destruyendo esa fuente de ingresos de la que muchas familias dependen, e incluso podrían quedar criminalizadas por la realización con estas actividades.

- Algunas de estas actividades pueden significar un desahorro directo para el estado, como sucede con el contrabando. Luego de una serie de mediaciones, lo que termina sucediendo es que son las reservas del país o un mayor endeudamiento lo que permite financiar parte de las mismas.
- Gran parte de estas actividades tienen efectos ambientales de largo plazo –al igual que la minería empresarial, hidrocarburos y agroindustria–, ya que se sostienen en un conjunto de actividades extractivas y depredadoras. Aunque en este caso, no existen ni siquiera normativas que permitan minimizar o controlar algunos de los efectos.
- Se generan enfrentamientos al interior de los sectores populares. Muchas veces, estas actividades económicas terminan amenazando las fuentes de vida y subsistencia de comunidades, organizaciones sociales o individuos, como sucede en el caso de los loteamientos y avasallamiento de tierras en territorios indígenas, lo que ha llevado a conflictos que terminan afectando –incluso con la pérdida de vidas– a los mismos sectores populares.

Mientras el gobierno del MAS daba el espaldarazo a las élites cruceñas y a los grandes procesos de acumulación, evocando para ello las enseñanzas de la Revolución de 1917, al mismo tiempo también se preocupaba por consolidar esta mirada de un “bienestar” precario, efímero e insostenible en el tiempo, como cuando el mismo vicepresidente afirmó en un discurso en Chulumani: “Ahora que venía en el helicóptero, veía gente, pero veía más movilidades que gente, todos tienen su carrito; *chuto*, no importa, pero tienen su carrito para sacar sus productos”. Los vehículos “chutos” son vehículos sin papeles, que han ingresado al país por medio del contrabando y son la alegoría de este “bienestar”.

Si bien los sectores populares –principalmente rurales– adquieren estos autos por tener precios bajos, generalmente quienes los compran son objeto de extorsión permanente por parte de la policía, no pueden acceder a las ciudades y son pasibles de expropiación. Esto sucede mientras son las grandes importadoras de autos nuevos las que se han visto más beneficiadas con la normativa implementada por el MAS, que ahora prohíbe el ingreso de autos usados; es decir, se impide adquirir de manera legal coches más baratos a sectores populares, se beneficia a los grandes capitales comerciales del país y se abre la posibilidad –muy ambigua– de que quienes no puedan comprar un auto nuevo, tengan acceso a un auto *chuto*, con todas las limitaciones y riesgos que ello implica.

La desarticulación de la fuerza comunitaria

Pero ni todos los sectores populares se beneficiaron de esa *política permisiva con actividades no legitimadas de depredación y desahorro social*, ni mucho menos es deseable para buena parte de estos. Es por eso por lo que también se debe comprender que la restitución

ción de un equilibrio político en torno al gobierno del MAS y a las alianzas realizadas para lograrlo solo fue posible en la medida en que algunas organizaciones sociales que pugnaban por la concreción de horizontes emancipatorios se vieron contenidas, agredidas y desarticuladas en un proceso de ofensiva anticomunitaria que tomó forma luego del proceso constituyente. Era imprescindible frenar la crítica y renuencia que surgió desde las organizaciones al hecho de que el texto constitucional fuese negociado y pactado con los sectores dominantes del país luego de la Asamblea Constituyente, y también fue necesario desarticular toda resistencia que emergió frente a los proyectos extractivistas.

La forma más evidente fue la de la represión directa, como aconteció en el caso del TIPNIS, Mallku Khota o Takovo Mora, y los posteriores procesos de intervención represiva de las organizaciones supracomunitarias reacias o contrarias a subordinarse al MAS, como sucedió con la CIDOB en 2012 o con el CONAMAQ en 2014, además de que el gobierno impulsaría la creación de organizaciones paralelas sujetas a la estructura partidaria del MAS (Salazar, 2015; Tierra, 2012).

Por otro lado, también se ha desplegado un gran andamiaje de control y *subordinación pasiva* –como diría Silvia Rivera Cusicanqui (1986)– de las estructuras dirigenciales, a partir de procesos masivos de prebenda. Uno de los más evidentes fue el caso del Fondo Indígena, que se convirtió en mecanismo para la obtención de apoyo de estructuras político-comunitarias rurales a partir de la transferencia discrecional de recursos públicos (Morales, 2015; Zegada y Komadina, 2017), aunque la cooptación de estructuras barriales en las ciudades también suele responder a esta misma lógica.

Una forma específica de disciplinamiento político ha sido el condicionamiento que el MAS ha promovido sobre las organizaciones de base para que estas asuman la línea partidaria como línea política de la organización –aceptando la “vigilancia partidaria” a través de delegados del MAS dentro de la estructura de las organizaciones–, bajo amenaza de no recibir proyectos públicos en caso de rechazar este mecanismo de control. Asimismo, dicho disciplinamiento ha pasado también por erosionar, subordinar o derruir cualquier otro “instrumento político” que algunas organizaciones sociales gestaron en diversas geografías del país, de tal manera que el MAS se convierta en partido monopolístico de las organizaciones (Salazar, 2021).

El debilitamiento de las formas comunitarias de organización social también ha pasado por impulsar las denominadas OECAS (Organizaciones Económicas Campesinas Indígena Originarias), que se caracterizan por asumir un rol “empresarial” dentro de las comunidades –a cambio de recursos económicos estatales–, “independizando” esta actividad de la organización comunitaria cotidiana, la cual se dedica solo a la dimensión política y ya no económica.

LAS CONDICIONES PARA UN DESASTRE DEL QUE NADIE QUIERE HACERSE CARGO

Con todo, volvamos a la pregunta realizada al inicio de este texto: ¿cómo se produjeron las condiciones para que una disputa por el control del gobierno derivase en una crisis política de tal envergadura y, en especial, en ese conjunto de hechos que terminaron violentando a gran parte de la población boliviana?

Lo que sucedió luego de las elecciones presidenciales de 2019 no puede quedar reducido, de ningún modo, a un hecho circunstancial o espontáneo, ni únicamente a una estrategia conspirativa de uno u otro bando. Aunque sin duda todo ello existió, es importante comprender que existen procesos heredados y acumulativos que produjeron las condiciones para una crisis de este tipo; dinámicas sociopolíticas y económicas que fueron bosquejando escenarios para que, primero, sea posible una reyerta por el poder entre un partido que logró monopolizar el aparato estatal y viejos sectores dominantes; y, segundo, que sea posible instrumentalizar un conjunto de malestares sociales legítimos, para ponerlos en función de aquella disputa por el poder. Repasemos algunas de estas cuestiones:

Las clases dominantes tradicionales de Bolivia no solo no eran externas al modelo económico implementado por el MAS, sino que se habían fortalecido al interior de este y con el apoyo del gobierno. Si bien es cierto que durante los primeros años del gobierno de Evo Morales (2006-2008) la presión de las organizaciones sociales fue importante, los pactos y las alianzas que el gobierno estableció con estas clases para dotarse de gobernabilidad permitieron que estos sectores dominantes fortalezcan sus actividades económicas. Así pues, es importante anotar que buena parte de las élites políticas y grupos de poder económico que buscaron monopolizar el sentimiento de descontento luego de las elecciones de 2019, años antes *habían generado alianzas o pactos con el proyecto económico impulsado por el gobierno del MAS.*

Ahora bien, se debe entender también el motivo por el que se generó este rompimiento tan claro en 2019, pero que ya venía gestándose desde 2016. Lo que el MAS ofreció a cambio de estabilidad y gobernabilidad fue la posibilidad de gestionar, aplacar y neutralizar las luchas de las organizaciones sociales que desde años atrás venían impulsando horizontes de transformación que iban mucho más allá de la simple toma del poder. Para ello, el gobierno habilitó una vía “no legítima” para el mejoramiento de condiciones de vida, sin tocar los grandes intereses capitalistas del país. Y para las organizaciones que decidieron oponer resistencia, como sucedió en varias geografías del territorio boliviano, la represión y la división siempre estuvo al orden del día.

Es así como con el pasar de los años, ante organizaciones más débiles y horizontes de lucha relegados a un segundo plano, esa necesidad de “gestión” de lo popular perdió su valor, *i.e.* la moneda de cambio que el gobierno utilizaba con las clases dominantes para lograr estabilidad política se devaluó. Y como los imaginarios de estas rancias clases se mantuvieron prácticamente intactos, así como su histórico racismo y su manera gamonal y patriarcal de comprender la gestión del Estado, cuando el gobierno del MAS comenzó a mostrar debilidad y, principalmente, cuando se mostró como innecesario para ellas –como quedó expuesto con el Referéndum para la modificación de la *Constitución Política del Estado* en 2016–, iniciaron una contraofensiva sobre la base de sus estructuras productivas que estaban intactas y que incluso después de tantos años de bonanza se habían fortalecido.

Por el otro lado, el gobierno del MAS, ante su cada vez menor utilidad para las clases dominantes tradicionales, intentó apoyarse en una política cada vez más autoritaria, erosionando la independencia de los poderes del Estado y tratando de controlar la mayor cantidad de instituciones, ya sea por la vía parlamentaria, pero también recurriendo a la

violencia y a la persecución política. Se abrió paso a un proceso de desinstitucionalización estatal, incluidas aquellas instituciones que, a través del tiempo, han tenido la función de garantizar prerrogativas y derechos sociales y que han sido resultado de múltiples luchas.

En cambio, en el *abajo* las cosas estaban más difíciles. Desde 2017, luego de la caída de los precios internacionales de los *commodities*, se sintieron los primeros atisbos de una crisis venidera, el Estado corporativista y tutelar que se intentó erigir en años precedentes se fue desvaneciendo poco a poco y, junto a ello, unas tramas comunitarias cada vez más descompuestas y subordinadas a designios partidarios y, en general, a la lógica de poder del Estado. Por otro lado, clases medias descontentas con un orden cada vez más autoritario se comenzaron a movilizar contra el gobierno, muchas veces a través de “plataformas” u organizaciones civiles que en algunos casos quedaron capturadas por las élites políticas tradicionales del país.

Y así, la polarización fue creciendo y creciendo hasta 2019, cuando llegaron las elecciones presidenciales. En ese momento la credibilidad del sistema electoral estaba por los suelos, las posiciones políticas con discursos cada vez más encontrados y violentos, además de una actualización de posturas conservadoras, racistas, patriarcales, etc. *Las condiciones para el desastre político que vendría estaban dadas.*

Hay muchas preguntas que quedan abiertas y que este texto no intenta responder, pero acá retomo una en particular y que intenta hilar con la reflexión inicial, aquella que hace una apuesta por retomar una crítica radical: ¿cómo comprender, entonces, las múltiples determinaciones del antagonismo social en Bolivia más allá de las estériles narrativas creadas y recreadas sistemáticamente por quienes en este momento detentan o disputan el poder estatal? Creo que las luchas feministas y algunas territoriales —aquellas que ponen la vida en el centro—, son las que con mayor lucidez y claridad vienen planteando alternativas emancipatorias centradas en la reproducción social de la vida en este complejo escenario boliviano, las que realmente están proponiendo salidas a tan estéril escenario político, aunque por lo mismo son también las más desdeñadas —y muchas veces agredidas— por los cánones del conocimiento oficial, de derecha y, lastimosamente, también por las vertientes más conservadoras de lo que entendemos como izquierda. Pero este ya es un tema que desborda los objetivos de este documento y que abordaremos en otro momento.

REFERENCIAS

- AMBROSIO, Martín de (2016). “Bolivia con altas emisiones de gases invernadero”. *SciDev.net*. Disponible en: <https://www.scidev.net/americas-latina/desastres/noticias/bolivia-con-altas-emisiones-de-gases-invernadero.html>.
- ANDERSEN, Lykke (2014). *La economía del cambio climático en Bolivia: impactos sobre la biodiversidad*. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo.
- CAMPANINI, Oscar (2021). *El negocio del mercurio en Bolivia: Estudio sobre su comercialización para la minería aurífera*. Cochabamba: CEDIB.
- CAMPANINI, Oscar y Gandarillas, Marco (2015). “Bolivia. El caso de Riberalta”. En Valencia, Lenin, *Las rutas del oro ilegal. Estudios de caso en cinco países*. Lima: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

- CEDIB (2020). *Minería aurífera en los ríos del norte de La Paz y Beni*. Cochabamba: CEDIB.
- CEDLA (2014). “Ley Minera del MAS. Privatista y anti-indígena”. En *Control ciudadano. Boletín de seguimiento a políticas públicas*. La Paz: CEDLA.
- CORDOBA, Diana y Jansen, Kees (2014). “The Return of the State: Neocollectivism, Agrarian Politics and Images of Technological Progress in the MAS Era in Bolivia”. *Journal of Agrarian Change*, 14(4), 480-500.
- DAPRO (2020). *Informe estadístico sobre contrabando*. La Paz: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
- ESCÁRZAGA, Fabiola (2012). “El gobierno de los movimientos sociales”. En Tanja, Erns y Schmalz, Stefan, (Eds.), *El primer gobierno de Evo Morales: un balance retrospectivo* (pp. 137-164). La Paz: Plural Editores.
- FRANCESCONI, Kirsten y Díaz, Vladimir (2013). “Cooperativas mineras. Entre socios, patronos y peones”. *Petropress*, (30), 32-41.
- GANDARILLAS, Marco (2014a). “Bolivia: la década dorada del extractivismo”. En Gandarillas, Marco, (Ed.), *Extractivismo: nuevos contextos de dominación y resistencias* (pp. 103-132). Cochabamba: CEDIB.
- GANDARILLAS, Marco (2014b). “Ley minera. Una amenaza a la democracia y los derechos humanos”. *Petropress*, 33.
- GARCÉS, Fernando (2010). *El Pacto de Unidad y el proceso de construcción de una constitución política del Estado*. La Paz: Programa NINA.
- GARCÉS, Marina (2017). *Nueva ilustración radical*. Barcelona: Anagrama.
- GARCÍA, Álvaro (2017). “Discurso de Álvaro García Linera en la posesión del nuevo presidente de la CAO”. *Youtube*. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=gL2RWbMfU0>.
- GUTIÉRREZ, Raquel (2009). *Los ritmos del Pachakuti. Levantamiento y movilización en Bolivia (2000-2005)*. México: Sisifo/Bajo Tierra/ICSH.
- JIMÉNEZ, Georgina (2017). “Gobierno celebra el regreso de la Shell”. *Deliberar*, Núm. 1. CEDIB: Cochabamba.
- KOHL, Benjamin y Farthing, Linda (2007). *El bumerán boliviano*. La Paz: Plural.
- LOS TIEMPOS (6 de abril de 2022). Denuncian que cooperativa minera ingresó al parque Madidi de forma ilegal. Disponible en: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220206/denuncian-que-cooperativa-minera-ingreso-al-parque-madidi-forma-ilegal?fbclid=IwAR2BEfqJTmIYcgC22wmXTz_Uy8lzGwkHPX_ZKbDWcsFiw3M1q7PFMCmiAAY.
- MARSTEINTREDET, Leiv (2017). El nuevo constitucionalismo político en América Latina y el paradigma boliviano. En González, Nelson, (Ed.), *Bolivia en el siglo XXI. Trayectorias históricas y proyecciones políticas, económicas y socioculturales* (pp. 113-136). La Paz: Plural.
- MARTÍNEZ, Paola y Linsalata, Lucía (2011). “Las asimetrías del mandar obedeciendo en Bolivia”. En Colectivo Katär Uta (Ed.), *¿Ahora es cuándo?* (pp. 15-35). México: Colectivo Katär Uta.
- MCKAY, Ben (2017). “Agrarian Extractivism in Bolivia”. *World Development*, 97, 199-211.

- MCKAY, Ben y Colque, Gonzalo (2016). “Bolivia’s soy complex: the development of ‘productive exclusion’”. *The Journal of Peasant Studies*, 43(2), 583-610.
- MORALES, Manuel (2015). *Fondo Indígena: la gran estafa. Denuncias y propuestas desde los pueblos indígenas*. La Paz: CONAMAQ Orgánico.
- NEHE, Böerries (2016). “Nuestro porvenir. Espacio y narración en la masacre de campesinos en Pando, Bolivia”. En Valencia, Guadalupe; Nehe, Böerries y Salazar, Cecilia (Eds.). *Pensando Bolivia desde México. Estado, movimientos, territorios y representaciones*. México: UNAM/UMSA.
- OEP y PNUD (2012). *Atlas electoral de Bolivia. Elecciones generales 1979-2009. Asamblea Constituyente 2006* (Vol. I). La Paz: PNUD/TSE.
- ORMACHEA, Enrique (2007). ¿Revolución agraria o consolidación de la vía terrateniente? El gobierno del MAS y las políticas de tierras. La Paz: CEDLA.
- ORMACHEA, Enrique y Ramirez, Nilton (2013). *Políticas agrarias del gobierno del MAS o la agenda del poder empresarial-hacendal*. La Paz: CEDLA.
- POSTERO, Nancy (2017). *The indigenous state. Race, Politics and Performance in Plurinational Bolivia*. Oakland: University of California Press.
- RIVERA, Silvia (1986). *Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y qhechwa 1900-1980*. La Paz: THOA.
- RIVERA, Silvia (2018). *Un mundo ch’ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- ROMERO, Carlos; Börth, Carlos; Peñaranda, Raúl; Ebert, Fundación y fBDM (2009). *Del conflicto al diálogo. Memorias del acuerdo constitucional*. La Paz: FES-ILDIS/ fBDM.
- SALAZAR, Huáscar (2015). *Se han adueñado del proceso de lucha. Horizontes comunitario-populares en tensión y la reconstitución de la dominación en la Bolivia del MAS*. Cochabamba: SOCEE/Autodeterminación.
- SALAZAR, Huáscar (2020). “Revisiting Bolivian «Progressivism»: The Anticommunalism of the Plurinational State”. *Latin American Perspectives*, 47(234). doi:10.1177/0094582X20933637.
- SALAZAR, Huáscar (2021). “Geopolítica de lo común en el Norte Amazónico boliviano”. En AA.VV., *Expansión mercantil capitalista y la Amazonía como nueva frontera de recursos en el siglo XXI*. Buenos Aires / La Paz: CLACSO / CEDLA.
- SÁNCHEZ, Sandra y Velásquez, Raúl (2020). *Situación de la renta petrolera en Bolivia*. Fundación Jubileo.
- SCHAVELZON, Salvador (2012). *El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. Etnografía de una Asamblea Constituyente*. La Paz: CLACSO/IWGIA/CEJIS/Plural.
- SORUCO, Ximena (2016). “La nueva burocracia plurinacional en Bolivia”. *L’Âge d’or*, (9). doi:https://doi.org/10.4000/agedor.1177.
- TAPIA, Luis (2011). *El estado de derecho como tiranía*. La Paz: CIDES/UMSA.
- TIERRA, Fundación (2012). *Marcha indígena por el TIPNIS. La lucha en defensa de los territorios*. La Paz: Fundación Tierra.
- UDAPE (Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas) (2021). “Dossier de Estadísticas Sociales y Económicas”, *Sector Fiscal para los años 2006-*

2019. Disponible en: https://www.udape.gob.bo/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=38.
- VALENCIA, María del Pilar y Égido, Iván (2010). *Los pueblos indígenas de tierras bajas en el proceso constituyente boliviano*. Santa Cruz: CEJIS/IWGIA/AECID/HIVOS.
- VILLEGAS, Pablo (2014). “Ley minera a costa de la democracia”. *Petropress* (33).
- ZEGADA, María Teresa y Komadina, Jorge (2017). *El intercambio político. Indígenas/campesinos en el Estado Plurinacional*. La Paz: CERES/PLURAL.

La primera edición electrónica de *Crisis del Estado y disputa en y por la sociedad civil en América Latina. Análisis de situaciones: Brasil, México, Guatemala, Bolivia*, realizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se finalizó el 16 de diciembre de 2023.

La producción de esta obra estuvo a cargo de Grupo Editorial Biblioteca, S.A. de C.V., ubicado en Manantiales 29-5, Colonia Chapultepec, C.P. 62450, Cuernavaca, Morelos. En su composición se utilizó la familia tipográfica Junicode de 10.5 puntos para cuerpo de texto y Meta en 16 y 12 puntos para los titulares. El cuidado editorial estuvo a cargo del Departamento de Publicaciones, FCPyS, UNAM.

El presente libro aborda la Crisis del Estado y la disputa en y por la sociedad civil en América Latina. Enmarcado en el proyecto de investigación PAPIIT IN307719, este libro ofrece elaboraciones teórico-metodológicas, ejes de análisis e indicadores que guiaron la investigación. Se destaca la continuidad de la elaboración teórica, ahora con un enfoque más centrado en el seguimiento de la situación en países latinoamericanos específicos, como Brasil, México, Guatemala y Bolivia. La investigación, que se llevó a cabo de manera conjunta en nueve países, busca entender las crisis políticas en América Latina como manifestaciones de una falta de correspondencia entre las expectativas de la sociedad civil y la sociedad política. Se enfatiza la importancia de estudiar la sociedad civil como un ámbito de lucha por unificar concepciones y proyectarlas a nivel local, regional, nacional e internacional.

El texto también resalta tres aspectos clave que surgieron de la investigación. Primero, la importancia del concepto de *crisis orgánica del Estado*, que señala la incapacidad relativa de la mayoría de los proyectos políticos actuales para abordar las demandas de la sociedad. Segundo, la complejidad de la sociedad civil y su papel en la disputa de proyectos y concepciones. Tercero, la necesidad de entender la sociedad civil no solo como diversidad, sino también como un terreno de lucha para unificar concepciones y proyectarlas a niveles diversos. La investigación propicia un debate interno y redefine criterios teórico-metodológicos, avanzando en el estudio de la crisis orgánica del Estado, la disputa por los proyectos nacionales y la sociedad civil en los países estudiados. Además, se destaca el papel de la cultura como política y la importancia de estimular una reforma intelectual, moral y política para llevar a cabo transformaciones.

ISBN UNAM: 978-607-30-8521-2



9 786076 952542 >



FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES

dgapra